

La crisis de la democracia en América Latina

Andrés Tzeiman y Danilo Enrico Martuscelli (comps.)

 CLACSO



La crisis de la democracia en América Latina

La crisis de la democracia en América Latina / Ana Penido ... [et al.] ; coordinación general de Andrés Tzeiman ; Danilo Enrico Martuscelli. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-704-9

1. Democracia. 2. América Latina. 3. Lucha de Clases. I. Penido, Ana II. Tzeiman, Andrés , coord. III. Martuscelli, Danilo Enrico, coord.

CDD 321.8

Corrección: Mariela Gurevich

Diseño de interior y de colección: Eleonora Silva

Diseño de tapa y de colección: Ezequiel Cafaro

agendas**emergentes**

La crisis de la democracia en América Latina

Andrés Tzeiman y Danilo Enrico Martuscelli
(coords.)





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Viejas y nuevas derechas en América. Contrainurgencia, despojos y sentidos comunes
(Buenos Aires: CLACSO; febrero de 2024).

ISBN 978-987-813-704-9



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Suecia
Sverige

Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

11 Introducción

La crisis de la democracia
en América Latina

ANDRÉS TZEIMAN Y DANILO ENRICO MARTUSCELLI

**PRIMERA PARTE. NUEVOS Y VIEJOS CONCEPTOS PARA
INTERPRETAR LA CRISIS**

23 Crisis democrática en América Latina

Regímenes políticos *híbridos* y gérmenes de una nueva forma de
Estado

ANDRÉS TZEIMAN

**49 Reflexões críticas sobre o debate em torno do neogolpismo na
América Latina**

DANILO ENRICO MARTUSCELLI

81 Familiarismo y crisis del capital

Algunas notas desde los márgenes
NATALIA ROMÉ

SEGUNDA PARTE. LOS PROCESOS SOCIOPOLÍTICOS ACTUALES Y LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA

- 107 **Repensando um velho fenômeno**
A tutela militar na política brasileira
ANA PENIDO
- 127 **Coaliciones golpistas**
Crisis de la democracia en la destitución de Pedro Castillo
ANAHÍ DURAND GUEVARA
- 151 **Os conflitos de classes e a crise da democracia no Brasil**
ANDRÉ FLORES PENHA VALLE
- 173 **Las Fuerzas Armadas y los límites de la democracia en Bolivia**
LORETA TELLERÍA ESCOBAR
- 195 **Las fisuras del pacto democrático**
Notas sobre política argentina
MARTÍN CORTÉS

TERCERA PARTE. RADICALIZACIÓN AUTORITARIA Y CRECIMIENTO DE LAS EXTREMAS DERECHAS: EXPERIENCIAS POLÍTICAS, IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES

- 225 **Entre el defensismo neoliberal y la psicología de masas**
Las hermenéuticas conservadoras frente a la insurrección chilena
CLAUDIO AGUAYO BÓRQUEZ
- 251 **Historia reciente de la derecha conservadora en Colombia**
Auge, crisis y recomposición del uribismo (2002-2022)
GINA PAOLA RODRÍGUEZ
- 279 **La derecha mexicana y los laberintos de la Cuarta Transformación**
Una relación especular
JAIME ORTEGA Y FRIDA VILLALOBOS

- 305 **Radicalización autoritaria en la Argentina contemporánea**
Sobre los imaginarios de la política
en la crisis neoliberal
LUCÍA WEGELIN
- 333 **Crisis, violencia, miedo y conservadurismo**
La reconfiguración en marcha de la derecha ecuatoriana
SOFIA LANCHIMBA VELASTEGUI
- 351 **Velhas ideologias, novas roupagens**
Perspectivas do fascismo atual a partir da experiência da nova direita
europeia e latino-americana
TATIANA POGGI E REJANE HOEVELER
- 375 **Sobre los autores y autoras**

Introducción

La crisis de la democracia en América Latina

ANDRÉS TZEIMAN Y DANILO ENRICO MARTUSCELLI

En los comienzos de la tercera década del siglo XXI, la coyuntura latinoamericana se debate entre las coordenadas establecidas por tres fenómenos que se desenvuelven de forma simultánea y yuxtapuesta. Tales fenómenos ofician como marco general de la crisis democrática actualmente en curso en nuestra región, que las páginas de este libro colectivo se dedicarán a analizar.

El primero de ellos remite, sin dudas, al contexto global. Tres décadas después de la emergencia de un mundo unipolar (tras la caída del muro de Berlín en 1989), el orden internacional se enfrenta hoy a una situación de *discontinuidad hegemónica*. El liderazgo unipolar de Estados Unidos se muestra en un franco retroceso, que en los últimos años se ha expresado de manera contundente en dos momentos políticos. Primero, en ocasión del gobierno de Donald Trump cuando, bajo la consigna de *America first* y producto de la guerra comercial con China, fue puesta en cuestión la ideología de la globalización que había predominado en el orden internacional desde los años noventa (precisamente, cuando Estados Unidos pasó a ostentar de manera unívoca su liderazgo a nivel global). Luego, en segundo lugar, cuando en enero del año 2021 la toma del Capitolio

terminó de exponer ante los ojos del mundo las inconsistencias y debilidades que atraviesa el sistema democrático al interior de las propias fronteras del país norteamericano. Asimismo, ese retroceso de la hegemonía norteamericana convive con el avance de dos potencias como China y Rusia, quienes, sin embargo, aún no terminan de consolidar definitivamente los rasgos de un orden global multipolar y alternativo. La guerra en Ucrania, desatada en el año 2022, constituye un capítulo importante de ese proceso transicional. Pues bien, tomando en cuenta todo ese panorama se configura un escenario que el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha denominado como *tiempo histórico liminal*. Es decir, una coyuntura signada por la *suspensión del tiempo histórico*, en donde no resultan claros los horizontes de futuro y, por lo tanto, tiende a predominar la incertidumbre sobre el porvenir como modo de vida y de organización política y social. Vale resaltar, en ese sentido, que la pandemia del COVID-19 iniciada en los comienzos del año 2020 agudizó los rasgos de incerteza que marcan ese escenario. Como consecuencia, en lo que respecta particularmente a nuestra región, las élites y clases dominantes locales muestran un elevado nivel de desconcierto frente a esta vacancia hegemónica global, colocando de ese modo un gran signo de interrogación acerca del proyecto económico, político y social a desarrollar en y para América Latina.

El segundo fenómeno que signa la coyuntura regional es el de la *reacción conservadora* frente al despliegue de los gobiernos progresistas de los primeros quince años del siglo XXI en América Latina. La sintonía continental lograda por los movimientos y líderes/lideresas políticos/as progresistas en esa década y media, en la cual se produjeron procesos de democratización de la vida social y de ampliación de derechos de las grandes mayorías populares, tuvo como respuesta una contestación por parte de fuerzas conservadoras y antidemocráticas, tanto en cada uno de los países en cuestión como a nivel continental. Si bien en el último quinquenio se han producido

mutaciones y radicalizaciones en las características y perspectivas de ese giro conservador (sobre las cuales pretende explayarse este trabajo colectivo), la estela *antiprogresista* continúa resultando una *marca de época*, entendida como la necesidad que perciben las clases dominantes de extirpar la posibilidad de resurgimiento de procesos de democratización y de ampliación de derechos en beneficio de los sectores populares.

Por último, el tercer fenómeno que organiza nuestra coyuntura conecta directamente con los dos anteriores. En el marco de la *vacancia hegemónica* a nivel global y de los procesos de *revancha social* en América Latina, la creciente contradicción entre neoliberalismo y democracia se manifiesta en nuestra región en toda su tirantez. Pues si en Estados Unidos y Europa el malestar social frente al “neoliberalismo recargado” posterior a la crisis del 2008 se expresó en la emergencia de nuevas derechas radicalizadas, en América Latina aquel proceso no se ha agotado en este aspecto, sino que tiene fuertes repercusiones en el desenvolvimiento de los propios sistemas democráticos. Aquí identificamos y buscaremos analizar tres derivas en ese sentido en la coyuntura latinoamericana actual:

1. El *neogolpismo*. Frente a la adopción, por parte de gobiernos democráticos, de políticas que desobedecen los dictámenes impuestos por las clases dominantes, surgen modos novedosos de producir quiebres para alterar la dinámica institucional. Este fenómeno tiene una notoria dimensión histórica. Porque si en el siglo XX las rupturas institucionales en América Latina se producían fundamentalmente por medio de la irrupción de regímenes militares que se autoproclamaban y se presentaban de un modo explícito como un quiebre ante la rutina de las instituciones democráticas, en el contexto actual, las nuevas formas de golpe de Estado se llevan a cabo por vías alternativas. La intrusión del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, junto

con la persecución de líderes/líderesas políticos/as por parte del Poder Judicial en connivencia con los grandes multimedios comunicacionales y los grupos económicos concentrados (conocido como *lawfare*), constituyen en el siglo XXI las nuevas modalidades de quiebre de las reglas de los sistemas democrático-institucionales. Sobre la deriva del neogolpismo, es importante resaltar que los golpes de Estado contra gobiernos progresistas que lograron consumarse efectivamente, fueron acompañados por la profundización de las políticas neoliberales. Este es un aspecto que los diferencia de lo sucedido en los golpes de los años sesenta y setenta, marcados por la implementación variable de políticas desarrollistas y neoliberales, según los distintos casos nacionales.

2. La constitución de *regímenes políticos híbridos*. Si el *neogolpismo* nos habla de las rupturas institucionales a través de las cuales son provocados quiebres o cambios forzados en los gobiernos, una nueva amenaza se cierne al mismo tiempo sobre el desarrollo de las democracias latinoamericanas, aun al interior de los mandatos elegidos por el voto popular: la constitución de *regímenes políticos híbridos*. El desplazamiento forzado de facultades políticas desde el poder Ejecutivo hacia sectores del Poder Legislativo o del Poder Judicial establece serias limitaciones sobre la posibilidad de deliberación por parte de los/as representantes que fueron electos/as de acuerdo con el principio de la soberanía popular. Por lo tanto, la ruptura del orden no se consuma exclusivamente mediante un golpe (*duro* o *blando*, a la vieja o a la nueva usanza), sino que se impone cotidianamente a través de un desplazamiento creciente de las potestades políticas hacia fuera de los poderes ejecutivos. Ello se produce en tándem con fuerzas exteriores al sistema político entendido en sentido estricto (hablamos fundamentalmente del poder económico y multimediático concentrado).

Así, ante la emergencia de liderazgos y/o fuerzas políticas cuya elección democrática se asienta en la promesa de producir transformaciones en beneficio de las grandes mayorías sociales, el margen de decisión de esos gobiernos se estrecha considerablemente (hasta volverse prácticamente nulo en algunos casos) como consecuencia de un acrecentamiento de las potestades arrogadas por otros poderes en nombre mismo del sistema democrático.

3. La radicalización autoritaria y el surgimiento y ascenso de fuerzas de extrema derecha. La contradicción entre neoliberalismo y democracia se expresa en la irrupción de fuerzas políticas de extrema derecha que buscan modificar drásticamente los límites del sistema democrático con el propósito de convertir a la violencia en un rasgo permanente de organización de la vida social, volviéndola una característica inherente a dicho sistema. De esa manera, podemos señalar que si el *pacto democrático* labrado (explícita o implícitamente) en los años ochenta del siglo XX en la región (de forma posterior al disciplinamiento popular impartido por las dictaduras militares de los años setenta), imponía una *armonía* entre modelo económico neoliberal e instituciones democrático-representativas, ello ocurría bajo el pretexto de acabar con el ejercicio permanente de la violencia como organizadora de la convivencia social. Por el contrario, hoy, cuatro décadas después del inicio de ese *pacto*, emergen fuerzas políticas con una creciente inserción y capacidad de irradiación en las masas populares, y principalmente sobre las clases medias, que pregonan y expresan en la esfera pública el ejercicio de la violencia física y simbólica (cuyas fronteras, en efecto, se vuelven cada vez más borrosas). En ese marco, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia y la transfobia se transforman en un rasgo permanente e inherente a la vida política de la región. Por supuesto,

esas características tornan indistinguible la existencia de un sistema democrático de uno autoritario, más allá del funcionamiento del sistema electoral y de la dinámica estrictamente formal, aunque ya muy dañada, de las instituciones representativas. Pues la negación e incluso la aniquilación del otro se convierten en un paisaje cotidiano de nuestra cultura política. Por tal razón, en la coyuntura actual, reemergen los conceptos de *fascismo*, *neofascismo* o *posfascismo* como parte del vocabulario empleado para lograr una caracterización de los procesos sociopolíticos y de las fuerzas políticas de extrema derecha en buena parte de los países de la región.

De tal manera, esta obra colectiva pretende reflexionar acerca de las tres dimensiones recién mencionadas de la crisis democrática que actualmente atraviesa América Latina. En ese sentido, además de esta breve introducción que oficia como presentación de sus claves generales de lectura, el volumen se dividirá en tres secciones, en las cuales se realizarán tanto abordajes teóricos como estudios en función de casos nacionales.

En la primera sección, los trabajos buscarán realizar una aproximación teórica, tanto al contexto político general en el cual se encuentra América Latina como a los distintos modos de conceptualizar la crisis democrática. Con ese fin, se indagarán categorías clásicas de la teoría política, a la par de otros conceptos más novedosos, forjados al calor del último ciclo político en la región. En particular, los tres artículos que componen esta primera parte se concentrarán respectivamente en la conceptualización de los regímenes políticos contemporáneos, en la caracterización del *neogolpismo* y en la singular articulación entre neoliberalismo y *moral familiarista* existente en el seno de las derechas autóctonas en el contexto actual.

Mientras tanto, en la segunda sección se abordan procesos sociopolíticos en los cuales se analizan los conflictos que muestran, en

distintos casos nacionales, la confrontación de fuerzas que condujo a la crisis actual. Desechando como punto de partida una perspectiva determinista que pudiera pensar la crisis democrática como resultado del accionar de un contexto externo o de fuerzas exógenas, los distintos trabajos intentarán pensar las disputas entre clases, fracciones de clases y grupos sociales que dan lugar a la crisis; y, fundamentalmente, que explican por qué la crisis asume ciertas formas y es procesada bajo modalidades específicas en el campo político. Precisamente, las diferencias entre las historias de lucha, las relaciones de fuerzas y los sujetos sociales y políticos según los distintos casos nacionales, les permitirán a los/as lectores/as observar en los diferentes artículos de esta sección la diversidad con la que se expresa políticamente un ciclo común en nuestra región (como es la crisis democrática en curso).

Por último, la tercera sección se enfoca en el abordaje de la radicalización autoritaria y del fenómeno de surgimiento y ascenso de las fuerzas de extrema derecha en los últimos años en nuestra región. Nuevamente, aquí, en los diferentes artículos serán indagados distintos casos nacionales con el propósito de mostrar la diversidad que asume dicho fenómeno según la heterogeneidad de las tradiciones político-ideológicas en la historia de las derechas autóctonas, así como también de acuerdo con el desarrollo más reciente de los conflictos políticos. Asimismo, en esta sección, los trabajos serán abordados desde distintos enfoques, con el propósito de enriquecer el examen de las nuevas formaciones de la extrema derecha. La sociología histórica, la crítica de la ideología y la ciencia política constituyen los distintos vehículos disciplinares utilizados en los diferentes textos para aproximarse a un fenómeno que ha irrumpido vertiginosamente en la región en el último tiempo y que, por lo tanto, merece ser estudiado a partir de distintos ángulos para captar la complejidad que lo caracteriza. Así, se analizarán experiencias políticas, imaginarios y

representaciones que son parte de la radicalización autoritaria actualmente en pleno desarrollo en nuestra región.

Ciertamente, debemos reconocer que este trabajo colectivo ha dejado algunas cuentas pendientes. Aun cuando este volumen contempla la cobertura de una variedad bastante amplia de casos nacionales (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú), no logra comprender al conjunto de los países de la región. Si bien sabemos que ese objetivo hubiese implicado una obra de unas dimensiones muy difíciles de asir, resulta necesario admitir ausencias sustanciales, como son los casos de Uruguay, Paraguay y Venezuela, éste último sumamente importante en la escena geopolítica de las últimas dos décadas. Tampoco hemos conseguido abordar las subregiones de Centroamérica y el Caribe, tan esquivas a la intelectualidad del Cono Sur (a la que, por cierto, pertenecemos los compiladores de este libro). Ello amerita no solo un reconocimiento y una auto-crítica como la que estamos intentando expresar aquí, sino también un señalamiento crítico tanto acerca de las asimetrías que persisten al interior del sistema académico entre los distintos países, como de la insuficiencia de los vasos comunicantes entre las instituciones universitarias de las distintas subregiones de América Latina. No tenemos dudas: queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. De cualquier manera, creemos que tales vacancias no invalidan la riqueza de este trabajo, y menos aún el potencial crítico concentrado a lo largo de sus páginas.

Ahora sí, para finalizar esta breve introducción, y dejar a los/as lectores/as en manos de los/as autores/as de cada uno de los capítulos, resta decir que esta obra colectiva pretende dar cuenta de las múltiples dimensiones que se ponen de manifiesto en la actual coyuntura latinoamericana. Reconociendo la centralidad del contexto global para pensar la realidad de América Latina, este volumen busca reflexionar sobre la inscripción de la región en ese marco. Pero lo hace considerando el papel fundamental que allí desempeñan la historia

larga de las clases sociales y sus tradiciones políticas, las disputas del pasado reciente, así como la especificidad que asumen en estas latitudes los conflictos sociopolíticos. Sin perder de vista, en este último aspecto, que tanto las irrupciones plebeyas como las respuestas autoritarias de las clases dominantes frente a ellas, adquieren un lugar primordial a la hora de encontrar vías de resolución a la crisis en curso. No debemos olvidar, como solía recordarnos de forma permanente René Zavaleta Mercado, que las crisis contienen una enorme potencia como forma de visibilidad y conocimiento. Inmersos en medio de un caos global, asumir la presencia de la crisis y tratar de comprenderla, como proponemos en este libro, no parece poca cosa.

Primera parte

**Nuevos y viejos conceptos
para interpretar la crisis**

Crisis democrática en América Latina

Regímenes políticos *híbridos* y gérmenes
de una nueva forma de Estado

ANDRÉS TZEIMAN

“No olvidemos que el animal herido es el más peligroso”

Nicos Poulantzas,
en *Estado, poder y socialismo* (1978)

Introducción: crisis del Estado, crisis democrática en América Latina

En la última década y media, han tenido lugar un conjunto de acontecimientos políticos en América Latina que nos hablan de una realidad alarmante para la vida democrática de la región: una vez más en nuestra historia, las rupturas del orden institucional se han vuelto a poner a la orden del día. Si bien podemos ubicar un momento iniciático de ese proceso en el golpe de Estado en Honduras del año 2009, ciertamente a partir de allí hemos estado en presencia de hechos sucesivos que, hasta entonces, parecían ser parte del pasado.

Ahora bien, las rupturas institucionales del siglo XXI no han asumido las mismas formas políticas que adoptaron décadas atrás, cuando ocurrieron bajo la modalidad de asonadas cívico-militares. Tal diferencia entre pasado y presente se puede cifrar con facilidad al efectuar un breve *racconto*, sin pretensiones de exhaustividad, por algunos de los fenómenos que tuvieron lugar de forma posterior al golpe de Estado en Honduras (varios de los cuales, por cierto, son abordados en distintos capítulos de este libro): la deposición *express*, mediante trámite legislativo, de Fernando Lugo (Paraguay); el *impeachment* parlamentario a Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento al entonces ex presidente Lula (Brasil); el golpe de Estado instrumentado por las fuerzas armadas al gobierno de Evo Morales (Bolivia); el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, junto con la persecución político-judicial sistemática hacia ella, sus hijos y a funcionarios de sus dos mandatos presidenciales (Argentina); y el exilio obligado de Rafael Correa y otros dirigentes políticos de su gobierno, así como el aprisionamiento del ex vicepresidente Jorge Glas (Ecuador).

A todo ese escenario, debemos agregar, por un lado, la singularidad del caso peruano, donde en los últimos años se ha constituido una nueva *normalidad política*, en la cual constatamos una sucesión permanente de presidentes que no logran hacer pie en el poder ejecutivo, debiendo abandonar compulsivamente su cargo de manera anticipada. El último y más trágico capítulo de esa serie ha sido la detención del ex primer mandatario Pedro Castillo, quien había sido elegido por el voto popular. Mientras tanto, por el otro lado, es necesario recordar la brutalidad en el ejercicio de la violencia político-estatal observada recientemente en Chile y Colombia frente a la irrupción de movilizaciones populares multitudinarias, que se sostuvieron en sendos países durante largos períodos de tiempo (con sus lógicas oscilaciones entre momentos de alzas y bajas).

Dicho panorama regional nos introduce en las dos hipótesis complementarias que guiarán este trabajo. La primera de ellas sostiene que el contexto de *inestabilidad* que hoy está viviendo América Latina puede ser conceptualizado, siguiendo a Nicos Poulantzas (1977), bajo la figura de *crisis del Estado*. No se trata, vale aclarar, de aquel tipo de crisis que Guillermo O´Donnell (2009) solía llamar *celular*, es decir, de las relaciones sociales de producción en su conjunto. Más bien nos referimos, junto a Poulantzas, a una coyuntura en la cual se pone en tela de juicio el papel del Estado como organizador del bloque en el poder. De ese modo, la crisis del Estado tal como la entenderemos aquí no implica una crisis revolucionaria, sino una situación particular de condensación de contradicciones expresada, entre otros, en los siguientes efectos estatales: contradicciones entre sus ramas y aparatos, escisión entre centros de poder real y centros de poder formal, desplazamiento del papel organizativo del Estado desde ciertos aparatos hacia otros, o bien, la irrupción de trastornos sustanciales del derecho. Así, la crisis estatal indica que los fenómenos que acabamos de señalar deben ser comprendidos como tentativas para mantener la autonomía relativa del Estado y *restaurar una hegemonía de clase vacilante* (Poulantzas, 1977, p. 58).

Siguiendo esa línea de razonamiento, la segunda hipótesis de este trabajo, complementaria de la anterior, afirma que la crisis del Estado por la que transita actualmente América Latina se manifiesta en una crisis de sus regímenes democráticos tal como fueron concebidos en los años ochenta (es decir, tras la salida de las dictaduras militares de las décadas del sesenta y setenta).

Con el propósito de desplegar los fundamentos que nos llevan a hablar de una *crisis democrática* en nuestra región y de explicar hacia dónde creemos que ella se dirige en materia de regímenes políticos, este artículo contará con tres apartados y unas palabras finales a modo de conclusión. En el primero de ellos, haremos referencia al contexto internacional en el que se inscribe la crisis latinoamericana;

en el segundo, por su parte, realizaremos una sucinta historización del derrotero más reciente de nuestras democracias, bajo la perspectiva de un ciclo común compartido por la región, aunque tratando de dilucidar los impactos diferenciales de las crisis a nivel regional e internacional; mientras que, en el tercero, intentaremos llegar a una aproximación sobre el estatuto de los regímenes políticos en la actualidad América Latina y de cara al porvenir. Como conclusión, terminaremos el artículo aludiendo a la heterogeneidad y diversidad que caracteriza al tratamiento conjunto de esta coyuntura latinoamericana y sus repercusiones en la relación entre los conceptos de *crisis* y *Estado*.

El contexto internacional posterior a la crisis del 2008: el gobierno de la austeridad

No podemos detenernos aquí en una explicación sobre las causas que llevaron a la crisis financiera internacional del año 2008, cuyo impacto en Estados Unidos y Europa fue de gran alcance. Pero al enfocarnos en este artículo en el período posterior a su irrupción, resulta inevitable hacer referencia a un contexto internacional del cual nuestra región no puede abstraerse, en la medida en que ha ejercido un condicionamiento sobre el despliegue de su vida política.

A propósito de las crisis, es importante recordar, tal como lo ha expresado Norbert Lechner (2012), que las mismas están constituidas por dos momentos: uno de catarsis de la contradicción, y uno posterior, de juicio y elección. Es decir que la crisis no solo se expresa en su develamiento, sino también en sus modos de resolución o sutura. En este último sentido, aquello que nos importa subrayar aquí es que el modo de abordaje de la crisis internacional estuvo signado por dos aspectos centrales. Por un lado, por una fuerte intervención de los Estados para rescatar a los bancos, contradiciendo de ese modo la propia ideología de la globalización, que en los años

noventa había pregonado un desvanecimiento de los Estados nación ante el desarrollo tanto de una gran *aldea global* como de crecientes instancias institucionales de carácter supranacional (García Linera, 2010; Thwaites Rey, 2010). Mientras que, por el otro lado, la salida de la crisis significó un reforzamiento de las modalidades autoritarias de dominación política. De hecho, este último aspecto ha llevado a varios autores y autoras a hablar de un neoliberalismo que, tras la crisis del 2008, se volvió “punitivo” (Davies, 2016), “totalitario” (Brown, 2018), o incluso, “posfascista” (Traverso, 2021).

Tomando en cuenta la conjunción de esos dos aspectos (el salvataje estatal a los bancos y el reforzamiento del dominio político autoritario), podemos hablar de la configuración de una salida *regresiva* frente a la crisis. En ese sentido, es posible afirmar junto a Bob Jessop (2019), que, tras la crisis, se ha trazado un horizonte de constitución de *sistemas de gobierno de austeridad*, fundamentados en una reorganización institucional continuada de las relaciones entre lo político y lo económico. Ello se sostiene, según Jessop, bajo la premisa de que la austeridad es la articulación *política* de la crisis en Estados Unidos y Europa; y, en esa clave, destaca siete aspectos de tal articulación: 1) el reequilibrio de la economía desde un crecimiento basado en los salarios a uno basado en las finanzas; 2) la redistribución de los ingresos de los asalariados al capital; 3) el fomento de la *precariedad* en todos los ámbitos de la vida como mecanismo disciplinario y medio de reforzar la financiarización de la vida diaria; 4) la recomposición de las clases sociales, ampliando la desigualdad de salario y de riqueza entre ellas junto con su estratificación; 5) la facilitación de la infiltración empresarial en el Estado; 6) la aceleración del cambio de un Estado de bienestar keynesiano, basado en los derechos compartidos de ciudadanía, a un *régimen trabajista* (*workfare*) que se basa en la coerción, el sadismo informal, y sobre todo en Estados Unidos, en el castigo; y 7) la promoción de valores de jerarquía y competitividad (Jessop, 2019, p. 309; énfasis del original).

Vale recordar, como sostiene Poulantzas (1977), que la internacionalización del capital y de los procesos de trabajo tiende a provocar una interiorización de las crisis del centro en las formaciones económico-sociales periféricas. Por lo tanto, la configuración de los sistemas de gobierno de austeridad en los países capitalistas avanzados no puede dejar de repercutir sobre los procesos de la periferia capitalista. Aunque, como bien explica Jessop (2019), dicho despliegue de las políticas de austeridad también se diferencia según las distintas *variedades del capitalismo*, es decir, de acuerdo con la forma de desenvolvimiento del capitalismo en las diversas formaciones económico-sociales.

Por ende, resulta fundamental inscribir los procesos latinoamericanos en el marco establecido por el reforzamiento autoritario en los modos de dominación política, junto con la reorganización de las relaciones entre lo político y lo económico bajo el prisma de los sistemas de gobierno de la austeridad. Pero, al mismo tiempo, no debemos perder de vista que esos condicionamientos se siguen produciendo dentro de los límites de los estados nacionales (los cuales aún resguardan porciones de soberanía y autonomía), y en el marco de las contradicciones entre las clases existentes en cada plano interno (Poulantzas, 1977, pp. 64-65).

De esa manera, para volver a colocar el foco sobre América Latina, consideramos vital poner en diálogo esta etapa del escenario internacional, signada por una salida regresiva a la crisis capitalista, con la temporalidad propia de la vida política latinoamericana reciente. En ese sentido, proponemos leer e interpretar la coyuntura en nuestra región a partir de la intersección entre el derrotero de nuestras democracias en el tiempo reciente y el tipo de articulación política desplegada a nivel global como salida de la crisis.

Discontinuidades del acompasamiento entre democracia y neoliberalismo en América Latina: temporalidades desencontradas de las crisis

Un breve itinerario de las democracias latinoamericanas en el pasado reciente nos obliga a situarnos en un primer mojón, ubicado en la década del ochenta. Sucede que los procesos de *transición a la democracia* tuvieron lugar una vez que las dictaduras cívico-militares de los años sesenta y setenta entraron en crisis. Así, en los años ochenta, se inicia un camino conjunto de los países latinoamericanos hacia regímenes democrático-liberales, que incluyó también a aquellas naciones que habían sido gobernadas por militarismos nacionalistas o por dictaduras prolongadas. La década del ochenta, por ende, abrió un ciclo político común en la región, en el que la democracia se impuso como lengua compartida.

Pero, como bien señala Álvaro García Linera (2022), esa imposición de la democracia liberal en los años ochenta no fue fruto del azar. Por el contrario, fue el resultado de la confluencia de dos procesos políticos: 1) el disciplinamiento de los sectores populares llevado a cabo por las dictaduras cívico-militares, especialmente en el Cono Sur de la región; y 2) la irradiación de la globalización neoliberal hacia América Latina, un paradigma que, por ese entonces, se expandía por todo el planeta y que, en 1989, llegaría a su *clímax* con la caída del Muro de Berlín.

De ese modo, las últimas dos décadas del siglo XX en América Latina estuvieron marcadas por un acompasamiento entre regímenes políticos democráticos y expansión del paradigma neoliberal. Así, por aquellos años, la democracia en nuestra región fue concebida (y practicada) bajo su acepción *minimalista* y *procedimental*, es decir, como un mecanismo de selección de élites de gobierno y como garantía de libertades políticas (García Linera, 2022). Mientras que aquello que en ese tipo de democracias permanecía como *consenso*

inalterable era la expansión del proyecto neoliberal, cristalizado en la implementación de políticas de liberalización comercial y financiera, privatización de empresas públicas, desguace de la faceta bienestarista del Estado y desregulación de la economía (Vilas, 1994).

Ahora bien, dicho acompañamiento entre regímenes democráticos y momento expansivo del neoliberalismo sufriría una fuerte *crisis* a finales del siglo XX y comienzos del XXI, sobre la cual resulta importante realizar una doble aclaración. La primera reside en que esa crisis no tuvo lugar en todos los países de la región, motivo por el cual en varios casos nacionales se produjo una continuidad del acompañamiento entre democracia y neoliberalismo (Chile, Perú, Colombia y México fueron ejemplos de ello). Mientras que la segunda aclaración es que en aquellos países donde la crisis tuvo como efecto la llegada al gobierno de liderazgos y espacios políticos progresistas, ese tránsito no resultó unánime ni homogéneo. Por el contrario, existieron diferencias sustantivas entre las características de dichas crisis (y de su impacto estatal) en cada caso nacional, expresadas en los siguientes aspectos: la intensidad en el develamiento de la crisis, el grado de movilización popular que las acompañó, el nivel de proximidad entre los protagonistas de esas movilizaciones y los liderazgos y espacios que luego llegaron al gobierno, la distancia temporal entre el develamiento de la crisis y el arribo de los liderazgos y espacios a la dirección del Estado, entre otros puntos que podríamos mencionar.¹

Así, tanto la continuidad del paradigma neoliberal sin develamiento de crisis en algunos países, como los rasgos específicos con los cuales fue suturada la crisis en los países en los que la misma irrumpió, nos hablan del estado de la situación política en el cual la región afrontaría algunos años después el *shock* internacional del

1 Junto con Martín Cortés desarrollamos una extensa reflexión acerca de la relación entre crisis y Estado en los procesos latinoamericanos del siglo XXI, en un artículo titulado *Discutir el Estado. Dilemas estratégicos a la luz de los procesos políticos latinoamericanos* (ver Cortés y Tzeiman, 2017).

año 2008. Y, al mismo tiempo, en el caso de los numerosos países que estuvieron atravesados por gobiernos progresistas, podemos afirmar que ello implicó el desencuentro entre las temporalidades de dos crisis diferentes (la de nuestra región ocurrida a fines de los noventa y comienzos de los dos mil, y la internacional desatada en el año 2008).

En ese sentido, aquello que nos interesa subrayar es que, frente a las consecuencias de la crisis internacional del año 2008, la región ingresa en la segunda década del siglo XXI con escenarios muy disímiles en términos políticos según el caso nacional en cuestión. En los países en que liderazgos y espacios progresistas llegaron a la dirección del Estado, las democracias se encuentran en un proceso de redistribución progresiva del ingreso y de ampliación de derechos, e incluso, poniendo en cuestión algunos principios del proyecto neoliberal (ciertamente, en forma parcial y con intensidades muy distintas según el caso nacional). Mientras que en aquellos países en los cuales no se había producido un corte o una atenuación del ciclo de los años ochenta y noventa, el modelo neoliberal se encontraba reforzado como producto de su continuidad extendida en el tiempo.

Pero más allá de esas diferencias, los efectos desatados en los países capitalistas avanzados por la crisis del 2008 repercutirían con fuerza sobre América Latina. Tanto es así, que en la región comenzó a producirse una ralentización del crecimiento económico, un estancamiento en la generación de empleo y una reemergencia de la restricción externa como consecuencia del descenso en los precios de los *commodities* (Fernández, 2016, p. 24). Precisamente, es en ese contexto donde se notarán las disimilitudes entre las trayectorias previas según cada caso nacional, al surgir respuestas diferenciadas ante los efectos de la crisis internacional. Concretamente, en los países gobernados por liderazgos y espacios progresistas, la segunda década del siglo XXI fue el tiempo de un contrataque de las derechas, las cuales intentaron recobrar la energía perdida tras el descrédito

que habían sufrido como producto de las crisis de finales de los años noventa y comienzos de los dos mil. Mientras que en los países en donde no se había producido un corte o una atenuación del acompasamiento entre democracia y neoliberalismo, su reforzamiento ante la crisis del 2008 implicó una situación de *olla a presión*, ante la cual no existían canales de expresión política e institucional del descontento, o bien, la construcción de esos canales se dilataba hacia adelante en el tiempo.

Siguiendo dicho argumento, sostenemos que, luego de un predominio progresista en la región durante los primeros quince años del siglo XXI, los regímenes democráticos debieron enfrentarse a un doble acecho. Por un lado, la amenaza de la ofensiva de las derechas contra los gobiernos progresistas, cuyos logros y avances debían ser disciplinados para *normalizar* el acompasamiento entre democracia y neoliberalismo, aunque en un contexto global de reforzamiento autoritario de este último. Por el otro lado, irrumpe el peligro que significa el desgaste de tal acompasamiento en aquellos países donde no había existido una crisis (ni un corte, ni una atenuación) en el siglo XXI, agravándose la situación por la inexistencia de canales políticos e institucionales para expresar el descontento (una ausencia que, en efecto, es característica del acompasamiento entre democracia y neoliberalismo, pero que se vuelve particularmente revulsiva en tiempos de crisis).

Pese a que estas dos amenazas conforman, y dan lugar a, escenarios políticos muy diferentes en cada país, confluyen en una encrucijada común: la *crisis de la democracia*. Pues sucede que, en ambos casos, tanto el ejercicio de la violencia como las rupturas institucionales se presentan como mecanismos de difícil elusión ante los desafíos que deben conjurar: ya sea para disciplinar a las fuerzas y liderazgos progresistas con el objeto de que abandonen su protagonismo en la arena política, o bien, para disuadir las protestas mediante las que se

expresa el descontento luego de décadas de predominio ininterrumpido del proyecto neoliberal.

Situándonos entonces en la tercera década del siglo XXI, aun cuando en algunos países los espacios progresistas han logrado retornar a la dirección del Estado (Argentina, Bolivia, Brasil), o en otros se han construido los vehículos político-institucionales para canalizar el descontento y tratar de revertir una dominación neoliberal sostenida en el tiempo (Chile, Colombia, México), ninguna de esas experiencias logra asentarse con firmeza y promesas de estabilidad en el poder. Ello se debe a una doble imposibilidad: 1) de parte de los sectores populares, de producir un quiebre profundo con el ciclo neoliberal global y superar los obstáculos enfrentados por los gobiernos progresistas de comienzos de siglo (lo cual, por cierto, supondría un movimiento continental, a contracorriente de la imposición de sistemas de austeridad a nivel internacional); y 2) de parte de las clases dominantes, de constituir una nueva *normalización política*, que logre volver a acompasar democracia y neoliberalismo en el actual contexto de reforzamiento autoritario del dominio político a escala global (un acompasamiento que, a diferencia de aquel *virtuoso* de los años ochenta y noventa, hoy se presenta como una opción demasiado inestable y riesgosa en nuestra región, ante el espectro imprevisible de las insubordinaciones plebeyas).

Por lo tanto, la actual *crisis del Estado* en América Latina, cristalizada en una crisis democrática, reside en la irresolución de aquella disputa, en un contexto internacional signado por el desconcierto acerca de la reorientación del proyecto neoliberal. En ese marco, las clases dominantes de nuestra región enfrentan con suma dificultad el desafío de instaurar con sostenibilidad política el paradigma que, junto con Jessop, denominamos como *sistema de gobierno de la austeridad*. Creemos que esa encrucijada tiene serias repercusiones en la fisonomía y el funcionamiento de los aparatos del Estado, y en particular, sobre el ámbito de los regímenes políticos.

Hibridez de los regímenes políticos latinoamericanos: ¿hacia una nueva forma de Estado?

En el apartado anterior, comenzamos señalando que en los años ochenta del siglo XX la democracia se impuso como lengua política compartida en América Latina. Afirmamos también que ese idioma común se estableció a partir del disciplinamiento por vía autoritaria de las interpelaciones más radicales hacia el concepto de democracia. Esto último no debemos olvidarlo, puesto que resulta central para todo el período. Pero hoy, cuatro décadas después del inicio de los procesos de transición, la pregunta crucial que nos obliga a hacernos el uso de la palabra democracia se ubica en una tesitura muy diferente. En efecto: ¿hasta qué punto el concepto preserva operatividad para referirse a los regímenes políticos en la actualidad de la región?

Por supuesto, ese interrogante no flota en el vacío, sino que, de acuerdo a lo ya señalado en el comienzo de este artículo, es el producto de la experiencia política de la última década y media en América Latina, cuyas contradicciones se han agudizado en los últimos años. Abordando el asunto a partir de preguntas más concretas: ¿es posible llamar democracias a regímenes en los cuales está prohibida la competencia electoral de ciertos liderazgos o fuerzas políticas? ¿Cómo interpretar la intromisión creciente de los poderes judiciales en el desenvolvimiento de la vida política y electoral? ¿De qué manera concebir aquellas situaciones en las que se establece como *normalidad política* una sucesiva rotación de presidentes que, acosados por otros poderes, no logran afirmarse más allá de períodos muy breves en el gobierno del Estado? ¿Qué decir cuando la violencia político-estatal se convierte en una respuesta sistemática ante el ejercicio del derecho a la protesta? ¿Y cuándo una fuerza externa, coaligada con poderes internos, condiciona fuertemente un proceso electoral llegando a promover la intervención de las fuerzas armadas?

Consideramos que hay una primera respuesta, bastante contundente frente a todas estas preguntas, que da cuenta del aspecto más crítico de nuestra coyuntura, es la siguiente: el retorno de ciertas formas de autoritarismo político a la región está poniendo en entredicho algunos de los principios más básicos de la democracia liberal. Pues aun restringiéndonos a la dimensión minimalista y *procedimental* de la democracia (es decir, aquella versión edulcorada, que se asentó y difundió en y a partir de los años ochenta con los procesos de transición), hoy una de sus premisas más simples y esenciales, como lo es la libre elegibilidad y la libre competencia para el acceso a cargos públicos por medio del voto popular, no llega a efectivizarse por completo en varios de nuestros países. Lo mismo ocurre con otra característica elemental de las democracias liberales: el sometimiento de las decisiones públicas a la soberanía de los gobiernos elegidos a través de elecciones libres (si bien en la actualidad esa condición también se encuentra amenazada en otras regiones, adopta formas especialmente gravosas en el campo político latinoamericano). En síntesis: en algunos casos de formas más sutiles, y en otros de un modo más extremo, algunas de las libertades políticas que fueron prometidas por el *pacto* de los procesos de transición en los años ochenta, hoy no están plenamente garantizadas en varios países de nuestra región.

La crisis actual de las democracias latinoamericanas reside en que el incumplimiento del “pacto” no ha irrumpido de forma aislada, sino que han tenido lugar de forma coincidente en varios países de América Latina y en un período muy cercano de tiempo. Ello nos habla de la existencia de un movimiento común en nuestra región. Por lo tanto, creemos que tal coincidencia nos obliga a encontrar una respuesta y una explicación ante la pregunta por aquello que hoy estamos nombrando bajo el concepto de democracia.

Tal como fue señalado al comienzo del artículo, consideramos que este problema que enfrenta la coyuntura latinoamericana surge

a partir de una conversación tácita con el pasado. Porque cuando hablamos de rupturas institucionales y de autoritarismo político y nos referimos al ciclo más reciente de esos fenómenos en la región, resulta inevitable la remisión a las dictaduras militares de los años sesenta y setenta. No obstante, nos parece evidente que el fantasma autoritario que atraviesan en el presente distintos países de América Latina no puede ser asimilado con el tipo de regímenes políticos de excepción experimentados décadas atrás. Más bien, la complejidad del tiempo actual se manifiesta en que la trama autoritaria se introduce en el seno de los propios regímenes democráticos (Lesgart, 2019), y en el interior de un ciclo como el iniciado en los años ochenta, en el cual el *locus* político de la región se ha articulado (y se sigue articulando) alrededor del concepto de democracia.

En ese escenario, para abordar la complejidad del fenómeno autoritario en nuestra coyuntura, creemos que se vuelve necesario revisar sucintamente dos categorías de la teoría política poulantziana que han tratado de pensar las reconfiguraciones llevadas a cabo en contextos de crisis del Estado. Para ello, adoptamos dos supuestos, ya presentados más arriba, que asumimos como punto de partida de nuestro razonamiento: 1) los acontecimientos políticos de la última década y media en la región han puesto en jaque la vigencia de premisas básicas de la democracia liberal; y 2) el abandono de esas premisas es parte de una secuencia compartida por varios países de la región.

Enfocándonos primero en uno de los dos conceptos clave en la obra de Poulantzas que nos interesa rescatar aquí, surge una pregunta inicial: la ruptura de ciertas premisas básicas de la democracia liberal, ¿implica la emergencia y constitución de *Estados de excepción*? Recordemos que, para el intelectual greco-francés, dicha categoría suponía tanto la existencia de una reorganización radical del conjunto del Estado y sus aparatos ideológicos, como el control estricto de todo el sistema estatal por una de sus ramas o aparatos (Poulantzas,

1974, p. 370). De hecho, en el fascismo y en la dictadura militar (Estados de excepción por excelencia) esos aspectos se cumplían de manera palmaria. Pero, en contrapunto con ello, creemos que las transformaciones regresivas en curso en la actualidad de América Latina no se corresponden con ninguna de aquellas dos características de los Estados de excepción. Porque el borramiento de principios básicos de la democracia liberal en los procesos contemporáneos no se traduce en una reorganización general del Estado, y menos aún, en el predominio de una de sus ramas sobre el conjunto del sistema estatal. Nos detendremos un poco más adelante sobre ello, pero creemos, más bien, que la crisis del Estado en la región nos indica el despliegue de desplazamientos entre centros de poder real en el propio aparato estatal, en función de coyunturas específicas.

Desde ya, no desconocemos que en el caso particular de Brasil efectivamente existe un debate sobre el retorno del fascismo o neofascismo (Boito Jr., 2021; Cavalcante, 2020). Tampoco perdemos de vista el resurgimiento de movimientos fascizantes en otros países de la región. Sin embargo, más allá de la controversia en dichos casos, no acordamos con una generalización que permita hablar de un regreso de los Estados de excepción en buena parte de América Latina.

Según nuestra perspectiva, la confusión analítica en torno a dicho concepto se suscita porque la larga tradición e idiosincrasia política, ideológica y cultural de las clases dominantes latinoamericanas, signada por su carencia de vocación hegemónica, se mueve muy naturalmente hacia prácticas autoritarias que, de forma exacerbada en los momentos de crisis, tienden hacia modalidades de excepción (Fernandes, 1978, pp. 281-290). De manera tal que, si bien pensamos que no es posible referirnos a la emergencia de un Estado de excepción, no debe llamarnos la atención la creciente proliferación de comportamientos en las clases dominantes que reclaman e intentan practicar un desplazamiento en ese sentido. De ese modo, por

supuesto, dicha dimensión asume un lugar central en los procesos sociopolíticos, motivo por el cual no puede ser omitida en el análisis.

Dejando de lado la categoría de Estado de excepción, creemos que hay otro concepto poulantziano que puede resultar muy útil para reflexionar acerca de nuestra coyuntura. Nos referimos a la categoría de *estatismo autoritario*. Ella fue empleada por Poulantzas en su libro *Estado, poder y socialismo* para aludir al contexto de finales de los años setenta. Según dicho intelectual greco-francés, por ese entonces en los Estados de los países capitalistas avanzados se estaba produciendo un fuerte desplazamiento del poder desde los partidos políticos y el ámbito legislativo hacia la administración estatal, provocando un sensible relajamiento de los vínculos de representatividad. Así, Poulantzas destaca que la administración del Estado se volvía cada vez más rígida por aquellos años, a la par que se convertía en un núcleo impenetrable para las masas populares y los partidos políticos. Como consecuencia de ello, estos últimos sufrían una *desideologización*, en la medida en que se transformaban en canales de propaganda de decisiones que eran tomadas por fuera de ellos (Poulantzas, 2005, p. 282). Por lo tanto, frente al avance del proyecto neoliberal que cobraría ímpetu en los años ochenta, Poulantzas presagiaba la capitulación de los partidos socialdemócratas europeos, quienes habían sido claros protagonistas del ciclo keynesiano-bienestarista en las décadas previas.

Retomando lo señalado en el párrafo anterior, encontramos dos aspectos interesantes del concepto de estatismo autoritario para rescatar de cara a nuestra coyuntura. En primer lugar, con él Poulantzas está haciendo referencia a un contexto de transformación del capitalismo, en el cual tiene lugar una internacionalización del capital y de los procesos de trabajo. Tales transformaciones sitúan la polarización del bloque en el poder en una fracción monopolista y transnacionalizada del capital que busca abstraer las decisiones políticas del ámbito de los Estados nacionales, y fundamentalmente, de los centros

estatales sometidos a la soberanía popular. Así, los cambios en la configuración del Estado cristalizados en el concepto de *estatismo autoritario* son co-constitutivos de aquel proceso de transformación capitalista. En ese sentido, observamos que la coyuntura actual, signada por la implementación de los sistemas de gobierno de la austeridad (de los que hablamos más arriba junto a Jessop), resulta una profundización de la tendencia detectada por Poulantzas a fines de los años setenta, con serias consecuencias sobre el ámbito estatal. Por lo tanto, pensamos que el concepto de estatismo autoritario puede servirnos para reflexionar sobre el proceso que hoy atraviesa nuestra región. Apuntamos a la necesidad que enfrentan las clases dominantes, ya mencionada más arriba, de recomponer el acompasamiento entre democracia y neoliberalismo, aunque en un contexto global de reforzamiento autoritario del dominio político en el interior de las fronteras nacionales. Un proceso que, como ya dijimos también, no puede dejar de tener repercusiones en la fisonomía y las funciones del Estado.

El segundo aspecto que nos interesa subrayar del aporte realizado por Poulantzas a través del concepto de estatismo autoritario de cara a la realidad de nuestra región, es que remite a una relación específica y conflictiva con la democracia liberal. Porque, precisamente, su punto de vista indica que dicho concepto no representa una forma de Estado de excepción ni una forma transitoria hacia ese tipo de Estado. Más bien, Poulantzas afirma que se trata de la nueva forma *democrática* de la república burguesa en la fase entonces vigente del capitalismo (Poulantzas, 2005, p. 264). Es decir que corresponde a una readaptación de la propia democracia liberal frente a las transformaciones capitalistas en curso. De modo tal que dicha metamorfosis tiene lugar para producir una recomposición de la hegemonía ante una falta de solidez en la dominación, provocada por la crisis política y la crisis del Estado.

Volvamos ahora entonces a la realidad de América Latina en la tercera década del siglo XXI. La posición que sostenemos aquí, ya hecho el rodeo por los dos conceptos de Poulantzas, es que el solapamiento y desencuentro de temporalidades entre los procesos globales, regionales y nacionales, o bien, la convivencia de diversas capas temporales en la coyuntura latinoamericana actual, provoca la conformación de regímenes políticos *híbridos* frente a la indefinición en la constitución de una nueva forma de Estado. Sucede que hoy en la región conviven de forma incierta los elementos propios de tres temporalidades políticas: 1) una memoria larga de las clases dominantes, que redundante en comportamientos de excepción, ya sea ante la búsqueda de reincidencia de las fuerzas progresistas o frente al estallido de insubordinaciones populares; 2) el ciclo democrático-liberal iniciado en los años ochenta del siglo XX; y 3) el germen, todavía indefinido e incierto, de una nueva forma de Estado (propia de los sistemas de gobierno de la austeridad) en un contexto global marcado por transformaciones capitalistas que se encuentran en pleno desarrollo.

Tal convivencia de temporalidades en medio de un clima de incertidumbre explica la emergencia, característica de una época de crisis, de fenómenos morbosos en el terreno político. Pues no debemos olvidar, como insiste Poulantzas (1977), que toda crisis política se articula a una *crisis ideológica*. De allí se explica un aspecto crucial de nuestra coyuntura: la crisis rotunda de las teorías de la transición democrática, que han quedado girando en falso frente al surgimiento y la expansión de fuerzas de extrema derecha. El contrapunto irreducible que establecían dichas teorías entre autoritarismo y democracia se presenta *fuera de quicio* en la vida política latinoamericana, mientras las propias fuerzas progresistas se muestran estupefactas ante lo que ven sus ojos, reclamando nostálgicamente (en algunos casos ante situaciones dramáticas) el cumplimiento efectivo de las viejas garantías prometidas por los procesos de transición.

En cualquier caso, no resulta una casualidad que la crisis de las democracias en América Latina esté marcada por una serie de marchas y contramarchas en el desenvolvimiento de los procesos sociopolíticos. Nos referimos a una secuencia en la cual, año tras año, irrumpen fenómenos divergentes en distintos países, tales como: golpes de Estado por vía legislativa o militar; la alternancia sucesiva de triunfos electorales de fuerzas progresistas, de derecha y de extrema derecha; la proscripción electoral o la conminación al exilio de líderes y lideresas; y, por si esto fuera poco, mientras todo ello sucede, la democracia continúa preservando y ostentando su efecto de verdad social pese a las sobradas muestras de su debilitamiento.

Afirmamos que este modo incoherente y heterogéneo de expresión política de la crisis democrática no solo se explica por el momento de incertidumbre global y regional, sino que también tiene como fundamento el desenvolvimiento dispar de la lucha de clases en los distintos espacios nacionales. A este último aspecto le dedicaremos las palabras finales de este artículo.

A modo de conclusión: la crisis del Estado tiene forma nacional

La imposición de sistemas de gobierno de austeridad con estabilidad demanda como dimensión co-constitutiva una nueva forma de Estado. Esta significaría una transformación en la fisonomía y las funciones, tanto del Estado como de sus aparatos ideológicos. Consideramos que el fundamento de tales transformaciones debería residir en los siguientes aspectos: la pérdida de sustancia de los partidos políticos y las mediaciones sociales populares; el arraigo social del totalitarismo de mercado; y una liberalización aun mayor que la hoy existente de los flujos desterritorializados de capital, de la internacionalización del capital y de los procesos de trabajo. Tal forma de Estado supondría, a su vez, un engrosamiento de su faceta jurídica y represiva, adaptando la primera a los principios ideológicos

del totalitarismo de mercado. Ese horizonte de un nuevo acompañamiento entre democracia y neoliberalismo es impulsado por los sectores dominantes locales como movimiento general en la región, bajo la dirección ideológica del *sistema disciplinario mundial*.²

Sin embargo, como fue señalado más arriba, la constitución de esa nueva forma de Estado no es un proceso que ya esté definido ni acabado, sino que se encuentra en pleno desarrollo, y está sometido al desenvolvimiento de la lucha de clases a escala nacional y regional. En ese sentido, cuando a lo largo de este artículo nos referimos a la crisis democrática, colocamos un énfasis especial sobre las rupturas institucionales de nuevo tipo en el siglo XXI. Precisamente, aquí nos interesa subrayar que la heterogeneidad política con la que se ha manifestado ese proceso a nivel regional se debe a la forma específica en que se despliegan los conflictos en cada espacio nacional y, a la vez, a la fisonomía que asume cada Estado en función de su inserción en el sistema mundial, de su historia y de las características de sus clases sociales y fracciones de clase.

En esa clave, volviendo nuevamente sobre Poulantzas (1977, p. 43), creemos relevante subrayar que una crisis política se expresa en el interior del Estado de manera siempre específica y a través de una serie de mediaciones. A su vez, resulta esencial señalar que a esos efectos de la crisis le preceden las características heredadas del Estado (de corto, mediano y largo plazo), que en tiempos de estabilidad son el producto tanto de las relaciones de clase existentes, como de la constitución del bloque en el poder; es decir, son el resultado de la forma específica en que las distintas fracciones de clase se insertan en determinados sectores o agencias del Estado, penetrándolos como sedes de sus intereses particulares. En sintonía con lo señalado en el

2 Tomamos este término de Christian Laval y Pierre Dardot (2013), quienes lo emplean en su libro conjunto *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, para referirse, entre otras instituciones, a los organismos multilaterales de crédito.

párrafo anterior, en ese aspecto repercute la historia de cada Estado y las particularidades de sus clases y fracciones de clase. Pues no debemos perder de vista que el entramado estatal resulta mucho más caótico y contradictorio de lo que una lectura conspirativa e instrumentalista podría imaginar. Tal como hemos afirmado al respecto en otro trabajo: “si el Estado actúa como agente de la reproducción del orden, lo hace mucho más como resultado de una compleja red de intereses y letargos que por ser una institución presuntamente ‘inventada’ para eso” (Cortés y Tzeiman, 2017, p. 209). Eso quiere decir que, en sus múltiples dimensiones, el Estado reproduce memorias, identidades e instituciones que logran sedimentarse con el paso del tiempo. Mientras que, por el contrario, la conmoción de algunos de sus nervios es provocada por los procesos de lucha de clases (ya sea entre clases antagónicas o entre fracciones de clase). Ciertamente, existen terminales que resultan mucho más sensibles para el funcionamiento *armónico* del orden social, en la medida en que están estructuralmente involucradas en la faceta reproductiva del Estado. De hecho, como bien lo explica Guillermo O’Donnell (1984) en sus *Apuntes para una teoría del Estado*, el derecho involucra sin dudas una sensibilidad extrema, ya que resulta una “codificación formalizada de la dominación”, en tanto opera como un tejido organizador de la sociedad, volviendo previsibles las acciones cotidianas de los sujetos. Esa es la razón por la cual la manipulación de las leyes operada durante los últimos años en varios países de la región para desbaratar gobiernos, causando serios trastornos en ciertas áreas del derecho, ha sido un signo importante de la crisis del Estado. Mientras que no ha ocurrido lo mismo con otras instancias estatales, las cuales se mostraron mucho más flexibles frente al despliegue de la lucha de clases, oscilando en su nivel de influencia sobre la toma de decisiones.

El punto al que quisiéramos llegar como una de las conclusiones principales de este trabajo es que las rupturas institucionales de la última década y media en la región, pese a que en cada caso nacional

se han presentado de forma diferenciada en cuanto a sus manifestaciones políticas e institucionales, deben ser leídas como parte de un movimiento común. Pues tanto el condicionamiento, la desestabilización o la expulsión de gobiernos democráticos, como la desactivación violenta de las insubordinaciones populares, han encontrado como vía de implementación la permeabilidad, en coyunturas específicas, de distintos aparatos de Estado. Concretamente, el objetivo de los sectores dominantes ha sido producir una readequación de las políticas y los entramados estatales, cuya ejecución en el desarrollo efectivo de la lucha de clases no ha sido obstaculizada por dogmatismos tácticos. Así, en cada caso específico, resulta vital comprender que las distintas terminales del Estado han asumido una porosidad diferencial; y que, al mismo tiempo, la apelación a las fuerzas represivas como *límite último* ha puesto de manifiesto tanto la tirantez del conflicto sociopolítico como la debilidad de las clases privilegiadas en el ejercicio de la dominación. En cualquier caso, debemos retener que las instituciones estatales, en contextos de crisis política, pueden variar su condición de centros de poder real y poder formal. Por eso, en determinadas coyunturas, las clases y fracciones de clase operan sobre diversas áreas del Estado con el propósito de hacer valer sus intereses (aun cuando ese accionar, deliberado o no, si es ejecutado estrictamente en función de su eficacia inmediata, puede tener serios efectos sobre la armonía o la desorganización con que se reproduzca el orden social en el futuro). Por lo tanto, una lectura de los procesos ceñida al estudio de los aspectos institucionales corre el serio riesgo de incurrir en un análisis con sesgos formalistas, que acabe por ocluir las fuerzas realmente operantes en el conflicto sociopolítico y sobre las instituciones estatales.

Ahora sí, para cerrar este trabajo, debemos señalar que hoy América Latina se enfrenta a una encrucijada. Nos referimos a la contradicción cifrada entre un capitalismo que, por un lado, presiona de manera creciente por una pérdida de soberanía de los Estados nacionales ante

el capital local y transnacional; y que, por el otro lado, promueve formas de organización del trabajo y modalidades de acumulación en el propio espacio nacional que se vuelven muy difíciles de procesar ante el retroceso de la soberanía estatal. A su vez, en la medida en que la internacionalización del capital y de los procesos de trabajo continúa demandando una esfera estatal como dimensión organizadora de la sociedad, la contradicción indicada no tiende a retroceder. Por el contrario, como venimos señalando, dicho proceso exige la emergencia y consolidación de una nueva forma de Estado.

Frente a ello, el dilema contemporáneo reside en que la incertidumbre global no brinda garantías ni certezas sobre los modos de catalizar aquella contradicción: ello, en efecto, potencia la crisis de la democracia en América Latina. Mientras tanto, su irresolución sostenida en el tiempo nos obliga a encender las luces de alarma, a punto tal que la advertencia de Poulantzas vuelve a adquirir una notable actualidad: “No olvidemos que el animal herido es el más peligroso”. No se trata de un asunto banal, ya que la disconformidad social ante la persistencia de la crisis es capaz de desatar fenómenos tenebrosos. En cualquier caso, las mismas señales de alerta también son válidas para su reverso: la osadía política para construir una salida progresiva a la crisis se ha convertido en una cuestión perentoria.

BIBLIOGRAFÍA

Boito Jr., Armando (2021). O caminho brasileiro para o fascismo. *Caderno CRH*, 34, 1-23.

Brown, Wendy (2018). Neoliberalism’s Frankenstein: Authoritarian Freedom in Twenty-First Century “Democracies”. *Critical Times*, 1, 60-79.

Cavalcante, Sávio (2020). Classe média e ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro. *Crítica marxista*, 50, 121-130.

- Cortés, Martín y Tzeiman, Andrés (2017). Discutir el Estado. Dilemas estratégicos a la luz de los procesos políticos latinoamericanos. *Theorai*, 35, 202-218.
- Davies, William (2016). El nuevo neoliberalismo. *New left review*, 101, 129-143.
- Fernandes, Florestan (1978). *La revolución burguesa en Brasil*. México DF: Siglo XXI.
- Fernández, Víctor (2016). Desde el laboratorio neo-desarrollista a la resurgencia neoliberal. Una revisión crítica del “doble movimiento” polanyiano en América Latina. *Estado y políticas públicas*, 7, 21-47.
- García Linera, Álvaro (2010). La construcción del Estado. En Álvaro García Linera, Guillermo O´Donnell y Ernesto Laclau, *Tres pensamientos políticos* (pp. 11-39). Buenos Aires: Publicaciones Sociales UBA.
- García Linera, Álvaro (2022). La situación de las democracias en América Latina y el Caribe. En Ramiro Parodi y Andrés Tzeiman (comps.), *Álvaro García Linera. Para lxs que vendrán: crítica y revolución en el siglo XXI. Selección de conferencias, artículos y entrevistas (2010-2021)* (pp. 541-553). Buenos Aires: Ediciones CCC/Ediciones UNGS.
- Jessop, Bob (2019). *El Estado: pasado, presente, futuro*. Buenos Aires: Prometeo.
- Laval, Christian y Dardot, Pierre (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.
- Lechner, Norbert (2012). A la búsqueda de un concepto teóricamente perdido: la crisis. En *Obras I: Estado y derecho* (pp. 327-350). México DF: FCE-FLACSO.
- Lesgart, Cecilia (2019). Golpes de Estado y golpes constitucionales. Usos e innovación de un concepto político fundamental. *PolHis*, 12(23), 163-194.
- O´Donnell, Guillermo (1984). Apuntes para una teoría del Estado. En Oscar Oszlak (comp.), *Teoría de la burocracia estatal* (pp. 199-250). Buenos Aires: Paidós.
- O´Donnell, Guillermo (2009). *El Estado burocrático-autoritario 1966-1973. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Prometeo.
- Poulantzas, Nicos (1974). *Fascismo y dictadura*. México DF: Siglo XXI.
- Poulantzas, Nicos (1977). Las transformaciones actuales del Estado. La crisis política y la crisis del Estado. En *La crisis del Estado* (pp. 33-76). Barcelona: Fontanella.
- Poulantzas, Nicos (2005). *Estado, poder y socialismo*. México DF: Siglo XXI.

- Thwaites Rey, Mabel (2010). Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado en América Latina? *OSAL*, XI(27), 19-43.
- Traverso, Enzo (2021). *Las nuevas caras de la derecha. ¿Por qué funcionan las propuestas vacías y el discurso enfurecido de los anti-sistema y cuál es su potencial político real?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Vilas, Carlos (1994). Reestructuración capitalista, reforma del Estado y clase obrera en América Latina. *Cuadernos del Sur*, 10(18), 13-39.

Reflexões críticas sobre o debate em torno do neogolpismo na América Latina

DANILO ENRICO MARTUSCELLI

Introdução

Nas duas primeiras décadas do século 21, a América Latina presenciou sucessivos processos de instabilidade e crise política, que resultaram em alguns casos em: a) golpes de Estado bem-sucedidos que lograram destituir o mandatário que exercia o cargo de presidente da República, tais como os golpes contra os governos de: Jean-Bertrand Aristide no Haiti (2004), Manuel Zelaya em Honduras (2009), Fernando Lugo no Paraguai (2012), Dilma Rousseff no Brasil (2016), Evo Morales na Bolívia (2019), Martín Vizcarra (2020) e Pedro Castillo (2022) no Peru; e b) golpes de Estado fracassados, que se constituíram em tentativas malsucedidas de remover o chefe de Estado do cargo, a saber: Hugo Chávez (2002) e Nicolás Maduro na Venezuela (2019), Evo Morales na Bolívia (2008), Rafael Correa no Equador (2010) e Lula da Silva (2023).¹

1 Neste trabalho, levaremos apenas em consideração os casos dos golpes de Estado que implicaram em processos de destituição presidencial bem ou malsucedidos, pois

Alguns analistas da política latino-americana têm observado que os debates sobre o tema dos golpes de Estado, ocorridos na região no período pós-ditaduras, têm sido invisibilizados pela mídia burguesa e por pesquisadores alinhados ao *mainstream* da Ciência Política (Borón, 2010) e/ou têm sido marcados por reduzida “capacidade de análise e potencial de crítica” (Vitulo e Silva, 2020, p. 28). A própria caracterização desses acontecimentos políticos como golpes de Estado está longe de ser consensual nos meios acadêmicos e políticos. Para cada um dos casos supracitados, é possível encontrar análises que refutam a caracterização deles como golpe de Estado, seja por considerarem essa expressão carregada de denunciamento e precária em termos analíticos para tratar desses casos, seja por adotarem um conceito de golpe de Estado restrito à ação protagonista dos militares e à mudança de regime político, seja ainda por se apegarem demasiadamente à dimensão jurídico-formal dos processos destituíntes, fixando-se assim no exame do cumprimento ou não das regras formais proclamadas pelo Estado e oficialmente implementadas na organização de suas atividades internas.

Em termos gerais, os estudos mais vinculados à problemática teórica neoinstitucionalista têm dado preferência ao uso de definições supostamente mais neutras e analíticas como “*impeachment*”, “*juicio político*”, “deposição”, “renúncia”, “afastamento” e “interrupção presidencial” para se referir a esses processos políticos. Com isso,

o debate acadêmico girou mais em torno desses casos. No entanto, reconhecemos que há todo um campo de reflexão acerca do fenômeno dos autogolpes que envolveram o reforço do poder decisório do presidente da República e a anulação ou redução da capacidade decisória de outros órgãos de representação política e/ou burocrática. Operamos com a hipótese de que os processos a seguir podem ser caracterizados como autogolpes, pois visavam anular as funções decisórias do Legislativo desfavoráveis ao mandatário: Nicolás Maduro (2014) e Pedro Castillo (2022); criar manobras jurídicas para garantir a possibilidade de mais uma reeleição após tal proposta ter sido recusada por referendo popular: Evo Morales (2017); ou manter o mandato indefinidamente: Juvenal Moïse, no Haiti (2021).

esses estudos têm adotado um procedimento teórico-metodológico formalista que subestima as possibilidades de manipulação ou burla política das regras jurídicas, por estabelecer 1) uma “distinção orgânica” entre política e economia e/ou 2) por conceber o funcionamento das instituições estatais como sendo apartado dos conflitos de classe presentes na sociedade e das ideologias de classe dos próprios agentes estatais (autonomeados ou eleitos) incumbidos de tomar decisões de grande impacto como aquelas atinentes à destituição de chefes de Estado eleitos pelo voto popular ou favoráveis à execução de autogolpes.²

Neste capítulo, não conseguiremos dar conta de todas as polêmicas que cercam a análise desses processos políticos que envolveram a tentativa bem ou malsucedida de depor mandatários ou de executar autogolpes em vários países da América Latina na conjuntura mais recente. Nosso objetivo é mais modesto: propomo-nos fazer um recorte analítico e considerar como central na observação as pesquisas que operam com a noção de neogolpismo ou com termos correlatos que demarcam o caráter novo desses processos – em comparação aos golpes perpetrados nas décadas de 1960 e 1970 – tais como: golpes “suaves”, “brandos”, “constitucionais”, “institucionais”, “golpes do século 21”, entre outros. Mais especificamente, pretendemos analisar o estatuto teórico do conceito de golpe de Estado empregado por essas análises, a fim de observar seus alcances e lacunas. Além disso, propomo-nos dar ao termo neogolpismo um novo conteúdo conceitual fundado na teoria política marxista.

- 2 Vitullo e Silva (2020) fizeram um amplo mapeamento da bibliografia sobre os processos de golpes de Estado ocorridos em Honduras, Paraguai e Brasil e empreenderam uma crítica ao formalismo presente nas análises neoinstitucionalistas. Em artigo publicado sobre as polêmicas acerca da caracterização do impeachment de Dilma Rousseff, procuramos dedicar toda uma seção para expor os limites da problemática neoinstitucionalista (Martuscelli, 2020).

Dividiremos a nossa exposição em três momentos principais: a) no primeiro, iremos contextualizar historicamente o debate sobre o neogolpismo; b) no segundo, abordaremos quais são as teses e conceitos que têm orientado parte considerável dessas análises, bem como suas lacunas teóricas no que se refere às apropriações que elas têm feito do conceito de golpe de Estado no exame do fenômeno do neogolpismo; c) por fim – e com o objetivo de dar sequência a outros trabalhos que já desenvolvemos sobre o tema (Martuscelli, 2020, 2022) –, procuraremos apresentar uma alternativa analítica que integre o estudo dos recentes golpes de Estado na América Latina à teoria política marxista. Esta seção abrigará as conclusões do presente trabalho.

Contextualizando historicamente o debate sobre o neogolpismo

O desgaste econômico do modelo capitalista neoliberal no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 abriu espaço para uma série de lutas e confrontações sociais na América Latina. Estas acabaram dando origem à chamada onda de governos progressistas, que foi marcada tanto por resistências abertamente antineoliberais oriundas de massivas lutas populares (como foram os casos emblemáticos das amplas mobilizações populares que estiveram na base da formação dos governos de Chávez na Venezuela, de Morales na Bolívia e de Correa no Equador), quanto de resistências mais pontuais e seletivas ao neoliberalismo (características das experiências dos governos de Lula e Dilma no Brasil e de Néstor e Cristina Kirchner na Argentina).³

3 Tratamos com mais detalhes desses processos políticos em dois artigos: Martuscelli (2018, 2023). Cabe esclarecer que, durante a onda progressista do início do século 21, países como Colômbia, México e Peru foram marcados por sucessivos governos de orientação neoliberal ortodoxa.

As respostas dadas contra o progressismo por parte de forças mais alinhadas aos interesses do capital financeiro internacional e à defesa de um programa neoliberal ortodoxo foram variadas. No entanto, em muitas situações, acabaram resultando em tentativas bem ou malsucedidas de golpes de Estado. Tendencialmente, nos anos subsequentes à eclosão da crise econômica mundial de 2008, assistimos a uma nova ofensiva neoliberal. Esta ofensiva se combinou justamente com uma sucessão de golpes de Estado dirigidos por forças políticas interessadas em impor limites tanto à soberania nacional dos países da região quanto às políticas sociais de governo e de Estado voltadas aos interesses das classes trabalhadoras latino-americanas. Portanto, na América Latina, constituíram-se forças políticas de natureza antinacional e antipopular com capacidade de inviabilizar eleitoralmente candidaturas progressistas e promover a destituição de presidentes da República que dificultavam a implementação de versões extremadas de políticas e contrarreformas constitucionais neoliberais.

Em algumas situações, tais forças lograram atingir esse objetivo obtendo respaldo do voto popular, tais como foram os casos da vitória eleitoral de candidatos neoliberais em países que foram antecedidos por governos progressistas: Maurício Macri, na Argentina (2015), Pedro Pablo Kuczynski, no Peru (2016), Sebastián Piñera, no Chile (2018), Luis Lacalle Pou, no Uruguai (2019) – e, também, Lenin Moreno, no Equador (2017), que rompeu com o correísmo e deu um giro à direita logo após assumir a presidência. Em outras situações, as forças conservadoras apelaram ao expediente do golpe de Estado sem que isso resultasse no estabelecimento de novos regimes ditatoriais, tal como havia se sucedido nas décadas de 1960 e 1970 na região.

Os golpes de Estado perpetrados contra os governos de Zelaya, em Honduras (2009), e Lugo, no Paraguai (2012), representaram um ponto de inflexão política na América Latina, na medida em que

se constituíram como os primeiros casos de governos progressistas eleitos na região que foram derrubados logo após a emergência da crise econômica mundial em 2008. Neste mesmo período, as forças conservadoras venezuelanas contando com o apoio do governo dos EUA deram início a uma série de investidas econômicas e políticas contra o governo Maduro (Serafino e Viema, 2018), processo que culminou na autoproclamação como presidente interino da Venezuela de um deputado da oposição chamado Juan Guaidó.⁴ Antes deles, a região havia presenciado apenas um caso de golpe de Estado bem-sucedido contra o governo Aristide, no Haiti (2004), mas que, cronologicamente, não foi acompanhado de uma sucessão de golpes de Estado e de derrotas políticas dos governos progressistas, tendência que viria a se concretizar efetivamente apenas na década de 2010.

A partir, especialmente, desses dois casos emblemáticos (hondurenho e paraguaio), um conjunto de debates abriu-se nos meios políticos e acadêmicos sobre a natureza desses processos de instabilidade ou crise política e de destituição de presidentes da República às margens das regras do jogo eleitoral. Tais debates se reforçaram após a destituição de Dilma Rousseff, no Brasil (2016). A polêmica foi marcada pela divisão entre análises neoinstitucionalistas, que tenderam a não caracterizar esses processos como tentativas de golpes ou golpes bem-sucedidos, preferindo falar em *impeachment* ou interrupção do mandato presidencial sem violação constitucional, e análises do campo crítico, que procuraram sustentar a tese segundo a qual os agentes e os meios empregados pelos novos golpes de Estado seriam distintos dos golpes clássicos: em vez de tanques, armas e protagonismo dos militares e instituição de ditaduras militares, estaríamos agora diante do fenômeno dos *golpes brandos* que se valeriam do uso casuístico ou arbitrário das regras jurídicas para remover presidentes,

4 Em dezembro de 2022, por ampla maioria, o Congresso venezuelano aprovou o afastamento de Juan Guaidó do cargo de presidente interino.

contariam com o papel predominantemente ativo do Parlamento e/ou Judiciário como forças perpetradoras dos novos golpes e não promoveriam uma mudança qualitativa do regime político.⁵

Em linhas gerais, o que se convencionou chamar de neogolpismo na América Latina recebeu o prefixo *neo* por se referir a uma nova modalidade de golpe de Estado. Esta nova modalidade passou a não contar mais com o protagonismo das Forças Armadas, como em décadas anteriores, e tendeu a ser marcada pela presença de outras forças institucionais internas ao Estado, como o Parlamento e o Judiciário, assim como a envolver a participação ativa do aparato midiático para legitimar ideologicamente as ações das forças golpistas em conjuntura marcada historicamente pela ampliação do acesso aos canais de rádio e televisão, aos jornais impressos e às redes sociais, ainda que todo esse aparato continue sendo controlado por um restrito grupo de capitalistas nacionais e estrangeiros.

Ademais, cabe salientar que o chamado neogolpismo se situa em um processo amplo de agudização das contradições e conflitos de classe na região, mas sem que essas contradições cheguem a se configurar como contradições típicas de uma crise revolucionária, conjuntura na qual a transformação global do poder político é colocada na ordem do dia. Ou seja, não se trata de situações de duplo poder. Na verdade, são crises agudas que marcaram o processo de instabilidade dos governos progressistas, que procuraram reformar pontual ou amplamente o neoliberalismo, e que atingiram um novo patamar especialmente a partir da crise econômica de 2008, produzindo realinhamentos de classe e reorientações significativas no conteúdo da política de Estado na região.

5 Ver, por exemplo, os artigos de Pérez-Liñan (2018) e Marsteintredet e Malamud (2019) que refutam a caracterização da maioria desses processos como golpes de Estado. Marsteintredet e Malamud (2019, p. 3) chegam a fazer a seguinte afirmação: “Na América Latina, com algumas exceções tais como em Honduras em 2009, os golpes quase deixaram de ocorrer”.

Alcances e lacunas das análises do neogolpismo na América Latina

Os debates sobre o neogolpismo vieram à tona acompanhados dos seguintes questionamentos: estaríamos diante de um novo padrão de instabilidade política distinto tanto do ciclo de golpes de Estado clássicos nos anos 1960 e 1970 quanto dos processos de interrupção de mandatos presidenciais na América Latina, analisados por Perez-Liñan (2009) nos anos 1990 e início dos anos 2000? É possível tratar todas essas tentativas bem ou malsucedidas de destituição presidencial por vias arbitrárias ou casuísticas ou dos autogolpes como golpes de Estado? Ou seriam processos destituíntes que deveriam ser caracterizados parcial ou totalmente como legais e legítimos? Caso parte (de) ou todos esses casos possam ser tratados como golpes de Estado, é adequado caracterizá-los como uma nova tendência histórica na região ou são eventos muito heterogêneos que não permitem tal tipo de conclusão?

Esse conjunto de questões está ligado a problemas teóricos que ganharam relevância e merecem ser observados com atenção, pois vinculam-se à própria definição de golpe de Estado e nos remetem a outra série de perguntas, tais como: a) que critérios analíticos devem ser adotados para tratar uma determinada destituição presidencial como golpe de Estado?; b) o que há de novo nos processos recentes que parte da bibliografia tem caracterizado como golpes de Estado?; c) em que sentido tais análises e fenômenos recentes contribuem para uma atualização ou mesmo retificação do conceito de golpe de Estado?; d) qual é o conceito de golpe de Estado que vem sendo aplicado aberta (em estado teórico) ou veladamente (em estado prático) nas análises do neogolpismo?⁶

6 Extraímos a distinção entre conceitos em estado teórico e prático de Althusser (2017 [1967]).

Dois artigos publicados na imprensa pelo cientista político argentino Juan Gabriel Tokatlian (2009, 2012), em virtude dos golpes ocorridos respectivamente em Honduras e no Paraguai, tiveram grande repercussão e, ainda que sintéticos, acabaram fomentando questionamentos que se fizeram presentes em uma série de reflexões subsequentes sobre o fenômeno do neogolpismo. Para o autor, o neogolpismo teria traços distintos dos golpes convencionais típicos dos anos 1960 e 1970. Quais seriam essas diferenças? Os golpes convencionais teriam se concretizado no contexto da Guerra Fria, envolvendo, portanto, as disputas entre EUA e URSS pela hegemonia global; já o neogolpismo emerge nos anos 2000, na conjuntura pós-onda de democratização. Os golpes convencionais foram marcados pelo uso da força perpetrada pelas Forças Armadas, enquanto o neogolpismo seria menos violento e liderado por civis, tendo o Parlamento desempenhado um papel decisivo na maioria dos casos. Os golpes convencionais foram apoiados por setores sociais; já o neogolpismo teria sido apoiado implicitamente ou por cumplicidade pelas Forças Armadas. Nos casos dos golpes dos anos 1960 e 1970, houve mudança de regime; nos mais recentes, as instituições são formalmente mantidas. Nos golpes convencionais, houve participação de forças externas (ex. EUA); nos casos mais recentes, nem sempre houve envolvimento de uma grande potência. O propósito dos golpes convencionais era o de fundar uma nova ordem; o dos atuais seria resolver um impasse social ou uma situação politicamente ruïnosa.

Grosso modo, os estudos sobre o chamado neogolpismo têm dado grande centralidade às forças perpetradoras dos novos golpes de Estado e aos meios empregados por elas. Tais estudos parecem ser influenciados de modo direto ou indireto pelo conceito de golpe de Estado desenvolvido por Edward Luttwak (1969 [1968]), para quem a força que dá o golpe é interna ao próprio Estado e, por decorrência, é possível deduzir que os meios (violentos ou não)

aplicados decorrem das próprias competências dos segmentos ou ramos institucionais implicados no processo. Assim, se os golpes encabeçados pelas Forças Armadas tenderam historicamente a ser marcados pelo emprego de violência e resultaram em rupturas com o regime político existente, o neogolpismo seria caracterizado pela presença do Parlamento e do Judiciário como principais forças perpetradoras do golpe e, conseqüentemente, tenderia a ser marcada pela aplicação de meios não-violentos.

Entre os analistas que procuraram abordar os meios mais comuns empregados pelas forças golpistas, há certa tendência em apontar que houve uma espécie de “sofisticação” (Coelho e Mendes, 2020) ou “evolução” (Lemoine, 2014) das técnicas ou dos procedimentos aplicados para desbancar o titular do cargo de presidente da República.⁷ A própria denominação *golpe institucional* ou *golpe constitucional* tem sido bastante utilizada para colocar em evidência esses meios empregados pelos golpistas para atingir o objetivo de derrubar o mandatário sem romper com o regime político. Tal denominação vem quase sempre acompanhada de uma série de expressões e observações sobre como tem se dado o processo dos golpes que se estabelecem no seio de democracias liberais – e não contra esses regimes políticos. Entre tais expressões e observações destacaríamos as seguintes: “legalidade forçada” (Martínez, 2014), “aparência de legalidade” (Días e Tovar, 2014), “feição de legalidade

7 Não teremos condições de abordar neste artigo o tema e a tese das guerras híbridas que vem sendo amplamente difundidos para entender o processo de derrubada de governos legitimamente eleitos e, que são profundamente relacionados aos debates sobre os neogolpes. Apenas observamos que a problemática que tende a orientar esses estudos é a que dá primazia à técnica do golpe em detrimento dos conflitos de classe. Tudo se passa como se os golpes de Estado ou processos destituíntes não fossem nada além de uma trama conspirativa organizada pelas “elites” que deteriam ampla margem de escolha e capacidade racional de estabelecer o passo-a-passo de todo processo. O conflito político seria resumido aqui às escolhas racionais das “elites” e os conflitos de classe teriam um papel nulo ou marginal nessas explicações.

(...) processamento dentro das instituições” (Araújo e Pereira, 2018), “legitimidade constitucional com manipulação legal” (Lesgart, 2019), “interpretações distorcidas das instituições” via mecanismo de impeachment (Vitullo e Silva, 2020; Silva, 2020), “manipulação da lei e das instituições estabelecidas” (Velador e Castro, 2021), etc.

Há ainda discussões sobre os fatores que condicionaram essa nova forma de golpe como sendo mais sutil e processual. Caggiano (2020) observa que a marca central dos novos golpes tem sido o apelo à própria *ordem normativa*, ou seja, são golpes que ocorrem sem rompimento com a ordem legal e institucional. Para a autora, o que se configurou como *consenso democrático* a partir dos anos 1980 teria impactado as novas formas de golpes do século 21, que seriam marcadas: a) por uma reduzida participação das Forças Armadas, o que não significa ausência dos militares, como ela própria indica e como comprovam os casos haitiano (2004), hondurenho (2009), boliviano (2019) e peruano (2022) ou mesmo das tentativas de golpe fracassadas na Venezuela (2002), no Equador (2010) e no Brasil (2023); e b) por uma multiplicidade de atores e estratégias golpistas. Outros salientam o impacto que o fortalecimento do discurso sobre os direitos humanos passou a ter na região desde os anos 1980, criando dificuldades para iniciativas golpistas e violentas de militares (Días e Tovar, 2014).

As questões pontuadas acima permitem-nos trazer à baila uma série de elementos para discutir o conceito de golpe que informa a noção de neogolpismo e seus termos correlatos. Gostaríamos de arrolar algumas lacunas e limites mais flagrantes dessas análises a fim de apresentar, no tópico seguinte, uma alternativa analítica assentada na teoria política marxista e que dê ao termo neogolpismo outro sentido conceitual.

A principal limitação diz respeito ao fato de a maioria dos estudos sobre o neogolpismo ocultar, secundarizar ou não integrar à análise dos golpes de Estado as disputas pelo controle do conteúdo da

política estatal. Se observarmos o programa de governo almejado ou implementado pela grande maioria das experiências golpistas recentes na América Latina, é possível sustentar a tese de que todas apontavam para a execução de um programa neoliberal ortodoxo, cuja aplicação integral é do interesse do grande capital financeiro internacional e da burguesia a ele associada nas formações sociais dependentes da região. Os chamados “governos interinos”, que ocuparam o lugar dos governos eleitos, foram todos marcados pelo aprofundamento de políticas e contrarreformas neoliberais (Hallward, 2010; Araújo e Pereira, 2018; Soler e Prego, 2019; Martuscelli, 2020; Wolff, 2020; Costa 2022)

A ausência da dimensão dos conflitos de classe é patente nas análises sobre o neogolpismo elaboradas por Tokatlian (2009, 2012), Lemoine (2014), Martínez (2014), Días e Tovar (2014), Souza (2016), Lesgart (2019), Soler e Prego (2019), Velador e Ibarra (2019), Coelho e Mendes (2020), Rangel (2020), Silva (2020), Vitullo e Pereira (2020) e Velador e Castro (2021). Tal ausência indica que o formalismo também pode estar presente nas análises que se situam no campo crítico, mas que acabam assumindo certos pressupostos teóricos gerais do neoinstitucionalismo no exame das instituições e dos conflitos políticos. Não é casual, portanto, que noções como golpe suave, golpe brando, golpe constitucional e golpe institucional sejam superdimensionadas nesses estudos, enquanto os debates sobre as frações de classe que disputam o conteúdo da política de Estado sejam secundarizados ou completamente ignorados. Consideramos ainda que o próprio uso das noções de sofisticação ou aperfeiçoamento das técnicas golpistas têm relação com esse procedimento formalista de fazer análise. Isso induz os estudos que empregam essas noções a conferir muita centralidade aos meios adotados pelo trabalho de conspiração das elites e ao cálculo racional dos agentes que perpetram o golpe, e a descuidar da caracterização da crise política e dos conflitos de classes a ela relacionados, podendo implicar

em ações mais ou menos violentas a depender da natureza desses processos.

Caberia assim fazer alguns questionamentos: O que explica o caráter mais processual ou sutil dos novos golpes de Estado? Se não presenciarmos efetivos processos de “redefinição radical da hegemonia no seio do bloco no poder”, que tem resultado historicamente em rupturas institucionais, não seria mais adequado afirmar que o neogolpismo caracteriza-se pela emergência de processos de reorganização ou basculagem interna de um mesmo condomínio hegemônico, não implicado com isso em mudança do regime político?⁸ Em vez de mudança *do* condomínio hegemônico em seu conjunto, não estaríamos diante de mudanças *no* interior de um mesmo condomínio hegemônico? Será que a ausência do *fantasma* da revolução socialista nos anos mais recentes não explica em grande medida a própria forma como os golpes têm se constituído, ou seja, sem a necessidade de recorrer abusivamente ao uso da violência contra civis, tal como nas ditaduras do passado, e sem apontar para o horizonte da mudança de regime político?⁹ Não teriam sido os governos mais

- 8 A hipótese da hegemonia no bloco no poder ser exercida sob a forma de condomínio foi desenvolvida por Saes (2001, p. 58) para se referir à posição assimétrica que as frações monopolistas - bancária e industrial - passaram a ocupar diante de outras frações do bloco no poder (propriedade fundiária e médio capital industrial) na política brasileira pós-golpe de 1964. Farias (2009, p. 93) aventa a possibilidade de existir um “núcleo hegemônico” ou “anel de frações da classe dominante”. Já Bastos (2023) considera mais procedente operar com a distinção entre “favorecimento conjuntural” para designar o atendimento de reivindicações econômico-corporativas e condomínio hegemônico para se referir a uma hegemonia sendo exercida por mais de uma fração, fenômeno que, segundo o autor, teria maior incidência no bloco no poder das formações dependentes devido à presença do capital estrangeiro em seu interior.
- 9 Com exceção do processo do golpe contra o governo de Dilma Rousseff, todos demais casos de golpes exitosos ocorridos na América Latina no período mais recente envolveram amplas ações violentas do aparato estatal contra civis, resultando em um número considerável de pessoas mortas, feridas e vítimas de tortura, o que fez reascender nesses países toda um conjunto de debates e apuração de casos de violação dos direitos humanos realizados durante o processo de golpe. No exame dessas

abertamente antiliberais e sustentados por uma base social organizada e mobilizada aqueles que teriam sido mais bem-sucedidos no sentido de neutralizar, conter ou reverter no curtíssimo ou curto prazo iniciativas de natureza golpista por parte da oposição de direita? Não teriam sido justamente os casos de contra-ataque aos golpistas os levados a cabo sob a liderança de Chávez em 2002 e de Maduro na Venezuela em 2019, Morales na Bolívia em 2008 e Correa no Equador em 2010, e sob a direção do partido do governo golpeado na Bolívia (o MAS-IPSP) ao longo de 2020?

Uma segunda limitação das análises sobre o neogolpismo diz respeito à relação dos governos golpeados com o imperialismo. Vários estudos têm indicado a tendência histórica de participação dos EUA seja nos golpes clássicos, seja nos golpes mais recentes (Boron, 2013; Rosenmann, 2013; Monteiro, 2018; Sánchez, 2021). No entanto, este parece não ser o entendimento de Tokatlian (2009, 2012), para quem as grandes potências não teriam participado dos novos golpes. Certamente, uma série de investigações precisa ser realizada para aferir a participação efetiva dos EUA nos processos destituíntes recentes. No entanto, o realinhamento dos governos interinos golpistas com os interesses dos EUA e a desconstrução ou esvaziamento político gradual de instituições de acordos/instituições como o BRICS (conjunto de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o Mercado Comum do Sul (Mercosul), a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) parecem indicar que as consequências dos golpes foram benéficas para os interesses imperiais dos EUA na região.

Essa aproximação dos governos oriundos dos golpes com os EUA é um fenômeno destacado por Monteiro (2018) na análise que faz

ações violentas, não poderíamos deixar de mencionar que, em muitos casos, elas contaram com o apoio e a participação de forças paramilitares e milicianas.

dos processos de deposição presidencial em Honduras, Paraguai e Brasil, nos quais se pode observar, segundo o autor: uma alteração da política externa desses países com clara preferência sendo dada às relações com os EUA em detrimento da China e dos países vizinhos; o reconhecimento institucional por parte do governo dos EUA dos governos interinos desses três países, distanciando tal potência imperialista de qualquer sanção ou crítica aos processos destituintes; e a adoção por parte desses governos interinos de políticas neoliberais mais alinhadas ao que vinha sendo defendido pelos EUA para a região, em contraposição às políticas desenvolvimentistas aplicadas pelos governos golpeados. O papel exercido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em vários desses processos de golpe, visando a dar legitimidade institucional aos golpes de Estado e à posse dos governos interinos, reforça a tese da ampliação da influência da Casa Branca na política regional nessa conjuntura, especialmente se considerarmos que tal organismo *multilateral* se tornou uma espécie de correia de transmissão do imperialismo estadunidense, como ficou bastante evidente na vexatória posição tomada por entidade no violento golpe de Estado ocorrido na Bolívia em 2019.

O terceiro aspecto a ser considerado em nossa análise concerne à ideia de que há uma tendência de os novos golpes se apresentarem como menos violentos quando comparados aos golpes clássicos que contavam com forte protagonismo das Forças Armadas, que agora oferecem um apoio mais tácito ou implícito. Aqui, é possível fazer duas problematizações: uma refere-se à participação ativa de militares ou forças de segurança/policiais em alguns casos: Venezuela (2002), Haiti (2004), Honduras (2009), Equador (2010), Bolívia (2019), Peru (2022) e Brasil (2023).¹⁰ Ou seja, seria difícil admitir a ausência dos militares como algo diferencial dos novos golpes. Talvez

10 Borón (2013) sustenta o argumento de que no golpismo contemporâneo as polícias passariam a cumprir o papel que as Forças Armadas exerceram nos golpes militares do passado.

faça mais sentido argumentar que foram golpes de Estado que não resultaram em mudança de regime político e que não implicaram, por conseguinte, a assunção dos militares às cúpulas do processo de execução da política governamental, situação que também poderia ser relativizada, tendo em vista o que se viu em alguns países no período posterior ao golpe: em Honduras, vários militares foram designados para dirigir importantes órgãos ou empresas estatais que eram comandados por civis (Castro Suárez, 2011); no Brasil, o golpe abriu espaço para a constituição de uma força social neofascista que tinha como principal liderança o então deputado federal Jair Bolsonaro, que se elegeu presidente em 2018 e destinou em seu governo mais de seis mil cargos do Estado aos militares.

Outra problematização a ser feita tem relação com a participação de setores internos ao Estado nos golpes mais recentes. Ainda que os novos golpes tenham sido marcados em muitos casos pela participação do Parlamento e/ou do Judiciário como forças perpetradoras, em nenhum dos casos a representação burocrática civil ou militar foi colocada em questão, tendo assim atuando mais como força endossante, em especial os militares que não figuraram na maioria dos casos como força perpetradora dos golpes, tal como se sucedeu nos anos 1960 e 1970. No período mais atual, as Forças Armadas atuaram mais como cúmplices e endossaram os golpes, ainda que seja preciso observar que a *tentação militar* esteve sempre pairando no ar na América Latina, sendo acionada nos países em que a agudização dos conflitos foi maior, tais como foram os exemplos hondurenho de 2009 e boliviano de 2019, como observam Levitsky e Murillo (2020), e, acrescentaríamos, o haitiano de 2004 e o peruano de 2022.

As contribuições da teoria política marxista para o estudo do neogolpismo

Em duas publicações anteriores, seja a que analisa o conceito de golpe de Estado (Martuscelli, 2022), seja aquela que se reporta às polêmicas do impeachment de Dilma Rousseff como sendo ou não um golpe de Estado (2020), procuramos apontar três dimensões indissociáveis do conceito de golpe de Estado que ora retomamos por considerá-las importantes para tratar do fenômeno do neogolpismo: a) a dimensão da direção política do golpe que está relacionada às disputas entre as frações da classe dominante pelo controle da política estatal (força dirigente do golpe); b) a dimensão das mudanças institucionais concernente ao modo como se relacionam e se hierarquizam os ramos do Estado em decorrência dos efeitos produzidos pelo conflito distributivo de classe sobre as instituições e das iniciativas dos agentes burocráticos ou de representação política diante do processo de golpe (força perpetradora do golpe); e c) a dimensão dos meios empregados pelas forças golpistas para atingir o objetivo de destituir o atual mandatário (uso da violência/uso casuístico das leis, etc).

Nesses trabalhos, procuramos introduzir o conceito de bloco no poder formulado pelo cientista político Nicos Poulantzas (1968) para pensar uma das dimensões mais importantes do fenômeno dos golpes de Estado, que é a da relação entre conteúdo da política estatal, conflito distributivo e funcionamento das instituições estatais. O espírito geral desses textos era o de oferecer uma alternativa analítica às contribuições da corrente neoinstitucionalista, que tende a não levar em consideração o conteúdo da política estatal, nem a relação entre instituições e classes sociais, nem ainda o papel do imperialismo nesses processos (sobretudo se tratando de formações periféricas-dependentes), e acaba situando os conflitos que resultam em golpes ou simples processos *impeachment* apenas em sua dimensão institucional.

As leituras sobre o chamado neogolpismo nos chamaram a atenção para outros detalhes e aspectos teóricos deste fenômeno, entre os quais destacaríamos: a) a distinção entre a força dirigente e a força motriz do golpe de Estado, o que nos remete, respectivamente, à força que estabelece os objetivos da luta e visa ter seus interesses priorizados pela política estatal, e a força que confere base social e apoio a essa força dirigente (classe apoio); b) a distinção entre a força perpetradora e a força endossante do golpe, o que compreende, respectivamente, a força institucional que toma a iniciativa de dar um golpe e detém atribuições formais que lhe permitem destituir um presidente e a força institucional que detém a capacidade de vetar ou dar aval a tais iniciativas golpistas, sem que precise se pronunciar abertamente na cena política por justamente possuir um peso político muito importante diante da política de ordem do Estado (caso especial das burocracias militar e judiciária); e c) a distinção entre os meios empregados e a força legitimadora do golpe, ou seja, entre os recursos institucionais mobilizados ou eliminados para consolidar o golpe e as bases ideológicas necessárias para convencer a população sobre a legitimidade deste processo.

Tratemos de explicitar cada uma das dimensões acima e apresentar alguns aprofundamentos teóricos que o debate sobre o neogolpismo nos propiciou.

A primeira dimensão diz respeito aos conflitos de classe e às disputas pelo controle da política de Estado. Um golpe de Estado não se confunde com uma revolução por não implicar a transformação do Estado em seu conjunto (ou do tipo de Estado), nem uma mudança da classe que detém o poder político. Um golpe de Estado se relaciona ao fenômeno das crises políticas nos limites da reprodução do modo de produção. Nesse sentido, está vinculado às disputas entre as frações dominantes pela direção política e o controle da política de Estado, ou seja, está ligado às disputas por hegemonia em sentido estrito entre as frações dominantes, podendo assumir um caráter

tanto regressivo quanto progressista para os interesses das classes populares e a soberania nacional dos países envolvidos, se levarmos em conta o conteúdo da política econômica, social e externa resultante deste processo. Ou seja, um golpe de Estado tem relação com as disputas pela hegemonia em sentido estrito no seio do bloco no poder, mas também envolve a redefinição da hegemonia em sentido amplo das classes dominantes em relação às classes dominadas, podendo assumir um caráter mais instável mediante a aplicação de políticas neoliberais de caráter mais extremado (contracionista) ou mais estável quando estiver vinculado à implementação de uma política de matiz desenvolvimentista (expansionista).

É importante observar que a hegemonia no seio do bloco no poder pode ser reforçada ou alterada por meio de um golpe de Estado. Os conflitos de classe nos golpes de Estado mais acirrados foram justamente aqueles ligados à mudança radical da hegemonia ou do condomínio hegemônico do bloco no poder. Não por acaso, resultaram em mudança de regime político, fenômeno que tende a não se configurar em processos marcados pela basculagem interna no seio de um mesmo condomínio hegemônico.

Como observamos acima, no estudo dos conflitos de classe é importante distinguir a classe ou fração de classe que confere a direção política e estabelece os objetivos da luta da classe ou fração que constitui a base social (força motriz) da força dirigente, ou seja, que se constitui como classe apoio. Essa primeira dimensão do conceito de golpe de Estado nem sempre tem sido considerada e isso tem resultado na defesa acrítica da definição proposta por Edward Luttwak (1969, p. 12), para quem o golpe se define como uma “infiltração de um pequeno, mas crítico, segmento do aparelho estatal, que é usado para deslocar o governo do controle do restante desse aparelho”. Aqui nos deparamos com uma explicação formalista que, ao ignorar ou subestimar os conflitos de classe na caracterização dos golpes de

Estado, acaba não levando em conta o aspecto principal que condiciona as demais dimensões que examinaremos mais adiante.

Já fomos questionados sobre a inclusão desta variável *conflito de classe* na definição de golpe de Estado. Narciso (2022) sustenta que toda análise marxista implica a observância do conflito de classe e que isso não caracterizaria a particularidade de um golpe de Estado. Respondendo a essa crítica, observamos que desconhecemos casos de golpes de Estado que não tenham envolvido uma mudança no conteúdo da política de Estado. Ignorar tal dimensão é reduzir a explicação a um conflito simples entre segmentos ou ramos do Estado, como se as iniciativas dos agentes golpistas (autonomeados ou políticos) fossem isoladas dos conflitos de classe ou como se um golpe significasse apenas uma mudança do pessoal responsável pela execução da política de Estado. É justamente a natureza do conflito de classe que orienta e condiciona as outras dimensões do fenômeno, não podendo ser o golpe concebido apenas como uma mudança dos agentes encarregados de executar a política de estatal, ou melhor, o golpe de Estado é entendido aqui como expressão do referido conflito e da reconfiguração do bloco no poder.

No caso concreto latino-americano mais recente, que compreende tanto as experiências de golpes bem-sucedidos como as tentativas de golpe fracassadas, é possível observar que as forças golpistas que dirigiram politicamente essas iniciativas destituíntes estavam orientadas pela defesa um programa neoliberal ortodoxo que visava inclusive alinhar os Estados dependentes da região aos interesses da principal potência imperialista do continente: os Estados Unidos. Do ponto de vista político, portanto, uma das características centrais do neogolpismo foi a de reforçar o capitalismo neoliberal, o que implica neutralizar e desbaratar as forças que vinham promovendo políticas governamentais voltadas a reformar pontual ou amplamente esse modelo econômico. Isso fica evidente quando observamos que todos os presidentes golpeados representavam classes e frações de

classe que resistiram de maneira mais frontal ou seletiva à política neoliberal e, uma vez removidos do Executivo, isso abriu caminho para as forças golpistas implementarem uma versão mais ortodoxa de política neoliberal nos novos governos interinos, o que lhes permitiu atender mais diretamente os interesses do capital financeiro internacional e das burguesias locais a ele associadas.

A segunda dimensão do golpe de Estado diz respeito às mudanças institucionais decorrentes da disputa hegemônica no bloco no poder. Todo golpe de Estado implica a participação ativa de um ramo ou segmento das instituições que compõem o Estado. Daqui se pode inferir que, a depender da conjuntura, a força perpetradora do golpe de Estado pode ser um setor da burocracia de Estado (burocracia civil e/ou militar) e/ou um órgão de representação política (Executivo eleito ou Parlamento). A força perpetradora do golpe é aquela que, do ponto de vista institucional, toma a iniciativa e detém a capacidade de remover ou destituir o chefe de Estado ou mesmo de contribuir para o reforço de seu poder nos casos de autogolpe.

Cabe observar que a representação burocrática se faz presente tanto nas formas democráticas quanto ditatoriais de um Estado de classe (Saes, 1987). Assim sendo, o que muda de uma forma de Estado para outra é a existência (forma democrática) ou não (forma ditatorial) de um órgão responsável pela representação política. Um golpe de Estado pode resultar na mudança do regime político, o que pode abranger vários cenários: a extinção da representação política ou anulação da capacidade governativa do Parlamento (transição de uma democracia para uma ditadura); a criação das condições para a reorganização de uma representação política (transição de uma ditadura para uma democracia) ou pode ainda significar uma mudança na hierarquia existente entre os ramos do Estado, de modo que a força dirigente do golpe passe a exercer o controle sobre o ramo principal.

Logo, não se trata de considerar a relação entre golpe de Estado e manutenção do regime político como algo vinculado à sofisticação

ou aperfeiçoamento das técnicas de golpes. A técnica do golpe de Estado é decorrente da especificidade do conflito de classe e da capacidade do governo eleito de formar coalizão de apoio institucional e social. O reduzido apoio de um governante no Parlamento coloca-o em situação de vulnerabilidade ou sob pressão permanente diante das forças de oposição. A existência de uma ampla base social mobilizada, a forte inserção do partido do governo e de sua base partidária no Parlamento, assim como o controle político do governo sobre segmentos importantes da burocracia civil e militar são elementos decisivos para garantir a manutenção de um mandato e resistir às mais diferenciadas tentativas de golpe.

Outro aspecto importante desta dimensão institucional do golpe de Estado – e que não demos a devida atenção em nossos trabalhos anteriores – é o que chamamos de força endossante. Como já mencionamos, seja nos regimes democráticos, seja nos regimes ditatoriais de um determinado Estado burguês, o aspecto invariável deste tipo de Estado é a representação burocrática (SAES, 1998). Logo, por mais que setores da burocracia civil ou militar não ganhem visibilidade na cena política e não atuem como forças perpetradoras do golpe, dada a alta capacidade governativa que essas burocracias possuem e o seu papel privilegiado para a manutenção do próprio Estado, elas irão se constituir de algum modo como força endossante do golpe. Dito de outro modo, um golpe de Estado que é perpetrado pelo Parlamento e/ou pelo Judiciário, como tem indicado certa tendência do neogolpismo latino-americano, sempre terá que contar com o aval, a conivência ou a cumplicidade da burocracia militar, ainda mais nos casos dos Estados dependentes da região que foram fortemente militarizados no período das ditaduras e que passaram por *transições transadas* para a democracia, situações nas quais os militares continuaram tendo um papel importante sobre o processo decisório, exercendo forte tutela sobre as frágeis democracias.

Tomando como referência os casos recentes, é possível concordar com boa parte da bibliografia citada neste trabalho e sustentar que, do ponto de vista institucional, o neogolpismo não implicou uma mudança de regime político, como se sucedeu nos anos 1960 e 1970, quando as Forças Armadas atuaram como força perpetradora dos golpes de Estado e passaram a assumir inclusive o comando da política governamental depois de derrubar os presidentes eleitos. No entanto, consideramos importante salientar que, ao longo do século 21, as Forças Armadas não exerceram um papel meramente passivo ou secundário nas destituições presidenciais golpistas.

Em 2002, na Venezuela, foram justamente os militares insubordinados que sequestraram Chávez por um período de 48 horas e anunciaram a renúncia do presidente, permitindo que o novo presidente golpista Pedro Carmona tomasse posse e decretasse a dissolução da Assembleia Nacional. No entanto, a reação popular e o apoio de amplos setores militares garantiram o retorno de Chávez ao governo. Em 2004, no Haiti, Aristide foi deportado de pijamas do país em um avião das Forças Armadas dos EUA, sob falsa alegação de que teria assinado uma carta de renúncia. Em 2009, em Honduras, Zelaya foi preso pela polícia a mando de decisão da Suprema Corte e deportado ilegalmente pelo exército hondurenho para Costa Rica, sob a alegação de que teria cometido vários crimes contra a Constituição. Neste caso também a oposição fabricou uma carta renúncia de Zelaya para garantir a posse de um governo interino não amparado pela legitimidade do voto popular. Em 2010, no Equador, Correa foi alvo de um motim de policiais, mas que não foi bem-sucedido no intento de golpe, apesar de deixar mortos e feridos no episódio conhecido como 30-S (em referência à data 30 de setembro). Em 2019, na Bolívia, o motim policial exerceu um importante papel para desgastar e isolar o governo Morales, e o alto comando dos militares veio a público *sugerir* a sua renúncia, o que acabou ocorrendo poucas horas depois de um golpe marcado por uma forte violência

das forças de oposição contra os membros do governo Morales e do seu partido, o Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), e contra as populações indígenas e setores populares que integravam a sua base social. No fim de 2022 e início de 2023, os militares foram mobilizados pelo governo golpista de Dina Boluarte no Peru para neutralizar e massacrar a reação popular contrária à destituição do presidente eleito Pedro Castillo e favorável à convocação de novas eleições, à dissolução da atual composição do Congresso peruano e ao estabelecimento de uma nova Constituição. Dezenas de manifestantes foram mortos e milhares feridos pelo aparato repressivo do Estado peruano. Neste país, as mobilizações de massa ganharam novo ímpeto nos meses seguintes, mantendo as pautas acima mencionadas e exigindo a saída de Dina Boluarte do governo. No início de 2023, poucos dias depois de Lula iniciar seu terceiro mandato, a Praça dos Três Poderes em Brasília foi invadida e vandalizada por apoiadores e seguidores de Jair Bolsonaro e, como indicam as investigações em curso, tal episódio contou com a participação ativa, a conivência e a omissão de setores militares e policiais.

A terceira dimensão refere-se aos meios empregados pelo trabalho de conspiração e de usurpação do poder. Isso abrange tanto a violação aberta da Constituição quanto o uso arbitrário ou casuístico das regras constitucionais para lograr remover o presidente. Os casos de violação aberta da Constituição são aqueles que envolvem uma mudança de regime político. Já os casos de uso casuístico das regras existentes tendem a produzir mudanças sobre um mesmo regime. Aqui, entra toda uma discussão não só da efetivação e das especificidades das leis que dizem respeito aos processos de destituição dos presidentes das Repúblicas, mas também de suas lacunas. O caráter vago da lei pode ser preenchido pela correlação de forças e foi justamente isso que abriu precedentes para que a interpretação da legislação sobre o impeachment fosse distorcida, tornando esse expediente político uma espécie de espada de Dâmocles sobre qualquer

presidente que acaba perdendo ou não possuindo base parlamentar ao longo do mandato, como foram os casos de Zelaya em Honduras, Lugo no Paraguai, Rousseff no Brasil e Castillo no Peru.

Ainda sobre essa terceira dimensão do conceito de golpe, é oportuno observar que os usos casuísticos ou arbitrários da legislação por parte de membros do Parlamento e do Judiciário só conseguiram ganhar legitimidade perante a opinião pública, graças ao papel militante, persistente e massivo exercido pelos grandes meios de comunicação corporativos, que cumpriram função primordial para desconstruir a imagem dos governantes de plantão, vinculá-los à figura de políticos corruptos e/ou autoritários e promover um verdadeiro linchamento de suas reputações públicas. Ou seja, nos “novos golpes”, os meios de comunicação ocuparam uma posição central de força legitimadora dos processos destituíntes, detendo uma capacidade de formação e manipulação da opinião pública muito mais ampla em termos de contingentes populacionais atingidos e de ferramentas comunicacionais (TV, rádio, jornal impresso, redes sociais), quando comparado ao alcance que conseguiam obter nos golpes do passado.

Diante do que foi exposto acima, caberia indagar: seria possível elaborar uma definição sintética de golpe de Estado que permitisse dar conta dos aspectos em comum e das diferenças existentes entre os golpes clássicos dos anos 1960 e 1970 e o chamado neogolpismo? Para responder esta questão, devemos evitar três erros teóricos presentes em muitas análises: a) o erro de ignorar o conflito de classes na própria definição de golpe de Estado; b) o erro de restringir o uso do conceito de golpe de Estado aos processos destituíntes que envolvam apenas a ação aberta de militares na cena política e a mudança de regime político; e c) o erro de tratar alguns dos traços característicos do neogolpismo (ativismo golpista do Judiciário e/ou do Parlamento sem mudança de regime político) como tendências históricas que retirariam de cena qualquer possibilidade de os militares

atuarem como força perpetradora principal em futuros golpes de Estado que poderiam resultar inclusive na emergência de novos regimes ditatoriais. Consideramos inclusive que se novos casos de ruptura de regime viessem a ocorrer, estaríamos diante de um novo ciclo de golpes que seria provavelmente marcado por mudanças do domínio hegemônico e necessitaria ser distinguido analiticamente dos processos que vimos abordando neste texto.

Para evitar esses erros, faz-se necessário inserir o conflito distributivo de classe no centro da análise do fenômeno dos golpes de Estado e apresentar uma definição sintética capaz de abrigar variações conjunturais sem comprometer a própria validade deste conceito. Nesse sentido, podemos definir o golpe de Estado como uma *ação conspirativa dirigida politicamente por frações das classes dominantes (ou por um agente substituto dessas frações), que visa alterar ou reforçar uma dada hegemonia sobre o conteúdo da política de Estado, e que é executada por setores da burocracia estatal e/ou do Parlamento por meio de quebra ou uso casuístico das regras institucionais vigentes sem colocar em xeque o tipo de Estado existente.*¹¹

Partindo desta definição sintética e geral de golpe de Estado, podemos apresentar os aspectos centrais que caracterizam o neogolpismo na América Latina contemporânea. Nos casos aqui mencionados, os novos golpes de Estado têm sido dirigidos politicamente pelos interesses do capital financeiro internacional e das burguesias locais a ele associadas com vistas a aprofundar a implementação das políticas

11 Extraímos a ideia de *agente substituto* da obra de Saes (1985) para se referir ao papel que as classes intermediárias (classe média e pequena burguesia) podem exercer diante de uma situação em que as classes burguesa e operária se mostrem temporariamente incapazes de defender seus próprios interesses no âmbito político. Ao se posicionarem como “agentes substitutos”, as classes intermediárias não logram obter o controle da política do Estado ou mesmo constituir um governo que atenda prioritariamente seus interesses políticos, vindo a se tornar uma espécie de nova classe dominante, mas apenas cumprem momentaneamente o papel que deveria ser desempenhado por certas frações burguesas.

e contrarreformas neoliberais ortodoxas e dismantelar o que vinha sendo construído pelas experiências progressistas na região, resultando assim em maior alinhamento dos governos oriundos do golpe à política imperialista dos EUA.

Diferentemente dos golpes dos anos 1960 e 1970, no neogolpismo não há ruptura efetiva com os regimes políticos democráticos existentes. Em última análise, o neogolpismo tem se caracterizado mais como um fenômeno que se vincula ao amplo processo global de deterioração das democracias liberais, inaugurado especialmente pela crise econômica mundial de 2008. Ademais, observamos que o tipo de conflitualidade de classe nos casos mais recentes de golpe não tem implicado uma alteração do condomínio hegemônico em seu conjunto, tal qual ocorrida em décadas passadas na região. As mudanças políticas promovidas pelo neogolpismo têm se dado mais propriamente nos limites da própria configuração interna do condomínio hegemônico vigente, ou seja, não tem ocorrido uma redefinição radical da hegemonia no seio do bloco no poder.

Tais mudanças no interior do condomínio hegemônico tendem a estar associadas a observância de certos ritos institucionais, tal como têm feito os membros do Judiciário e/ou do Parlamento a partir do uso casuístico das regras institucionais vigentes para depor presidentes e imprimir a política de golpes do impeachment e/ou de renúncias forçadas na região, o que têm induzido inclusive as forças golpistas a convocar novas eleições presidenciais, mesmo que a contragosto de suas lideranças e sob forte pressão popular em muitos casos.

Por fim, cabe mencionar que o fenômeno do neogolpismo emerge em uma situação em que não presenciamos a eclosão simultânea em várias partes do mundo de processos de revolução proletária e de lutas de libertação nacional e de formação de partidos, movimentos e organizações de massa orientados por um horizonte estratégico socialista, tal como ocorria nas décadas de 1960 e 1970. Ao contrário

disso, observamos um quadro em que os movimentos operários e populares na América Latina e mundo afora têm demonstrado muita dificuldade para construir alternativas políticas ao capitalismo neoliberal, que desde a crise econômica mundial de 2008 vem dobrando suas apostas e abrindo espaço para processos de fascistização em algumas formações sociais. Nos países da região em que a resistência ao neogolpismo tem manifestado mais força, as respostas dadas pelos agentes golpistas têm sido o uso ostensivo do aparato repressivo do Estado contra as manifestações e organizações populares, ainda que isso não tenha resultado até o presente momento em uma ruptura do regime político democrático nos casos aqui analisados.

BIBLIOGRAFIA

- Althusser, Louis (2017 [1967]). Sobre o trabalho teórico: dificuldades e recursos. En Thiago Barison (comp.), *Teoria marxista e análise concreta: textos escolhidos de Louis Althusser e Étienne Balibar* (pp. 83-114). São Paulo: Expressão Popular.
- Araújo, Matheus Alexandre e Pereira, Vanessa dos Santos (janeiro – abril de 2018). Rupturas, neogolpismo e América Latina: uma análise sobre Honduras, Paraguai e Brasil. *Revista Katálysis*, 21(1), 125-136.
- Bastos, Pedro Paulo Zahluth (2023). Hegemonia no bloco no poder e condomínio hegemônico: uma releitura teórica. *Crítica Marxista*, (56), 33-47.
- Boron, Atilio (2010). Invisibilizando golpes de estado: lo que la teoría hegemónica en la ciencia política no quiere ver. *Rebelión*. <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98071>
- Boron, Atilio (2013). Prólogo. En Marcos Roitman Rosenmann, *Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina*. Madrid: Akal.
- Caggiano, Julieta (2020). Golpismos en el siglo XXI en América Latina. Una mirada a través de las reformas normativas tras los intentos de Golpes de Estado en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010). *Revista*

- de la Red Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea, año 7, (13), 1-17.
- Castro Suárez, Roque (2011). El golpe en Honduras. Ofensiva conservadora y resistencia. *Bajo el Volcán*, 11(17), 43-74.
- Coelho, André Luiz e Mendes, Matheus (2020). A sofisticação do neogolpismo: dos protestos de 2013 à destituição de Dilma Rousseff. *Sul Global*, 1(1), 212-232.
- Costa, Luiza Calvette (2022). O golpe (é) de Estado: o caso do golpe de 2019 na Bolívia [dissertação de mestrado em Ciências Sociais]. UnB, Brasília.
- Días, Omar Huertas e Tovar, Victor Manuel Cáceres (julho de 2014). Los golpes de Estado constitucionales en Latinoamérica: una amenaza emergente para el principio democrático. *Justicia Juris*, 10(2), 28-35
- Farias, Francisco Pereira de (2009). Frações burguesas e bloco no poder: uma reflexão a partir do trabalho de Nicos Poulantzas. *Crítica Marxista*, (28), 81-98.
- Hallward, Peter (2010). *Damming the flood Haiti and the politics of containment*. Londres/Nova York: Verso.
- Lemoine, Maurice (agosto de 2014). La era de los golpes de Estado suaves en América Latina. *Le monde diplomatique*. <https://mondiplo.com/la-era-de-los-golpes-de-estado-suaves-en-america>
- Lesgart, Cecilia (janeiro-junho de 2019). Golpes de estado y golpes constitucionales: usos e innovación de un concepto político fundamental. *PolHis*, ano 12, (23), 162-194.
- Levistky, Steven e Murillo, Maria Victoria (2020). La tentación militar en América Latina. *Nueva Sociedad*, (285), 4-11.
- Luttwak, Edward (1969 [1968]). *Coup d'état: a practical handbook*. New York: Alfred A. Knopf.
- Marsteintredet, Leiv e Malamud, Andrés (2019). Coup with adjectives: conceptual stretching or innovation in comparative research? *Political Studies*, 68(4), 1014-1035.
- Martínez, Rafael (2014). Subtipos de golpes de Estado: transformaciones recientes de un concepto del siglo XVII. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (108), dez., 191-212.
- Martuscelli, Danilo Enrico (2018). Burguesia interna e capitalismo dependente: uma reflexão a partir dos casos argentino e brasileiro. *Crítica Marxista*, (47), 55-73.

- Martuscelli, Danilo Enrico (2020). Polêmicas sobre a definição do impeachment de Dilma Rousseff como golpe de Estado. *Revista Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, 14(2), 67-102.
- Martuscelli, Danilo Enrico (2022). A teoria do bloco no poder e a construção do conceito de golpe de Estado. En Tatiana Berringer e Angela Lazagna (comps.), *A atualidade da teoria política de Nicos Poulantzas* (pp. 111-137). Santo André: Ed. UFABC.
- Martuscelli, Danilo Enrico (2023). Hégémonie et divisions de la bourgeoisie dans l'Amérique latine contemporaine (notes de recherche). *La Pensée*, (414) (en prensa).
- Monteiro, Leonardo Valente (2018). Os neogolpes e as interrupções de mandato presidencial na América Latina: os casos de Honduras, Paraguai e Brasil. *Revista de Ciências Sociais*, 49(1), 55-97.
- Narciso, Pedro Felipe (2022). O golpe de Estado, a burocracia e a teoria marxista do Estado. *Revista Princípios*, (163), 294-318.
- Pérez-Liñan, Aníbal (2009). *Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Pérez-Liñan, Aníbal (2018). Impeachment or backsliding? Threats to democracy in the twenty-first century. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 33(98), 1-15.
- Poulantzas, Nicos (1968). *Pouvoir politique et classes sociales de l'état capitaliste*. Paris: François Maspero.
- Rangel, Ramón Alonso Dugarte (julho-dezembro de 2020). Elementos constitutivos del golpe de Estado: una propuesta de su mínimo común denominador. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, (12), 100-110.
- Rosenmann, Marcos Roitman (2013). *Tiempos de oscuridad*. Historia de los golpes de Estado en América Latina. Madrid: Akal.
- Saes, Décio (1985). *Classe média e sistema político no Brasil*. São Paulo: T. A. Queiroz.
- Saes, Décio (1987). *Democracia*. São Paulo: Ática.
- Saes, Décio (1998). O conceito de Estado burguês. En *Estado e democracia: ensaios teóricos*. Campinas: IFCH, Unicamp.
- Saes, Décio (2001). *República do capital: capitalismo e processo político no Brasil*. São Paulo: Boitempo.

- Sánchez, Arantxa Tirado (2021). *Lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley*. Madri: Akal.
- Serafino, William e Vielma, Franco (2018). *Radiografía de un país bajo asedio: la guerra económica contra Venezuela, registro de los años 2014, 2015, 2016 y 2017*. <http://misionverdad.com>
- Silva, Fabrício Pereira da (2020). Por una conceptualización del fenómeno del “neogolpismo”. En Stalin Herrera, Camilo Molina e Víctor Hugo Torres Dávila (comps.), *Ecuador: debates, balances y desafíos post-progresistas* (pp. 393-412). Buenos Aires: Clacso.
- Soler, Lorena e Prego, Florencia (2019). Derechas y neogolpismo en América Latina. Una lectura comparada de Honduras (julho-dezembro de 2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). *Historia y problemas del siglo XX*, ano 10, 11, 33-52.
- Souza, André Luiz Coelho Farias (julho-dezembro de 2016). Um novo modelo de destituição de mandatários ou releitura de velhas práticas? Reflexões sobre a instabilidade presidencial contemporânea na América Latina. *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, (113), 11-50.
- Tokatlian, Juan Gabriel (13 de julio de 2009). Neogolpismo. *Página 12*. <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/128159-41146-2009-07-13.html>
- Tokatlian, Juan Gabriel (24 de junio de 2012). El auge del neogolpismo. *La Nación*. <http://www.lanacion.com.ar/1484794-el-auge-del-neogolpismo>
- Velador, Octavio Humberto Moreno e Castro, Irani Estephany Santamaria (abril de 2021). Un estudio comparado de los golpes institucionales en América Latina: Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). *Argumentos. Revista de Crítica Social*, (23), 60-88.
- Velador, Octavio Humberto Moreno e Ibarra, Carlos Alberto Figueroa (janeiro-abril de 2019). Golpes de Estado y neogolpismo en América Latina. *Revista Debates*, 13(1), 150-172.
- Vitullo, Gabriel Eduardo e Silva, Fabrício Pereira (2020). O que a Ciência Política (não) tem a dizer sobre o fenômeno no neogolpismo latino-americano? *Revista Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, 14(2), 27-66.
- Wolff, Jonas (2020). Las élites económicas en la Bolivia contemporánea. En Jan Souverein, José Luis Exeni Rodríguez (comps.), *Nuevo mapa de actores en Bolivia: crisis polarización e incertidumbre (2019-2020)* (pp. 139-163). La Paz: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bolivia.

Familiarismo y crisis del capital

Algunas notas desde los márgenes

NATALIA ROMÉ

Introducción

Hoy es visible una renovada alianza entre neoliberalismo y conservadurismo, particularmente en discursos reaccionarios contra la llamada *ideología de género*, en la que se conjugan las posiciones ultraliberales autodenominadas *libertarias* y las tradicionales formas discursivas provenientes de la moral conservadora antiliberal.^{1 y 2} De

- 1 La expresión *ideología de género* puede encontrarse en espacios como el *Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre la vida familiar y la cuestión ética* (2003), prologado por el cardenal López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia. En ese volumen, la entrada sobre *género* es escrita por la teóloga Jutta Burggraf quien señala una afinidad “entre la ideología de género y una ‘antropología individualista del neoliberalismo radical’ que remonta desde los aportes de Judith Butler hacia Engels, Simone de Beauvoir y la escuela de Frankfurt para ubicar como blanco de la amenaza ideológica a la naturaleza humana y a la familia como núcleo de la reproducción heteronormada (Gago, 2019, pp. 211-212).
- 2 En este sentido, alcanza con recordar un breve fragmento del discurso antiliberal ofrecido por el líder húngaro Viktor Orbán, el 22 de julio de 2023, en la Universidad de Verano de Bálványos, Transilvania: “Las constituciones liberales no describen un mundo de apego, sino de desapego; no buscan afirmar algo, sino rechazar algo, en nombre de la libertad individual. Nuestra Constitución, sin embargo, afirma que el lugar donde vivirán nuestros hijos es nuestra patria. Afirma nuestras identidades como hombres y mujeres porque eso es lo que llamamos familia. También, afirma nuestras fronteras porque, así, podemos decir con quién queremos vivir. Cuando, en

modo tal que podría decirse que una renovada *moral familiarista* toma la escena de los antagonismos políticos y los discursos públicos y constituye el campo de un encuentro renovado entre las derechas liberales y los discursos moralizantes y ultraconservadores más tradicionales (Collazo y Pulleiro, 2019; Anzorena, 2009; Schuster, 2018; Verbal, 2022). Sin embargo, cabría recordar, como lo ha hecho recientemente David Pavón Cuellar (2018) que, en América Latina, la alianza entre tendencias modernizantes de corte liberal o incluso ultra liberal, especialmente en lo económico, y las posiciones extremadamente conservadoras y antidemocráticas en términos políticos, morales y culturales, tiene más de un siglo.

A modo ilustrativo, podríamos recordar que, en México, desde 1913, la Unión Católica Mexicana contribuyó con cuadros políticos a la causa antirrevolucionaria. En Argentina, en 1919, se crea la Liga Patriótica, una organización paraestatal formada por hijos de sectores acomodados para perseguir inmigrantes sospechados de participación en procesos de organización obrera, especialmente a aquellos de militancia anarquista, provenientes de la convulsionada Italia o deportados tras la experiencia de la Comuna de París. En muchos casos, las posiciones conservadoras de corte segregacionista e incluso xenófobo son adoptadas por los mismos representantes del campo intelectual que una década antes propugnaban por una modernización liberal de las sociedades americanas.³ En los años treinta,

2011, creamos la nueva Constitución –una constitución húngara, nacional, cristiana, diferente de otras constituciones europeas–, no tomamos una mala decisión. De hecho, digamos que no tomamos una mala decisión, sino que tomamos la correcta porque, desde entonces, nos hemos visto acosados por la crisis migratoria, que, claramente, no puede abordarse sobre una base liberal. Y, luego, tenemos una ofensiva LGBTQ+, de género, y resulta que sólo puede repelerse sobre la base de la comunidad y de la protección de la infancia” (Roger-Lacan, 2023).

- 3 David Viñas (2014), por ejemplo, ha analizado detenidamente el giro radical de las posiciones liberales hacia formas nacionalistas ultraconservadoras en referentes del campo intelectual argentino de principios del siglo XX.

agrupaciones conservadoras en diversos países de la región, de corte nacionalista e inspiración hispanista, se alimentaron del ideario del falangismo español, con distintos grados de incidencia en la escena política y cultural. En algunos casos, en ese período se verifican distanciamientos y contradicciones internas en la alianza liberal-conservadora. Pero, poco después y desde la postguerra, sus intervenciones vuelven a confluir, al alinear sus esquemas al ideario anticomunista propio de la Guerra Fría.

En definitiva, podría decirse que este tipo de manifestaciones nunca salieron de escena y que, de hecho, tuvieron fuerte gravitación durante las dictaduras militares que marcaron la región durante la segunda mitad de siglo.⁴ Pueden recordarse en relación con esto las organizaciones contrarrevolucionarias en los diversos países del continente que participaron activamente de acciones desplegadas en el marco del Plan Cóndor y en las diversas formas de terrorismo de Estado, actuando como fuerzas paramilitares, en los servicios de inteligencia o como ideólogos en medios de comunicación, ámbitos educativos, culturales y universidades: Bandeirantes en Brasil, la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), los llamados Caza Tupamaros en Uruguay, la Acción Patriótica en Colombia, Mano Blanca en Guatemala, son algunos de sus exponentes.

El objetivo de este trabajo no se concentra en una historización de esas trayectorias concretas. Una historia de los procesos que confluyen en los diversos momentos del siglo XX en esta articulación, entre fracciones heterogéneas de los sectores dominantes, exige un análisis genealógico que contemple historicidades diversas articuladas de

4 Si bien los procesos autoritarios y represivos de los años setenta tuvieron como motivación y efecto procesos de *modernización* ultraliberal de las sociedades latinoamericanas, por involucrar reestructuraciones profundas de las relaciones económicas que en gran medida se anticiparon a las tendencias globales de neoliberalización del capitalismo, ello no obsta para advertir la gravitación sustantiva de actores ultraconservadores en esos mismos procesos de pretendida modernización.

modo sobredeterminado, a fin de identificar determinaciones específicas propias de cada coyuntura y de cada país. Sin embargo, sí es de interés reconocer en términos un poco más globales u abstractos, una singularidad común que es propia de la periferia capitalista latinoamericana y que recorre las formas específicas de cada coyuntura. Ello obliga a considerar aspectos de orden más estructural para comprender los resortes de la confluencia contradictoria entre fuerzas liberal-modernizadoras y fuerzas ultraconservadoras e incluso antiliberales. La comprensión de esa dimensión estructural de la articulación contradictoria entre tendencias liberalizadoras y tendencias antiliberales resulta clave para dimensionar la actual coyuntura de los embates antifeministas en nuestra región.

Para decirlo brevemente, los procesos de liberalización requeridos e impulsados por la reproducción ampliada del capital, especialmente en sus formas imperialistas, coinciden en dejar expuesta su matriz contradictoria bajo la forma de límites internos a la propia tendencia liberal-modernizadora que, a la vez, requiere y alimenta relaciones sociales racistas y una moral antiliberal de corte conservador-heteropatriarcal.

En un sentido amplio y no economicista, puede vincularse esta encrucijada a aquella ya célebre, planteada por André Gúnder Frank, cuando sostenía que:

[...] la investigación histórica demuestra que el subdesarrollo contemporáneo es, en gran medida un producto histórico de la economía pasada y actual y de otras relaciones entre los satélites subdesarrollados y los actuales países metropolitanos desarrollados. Lo que es más, esas relaciones son parte esencial de la estructura y el desarrollo del sistema capitalista a escala mundial en conjunto (Gúnder Frank, 1967, p. 160).

Esta idea ya clásica en estudios sobre la dependencia y en el campo más amplio del marxismo latinoamericano, puede ser ensayada para explorar el actual recomienzo de la alianza liberal-conservadora en la región, especialmente a propósito del activismo antifeminista, para mostrar en qué medida los impulsos a idearios regresivos y antiliberales confluyen en la estrategia de reproducción del capital en la actualidad.

Esa estrategia es concebida por David Harvey (2007) como un nuevo régimen de reproducción caracterizado por formas de desposesión violenta y por algunas teóricas feministas como un rebrote de los procesos neocoloniales de acumulación originaria (Federici, 2010).

En este marco, poner el foco de la pregunta por la coincidencia paradójica de tendencias liberalizadoras y ultraconservadoras en la historia de América Latina permite comprender la actualidad del llamado “giro conservador”, “punitivo” (Davies, 2016) o “neocolonial” (Federici, 2010) del capitalismo neoliberal global y situar en él el recomienzo –bajo la forma de un furioso activismo antifeminista– de una alianza que se encuentra clavada en sus estructurales dinámicas expansivas de reproducción, como lo señaló tempranamente Rosa Luxemburgo ([1913] 2012).

Ahora bien, esto conlleva algunas consecuencias nada desdeñables. La primera es que lo que diversos teóricos provenientes de países centrales conciben como un rasgo propio de una etapa tardía de la neoliberalización del capitalismo –y me refiero con ello a la emergencia de discursos antidemocráticos y confrontativos con el ideario liberal clásico de los derechos civiles y personales (cf. Brown, 2020)–, tiene en América Latina una historia tan extensa como su nombre mismo. Esto nos obliga a preguntarnos si acaso no será entonces preciso invertir, al menos por una vez, las lógicas epistémicas que tienden a identificar la producción teórica y analítica de los países centrales como producción de una conceptualidad *general* aplicable

a los *casos particulares* que ofrecen las regiones periféricas. Así lo creemos. La cuestión que nos incumbe nos reclama partir de una elaboración teórica que se interroga sobre las formas adquiridas por la reproducción del capital en las zonas *marginales*, para comprender el carácter contradictoriamente antiliberal, antidemocrático, racista y semiesclavista del capitalismo moderno *en general* y del neoliberalismo en particular.

La segunda consecuencia es que, así esquematizada la cuestión, pierde valor epistémico y rigurosidad analítica una pregunta por las tendencias antifeministas de las llamadas nuevas derechas. Porque, en las regiones periféricas, los procesos de tendencial subsunción de las relaciones sociales no capitalistas a la lógica de reproducción del capital han reclamado, desde sus comienzos, formas no capitalistas de represión política, formas no salariales o subsalariales de explotación económica y se han apoyado en idearios racistas, segregacionistas, antiigualitarios y antidemocráticos que lejos están de suscribir la ideología jurídico política de los estados burgueses de los países centrales (Grüner, 2010; Tristán, 2022; Federici, 2010). En estas regiones del capitalismo global, las *nuevas derechas* nunca han sido nuevas.

Esto quiere decir que los fenómenos que hoy vemos nuevamente aparecer bajo la forma de esta alianza entre referentes de las ultraderechas confesionales, espacios políticos conservadores, negacionistas y procesistas con representantes que se presentan como hombres jóvenes, funcionarias de ongs, legisladores, miembros de fundaciones, incluso *influencers* en las redes, debe inscribirse en una larga y compleja genealogía que marca la singular historia de nuestro continente, pero que debe ser tomada en consideración para comprender los procesos globales de reproducción ampliada del capital.⁵

5 Para un acercamiento a las diversas manifestaciones de este escenario pueden revisarse múltiples materiales. A modo de ilustración mencionamos aleatoriamente: para el caso argentino puede revisarse el video de Agustín Laje “15 mentiras sobre el aborto”; en México, puede visitarse la página de organizaciones como el Frente

En esta alianza vemos claramente cómo se anudan tres tendencias:

- 1) Una avanzada del capital por subsumir el trabajo (remunerado y no remunerado) y su lucha de clases contra toda forma de organización obrera y popular;
- 2) Esa avanzada a nivel mundial se monta sobre antiguas trazas coloniales y, por lo tanto, requiere de un refuerzo del racismo y del colonialismo. Pero esto no debe ser pensado en los términos de una reminiscencia de formas de vida premodernas o precapitalistas, sino como el *efecto* necesario de la reproducción capitalista en sus *periferias* renovadamente no capitalistas; y
- 3) Finalmente, esta alianza capitalista-racista tiene un pie fundamental en la *moral familiarista*, en la desigualdad de género y en la producción y reproducción de las relaciones hetero-patriarcales. Las formas de trabajo sub-salarial, esclavista neocolonial y reproductivo no remunerado constituyen el punto de convergencia de los procesos históricos de racialización y generización de sectores poblacionales marginalizados (aunque masivos), al servicio de la reproducción ampliada del capital a escala mundial.

Esta articulación sobredeterminada de las opresiones, desigualdades y jerarquías de género, raza y clase se vuelve especialmente palpable a lo largo de la historia latinoamericana. Y es en relación con ella que podemos comprender el rol estratégico y particularmente sensible que tienen por delante los movimientos feministas de esta región, así como entender también por qué se encuentran en el blanco de ataque de las vanguardias derechistas internacionales; por qué los

Nacionalista Mexicano; en Brasil, el libro del pastor bolsonarista Silas Malafaia, *O Cristão e a sexualidade*; en Chile, Axel Kaiser ha publicado libros como *La tiranía de la igualdad. Por qué el igualitarismo es inmoral y socava el progreso de nuestra sociedad*, entre muchos otros.

referentes de las llamadas nuevas derechas, sean tradicionales sectores confesionales o renovados líderes de opinión, han dedicado y dedican tanto esfuerzo en evitar u obstaculizar la conquista del derecho a la interrupción del embarazo en diversos países o la consolidación de formas educativas atentas a la salud sexual y reproductiva.

Familia y capitalismo

La teoría feminista resulta una pieza clave para comprender que la alianza entre conservadurismo y liberalismo no reviste un carácter de novedad coyuntural. Tal como subraya Melinda Cooper en *Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism* (2017, p. 17) la “cuestión de la familia” ofrece un terreno privilegiado para abordar los procesos de alianza aparentemente paradójica entre fuerzas “liberales” y “conservadoras” desde hace más de un siglo. A este respecto, retoma la idea de Reva Siegel, según la cual la historia jurídica de la familia moderna puede entenderse, antes que como una liberalización *progresiva*, como un proceso de *preservación a través de la transformación*, en el que género y jerarquías generacionales se reestablecen bajo estructuras legales nuevas, quizás más democráticas, aunque no menos implacables.

Ahora bien, tal como hemos sugerido en el apartado anterior, un pensamiento de las transformaciones históricas situado en la periferia capitalista, nos obliga a interrogar críticamente las rémoras de la filosofía eurocéntrica del tiempo que se trafica en la atribución del carácter de *supervivencias* a las relaciones sociales no inmediatamente capitalistas, cuando se piensa la convivencia de tendencias *progresivas* (modernizadoras) con tendencias a la *conservación* de lo antiguo.

Si desde el feminismo latinoamericano recogemos la propuesta de pensar el subdesarrollo como efecto del desarrollo, deberíamos también sospechar de toda primitivización de las relaciones patriarcales

como *supervivencias* de relaciones premodernas, y preguntarnos en cambio por la producción activa de esas relaciones llamadas primitivas en el marco de las transformaciones del capitalismo global. Para decirlo de otro modo, desde América Latina podemos pensar los procesos de primitivización como procesos enmarcados en la reproducción ampliada del capital. Y esto arroja una luz diferente sobre el actual recrudescimiento de la moral familiarista en nuestra región.

Neoliberalismo y crueldad: debates en torno de la reproducción social

Existe actualmente cierto consenso, tanto en el ámbito académico como en el campo más amplio del pensamiento crítico, en identificar una suerte de giro autoritario o *punitivo* en la breve historia del llamado neoliberalismo, a partir de principios del nuevo siglo. El *momento* reaccionario o punitivista de la ideología neoliberal constituiría una *etapa* más bien tardía dentro del neoliberalismo que tendría sus orígenes en el fracaso de la utopía globalista, transformando sus discursos tecnocráticos y multiculturalistas en discursos segregacionistas, autoritarios y neo-moralizantes (Davies, 2016; Brown, 2020).

Si bien puede contribuir en la caracterización de coyunturas específicas, toda periodización supone un violentamiento de la complejidad de los procesos históricos concretos y produce un relativo empobrecimiento de las caracterizaciones, pero particularmente, la idea de un *giro* neoconservador o reaccionario en la historia del neoliberalismo desde 2001 o 2008, resulta especialmente problemática a la hora de pensar la historia latinoamericana reciente en la que el surgimiento del neoliberalismo es inescindible de formas más o menos similares de terrorismo de Estado. De allí que no resulte una curiosidad advertir que el neoliberalismo latinoamericano ha sido *desde sus inicios* un neoliberalismo autoritario, punitivo y antidemocrático, no solo en sus políticas económicas y sus procedimientos

político-institucionales, sino en los términos de una transformación profunda de las disposiciones éticas y la sociabilidad política.

La preocupación actual por la violencia y la crueldad como formas de lazo y subjetivación en el marco del capitalismo contemporáneo se encuentran en el centro de los debates y desarrollos del pensamiento feminista, especialmente de aquellas perspectivas centradas en el problema de la reproducción, desde una tradición anticapitalista, antirracista y anticolonial. Por ejemplo, en *La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo*, Verónica Gago retoma una idea de Silvia Federici (2010) sobre el estado actual del capitalismo entendido como “un estado de guerra permanente contra las mujeres’ donde el denominador común es la devaluación de la vida y del trabajo que la fase de globalización contemporánea impulsa” (Gago, 2019, p. 64).

Los debates feministas, particularmente los desplegados en nuestra región, han permitido así regresar de un modo renovado sobre la trama de crueldad que cimienta el actual régimen de acumulación. A partir de la idea de una “guerra contra las mujeres” y las disidencias (Federici, 2010; Segato, 2014; Rolnik, 2018), se despliegan abordajes complejos que permiten situar en un juego de genealogías desiguales y articuladas los hilos invisibles que vehiculizan las solidaridades clasistas, racistas y heteropatriarcales en el marco de la actual escena neoliberal. Sobre esa base, Gago propone pensar el neoliberalismo desde una perspectiva feminista que permita abordar la crueldad y la violencia de un modo estructural a partir de cuatro escenas:

1. La implosión de la violencia en los hogares como efecto de la crisis de la figura del varón proveedor relacionada a su rol en el mundo laboral.
2. La violencia como principio de autoridad de los barrios populares asociadas a economías ilegales para la supervivencia.

3. La desposesión y saqueo de tierras y recursos comunes por parte de transnacionales sobre la autonomía material a otras economías.
4. La financiarización de la vida social –y el dispositivo de la deuda.

La articulación orgánica de estas escenas permite avanzar en una caracterización del momento neoliberal como un momento de ofensiva del capital, bajo su fracción financiera, que retoma la comprensión de Federici del capitalismo como un proceso cíclico de *acumulación por desposesión*. En este sentido, la identificación entre deuda y crueldad que William Davies (2016) localiza en el momento del llamado *neoliberalismo punitivo* y Fraser (2015) coloca en el centro del régimen de reproducción postfordista, encuentra en los desarrollos del feminismo anticolonial una genealogía más larga que permite remontarse hasta la génesis del capitalismo en el despojo colonial, con la que Marx problematiza la llamada *acumulación originaria*.

Esta perspectiva tiene la virtud de permitirnos reconstruir una serie de hebras que conectan la pregunta por el neoliberalismo con las formas concretas –singularmente violentas– en las que este tiene lugar en la periferia capitalista, y exponer la sobreexplotación de esas periferias como condición estructural de estabilización de la *normalidad* reproductiva de la acumulación del capital en los países centrales. Algo que Rosa Luxemburgo ([1913] 2012) había señalado tempranamente y que María Mies (2019) revisa y complejiza pensando en el nuevo orden mundial que toma forma en los años setenta.

No obstante, la inscripción del capital financiero neoliberal como un fenómeno en el que se expresa una *razón* colonial del capitalismo corre el riesgo de disolver la coyuntura neoliberal de las últimas décadas –e incluso la coyuntura imperialista del último siglo– en una temporalidad tan larga que no nos permita identificar diferencias, por ejemplo, entre formas de estado neoliberal y formas de estado

social o de bienestar; al asociar inmediatamente a la represión como verdad última del capital (bajo la metáfora de la guerra de aniquilamiento). Tampoco nos permite pensar las herencias contradictorias de las luchas tercermundistas, antimperialistas, decoloniales o de *liberación nacional* acontecidas en los albores de la transformación neoliberal y sus posibles vínculos con las formas actuales de resistencia feminista, indianista o popular. En este marco, muchas cuestiones esperan por ser pensadas, tales como la relación entre feminismo y Estado o entre luchas feministas y cuestión nacional. Estos asuntos no son menores si los interrogamos a la luz de procesos políticos recientes, tales como aquellos asociados al desencuentro de algunos feminismos bolivianos con los espacios de resistencia popular al golpe acontecido en 2019 en ese país, o si exploramos las causas del triunfo de la posición de rechazo a la constitución plebiscitada en 2022 en Chile.

Por estos motivos, resulta necesario, a partir de estas grandes coordenadas, avanzar en análisis que nos permitan desembrozar los modos singulares de articulación actual entre violencias y capital, sorteando los riesgos de una identificación abstracta entre poder y explotación que invisibilice la consistencia contradictoria y específicamente política de los procesos históricos de reproducción; la singularidad de las formaciones sociales concretas en las que estos se despliegan y, más precisamente, las resistencias y las luchas que en su tiempo tienen lugar. En este sentido, entendemos que una comprensión de la reproducción social en clave de una subsunción real al capital resulta problemática si no es abordada como un proceso complejo, tendencial e inherentemente contradictorio.

Se trata con ello de evitar dos abstracciones que suelen producirse en los análisis actuales de modo complementario. Ambas tienden a reintroducir un modo de simplificación historicista que, paradójicamente, por la vía de una tesis politicista que coloca a la violencia política (extensiva a la esencia represiva del Estado) como *verdad* última

del capital, –parcialmente heredera del foucaultianismo en algunos casos y del operismo en otros– reintroduce esquemas abstractos, similares a los que en el siglo XX promovían los economicismos ortodoxos y los evolucionismos reformistas enraizados tanto en la II Internacional como en el stalinismo.

En este sentido, las dos abstracciones que movilizan la lectura de la actual coyuntura como una coyuntura de “guerra contra las mujeres”, pueden resumirse en los siguientes riesgos:

- 1) subsumir plenamente la dinámica política en la última *ratio* de la *guerra* (lo que conlleva un tipo de concepción de la política entendida como el enfrentamiento, más o menos simple, entre dos adversarios claramente delimitados y previamente existentes);
- 2) abordar los procesos de reproducción como procesos de subsunción total de la vida social a la valorización del capital y, con ello, concebir al capital neoliberal como una lograda *fábrica de sujetxs* y al ámbito de la reproducción (inscripto en un ensamble de relaciones) como un ámbito cuya complejidad se reduce al principio explicativo último de la ley del valor (Expósito, 2021).

Pensar las formas violentas que adquieren nuestras relaciones sociales, vinculares y subjetivas en la actual coyuntura como manifestaciones epifenoménicas del capitalismo financiero apoyado en un régimen de reproducción por desposesión –que expresaría finalmente su *esencia colonial y patriarcal* – conlleva el riesgo de abstraer las luchas históricas concretas y las estructuras contradictorias sobredeterminadas que nos permiten pensar el rol estratégico que juegan en la actualidad los movimientos feministas latinoamericanos. Ese tipo de abstracción no nos permite interrogar las formas actuales de tramitación de la violencia y el malestar como síntomas

del agotamiento de la lógica ampliada de la reproducción de matriz *imperialista* (antes que colonial) del capitalismo global.

Para sortear ese riesgo es preciso colocarse en lo que, siguiendo una larga tradición teórica –que comprende desde Rosa Luxemburgo hasta Louis Althusser, José Aricó, Vania Bambirra o Titthi Bhattacharya– podríamos llamar el *punto de vista de la reproducción*.⁶ El punto de vista de la reproducción procura leer los modos concretos en los que el principio general de valorización del capital se realiza en formaciones sociales de modo sobredeterminado y, por lo tanto, sometido a una complejidad de contradicciones materialmente atravesadas por la contingencia (Caffentzis, 2020).

Concebida desde el punto de vista de su fragilidad inmanente, la actual *avanzada* del capital no puede sino ser pensada como una respuesta *reactiva* a sus crisis. Esta advertencia nos permite, por ejemplo, leer más sutilmente la categoría de *acumulación por desposesión* elaborada por David Harvey para caracterizar al régimen de acumulación actual. Y encontrar que, lejos de atribuir las nuevas formas recrudescidas de acumulación por desposesión a un retorno sistemático de la llamada acumulación originaria (de rasgos no capitalistas y de lógica política), el autor encuentra que las estrategias del capital *rapaña* se relacionan con el agotamiento de las estrategias de reproducción ampliada desarrolladas desde el siglo XX. Esas estrategias son la expansión mundial (espacialización del capital) y la inversión en infraestructura reproductiva (temporalización del capital). Este nuevo imperialismo caracterizado por expropiación violenta y destructiva es, así, en su mirada, más el síntoma de una crisis sistémica que de una vigorosa avanzada.

6 Estos autorxs coinciden en el punto de vista de la reproducción toda vez que despliegan un tipo de lectura de la escritura marxista, que, haciendo pie en los tomos II y III de *El capital*, tanto como en los textos tardíos de Marx, encuentran una teoría de los desequilibrios del sistema capitalista en lugar de un mecanismo de relojería perfecta orientado por la subsunción total de la vida al capital.

Resulta complejo –y excede los alcances de este texto– caracterizar la complejidad de la crisis que hoy atraviesa al capitalismo neoliberal que, probablemente, deba ser pensada como confluencia de crisis de orden y temporalidad diversos. Pero resulta fundamental a nuestras preocupaciones advertir que más allá de las causas que podamos conjeturar, se trata de una crisis que concierne no casualmente a las dos formas de primitivización y minorización que permitió la reproducción ampliada del capital a escala global (la invención del género y la raza como variables de la división del trabajo en sus múltiples y descentradas dimensiones).

En este marco, la llamada guerra contra las mujeres es más justamente considerada bajo la idea de una crisis multidimensional y multitemporal en la que confluyen con desigual eficacia las respuestas políticas a los procesos de resistencia tercermundista, las alianzas sur–sur y las luchas de liberación nacional acontecidos en la segunda mitad del siglo XX, entre otros procesos en los que podemos identificar respuestas geoeconómicas vinculadas a rearticulaciones en la ecuación técnica y social del trabajo/energía; disputas en torno al control del petróleo y otros recursos; como a las reorganizaciones tácticas del *managment* y el mundo del trabajo postfordista. Y es en relación con esas contradicciones en el seno de la duración agónica del imperialismo que pueden leerse las actuales tendencias antidemocráticas latinoamericanas, uno de cuyos rasgos ineludibles es su condición reactiva y ensañada con los gobiernos democrático–populares latinoamericanos de las primeras décadas del siglo XXI.⁷ Eludir

7 Es algo que, sabemos, no se reduce a la escena política latinoamericana, sino que proyecta sus espectros hacia países centrales que han hecho del “populismo” o de referencias al chavismo o a Venezuela, una marca del antagonismo político. Así, por ejemplo, Santiago Abascal de Vox, plantea en una entrevista otorgada a la publicación *El independiente* que “Enemigos los separatistas y Podemos por su extraordinaria complicidad con el golpe y porque tenemos la convicción de que quiere destruir el sistema democrático. Pablo Iglesias ha dicho claramente que es comunista, sabemos que sus posiciones son las de Venezuela.” (Torres y Piantadosi, 2018).

esa dimensión del análisis escamotea el carácter contratendencial –o suspensivo– de las dinámicas imperialistas de la globalización que estos procesos encarnaron y en cuyo marco, con diversos grados de incidencia y eficacia, se abrió un horizonte de encuentro entre las fuerzas políticas populares y las luchas feministas –entre otros aspectos, revitalizadas gracias a la incorporación de nuevas generaciones alfabetizadas políticamente en procesos de democratización política y social (López, 2019).⁸ La confluencia de las formas globalizadas del vanguardismo de derechas con la satanización de procesos democrático–populares latinoamericanos y el anti–feminismo puede leerse justamente en virtud de lo que el encuentro entre feminismos y latinoamericanos y movimientos soberanistas y democráticos–populares ofrece de *virtual* apertura de las genealogías tercermundistas olvidadas.

El familiarismo neoliberal. Pensado desde sus márgenes

Desde un abordaje descentrado de las relaciones entre clase, raza y género, como el que aquí se propone, puede abordarse de un modo complejizado el movimiento de transformación del capitalismo en sus diversos momentos.

Así podemos revisar el proceso de tránsito de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, acontecido hacia fines del siglo XIX, resultante de la limitación de la jornada laboral y el surgimiento de la noción de productividad. Este proceso, como ha mostrado Silvia Federici, tiene

8 A propósito de esta cuestión, Ricardo Aronskind analiza los motivos del apoyo internacional al gobierno de la Alianza Cambiemos en Argentina (2015-2019): “Fueron estos dos aspectos centrales de las políticas kirchneristas –la apuesta por la integración regional para lograr mayor autonomía internacional y la no admisión del poder de veto de las fracciones dominantes del capital sobre las políticas públicas– las causas políticas fundamentales para el lanzamiento de la campaña sistemática de rechazo y demonización que continúa luego de más de una década” (Aronskind, 2023, p.153).

fuerte impacto en el surgimiento de la figura del ama de casa proletaria y la separación entre trabajo productivo y reproductivo. Pero esto no es todo. En ese mismo momento en que se consolida la relación (invisible) entre trabajo remunerado y no remunerado bajo la forma de la división sexo-genérica del trabajo, también se consolidan nuevos repartos imperialistas del mundo que traen consigo otras formas de trabajo excedente no remunerado subsumido formalmente al capital en el marco de *la división internacional del trabajo*. Formas de trabajo semiesclavo, considerado propio de países considerados *subdesarrollados* cuyas relaciones no capitalistas en coexistencia necesaria con la reproducción ampliada del capital, complejizan la temporalidad del sistema mundo capitalista. Esto nos obliga a considerar la sobredeterminación de la división sexo-genérica del trabajo por la división sexual del trabajo y advertir que, sea lo que sea, el *ama de casa* o la *madre de familia*, no puede pensarse como una figura homogénea entre países centrales y periféricos. Esto es algo que las feministas negras han advertido tempranamente. Pero que incluso encontramos mucho antes en las memorias de Flora Tristán (2022) sobre su visita al Perú decimonónico.

Lo que interesa subrayar aquí es que la *supervivencia* de las relaciones heteropatriarcales conservadoras responde a una temporalidad compleja y descentrada toda vez que se encuentra subordinada a la contradicción temporal del *desarrollo del subdesarrollo*. En este sentido, los vínculos entre capitalismo y patriarcado no son contemporáneos, sino estructuralmente dislocados los vínculos entre capitalismo y racismo. Para decirlo de otro modo, en la periferia capitalista la división sexo-genérica del trabajo se encuentra modulada por la división internacional del trabajo, de modo tal que los procesos de generización y racialización se afectan mutuamente, en sus vínculos con la estrategia de reproducción ampliada del capital sobre zonas de producción y reproducción social no capitalistas, tendencialmente

subordinadas a la dominancia de las relaciones de producción capitalistas.

Finalmente, esta organización del problema nos permite regresar de otro modo sobre las transformaciones en el marco de los procesos de neoliberalización del capitalismo, para interrogar las causas del retorno de la moral familiarista en su coyuntura y el rol estratégico diferencial de estos procesos de derechización en América Latina.

Lo primero que debe considerarse es que la actualización de la *cuestión familiar* se encuentra asociada a la reformulación de la cuestión de la Naturaleza Humana que cada crisis de reproducción del capitalismo ha traído consigo. Testimonio de ello es la atención prestada por Gary Becker, premio Nobel de economía de 1992, célebre teórico neoliberal, autor de *El Capital humano* (1984), a la llamada *economía doméstica* en su *Tratado sobre la familia* (Becker, 1987).

Melinda Cooper (2017) llama la atención sobre los estudios por menorizados de Gary Becker, economista de Chicago, uno de los desarrolladores de la idea del Capital Humano y premio Nobel, sobre la familia. Cooper encuentra en Becker las marcas de la alianza entre neoliberalismo y moral familiarista conservadora que permite pensar la trama constitutiva del bloque histórico neoliberal.

El interés de Becker en la reelaboración de una teoría económica que tome en consideración lo que con Nancy Fraser podríamos caracterizar como el nuevo *régimen de reproducción* con dos salarios (2015), tiene como base la reformulación de las relaciones intrafamiliares para la teoría económica; se trata, como advierte el autor, de la consideración económica de los aspectos colaborativos y conflictivos de los vínculos de pareja y filiación. No podemos dejar de leer en esta preocupación de un economista de la Escuela de Chicago por los divorcios, la planificación de la natalidad, la anticoncepción, etc., los rastros de una estrategia del capital, orientada a comprender y tramitar en sus términos las nuevas formas familiares, herederas de transformaciones significativas en el campo de la sexualidad posterior al

cisma cultural de la década de los sesenta en occidente. Pero hay algo más: una lectura desde una perspectiva situada en nuestros países periféricos, nos exige prestar atención al tratamiento diferencial de la *forma familia* que dicha estrategia supone y se deja leer en algunos pasajes de los estudios de Becker. Para decirlo de otro modo, la moral familiarista reimpulsada por el capital a escala global en el marco de la consolidación de un nuevo régimen de reproducción coincidente con el capitalismo tardío no es uniforme para los países centrales y periféricos.

Al leer el libro de Becker desde una perspectiva periférica, encontramos que sus estudios económicos no solo *economizan* las relaciones familiares descartando la teoría clásica de un único ingreso por hogar, lo que lo lleva a atender las diferencias sexo-genéricas al interior del espacio doméstico. Becker, además, introduce variables como *hijos de calidad* o *hijos en cantidad* para cuantificar las estrategias de planificación familiar *diferencial* entre familias de países ricos y familias de países pobres.

Este abordaje diferencial que se formula conceptualmente en la teoría económica de Becker, es identificado en una serie de procesos históricos concretos en *Patriarcado y acumulación a escala mundial*, por Maria Mies (2019). En este estudio, Mies presta especial atención a las estrategias *diferenciadas* del capital en materia reproductiva y al modo en el que, bajo la misma idea de *modernización* social, hacia inicios de los años setenta se trazan políticas de liberalización de las relaciones reproductivas en países centrales mientras que se refuerzan (o producen) las formas heteropatriarcales *tradicionales* en países periféricos, a fin de garantizar a través de las ideas de *domesticidad* la precarización de las condiciones de contratación.⁹

9 Una compleja cuestión de índole estratégico se abre en torno de las posibilidades y límites de procesos de internacionalismo, cuando se toma en consideración el modo en que, tal como muestra Mies, en estas estrategias resultaron claves las organizaciones del llamado tercer sector provenientes de países centrales, dedicadas a *empoderar*

Ubicar el papel diferencial que adoptan las relaciones de solidaridad entre neoliberalización del capitalismo y restitución del familismo en sus zonas periféricas permite la consideración de las formas de violencia contemporáneas –y especialmente la violencia patriarcal en sus diversas formas– como síntoma de la crisis del reparto imperialista del mundo agonizante pero vigente desde fines del siglo XIX, cuando el pasaje de las formas de plusvalía absoluta hacia formas de plusvalía relativa coincidieron con el establecimiento de divisiones internas en el campo del trabajo productivo y la marginalización y subalternización de zonas importantes de la economía (periférica y doméstica) bajo formas de explotación subsalariales.

Esto nos permite abordar la actualidad en los términos de una crisis en el régimen de reproducción del capital que, con sus matices, garantizó la duración y expansión capitalista a escala mundial. Esa crisis coincide no solamente con una renovada expansión de formas de plusvalía absoluta –algo que contradice las lecturas evolucionistas de la expansión del capital–, sino con la emergencia de nuevas formas de plusvalía que jerarquizan y subordinan unas fracciones del capital a otras y que George Caffentzis ha caracterizado como “plusvalía por transferencia” (2020, pp. 69-70).¹⁰

A partir de este diagnóstico podemos comprender el momento actual como el de una crisis sistémica antes que como el de una guerra total y, con ello, por un lado, evitar encontrar en toda resistencia

a las mujeres africanas, asiáticas o latinoamericanas mediante microcréditos destinados a la manufactura tradicional de corte artesanal o a la producción agrícola. Consideradas tareas realizadas por *madres de familia*, pudieron ser legítimamente precarizadas.

- 10 En el análisis de Caffentzis, esta capacidad de parasitar plusvalía que subalterniza, y en muchas ocasiones pauperiza a fracciones productivas del capital, responde a una necesidad de reproducción del conjunto. El autor la reconoce especialmente en el capital asociado a la extracción y producción de energía, pero sin dudas actúa también en el capital financiero y en el propio de la tecnología comunicacional y digital, que comparten con el primero la misma capacidad de transversalizar los procesos económicos y de valorización del capital, en gran escala.

al feminismo, sea deliberada o no, la expresión de un *enemigo* (único, homogéneo y preexistente a la disputa). Y, en cambio, empezar a pensar que las posiciones en la batalla son efecto de composiciones que se dan en múltiples niveles articulando resortes heterogéneos. Se trata con ello de abandonar la clásica controversia sobre la delimitación del *enemigo principal* para abrazar la idea de la lucha como un proceso sobredeterminado de composición cuya estrategia no puede ser trazada en abstracto o de modo general en los términos de una lógica binaria amigo-enemigo.

En segundo lugar, permite pensar los aspectos estratégicos de la lucha, bajo condiciones de complejidad estructural como las que caracterizan a las formaciones sociales dependientes. En este sentido, la larga tradición de estudios críticos latinoamericanos, africanos y asiáticos pueden abrir una serie de consideraciones que horadan el funcionamiento de esquemas eurocéntricos como modelos puros para el pensamiento teórico y político. Pero, fundamentalmente, permite poner en juego en los análisis y diagnósticos, y no solo como títulos o intenciones, una perspectiva históricamente articulada de las opresiones que ponga en conexión virtuosa la descripción de los efectos y la pregunta por las causas.

Finalmente, la movilización de una perspectiva desde los márgenes con pretensiones de universalidad puede arrojar una nueva luz sobre procesos globales y mostrar que, así como la moral familiarista hace su reingreso en el marco de las políticas culturales de las dictaduras latinoamericanas del sur (Rodríguez, 2009), quebrando tendencias liberalizadoras de las relaciones sexo-genéricas de la década anterior, esa tendencia perdura actualmente como cultura postdictatorial, en la medida en que se inscribe en una relación de solidaridad con la neoliberalización del capitalismo cuya expansión funciona, contra lo que suele pensarse, desde las periferias hacia los países centrales. Esto nos permite comprender el carácter estratégico de las luchas feministas en las periferias capitalistas como una causa

de incumbencia global. Porque la ola antifeminista describe hoy un proceso que sintomatiza acaso una tendencia propia de la crisis del capitalismo neoliberal y que adquiere la forma de una periferización del mundo. Es decir, de expansión de formas de explotación subsalariales, precarización de la subsistencia y desdemocratización a escala planetaria.

BIBLIOGRAFÍA

- Anzorena, Claudia C. (2009). El ¿retorno? del “Tratado sobre la Familia” de Gary Becker: algunas reflexiones en torno a los criterios de eficiencia que legitiman los planes compensatorios de fines de la década de 1990. *Kairos*, 13(24). <http://www.revistakairos.org>
- Aronskind, Ricardo (2023). Macrismo ¿Misión cumplida? En Eduardo Rinesi y Andrés Tzeiman (comps.), *Los lentes de Victor Hugo. Tomo III*. Los Polvorines: UNGS.
- Becker, Gary (1984). *El capital humano*. Madrid: Alianza.
- Becker, Gary (1987). *Tratado sobre la familia*. Madrid: Alianza.
- Brown, Wendy (2020). *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Caffentzis, George (2020). *En letras de sangre y fuego. Trabajo, máquinas y crisis del capitalismo*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Collazo, Carolina y Pulleiro, Adrián (2019). La reacción conservadora en el debate sobre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) Documento de Trabajo Num.1. *Instituto Tricontinental de investigación social*. <https://www.thetricontinental.org/wp-content/uploads/2019/03/Documento-ESI-baja.pdf>
- Cooper, Melinda (2017). *Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism near futures*. New York: Zone Books.
- Davies, William (2016). Neoliberalismo 3.0. *New Left Review*, 101, 129-143.
- Expósito, Julia (2021). *Feminismos revolucionarios*. Buenos Aires: Red Editorial.

- Federici, Silvia (2010). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Federici, Silvia (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Buenos Aires: Tinta Limón y Traficantes de sueños.
- Frank, Gunder (1967). El desasarrollo del subdesarrollo. *Pensamiento Crítico*, 7, 159-172.
- Fraser, Nancy (septiembre-octubre de 2015). Las contradicciones del capital y los cuidados. *New Left Review*, 100, 111-132.
- Frente Nacionalista Mexicano: Principios.
<https://web.archive.org/web/20161012042640/http://frenamex21.net/principios>
- Gago, Verónica (2019). *La potencia feminista*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Gruner, Eduardo (2010). *La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución*. Buenos Aires: Edhasa.
- Harvey, David (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Buenos Aires: Akal.
- Kaiser, Axel (2017). *La tiranía de la igualdad. Por qué el igualitarismo es inmoral y socava el progreso de nuestra sociedad*. Madrid: Universidad de Deusto.
- Laje, Agustín (2018). 15 mentiras sobre el aborto [Video]. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=uHqrfp259hc>
- Lopez, María Pía (2019). *Apuntes para las militancias. Feminismos: promesas y combates*. La Plata: Eme.
- Luxemburgo, Rosa (2012 [1913]). *La acumulación del Capital*. Madrid: Ediciones Internacionales Zedov.
- Malafaia, Silas (2023). *O Cristão e a sexualidade*. Sao Paulo: Gospel.
- Mies, María (2019). *Patriarcado y acumulación a escala mundial*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Pavón Cuellar, David (11 de abril de 2018). La ultraderecha latinoamericana: cien años de lucha por la desigualdad. *La Gaceta*. <https://davidpavoncuellar.wordpress.com/2018/04/15/la-ultraderecha-latinoamericana-cien-anos-de-lucha-por-la-desigualdad/>
- Roger-Lacan, Baptiste (26 de julio de 2023). Posliberalismo. El mundo de Viktor Orban. *El Grand Continent*. <https://legrandcontinent.eu/es/2023/07/26/postliberalismo-el-mundo-de-viktor-orban/>
- Rodríguez, Laura G. (2009). La Historia que debía enseñarse durante la última dictadura militar en Argentina (1976- 1983). <https://hear.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2014/12/>

La-Historia-que-deb%3%ADa-ense%3%B1arse-durante-la-%-
C3%BAltima-dictadura-militar-en-Argentina-1976-1983.pdf

- Rolnik, Suely (2019). *Esferas de la insurrección*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Schuster, Mariano (2018). Las luchas feministas y la reacción conservadora. Entrevista a Erika Guevara Rosas. *Revista Nueva Sociedad*. <https://nuso.org/articulo/las-luchas-feministas-y-la-reaccion-conservadora/>
- Segato, Rita (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Torres, Carmen y Piantadosi, Giulio (12 de octubre de 2018). Santiago Abascal (Vox): “El PP y Cs son cobardes, el Gobierno un traidor y Podemos el enemigo”. *El independiente*. <https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/12/abascal-vox-el-pp-y-cs-son-cobardes-el-gobierno-un-traidor-y-podemos-el-enemigo/>
- Tristán, Flora (2022). *Peregrinaciones de una paria y otros textos recobrados*. Buenos Aires: CLACSO.
- Verbal, V. (2022) La ideología de “la ideología de género”. *Femeris, Revista Multidisciplinar de Estudios de Género*, 7 (1), 56-74 / doi: <https://doi.org/10.20318/femeris.2022.6621> 56
- Viñas, David (2014). *De los montoneros a los anarquistas*. Buenos Aires: Santiago Arcos.

Segunda parte

**Los procesos sociopolíticos
actuales y los límites de la
democracia**

Repensando um velho fenômeno

A tutela militar na política brasileira

ANA PENIDO

Um dos fenômenos mais presentes na história política do Brasil é a tutela militar sobre a política. E, embora haja quem diga o contrário, as forças armadas brasileiras sempre estiveram à direita do espectro político. Iniciou-se com a independência, consolidou-se na Proclamação da República e veio até os dias atuais, com momentos de maior ou menor protagonismo, como na Era Vargas, durante a ditadura militar ou no recém finalizado governo Jair Bolsonaro. Não por acaso, elas também fazem parte da *nova direita* que este livro se propõe a analisar.

Embora este texto tome a militarização no Brasil como objeto, esse é um fenômeno recorrente nos países sul-americanos. A relação entre forças armadas e democracia sempre foi tensa, pois a questão chave “quem controla aqueles que detêm o monopólio da força coercitiva do Estado” se apresenta inclusive para insuspeitas democracias liberais tradicionais. Como subordinar aqueles que detêm armas às decisões políticas tomadas em coletivo por cidadãos desarmados? Por isso, quase todos os estudiosos das áreas de defesa ou segurança se debruçam, em algum momento, sobre o controle civil sobre as forças armadas. Esses estudos reúnem-se em uma ampla área denominada relações civis-militares.

Mesmo antes da constituição do Estado moderno, pensava-se sobre como concentrar a força em um único corpo e, simultaneamente, como controlar este corpo. Porém, dentro do campo específico da ciência política que são as relações civis-militares, pode-se considerar Samuel Huntington como pai fundador, com sua entusiasmada defesa da profissionalização das forças armadas como ferramenta para conquistar o controle civil objetivo. O autor defende que o controle ocorrerá caso um conjunto de procedimentos seja levado a cabo. Inicialmente, caberia às autoridades civis fixar as linhas políticas orientadoras da área de defesa. Posteriormente, a autoridade do Executivo delegaria a um ministro da defesa, possivelmente civil, o controle sobre as forças armadas. Os políticos do Executivo deveriam, num terceiro momento, se acertar com seus pares no Legislativo, de modo a construir uma legislação que estabeleça organismos com responsabilidades legitimadas para a formulação e o monitoramento das políticas de defesa. Por fim, os soldados, “defensores da ordem”, deveriam “permanecer fiéis a si mesmos, servindo em silêncio e com valor no modo militar. Se renegarem o espírito militar, primeiro destruirão a si mesmos e, finalmente, sua nação” (Huntington, [1957] 1996, p. 466).

Desnecessário amplos conhecimentos de história brasileira para constatar a absoluta ficção dessa formulação, seja quanto ao comportamento civil, seja sobre o militar. Coelho ([1976] 2000) aponta o desprezo dos civis pelos temas militares, que sofreriam de orfandade, pois não seriam objeto de interesse dos civis, e tampouco teriam os temas considerados pelos militares como de extrema relevância –notadamente a defesa nacional– incluídos entre as prioridades políticas. Num linguajar mundano, o ex-deputado José Genoíno indica: “temas de defesa não dão voto na democracia e dão cana [prisão] na ditadura”.

Ao contrário de Huntington e seguindo outros estudiosos, como Samuel Finer ([1962] 2002), por exemplo, Coelho aponta que a

profissionalização militar não necessariamente leva ao controle civil sobre as armas e, como no caso do Brasil, pode inclusive alimentar um modo de ver o mundo no qual o militar é melhor preparado para interpretar os interesses nacionais e, ao mesmo tempo, impedido de defender tais interesses, levando, por conseguinte, ao desejo de exercício da tutela sobre a política que, quando a conjuntura o permite, é efetivamente exercido. “O militar pode ser profissional, e essa profissionalização precipitá-lo irremediavelmente na política” (Penido, Costa e Janot, 2021, p. 18). A busca pela profissionalização por parte dos militares brasileiros não se relaciona com o distanciamento da política, mas com a adesão aos critérios de recrutamento e hierarquização de funções típicos das burocracias burguesas após a Guerra do Paraguai (Saes, 1985).

Em outras palavras, o comportamento militar no Brasil funciona notadamente como fonte de instabilidade, em virtude da permanente capacidade de tutela que mantém diante da nação, e não como um poder estabilizador no Brasil, tese defendida por Stepan (1975). É basicamente a mesma lógica de tutela normativa existente na proteção aos direitos humanos da criança e do adolescente, em que um maior de idade (nesse caso, os militares) tem como responsabilidade a tutela de um menor de idade (a sociedade brasileira), entendida como incapaz de definir autonomamente os rumos do país. “A tutela política constitui a forma de controle do poder do Estado pelas forças armadas uma vez extinta a ditadura militar. Substitui o exercício direto do poder político pelo controle indireto daqueles que legalmente o exercem” (Quartim de Moraes, 1987, p. 97).

Embora Quartim de Moraes trate especialmente do período pré constituinte de 1988, Carvalho (2005) analisa o mesmo fenômeno como uma marca de continuidade da história brasileira. Cumpre esclarecer que a autonomia militar é a origem e o alimento da tutela militar no Brasil, tema que será retomado adiante. A tutela, em si

mesma, é a ação política da instituição militar sobre o Estado e a sociedade.

Somamo-nos ao entendimento de Castro (1990) de que o civil só existe sob o olhar do militar, cuja profissão é calcada na diferenciação (muitas vezes de maneira antagonista) do outro. As identidades civis são múltiplas, e estão ligadas aos diversos grupos de socialização primária de que se participa, como mãe, professora, cristã, esposa, filha, etc. Um civil não se identifica com a caracterização de *civil*. Entretanto, embora o civil não exista para si mesmo, ele existe para o militar, que atribui a ele um conjunto de características comuns, em geral consideradas negativas dentro da caserna. Em outras palavras, diferente dos civis, em que a profissão é mais um qualificativo; para os membros da caserna, *militar* é mais que um adjetivo, é quase um substantivo, muitas vezes vindo antes que o próprio nome do sujeito.

À formulação de Castro, acrescentamos que o militar, em sentido estrito, também não existe na mentalidade civil. O militar de que trata Castro é aquele que pertence a uma das três forças armadas singulares: a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Entretanto, em países historicamente militarizados, e cuja transição da ditadura militar restou inacabada, como é o caso do Brasil, o termo militar, aos olhos dos não militares, agrega servidores públicos de diferentes forças de segurança que usam fardas: os militares das forças armadas, policiais militares, bombeiros militares, guardas municipais, polícia federal, etc. Mesmo forças de segurança civis, como é o caso das polícias civis, ou forças de segurança privadas, como é o caso dos funcionários de empresas de vigilância, são por vezes agregados ao guarda-chuva militar nas análises sobre as relações civis-militares.

Tal confusão tem fundamento, especialmente pela proximidade na organização da carreira, disciplinamento e ideologia que forças de segurança como as polícias militares guardam diante das forças armadas, além, no caso brasileiro, da subordinação normativa. Quanto à valorização, os diversos grupos civis estabelecem relações positivas

ou negativas com os diferentes segmentos militares, não havendo uniformidade de percepção. Quanto aos militares das forças armadas agrupados nesse imenso guarda-chuva, consideram depreciativo serem identificados com segmentos hierarquicamente inferiores. Membros das demais forças de segurança, pelo contrário, orgulham-se das semelhanças.

A categoria sociedade civil nasce vinculada ao conceito de Estado. Hobbes defendeu que as instituições políticas eram fruto de um pacto entre indivíduos egoístas que tendiam à violência de todos contra todos e, para evitar a anarquia, criam o Estado a quem delegam o poder soberano e legítimo de usar a violência. A esse argumento, Locke agrega a responsabilidade do Estado na garantia da propriedade privada. Rousseau, por outro lado, apontaria a propriedade como o fundamento da violência. O contrato teria originado duas sociedades separadas: uma política, formada pelas instituições estatais; e uma civil, natural, local da vida privada. Nas formulações liberais, o Estado detém poderes soberanos e paira sobre a sociedade civil, lugar de interesses individuais contraditórios entre os proprietários. Segundo Virgínia Fontes, “por sua distância de cada interesse singular, [o Estado] seria o garantidor do interesse de todos. Pela mesma razão, não deveria imiscuir-se nos interesses privados da sociedade civil [os interesses burgueses] que, ao contrário, deveria assegurar” (Fontes, [2005] 2009, s.p.).

A teoria crítica não concorda com a noção de pacto, e aponta o Estado como uma necessidade de classes sociais dominantes para se imporem por meio da violência e da ideologia. A separação entre a sociedade política e civil é uma aparência, pois “supor um Estado com lógica própria, distinta daquela que permeia a vida social, permite justificar a perpetuação desta mesma forma de organização da vida social” (Fontes, [2005] 2009, s.p.). A autonomização do Estado é funcional à dominação burguesa. Marx e Engels pouco usam o termo sociedade civil. Gramsci o retoma de maneira integrada na

reflexão de Estado ampliado, pois a sociedade civil é indissociável dos aparelhos privados de hegemonia. “A sociedade civil é duplo espaço de luta de classes: expressa contradições e ajustes entre frações da classe dominante e, ao mesmo tempo, nela se organizam também as lutas entre as classes” (Fontes, [2005] 2009, s.p.). O Estado como compreendido por Gramsci significa maior convencimento através dos aparelhos privados de hegemonia que operam por intermédio da sociedade civil, mas não elimina a coerção.

Dessa maneira, falar em sociedade civil, como algo antagônico aos militares, enquanto parte da sociedade política, é um equívoco do ponto de vista teórico e uma irrealidade do ponto de vista prático. Interessa questionar *quais militares e para que militares*. Em Penido (2022), resumimos formulações de diferentes autores sobre porque os militares participam da política no Brasil. Em Penido e Kalil (2021a, 2021b), nos propusemos a explicar o engajamento militar, somando esforços aos segmentos conservadores na política e liberais na economia, ao governo Jair Bolsonaro.

Aqui, partimos do pressuposto de que o incremento da soberania de um país em um sistema internacional hierarquizado passa dialeticamente pelo fortalecimento simultâneo do Estado nacional e do controle popular sobre este Estado. Em outras palavras, a soberania precisa ser necessariamente acompanhada do compromisso com um projeto político popular. Ou seja, um Estado só é forte se forte também é o seu povo. Assim, visando compreender a dialética entre fortalecimento do Estado nacional e controle deste Estado no marco de um projeto popular, organizou-se uma síntese da discussão do controle em torno de cinco proposições, a saber: restringir a autonomia militar; controle institucional-normativo; controle funcional; controle orçamentário; alteração da identidade do soldado. Ver-se-á que a última dimensão é quase consequência das mudanças nas quatro primeiras.

Restringir a autonomia militar

Autonomia Militar é a capacidade da instituição forças armadas autodeterminar-se segundo suas próprias definições do que é *ser militar*. Pode-se graduar a autonomia segundo a abrangência de áreas consideradas de interesse militar, como a gestão do orçamento de defesa, as aquisições de armamentos, a definição da própria organicidade, missões, estrutura. No caso dos países latino-americanos, Kohn (1994) indica que os militares influenciam diretamente as decisões do governo em geral, como a política exterior, econômica e social, e não apenas nas áreas da política militar e da estratégia. No caso brasileiro, elas gozam de alto grau de autonomia, pois além de temas que são por definição de defesa nacional (como delimitação de fronteiras, por exemplo), elas são chamadas a opinar sobre questões tão distintas como desenvolvimento tecnológico e segurança pública.

A permanente tutela militar sobre a política brasileira impõe aos analistas da realidade deste país a identificação de quatro monopólios que as forças armadas detêm ao longo da história e que constituem entraves para a reformulação da política de defesa de maneira específica e para a democracia de maneira geral. São eles: a educação dos militares, o orçamento da área de defesa, a inteligência militar e a justiça militar. Tais áreas são pensadas e funcionam como monopólios das forças armadas.

Os monopólios podem ser compreendidos como áreas de *reserva de domínio*, nos termos de Mares e Martínez (2014), áreas de auto-regulação da corporação ou sobre as quais os militares deteriam autonomia operacional e organizacional, tomadas como centrais para a autopreservação. Restringir a autonomia militar implica em romper os quatro monopólios e subordiná-los ao controle civil.

Controle normativo-institucional

O controle normativo é aquele estabelecido nas Constituições Nacionais. Mathias e Guzzi (2010) defendem em seu trabalho que analisa as regulamentações sobre as forças armadas em todas as Constituições brasileiras da história o elemento da permanência, da continuidade. Mudou o sistema político, mudaram os blocos no poder, a conjuntura internacional e doméstica, mas as regras sobre os militares, permanecem basicamente as mesmas. Ou seja, em países de transição inacabada, as normativas foram auto estabelecidas pelos militares, que permaneceram defendendo que tudo deveria ser como sempre foi.

Cabe esclarecer que as áreas de autonomia mencionadas são referendadas na Constituição, ou, em outras palavras, as normativas nacionais protegem e fortalecem a autonomia do aparato coercitivo do Estado sobre as diversas instituições estatais. Ademais, o Congresso Nacional, enquanto “Casa do Povo”, tem atribuições normativas e institucionais que, ao menos em termos da política de defesa e do controle sobre as forças armadas, raramente são desenvolvidas/exercidas.

O controle institucional é aquele realizado através de instituições do Estado, notadamente dos ministérios da defesa. O ministro da defesa tem como função ser o elo de ligação entre os chefes militares e o Poder Executivo, coordenando todo o setor de defesa. Em tese, o ministro é a voz do presidente junto às forças armadas. Na prática do governo brasileiro, o ministro se tornou o representante sindical dos militares junto ao presidente. Além disso, o ministério, quando composto por altos funcionários civis, teria como atribuição exercer um controle burocrático sobre a política. Na prática, os militares participam ativamente das diversas instâncias do ministério da defesa e para além dele, dominando todas as esferas de decisão política.

Seriam também atribuições do ministério o controle da atividade de inteligência militar, o envolvimento dos militares em questões policiais, a justiça militar, a educação militar, a definição das promoções dos oficiais, o controle do envolvimento militar em empresas de defesa, entre outras questões. Para isso, a pasta requer capacidade real de comando sobre as forças, com capacidades técnicas, mas particularmente com legitimidade política para implantar a política de defesa que os mandatos populares delegados aos representantes no Executivo e no Legislativo definirem. Política de defesa “é mais do que a capacidade operacional militar. Inclui a orientação política dos recursos defensivos de uma nação como um todo, com a perspectiva de assegurar a segurança nacional, protegendo os interesses vitais e promovendo os objetivos internacionais do Estado” (Baylis, 1977, citado em Diamint, 2018, p. 807).

Ao definir os objetivos internacionais do Estado, deve-se entender que são, na realidade, os objetivos do bloco no poder do Estado. Na definição da ONU, a política de defesa serve para prover segurança a uma nação, que é “uma condição pela qual os Estados consideram que não há perigo de um ataque militar, pressão política, ou coerção econômica, de modo a estarem aptos para perseguir livremente seu próprio desenvolvimento e progresso” (Costa, 2009, p. 133). Pela definição da ONU, a política de defesa de uma nação serve para que ele viva em um mundo de fantasia, com Estados de poder simétrico que respeitam mutuamente suas soberanias.

Essa discussão é fundamental pois a política de defesa é basicamente política, e deve responder àquilo que a sociedade valoriza. Mas, que sociedade? Quem a define? É no detalhamento da política de defesa que as possibilidades de emprego das forças armadas são definidas: sua doutrina, sua distribuição no país, a relação dos militares com outras instituições do Estado, o orçamento, equipamento, treinamento, recrutamento, controle, etc.

Nota-se que, na América Latina, são raros os casos em que os ministérios da defesa são ambiente para a formulação das estratégias de defesa nacionais e, conseqüentemente, do emprego militar. Na maioria das vezes, as forças armadas mimetizam o que aprenderam de missões internacionais. Pion-Berlin (2014) ainda exalta a pouca ou nula prestação de contas desses ministérios. Em geral, os legisladores desconhecem o assunto e delegam sua autoridade ao Executivo e, muitas vezes, diretamente aos militares. Nesse caso, mesmo os insuspeitos liberais defensores do Estado mínimo possuem reclamações quanto à efetividade e eficiência no gasto dos recursos nessa área. Entretanto, como avaliar se as forças armadas estão cumprindo de forma satisfatória sua atribuição precípua –a defesa nacional– particularmente em um ambiente sem guerras?

Exige-se do comando militar capacidade para adaptar os recursos disponíveis a metas razoavelmente determinadas, além de propor novas metas e conseguir novos recursos (Janowitz, 1964). Esse militar administrador reflete o aumento das dimensões organizativas e pragmáticas na guerra atual, tendo um contato maior com a sociedade civil, particularmente as suas elites. Também vem da administração formulações sobre a importância da transparência de informações, particularmente no que diz respeito ao orçamento militar, algo que confronta a identidade tradicional do guerreiro, que prima pelo sigilo dos seus planos.

Controle funcional

Diante da menor probabilidade de guerras interestatais e do crescimento de ameaças não tradicionais (como os diferentes tipos de tráfico internacional), ambos os fatores levando à necessidade de maior cooperação militar entre países de uma mesma região, as forças armadas passam a ser empregadas majoritariamente em atividades de segurança ou de natureza não militar. A identificação de quais

ameaças o país sofre e, portanto, como deve empregar suas forças armadas, configura o controle funcional das mesmas. Um exemplo de quando isso ocorre inadequadamente é a classificação das migrações em massa enquanto uma ameaça à segurança do Estado, pois estas gerariam fragmentação das identidades nacionais e aumento da criminalidade.

Um dos efeitos dessa ampliação no escopo de atuação é o reforço da militarização dos temas de segurança através da confusão entre o que é um inimigo e quem é um cidadão em conflito com a lei (Rodrigues, Castro e Mendonça, 2016), e o conseqüente enfraquecimento da autoridade pública sobre as instituições militares. Determinados tipos de atividade –notadamente aquelas que ocorrem no interior das fronteiras nacionais– aumentariam a probabilidade de protagonismo militar na política doméstica (Desch, 1999). Atribuições subsidiárias e assistenciais teriam maior peso político, pois impactam na opinião pública sobre as forças armadas. Inclui-se aqui também a associação existente no imaginário entre o desenvolvimento tecnológico militar e o desenvolvimento econômico geral de um país. Os gastos em defesa não transbordam para as atividades civis, pelo contrário, ampliam a dependência externa (Silva, 2018).

Do mesmo modo, o progresso econômico também não diminui a eventualidade de um conflito armado, pelo contrário, o acirramento da competição intercapitalista ampliou a matança em nível global. Mais recentemente, surgiu a discussão da defesa dos recursos naturais de países de periferia, objeto da *cobiça internacional*. Entretanto, dificilmente o aparato coercitivo do Estado vai se prestar a prejudicar os interesses da burguesia interna associada ao imperialismo internacional, notadamente por meio da venda dessas *commodities*.

No ambiente externo, há quem afirme que missões de assistência humanitária fortaleceriam as relações das forças armadas com organizações dos direitos humanos, fora do país, como nas missões de paz da ONU, ou mesmo em atividades internas, como a atuação

diante de catástrofes (Diamint, 2018). Na opinião de Rut Diamint (2018), as missões de paz aprofundam o controle civil e têm um efeito democratizante, pois os militares adquirem crenças e tolerância sobre outras culturas. Além disso, a decisão sobre a missão é claramente civil e institucional, pois perpassa as instâncias da ONU.

Em síntese, o controle funcional diz respeito à definição clara das ameaças e do desenho de uma política para debelar ou controlar tais ameaças. É a partir de tal definição que se pode determinar a política militar, isto é, contra quais ameaças as forças armadas serão empregadas. E todo esse conjunto deve ser responsabilidade do governo civil eleito, não das próprias forças. A política de defesa é um componente da política exterior. Em uma democracia, mesmo liberal, as missões militares precisam subordinar-se às demais ações do Estado no mundo.

Controle orçamentário

Uma das heranças ditatoriais é o controle de empresas, mormente estatais, por militares, que proporcionou uma aproximação ainda maior entre o aparato repressivo e o Estado, mantendo contatos com setores econômicos poderosos e compartilhando informações econômicas privadas, além das públicas. Diamint (2018) aponta os Institutos de Previdência Social militar como *locus* prioritário para observar essas relações. Criados na década de 1960 como um mecanismo de valorização da carreira, foram beneficiados economicamente pela presença militar no comando do Estado durante as ditaduras, tendo acesso a informações privilegiadas para estabelecer políticas de investimento agressivas. A transição desde regimes ditatoriais encontrou-os bem posicionados para manter funções dessa natureza no ambiente público e privado.

No ambiente público, o orçamento de defesa, embora anualmente siga como um dos maiores do país, é mal discutido no Congresso,

que basicamente aprova as sugestões provenientes do Executivo que, por sua vez, foram formuladas pelas forças armadas autonomamente e compiladas pelo ministério da defesa. No ambiente privado, militares podem gerir recursos substanciais sem sequer se subordinar ao frágil controle do Congresso. Isso ocorre não apenas, mas principalmente, através das empresas de suprimentos militares que são gerenciadas por militares da reserva, em uma área econômica (material bélico) que tem o Estado como principal (às vezes único) comprador. Essa autonomia permite-lhes competir com o Estado, influenciando na tomada das decisões sobre defesa; e competir com segmentos do próprio Estado, pois o emprego da mão de obra militar não precisa se adequar aos padrões salariais da atividade privada ou aos impostos que uma empresa precisa pagar.

Pontua-se que a transparência orçamentária é também relevante para a construção de medidas de confiança mútua entre países amigos.

Alterando a identidade do soldado

Para Huntington ([1957] 1996), no processo de profissionalização, o militar desenvolve um conjunto de características que moldam sua identidade, tais como a vigilância permanente diante de ameaças; a necessidade de estar sempre preparado para qualquer contingência, mesmo sabendo que são inevitáveis; o senso de coletividade e corporativismo, pois o sucesso individual depende do grupo; o conservadorismo na estratégia, mas abertura às novas armas, etc. Para Mathias (2004), os militares são intrinsecamente conservadores na política, pois sua função é a manutenção do *status quo*, caso contrário, viveriam em permanente conflito entre o que acreditam e o que fazem. Nessa mesma direção, Domingos Neto afirma:

Os Exércitos procuram apresentar-se como expressão da vontade coletiva, mas elaboram suas próprias interpretações da sociedade; impulsionam inovações, mas temem mudanças sociais e preservam marcas antigas. [...] O militar moderno revela apego a valores ancestrais, inventa e cultua “tradições”, mas está ciente de que a obsolescência é a sua ruína. A incorporação de novidades combina-se com o conservadorismo político e comportamental (Domingos Neto, 2019, p. 18).

Como defende o autor, trabalhar a partir de uma identidade conservadora aponta que a intervenção militar na política é fruto de um desencontro entre as condições reais de desenvolvimento do país e a autoimagem que o estamento militar tem de si mesmo e da sociedade na qual vive, tomada como indigna deles mesmos.

De maneira antagônica, ao invés da arrogância, Coelho ([1976] 2000) identificará uma baixa estima militar, que o autor chama de *orfandade por reconhecimento civil*, seja do ponto de vista funcional (crença de que a sociedade civil e as elites políticas não se interessam pela defesa nacional), seja do institucional (convicção de que não há quem os ouça, quem se interesse pelos seus pleitos e questões). Diante disso, caberia aos militares “uma conduta protagônica, definindo de forma autônoma seus objetivos e suas estratégias no corpo de uma doutrina de defesa nacional eventualmente imposta à nação” (Coelho, [1976] 2000, p. 20).

Um conjunto de autores entende que a cultura protagônica não é feita pela instituição, mas sim pela sua identificação com as distintas classes sociais. Um primeiro grupo observa o poder militar como uma ferramenta da classe economicamente dominante, e identifica na caserna uma dinâmica de classes próxima à que existe fora dela. Dessa maneira, a cúpula militar é vista como golpista e aliada das elites, e a massa de soldados como legalista e com inclinações populares (Sodré, [1965] 2010). Outro grupo identifica as forças armadas

como o agente político organizado das classes médias, nas quais, em geral, o oficialato é recrutado.¹ Perlmutter (1977) identifica que naqueles países em que a classe média não está consolidada, como é o caso dos países da América Latina, o intervencionismo militar funciona enquanto um instrumento de poder dessas classes médias, incapaz de chegar ao poder pela via eleitoral.

Há quem identifique as forças armadas como uma instituição total (Goffman, [1961] 1999). Segundo este autor, as instituições totais, como as forças armadas, separam seus membros do restante da sociedade para que se constitua um novo indivíduo. Essa ruptura ocorre a partir de três atividades: a. todos os aspectos da vida do militar são realizados em um mesmo local e sob uma única autoridade; b. as atividades diárias são realizadas em conjunto sob um mesmo conjunto de regras de tratamento; c. a ordem dessas atividades e o tempo necessário para realizá-las são rigorosamente pré-determinados por um conjunto de regras e pessoas. Todas essas atividades e membros da instituição militar fazem parte de um plano racional com vistas a cumprir com os objetivos oficiais da instituição (Goffman, [1961] 1999). Ainda segundo o autor, as instituições totais não buscam uma “vitória cultural” sobre os indivíduos, mas sim manter uma “tensão permanente” com o mundo exterior.

Castro (1990, p. 3) pondera que a instituição militar é uma “instituição totalizante”, pois “[...] uma academia militar [porta de entrada para qualquer força armada] busca-se justamente uma ‘vitória cultural’ e não criar uma ‘tensão persistente’”, que é extensiva inclusive à família do militar. Autores como Carvalho (2005) apontarão que as forças armadas se constituem como uma nação dentro da nação brasileira. Ressalta-se que forças armadas com alta coesão interna têm capacidade maior de intervir na política interna (Janowitz,

1 Salienta-se a fragilidade do conceito de classes médias, que abrange padrões de consumo e modos de vida muito diversos, tema bem discutido por Chauí (2013).

1964). E a coesão é tanto maior quanto mais endógeno for o recrutamento (Penido, 2015). As escolas militares são o momento em que a caserna mais se aproxima de uma instituição total, pois a instituição regula o ciclo de vida e o ciclo diário dos seus membros (Janowitz, 1964).

A título de ensaio, propomos aqui uma leitura dialética do problema de como controlar o instrumento armado. As normas de relacionamento interno dos aparelhos militares são fenômenos historicamente determinados, onde está presente o quadro da relação civil-militar. Com as forças armadas unidas ou divididas, é fundamental a noção de interação. Mesmo a convergência de pontos de vista pode se dar a partir de diferentes objetivos e meios de ação. O processo político não conhece dois tempos, um para os militares e outro para os civis (Peixoto, [1980] 1990, p. 30).

As forças armadas podem parecer um monolito, mas não o são. Entretanto, as pressões externas são processadas e filtradas pela hierarquia conforme seus valores corporativos. Por exemplo, fatores exógenos (como mudanças gerais em valores sociais, a exemplo da presença feminina no mercado de trabalho) influenciam as dinâmicas internas ao meio militar, que as processam, por exemplo, permitindo o ingresso de mulheres nas Forças em maior quantidade, mas não em postos chave.

Palavras finais, mas não conclusivas

Pode parecer deslocado um texto sobre tutela militar em um livro sobre novas direitas. Nosso objetivo ao introduzir este tema foi apontar que a autonomia de que gozam as forças armadas brasileiras é fundamental para a constituição da política no Brasil, sendo basilar para o desenvolvimento das forças políticas e de seu comportamento no Estado. A autonomia militar, expressada na permanente tutela militar sobre a política, funciona como correia de transmissão da

nova direita no fazer político brasileiro. Por isso, entendemos que é necessário estabelecer o controle sobre as forças armadas, aqui tratado em cinco dimensões.

Entre todas as questões que dizem respeito ao controle, elencamos aqui três que devem receber maior atenção. A primeira delas é a direção em que mudanças devem ser promovidas, e o controle exercido. Em função de como as instituições militares se organizam, o controle precisa ocorrer de fora para dentro da caserna, ou seja, iniciar-se no Executivo em colaboração com o Legislativo, para depois chegar às forças de coerção; e de cima para baixo, seja dentro de uma própria Força (começando dos generais e chegando aos soldados), seja entre diferentes forças de segurança (começando no Exército, a maior e mais forte entre elas).

A segunda questão é que o controle não funcionará pensado apenas sobre os militares das forças armadas. Devem ser incluídos nessa conta os membros das diversas forças de segurança, civis e militares; membros de empresas de segurança privada, incluindo aqueles que não atuam na rua, mas na vigilância digital; e os diversos instrumentos de vigilância e violência, como armas, munições, equipamentos, etc. As instituições que detêm o monopólio da violência, em seu conjunto, devem estar sob o controle e vigilância permanentes da soberania popular. Podem eventualmente atuar de maneira combinada, mas precisam organizar-se de maneira independente e sem subordinação entre elas.

Por fim, o controle sobre o aparato coercitivo do Estado só é possível através do controle do Estado, e o controle do Estado só é viável através do controle das distintas instituições do Estado. Alterar a correlação de forças na sociedade é a única maneira de alterar a correlação de forças na caserna, de maneira a que os militares não se auto percebam, e tampouco sejam percebidos pela sociedade, como *seres especiais*. E, se estamos certos, por conseguinte, também a nova direita terá outra coloração.

BIBLIOGRAFIA

- Carvalho, José Murilo (2005). *Forças Armadas e política no Brasil*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Castro, Celso (1990). *O espírito militar: um estudo de antropologia social na Academia Militar das Agulhas Negras*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Chaui, Marilena (2013). Uma nova classe trabalhadora. En Emir Sader (coord.), *Lula e Dilma, dez anos de governos pós-neoliberais no Brasil* (pp.123-134). São Paulo: Boitempo Editorial.
- Coelho, Edmundo Campos ([1976] 2000). *Em busca de identidade: o Exército e a política na sociedade brasileira*. Rio de Janeiro: Record.
- Costa, Frederico (2018). Sobre o conceito de “segurança nacional”. *Tensões Mundiais*, 5(9), 123-140. DOI: 10.33956/tensoesmundiais.v5i9 jul/dez.670
- Desh, Michael (1999). *Civilian control of the military*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Diamint, Rut (2018). Verbete “relações civis militares”. En Hector Saint-Pierre y Marina Vitelli (coord.), *Dicionário de segurança e defesa* (pp.799-814). São Paulo: Editora Unesp.
- Domingos, Manuel (2019). Sobre o patriotismo castrense. En *Dossiê os militares e a política*. São Paulo: Revista Perseu.
- Finer, Samuel ([1962] 2002). *The man on the horseback*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Fontes, Virgínia ([2005] 2009). Verbete: sociedade civil. En Isabel Pereira y Julio Lima. *Dicionário da educação profissional em saúde*. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV).
- Goffman, Erving ([1961] 1999). *Manicômios, prisões e conventos*. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva.
- Huntington, Samuel P. (1996). *O soldado e o Estado: teoria política das relações entre civis e militares*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.
- Janowitz, Morris (1964). *The military in the political development of new nations: an essay in comparative analysis*. Chicago: Chicago University Press.
- Kohn, Richard (1994). *Out of control: the crisis in civil-military relations*. Nova Iorque: National Interest.
- Mares, David y Martínez, Rafael (coord.) (2014). *Debating civil-military relations in Latin America*. Chicago: Sussex Academic Press.

- Mathias, Suzeley (2004). *A militarização da burocracia: a participação militar na administração federal das comunicações e da educação, 1963-1990*. São Paulo: Editora Unesp.
- Mathias, Suzeley y Guzzi, André (2010). Autonomia na lei: as Forças Armadas nas constituições nacionais. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 25(73), 41-57.
- Peixoto, Antônio ([1980] 1990). Exército e política no Brasil: uma crítica aos modelos de interpretação. En Alain Rouquié (coord), *Os Partidos Militares no Brasil*. Rio de Janeiro: Record.
- Penido, Ana (2015). Profissionalização e educação militar: um estudo a partir da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal Fluminense.
- Penido, Ana (2022). Hipóteses interpretativas para a presença das forças armadas na política [apresentação]. 46^º Encontro Anual da Anpocs. Campinas.
- Penido, Ana y Mathias, Suzeley (2020). Profissionalização militar: notas sobre o sistema do Exército Brasileiro. *Revista Temáticas*, 28, 38-69.
- Penido, Ana; Costa, Frederico; Janot, Mariana (2021). Forças Armadas no Brasil: profissão e intervenção política. *BIB Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais*, 96, 1-22.
- Penido, Ana y Kalil, Suzeley (2021a). O Partido Militar no Sistema Político brasileiro [apresentação]. *Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político brasileiro & XI Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados*. Brasília.
- Penido, Ana y Kalil, Suzeley (2021b). Ação política do partido militar no Brasil sob Bolsonaro. *Anuario Latinoamericano ciencias políticas y relaciones internacionales*, 11, 63-82.
- Perlmutter, Amos (1977). *The military and politics in modern times*. New Haven and London: Yale University Press.
- Pion-Berlin, David (2014). Latin American civil-military relations: what progress has been made? En David Mares y Rafael Martínez (coord.), *Debating civil-military relations in Latin America*. Chicago: Sussex Academic Press.
- Quartim de Moraes, João (1987). A função das forças armadas em um Brasil democrático. En João Quartim de Moraes; Wilma Costa; Eliezer Oliveira. *A tutela militar*. São Paulo: Vértice.

- Rodrigues, Thiago; Castro, Flávia; Mendonça, Thaianie (2016). A exceção como prática: as políticas de pacificação no Rio de Janeiro (2008-2015). *Revista Brasileira*, 4, 73-111.
- Saes, Decio (1985). *A formação do Estado burguês no Brasil*. São Paulo: editora Paz e Terra.
- Silva, Diego Lopes da. *Armas, capital e dependência: um estudo sobre a militarização na América do Sul*. [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP).
- Sodré, Nelson ([1965] 2010). *História militar do Brasil*. São Paulo: Expressão Popular.
- Stepan, Alfred (1975). *Os militares na política*. Rio de Janeiro: Artenova.

Coaliciones golpistas

Crisis de la democracia en la destitución de Pedro Castillo

ANAHÍ DURAND GUEVARA

El 28 de julio del 2021, fecha del bicentenario de la independencia, Pedro Castillo asumió el cargo de presidente del Perú. Era la primera vez en doscientos años de historia republicana que un maestro rural, dirigente sindical y campesino de Chota, una provincia andina periférica, ocupaba el Palacio de Gobierno. Castillo llegaba al poder levantando una plataforma de cambios profundos que incluían temas cruciales como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que escribiera una nueva constitución poniendo fin a la carta magna neoliberal aprobada en 1992 durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La elección de Pedro Castillo con el voto de peruanos históricamente excluidos como los pueblos originarios, campesinos, trabajadores informales y de la economía popular, concitó los temores más atávicos de la derecha peruana. Apenas Castillo fue proclamado presidente, la candidata perdedora Keiko Fujimori desconoció los resultados electorales alegando un supuesto fraude. No importaban los informes de las misiones internacionales que daban cuenta de la pulcritud del proceso electoral, el fujimorismo y sus aliados de la ultraderecha buscaban sembrar dudas en la elección. Se perfilaba una

derecha dispuesta a desconocer las reglas de juego democrático con tal de no perder el poder.

Ya con Pedro Castillo en el ejecutivo, este grupo articulado en torno a la denuncia del *fraude* amplió su radio de acción y avanzó en coordinar acciones para lograr el objetivo común de destituir al presidente. El Congreso actuaba como eje de la desestabilización política, la Fiscalía como brazo jurídico y los medios como maquinarias de propaganda, todo respaldado por gremios empresariales. Si en el Congreso el fujimorismo y la ultraderecha censuraban a los ministros y colocaban mociones de vacancia presidencial, en la Fiscalía se *reinterpretaba* la Constitución para abrir sendas carpetas fiscales contra Castillo. Los grandes medios de comunicación amplificaban las denuncias y los grupos de choque financiados por empresarios locales salían a las calles a exigir vacancia.

La deteriorada democracia peruana sufría un nuevo y cuasi terminal episodio en su larga crisis. No olvidemos que desde el 2016, Perú vive una grave inestabilidad política expresada en la seguidilla de cinco presidentes en seis años y en la instalación de facto de un régimen parlamentarista que ha alterado el equilibrio de poderes permitiendo el abuso de figuras como la vacancia presidencial por *incapacidad moral*. A ello se suma la judicialización de la política caracterizada por el protagonismo de jueces y fiscales que acusan a políticos de diferentes tendencias e ideologías, aunque con mayor rigurosidad a unos que a otros. La mediocre existencia de los partidos políticos, el desprestigio de los poderes públicos y los constantes casos de corrupción que involucran altas autoridades, abonan a la crisis incrementando la desafección de la ciudadanía.

El 7 de diciembre de 2022, a pocas horas de que los congresistas votaran la tercera moción de vacancia presidencial en su contra, Pedro Castillo leyó un mensaje disolviendo el Congreso y llamando a una Asamblea Constituyente. Era más un gesto político que un acto real, pues no contaba con el respaldo militar ni policial, ni suficiente

sustento jurídico. La coalición golpista aprovechó esta circunstancia para presentar el mensaje de Castillo como un auto golpe y casi de inmediato, el Congreso aprobó una cuestionada vacancia presidencial. En paralelo, Pedro Castillo era retenido por su propia escolta y la Fiscalía ordenaba su prisión preventiva pasando por encima de los fueros establecidos por ley. Cerrando la jornada, la hasta entonces vicepresidente Dina Boluarte juramentó como presidenta celebrando junto a la clase política que recuperaba el ejecutivo. Al día siguiente estallaba la movilización popular más grande de las últimas décadas, los manifestantes coreaban “esta democracia ya no es democracia” y efectivamente, ya no lo era.

El presente artículo analiza la crisis de la democracia en Perú con énfasis en el accionar de la *coalición golpista* que operó activamente para lograr la destitución del presidente constitucional Pedro Castillo. Nos referimos a la articulación de actores políticos, instituciones, grupos de poder económico y medios de comunicación que, más allá de particularidades e intereses propios, actuaron concertadamente en torno al objetivo común de destituir a un presidente democráticamente electo, es decir para capturar el poder sin ganar las elecciones. En primer lugar, abordamos el surgimiento de esta coalición en el marco de una crisis sistémica de la democracia, que se agrava con el triunfo de un candidato popular visto por la derecha como peligroso para sus intereses. En segundo lugar, explicamos el accionar de esta coalición golpista durante los quince meses del gobierno de Castillo con hitos claves como la desestabilización desde el Congreso, la acción de la fiscalía, las campañas mediáticas y el rol del empresariado. Finalmente, analizamos el triunfo de la coalición golpista expresada en la destitución de Pedro Castillo y la imposición de Dina Boluarte, sin la legitimidad necesaria para conducir al país, pero con apoyo de los protagonistas de la coalición y los poderes fácticos.

En momentos en que derechas autoritarias y un nuevo ciclo de gobiernos progresistas conviven en Latinoamérica, es fundamental

analizar los límites y debilidades de la democracia como sistema político y régimen de convivencia. La concertación de acciones para sacar gobiernos legítimamente electos se ha vuelto una práctica que debilita e incluso transgrede la democracia, configurando golpes de estado de nuevo tipo. Lo vimos en Bolivia con el intento de Añez y sus aliados por quedarse en el poder. Lo vemos en Perú, donde la débil correlación de fuerzas de Castillo y la fragmentación del tejido social favorecieron al golpismo. Lo estamos viendo en Colombia donde buscan destituir a Gustavo Petro siguiendo el guión peruano. La democracia continúa en el centro de la disputa entre élites conservadoras dispuestas a desconocer y manipular su propia legalidad y sectores populares que demandan cambios de fondo. Esperamos que este texto sobre Perú pueda aportar a análisis de mayor alcance y profundidad sobre la acción de las derechas y el desafío de fortalecer democracias sustantivas, que más allá de lo procedimental, logren cumplir viejas promesas de igualdad y bienestar.

Democracia precaria y triunfo de Pedro Castillo: preludio a la coalición

En Perú, la instauración de la democracia como forma de gobierno fue un proceso complejo tensado por continuidades coloniales. Durante el primer siglo de vida republicana, gobernó el país un grupo criollo que se estableció como heredero de la dominación colonial española, es decir, de la explotación social y la opresión racial de una pequeña minoría sobre la inmensa mayoría de la población, principalmente campesina e indígena. Como afirma Quijano (2000), la república mantuvo tanto la dependencia externa del país respecto al centro de poder mundial, como las jerarquías sociales a través de la clasificación racial. Asimismo, el grupo criollo gobernante heredó el carácter patrimonialista del régimen colonial que no distingue entre el bolsillo privado y el tesoro público (Cotler, 2005 [1978]).

El racismo, el patrimonialismo y el conservadurismo fueron características de una oligarquía que gobernaba dilapidando los recursos de las materias primas sin plantear un proyecto de nación que unificara la república.

Tuvo que ocurrir una catástrofe como la derrota en la guerra con Chile, para que los actores políticos e intelectuales se plantearan la precaria estructuración del estado nación peruano cuestionando que mantuviera a la mayoría de su población, básicamente indígena, sumida en el atraso. Fue José Carlos Mariátegui (1931) quien sistematizó políticamente el *problema del indio* despojándolo de sus componentes pasadistas y presentándolo como un tema de dominación política y económica. Sacar a las mayorías indígenas de su postergación, implicaba necesariamente modificar la concentración de la tierra favorable al terrateniente y repensar la nación desde el legado andino y originario.

La primera mitad del siglo XX peruano estuvo marcada por las luchas de las comunidades por la tierra y un naciente movimiento obrero, quienes exigían derechos sociales. Partidos como el APRA y el partido Comunista surgieron buscando representar a los sectores populares produciéndose una lenta ampliación de la ciudadanía que incrementó el porcentaje de participación electoral del 2 % de la población total al 7 % en 1930 (López, 2010). La sociedad peruana reclamaba profundas transformaciones mientras las élites se negaban a ceder privilegios, reprimiendo las luchas sociales y manteniendo cerrado el sistema político. Se consolidó así una derecha signada por la herencia colonial, entregada al capital extranjero y opuesta a ampliar la ciudadanía a quienes no consideraba sus iguales, es decir a las mayorías del país.

Paradójicamente, fue el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado el que llevaría a cabo las transformaciones democratizadoras que el país requería. Entre 1968 y 1977, el gobierno militar puso en marcha un ambicioso proyecto de reformas estructurales orientadas

a desarrollar y cohesionar la nación peruana incluyendo nacionalizaciones y estatizaciones que ampliaron la función de producción del Estado. Velasco además ejecutó una radical reforma agraria que redistribuyó la tenencia de la tierra y eliminó poderes locales como el gamonalismo, acabando con la servidumbre que afectaba a cerca del 30 % de la población que vivía en las haciendas. Estas medidas que combatían la discriminación étnico racial fueron refrendadas en la Constitución aprobada en 1979, que por primera vez consagró el voto universal incluyendo analfabetos e indígenas.

El ciclo desarrollista inaugurado por Velasco se clausuró de forma dramática en 1992 con el autgolpe de Alberto Fujimori. En medio de una crisis hiperinflacionaria, un cruento conflicto armado y la debacle del sistema de partidos, Fujimori, Montesinos y sus socios político-empresariales impusieron el modelo neoliberal. El Estado quedó reducido a su rol subsidiario y se liberalizó la economía facilitando el ingreso del gran capital transnacional en actividades estratégicas como la minería. La Constitución de 1993 colocó los candados necesarios para que posteriormente fuera muy difícil introducir cambios sustantivos al modelo. La década fujimorista se caracterizó por la corrupción, el autoritarismo y la acción de grupos mafiosos que capturaron el Estado, dañando gravemente la institucionalidad democrática.

La caída de Fujimori en el año 2001 representó una significativa continuidad frente a la dictadura. En tanto la economía exhibía buenas cifras macroeconómicas, los sectores gobernantes no avanzaron con reformas y mucho menos hicieron cambios al marco constitucional. No obstante, si la economía caminaba bien para la minoría privilegiada, el régimen político se deterioraba aceleradamente demostrando los límites de una transición pactada. La situación se agravó en 2016, cuando Keiko Fujimori no ganó el ejecutivo, pero logró una mayoría parlamentaria que le permitió utilizar el Congreso para favorecer intereses corporativos y ajustar la ley a conveniencia

controlando instituciones claves como el Tribunal Constitucional. La inestabilidad del quinquenio llevó a que se turnaran en el poder cuatro presidentes, se cerrara el Congreso dos veces y se alterara el equilibrio de poderes girando cada vez más hacia el parlamentarismo.

En un país devastado por la pandemia y harto de las componentes de una clase política percibida mayoritariamente como corrupta, las elecciones generales de abril del 2021 actuaron como catalizador del enorme descontento social.¹ Los sectores históricamente excluidos, los más golpeados por la crisis, la enfermedad y la precariedad, buscaban elegir a alguien que impugnara frontalmente el sistema. Pero ya no querían delegar su voto a líderes que los visitaban en campaña, prometían cambios y luego, como Ollanta Humala, traicionaban; esta vez tenía que ser directamente a uno de los suyos.

El 11 de abril del 2021, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la primera vuelta electoral dio como ganadores a Pedro Castillo con un 19 % de los votos y a Keiko Fujimori con el 13 % (ONPE, 2021). Para el *establishment* limeño y la clase política tradicional, lo ocurrido era una sorpresa pues Castillo les resultaba un total desconocido. Para los sectores populares, especialmente en el sur andino, la amazonía y los más pobres de las ciudades, el maestro rural, sindicalista y rondero sí era conocido. A Pedro Castillo lo vieron liderar la masiva huelga de maestros del 2017, lo recibieron en provincias pequeñas mientras organizaba el sindicato de profesores y, en campaña, lo acompañaron en mitines a los que llegaba con sombrero y a caballo levantando un discurso frontal y la promesa de cambios profundos. No era parte de la clase política tradicional, era realmente uno de ellos.

La segunda vuelta electoral se caracterizó por una cruenta guerra sucia contra Pedro Castillo y su equipo por parte de los opositores

1 Según cifras del Ministerio de salud 94.000 personas fallecieron por COVID hasta fines del 2020 (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 2021).

políticos, los grandes medios de comunicación y grupos empresariales alineados con la candidata Fujimori. El racismo y el clasismo estuvieron a la orden del día haciendo escarnio y burla del profesor y sus electores a quienes presentaban como sucios e ignorantes. No obstante, Castillo contaba con un núcleo duro movilizado al que pudo sumar el voto de las clases medias antifujimoristas inclinando decisivamente la balanza. El 5 de junio del 2021, con el 100 % de las actas contabilizadas, las autoridades electorales anunciaron el triunfo de Pedro Castillo con una ajustada ventaja de cerca de cincuenta mil votos.

Los resultados finales fueron mal recibidos por Keiko Fujimori, quien adoptó la estrategia Trumpista de denunciar un fraude inexistente. Lo que al inicio parecía la pataleta de una mala perdedora se fue revelando como una estrategia para dilatar la proclamación de Castillo, socavar la legitimidad de su triunfo y sembrar dudas sobre su futuro gobierno. De forma coordinada, el fujimorismo y sus aliados políticos, estudios de abogados, periodistas, medios de comunicación y empresarios respaldaron la teoría del fraude y se plegaron a la cruzada contra el *fraudismo castillista*. La determinación de los opositores y su ensañamiento contra los organismos electorales y las misiones de observación internacional que informaban el normal desarrollo del proceso electoral, fueron un campanazo de alerta sobre el claro talante antidemocrático de la derecha peruana.

Los partidos aliados en torno a la candidatura de Keiko Fujimori actuaron como voceros políticos del fraudismo. El fujimorismo y Renovación Popular del ultraconservador López Aliaga, llevaron la batuta sosteniendo que se había registrado fraude en provincias alejadas del sur andino y la selva. Los estudios de abogados más caros del país tuvieron también un inusitado protagonismo. Durante dos semanas, se abocaron a impugnar cerca de doscientos mil votos indígenas y rurales aludiendo malos manejos en las mesas de sufragio. Los servicios fueron registrados como aporte económico

a la campaña de modo que el reporte financiero de Fuerza Popular confirma que cuarenta abogados de reconocidos estudios revisaron actas electorales, brindaron asesoría legal y pagaron las búsquedas en el sistema del Reniec por un monto de US\$ 500.000 (Ojo Público, 2021). El mensaje que estos abogados sostenían era que los indígenas y campesinos no votaban bien o eran manipulados por los titulares de mesa y personeros castillistas.

Los medios de comunicación jugaron también un rol importante, especialmente canales como Willax y América TV, el grupo El Comercio y periodistas locales que avalaron la teoría del fraude desatando campañas de desinformación. El 31 de mayo, el periodista Beto Ortiz, en el canal Willax, difundió publicaciones de redes sociales donde afirmaba la presencia de personas fallecidas en el padrón electoral de la ONPE e insinuaba que existía la posibilidad de un eventual fraude, algo que se sabía falso. Días después el programa Cuarto Poder de América TV, entrevistó a un *criptoanalista* que había creado una fórmula matemática para demostrar un comportamiento anormal de los electores, algo que resultó en una escandalosa *fake news*. También las autoridades electorales fueron blanco de ataques mediáticos, como ocurrió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas, a quienes periodistas como Phillips Butters, conductor de la Radio PBO, llamaba diariamente “terrorista” (Ojo Público, 2021).

A la semana de los comicios, la Misión de Observación Electoral de la OEA presentó su informe de observación electoral ratificando la pulcritud del proceso y felicitando a los organismos electorales peruanos por llevar los comicios con gran profesionalismo (OEA, 2021). No obstante, la derecha no cedió y las impugnaciones dilataron la proclamación del nuevo jefe de Estado. Los seguidores de Castillo se movilizaron a Lima desde distintas regiones del país para defender su voto. Cientos de maestros, ronderos, campesinos acamparon en las puertas del Jurado Electoral y marcharon por Lima con

sus trajes típicos, machetes y sombreros provocando nuevos ataques racistas por parte de fujimoristas y derechistas.

Finalmente, luego de semanas de espera y confrontación, Pedro Castillo fue juramentado presidente. Pero lo vivido durante el proceso electoral evidenció con nitidez que la derecha peruana era capaz de desconocer las reglas de juego democrático, inventar un fraude y desprestigiar a las instituciones electorales con tal de no ser derrotada. Demostró también que partidos, gremios empresariales y medios de comunicación eran capaces de dejar de lado viejas rencillas, y articularse en torno a un mismo fin, en este caso impedir y/o deslegitimar el triunfo de Castillo. La ya precaria democracia peruana asistía al nacimiento de lo que sería la coalición golpista.

La coalición golpista en acción: desestabilizar, judicializar

Según los planteamientos de la doctrina liberal el funcionamiento óptimo de la democracia como sistema de gobierno requiere la existencia de determinados mecanismos constitucionales que impidan u obstaculicen el ejercicio arbitrario del poder. En un estado de derecho, estos mecanismos implican el control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo, el control eventual del Parlamento en el ejercicio del poder legislativo por parte de un Tribunal que dirime la constitucionalidad de las leyes y finalmente un poder judicial independiente del poder político (Bobbio, 1992) No obstante, más allá de la teoría, los actores en disputa, y especialmente aquellos que cuentan con acceso a recursos y redes en las instituciones, logran pervertir estas premisas, maniobrando sobre la independencia de los poderes. Un grupo político con mayoría parlamentaria puede copar y/o imponerse manipulando la legalidad según sus intereses, pasando por encima de lo decidido por la voluntad popular.

Esta perversión de la democracia liberal es más viable en países como el Perú, con una débil institucionalidad, partidos políticos en

permanente crisis de representación y una sociedad civil fragmentada. La transición a la democracia tras una década de dictadura fujimorista no significó un mejor funcionamiento de los mecanismos de control político o la división de poderes. Por el contrario, la imposibilidad del fujimorismo y sus aliados de la ultraderecha para hacerse del poder ejecutivo fue orientando su acción al Parlamento, avanzando en copar los demás poderes desde esa instancia. El Congreso ha realizado también cambios sustantivos a la Constitución favorables al parlamentarismo, siempre con el aval del Tribunal Constitucional cuyos miembros son elegidos por el mismo Congreso. El copamiento del Poder Judicial sigue la misma línea, pues el Congreso tiene un nivel de participación importante en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, instancia que designa jueces y fiscales. En la práctica, ha primado la colusión de intereses, la manipulación de la ley y el direccionamiento de altos cargos con el fin de garantizar el predominio de la mayoría parlamentaria, siempre con la venia del poder económico.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, el manejo de las instituciones y la manipulación de la Ley a conveniencia por parte de la derecha escalaron a un nivel superior. El fujimorismo tomó iniciativa en reclutar y sellar una alianza parlamentaria con partidos de ultraderecha (Renovación Popular y Avanza País) y de derecha provincial como Acción Popular y Alianza para el Progreso. Este bloque parlamentario logró controlar la Mesa Directiva y comisiones claves para golpear al nuevo gobierno como Constitución y Fiscalización. Vale aclarar que Pedro Castillo debió enfrentar sus propios errores y limitaciones, producto principalmente de la inexperiencia y las dificultades de sus aliados para cohesionar un bloque que lo respaldara. Profundizar en el balance de la gestión de Castillo correspondería a otro texto, por lo que priorizamos resaltar aquellos factores internos del gobierno que favorecieron el accionar de la coalición golpista.

Con el tinglado Parlamentario bajo control, la articulación de fuerzas opositoras dispuestas a transgredir los marcos democráticos fluyó rápidamente. Se constituyó así la coalición golpista como la articulación de poderes institucionales, económicos, mediáticos y judiciales trabajando coordinadamente para destituir a un presidente constitucionalmente electo. Si bien era una coalición política e ideológicamente de derechas, contenía diversos matices unificados en torno al objetivo de retomar el poder del Ejecutivo. Dentro de este grupo, se cuenta el fujimorismo y la ultraderecha, medios de comunicación como Willax, grupos de poder económico como la CONFIEP. Se sumarían también la Fiscalía y las Fuerzas Armadas y policiales. Progresivamente esta coalición ganó hegemonía como fuerza opositora subsumiendo al centro político y sectores de izquierda liberal que aspiraban a ejercer como *oposición democrática*.

Durante quince meses, la coalición golpista actuó de manera concertada, complementaria y concurrente. El Parlamento se encargaba de desestabilizar el gobierno maniobrando la legalidad y abusando de figuras de control político. La Fiscalía judicializaba los supuestos actos de corrupción de Castillo abriendo sendas investigaciones contra el presidente y su entorno más íntimo. Los medios de comunicación amplificaban las noticias y emprendían campañas de desinformación prometiendo las pruebas que justificarían la salida del gobierno. Todo debidamente financiado y respaldado por empresarios nacionales que además impulsaban acciones de calles minoritarias, pero sumamente agresivas.

El Congreso fue el eje de la desestabilización al gobierno de Pedro Castillo. Entre las acciones que destacan, se cuenta el abuso de la figura de interpelación y censura a los ministros de Estado. Según lo establecido por ley, previa interpelación, el Congreso puede censurar o destituir a los ministros que cometen faltas graves en el ejercicio de su función. No obstante, los congresistas reinterpretaron la norma y empezaron a interpelar y censurar ministros por sus antecedentes.

A dos semanas de iniciado el gobierno, enfilaron contra el canciller Héctor Béjar, a quien le cuestionaban su pasado guerrillero en la década de los sesenta. Siguieron con el ministro de trabajo y dirigente del sindicato de maestros Ilber Maraví, a quien también acusaban por su supuesta cercanía a subversivos en la década del ochenta. Esta vez, el presidente anunció que si Maraví era censurado, apelaría a la cuestión de confianza que al ser aplicada dos veces, permitía disolver el parlamento. Adelantándose a los hechos, el Parlamento modificó la cuestión de confianza de modo que el ejecutivo ya no podría aplicar la confianza por la censura a un ministro sino solamente por el jefe de gabinete. Durante la gestión de Castillo, los pedidos de interpelación ministerial por parte del Parlamento ascendieron a un total de 26, hecho que contrastaba con el máximo de ocho solicitudes de interpelación que había sido el promedio en los últimos veinte años (Reisman, 2022).

Como muestra de la guerra declarada y su disposición a bloquear cualquier cambio, el Congreso rechazó la propuesta del Ejecutivo para convocar a referéndum constitucional y aprobó la denominada *Ley anti-referéndum* que restringe el derecho ciudadano a convocar a un referéndum que consulte sobre un posible cambio de la Constitución. También se abocaron a bloquear las iniciativas legislativas del ejecutivo como la reforma tributaria e impidieron los viajes del presidente al extranjero con argumentos denigrantes.

El Congreso abusó de la figura de *vacancia por incapacidad moral*, presentando tres mociones de vacancia en quince meses, una cada cuatro meses, todas por supuestos hechos de corrupción sin sustento suficiente.² Por otro lado, intentaron la inhabilitación constitucional del presidente, forzando una absurda acusación de traición a la patria por declaraciones de Castillo favorables a la salida al mar para

2 La vacancia por incapacidad moral fue incluida en la Constitución de 1993 para casos graves de enfermedad o salud mental, pero desde el 2016 empezó a usarse a discrecionalidad de la mayoría parlamentaria sin que hasta ahora sea reglamentada.

Bolivia. Mecanismos parlamentarios de control que hasta entonces operaban como formalidades, se convirtieron en armas de presión política. Finalmente, la mayoría parlamentaria modificó la facultad presidencial de disolver el Parlamento tras dos Cuestiones de Confianza rechazadas, señalando que el mismo Parlamento definiría si tales Confianzas procedían o no. En la práctica, acabaron con el equilibrio de poderes, siempre con la venia del Tribunal Constitucional electo por el mismo Congreso.

La coalición golpista también actuó desde el campo jurídico, destacando el rol decisivo del Ministerio Público. Apenas asumido el cargo, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, cuestionada por sus vínculos con el narcotráfico, tomó la inédita decisión de investigar a un presidente en funciones reinterpretando la Constitución de 1993. Benavides creó el *Equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder* abocado en su totalidad a investigar a Pedro Castillo, acusándolo de liderar una “organización criminal” y abriendo sesenta carpetas fiscales en su contra. Sin pruebas contundentes, pero con gran amplificación mediática, cada semana la Fiscalía presentaba acusaciones basadas en reportajes periodísticos que abonaban a la imagen de un gobierno tomado por la corrupción. Se configuraba a todas luces un caso de *lawfare* funcional a la estrategia golpista y articulado con la oposición parlamentaria y la gran prensa.

Entre los casos más sonados levantados por la Fiscalía, puede contarse el del *Gabinete en la sombra* que criminalizó a los trabajadores de confianza del presidente e implicó el allanamiento del Palacio de gobierno en busca de pruebas que aún no encuentran. También destaca el caso de la *Municipalidad de Anguía* que involucró a la hija del presidente Yenifer Paredes, pues, según un reportaje de televisión, coordinaba con los pobladores del distrito obras de agua y desagüe en beneficio de una empresa privada. Yenifer Paredes fue acusada por el presunto delito de tráfico de influencias y pasó tres meses en prisión preventiva para luego seguir el juicio en libertad restringida.

Este hecho dañó profundamente al presidente y a su esposa, quienes recibieron gran presión mediática y política y evidenciaron la efectividad del *lawfare* como herramienta para desactivar a un líder político, imputándole un delito, exponiendo su entorno más cercano como criminal y hundiendo su prestigio (Tirado, 2021).

Destaca también el protagonismo de los medios de comunicación en la coalición golpista. Si ya en la campaña del fraude habían demostrado disposición a desinformar, fabricar *fake news* y generar campañas de odio, durante el gobierno de Castillo, continuaron y profundizaron este camino. En el extremo de la desinformación y la difamación, se ubica Willax, canal de televisión propiedad del empresario Erasmo Wong que acumula denuncias y deudas por agraviar a políticos y autoridades. Diariamente, Willax insultaba y atacaba al presidente, su gabinete y su familia amplificando presuntas denuncias por corrupción, inventando rumores de golpe de Estado, o dando tribuna a supuestos testigos de hechos de corrupción. Aparentando mayor seriedad, pero en la misma línea, se cuenta America TV que presentó un reportaje que supuestamente contenía el *audio bomba* donde una empresaria entregaba dinero al presidente. El reportaje resultó falso, pero motivó la segunda vacancia presidencial. También, entre otros abundantes ejemplos, se cuenta al Grupo El Comercio, trabajando coordinadamente con la Fiscalía para publicar y direccionar las primicias en las investigaciones fiscales a Castillo.

Finalmente, debe tomarse en cuenta el papel del poder económico y grupos empresariales en la coalición golpista. Entre los empresarios más militantes de la coalición, se cuentan Erasmo Wong, dueño de Willax TV, o de José Luis Silva Martinot del sector turismo. Estos y otros empresarios financiaron acciones a favor de la vacancia como marchas y movilizaciones a las que asistían congresistas de la ultraderecha, artistas de la farándula y empresarios que desfilaban junto a personas de los distritos mesocráticos de Lima. Si bien eran actos cuantitativamente minoritarios, eran transmitidos en vivo por

los medios de la coalición y demostraban un claro desprecio racista y clasista contra el presidente y sus partidarios. También la CONFIEP, el mayor gremio empresarial del país, fue un tenaz opositor al gobierno de Castillo, lo mismo que la Conferencia de Empresarios que por primera vez en su historia no invitó al presidente de la república a su evento anual.

Hasta aquí se ha explicado, de modo panorámico, el accionar concertado de poderes políticos, institucionales, mediáticos y empresariales que tuvieron un rol decisivo en la destitución del presidente Pedro Castillo. Utilizaron el Parlamento y el Tribunal Constitucional para maniobrar la legalidad, direccionaron la justicia para criminalizar y contaron con recursos económicos y redes de poder. Llevaron al límite e incluso transgredieron los planteamientos de la democracia liberal. La pregunta es por qué pudieron hacerlo y si hubiera ocurrido lo mismo de tratarse de un presidente proveniente de las élites cuyos electores pertenecieran a las clases pudientes del país. Si, como afirma Macpherson (1981), la democracia además de un sistema de gobierno debe ser vista como un tipo de sociedad caracterizado por el derecho de sus miembros a realizar sus capacidades humanas y ejercer libertades por igual, quedó claro que en Perú no todos eran tan iguales. Los peruanos más excluidos, que por primera vez sentían haber colocado un presidente, no pudieron contrarrestar el accionar de la coalición golpista formada por los sectores que tradicionalmente han ejercido el poder y no estaban dispuestos a perderlo.

Democracia colapsada: destitución de Pedro Castillo, restauración y resistencia

Tras quince meses de tensión, el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo leyó un mensaje disolviendo el Congreso y llamando a una Asamblea Constituyente. Ciertamente, el mensaje del presidente no

era un rayo en cielo sereno destinado a interrumpir una saludable democracia. Para quienes respaldaban a Castillo y buena parte de la población que rechazaba al Congreso, el mensaje presidencial atendía sus reclamos contra la clase política. Para la coalición golpista, estábamos ante la interrupción del orden institucional y era la oportunidad de cumplir su objetivo.

Según lo referido por Pedro Castillo, la lectura del mensaje fue más un gesto político para “desobedecer a los grupos de poder económicos sociales y poner al pueblo por encima de todo” (Castillo, 2023). No obstante, más allá de su intención, no contaba con respaldo militar ni policial para concretar la medida y la coalición golpista encontró la oportunidad para dar la estocada final. Contaban con la vicepresidenta Dina Boluarte como su nueva aliada, pues semanas atrás había marcado distancia del ejecutivo siendo sorpresivamente absuelta de todas las denuncias en su contra. Pocas horas después de leído el mensaje presidencial, los congresistas aprobaron una nueva moción de vacancia vulnerando su propio reglamento, cometiendo un hecho claramente ilícito.³ En paralelo, Castillo era retenido por su escolta mientras la Fiscalía ordenaba prisión preventiva desconociendo los fueros que asistían al presidente. Cerrando la jornada, Dina Boluarte juramentaba como la nueva presidenta celebrando con la triunfante coalición golpista.

La reacción de la ciudadanía ante la destitución de Castillo y lo que prácticamente era un golpe de estado no se hizo esperar. Desde el 8 de diciembre del 2022 y hasta entrado marzo del siguiente año, Perú vivió la movilización popular más grande de las últimas

3 Según lo anotado por el artículo 89-Ac del Reglamento del Congreso, la vacancia inmediata del presidente de la república requiere de procedimientos formales tales como presentar una moción debidamente sustentada y contar con el voto de 107 congresistas sobre el total de 130. El 7 de diciembre no se presentó la moción y votaron a favor de la vacancia 101 congresistas (Centro de Noticias del Congreso, 2022).

décadas. El pueblo se volcó a las calles exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. En respuesta, la estrenada presidenta declaró el estado de emergencia dando carta libre al ejército y la policía para disparar. El resultado fueron terribles masacres como la ocurrida en Ayacucho el 15 de diciembre con diez asesinados o la de Juliaca con dieciocho asesinados en una jornada. Cuatro meses de protesta dejaron como saldo sesenta asesinados incluyendo seis menores de edad, además de 1300 heridos y 1800 judicializados. Las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen de Boluarte y sus aliados se encuentran reseñadas en informes de organismos como Amnistía Internacional e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2023).

A dos semanas de haber asumido el cargo de presidenta y presionada por las protestas, Dina Boluarte envió al Congreso un proyecto de adelanto de elecciones. Sin embargo, bancadas de izquierda y de derecha rechazaron el proyecto y ambos poderes decidieron quedarse hasta el 2026, año en que correspondería realizar elecciones generales. Esta situación ha incrementado el malestar de la ciudadanía que no ha dejado de movilizarse y desapruueba contundentemente la gestión de Boluarte y el Congreso.⁴ Pero, tal como otras veces en la historia, la clase política peruana se niega a realizar cambios democráticos, estira la legalidad lo más posible y apela directamente a la violencia y la criminalización para mantenerse en el poder.

Puede afirmarse que Perú vive una democracia colapsada donde la crisis de legitimidad de los poderes del Estado se ha solucionado temporalmente por la fuerza. La coalición golpista ha trasmutado ahora en un bloque restaurador con Dina Boluarte como careta legal funcional a sus intereses. Nuevamente, más allá de sus diferencias,

4 Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del mes de julio de 2023, la aprobación de Boluarte como presidenta es del 14 % y la del Congreso el 6 % (IEP, 2023).

partidos políticos como el fujimorismo y la derecha, medios de comunicación, grupos de poder económico, fiscalía y poder judicial coinciden en la tarea de restaurar el modelo neoliberal, darle un nuevo aire y recuperar el poder que sintieron perder por quince meses.

Esta restauración implica también el copamiento mafioso y autoritario de las instituciones, pues, como en los noventa con el fujimorismo a la cabeza, la derecha peruana hegemónica en la coalición restauradora prefiere gobernar controlando todos los poderes. No le basta con controlar el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para minimizar riesgos buscan tomar el sistema político. Desde el Parlamento, ha inhabilitado opositores como el expresidente Martín Vizcarra o la ex fiscal de la Nación Soraida Avalos y pretenden intervenir los organismos electorales, ONPE y Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de no arriesgarse a perder las próximas elecciones.

Vale destacar que la coalición restauradora no tiene todas las de ganar. La economía peruana camina mal imponiéndose la recesión, la caída del PBI, el desempleo y las malas proyecciones económicas. Además, a diferencia de la coalición golpista donde las particularidades de grupo se supeditaban al objetivo común de destituir a Pedro Castillo, los restauradores no están cohesionados respecto de sostener a Dina Boluarte. Cada grupo político empieza a realizar sus propios cálculos y evaluaciones. Mientras la ultraderecha de Renovación Popular quiere que la presidenta complete el período, Keiko Fujimori se ha pronunciado a favor de adelantar elecciones, pues cree tener más opciones de ganar y no quiere cargar los pasivos de un gobierno tan repudiado como el de Boluarte.

La coalición golpista hoy restauradora, tampoco contaba con la resistencia al régimen proveniente de los sectores más excluidos, los que se movilizan desde diciembre por una democracia que los incluya, tanto en el sistema de gobierno como en el régimen de convivencia, reconociéndolos como ciudadanos plenos. Se trata en su gran mayoría de hombres y mujeres integrantes del mundo popular:

trabajadores informales, campesinos, indígenas, jornaleros de la agroexportación, mototaxistas, microempresarios de provincia. Estos sectores participaron activamente en el juego democrático eligiendo en el 2021, por primera vez en la historia, un presidente de ellos, pero vieron cómo la clase política que tradicionalmente maneja el país boicoteó su gobierno y acabó por destituirlo. Cuestionan la democracia realmente existente y demandan un nuevo pacto social expresado en una Asamblea Constituyente que escriba una nueva Constitución.

La movilización popular en Perú muestra la emergencia de un sujeto plebeyo que se moviliza para ampliar y profundizar la democracia. No obstante, si quiere constituirse como alternativa de poder y gobierno de y para el campo popular, debe enfrentar diversos desafíos internos y externos tales como la cruenta represión y criminalización de la protesta que ha judicializado y encarcelado a muchos dirigentes. Asimismo, debe lidiar con una profunda tendencia a la fragmentación expresada en la dificultad para estructurar una coordinación nacional que dote de mayor efectividad a sus medidas y debe tejer alianzas con sindicatos y grupos de izquierda de quienes desconfían por pasividad frente a la coalición golpista. La crisis de representación y desconfianza afecta también a los sectores movilizados, no en vano el nivel de satisfacción con la democracia en Perú apenas alcanza el 8 %, el más bajo del continente (Latinobarómetro, 2023).

Pero la crisis de la democracia no es exclusividad de Perú, se vive en América Latina y el mundo exigiendo repensar su configuración histórica, tensiones y manipulaciones. Sin duda, el esfuerzo más serio por abordar la problemática de la democracia en la región fue en la década de los setenta en el contexto de la transición de las dictaduras militares. Como afirma Carlos Franco (2022), para salir del autoritarismo, se asumió que instaurar la democracia sería un proceso gradual con dos fases: una como sistema de gobierno en el marco

de elecciones libres, pluralismo político y la instauración de instituciones y reglas de juego, y otra etapa posterior en la que ocurrirían los cambios económicos y sociales –redistribución de ingresos, derechos económicos– que consolidarían el régimen de convivencia. La democracia priorizó los aspectos procedimentales, sin tomar en cuenta que estos podían ser utilizados por las élites tradicionalmente dominantes para evitar que el segundo aspecto de transformación y redistribución del poder ocurriera.

Urge retomar la discusión y análisis sobre la democracia, sobre todo porque vivimos tiempos donde las fuerzas conservadoras se encuentran cada vez más articuladas a nivel internacional, validando y compartiendo experiencias sobre fórmulas golpistas para asegurarse el poder. No es una casualidad que en diciembre del 2022 el Foro de Madrid se reuniera en Lima concitando a las principales figuras de la derecha hispanoamericana. En esa ocasión, el parlamentario de Vox Herman Tersch felicitó a empresarios y políticos peruanos por el éxito obtenido en destituir a Pedro Castillo, colocándolos como un ejemplo a seguir. Estas tendencias negacionistas y racistas no tienen reparos en patear las reglas de juego o cambiarlas a conveniencia, aprovechando su poder económico y redes de poder, pues siempre se han manejado en espacios de gobierno. Las clases populares que hacen grandes esfuerzos para ganar elecciones y llegar al gobierno, confirman que su triunfo siempre es cuestionado y el esfuerzo para sostenerse es mucho mayor.

La experiencia de la coalición golpista en Perú deja múltiples lecciones sobre cómo corromper y degradar un sistema democrático, pero nos permite también asumir el desafío de reflexionar y construir lo que García Linera denomina democracias sustantivas, que atiendan la complejidad de nuestros países signados por el legado colonial y reconfiguren los marcos de la comunidad política (García Linera, 2017). En tal sentido, el gran reto histórico de la democracia contemporánea es su auto transformación sustancial como forma

política capaz de articular la participación e igualdad social. En Perú y Latinoamérica, la movilización social en resistencia a los autoritarismos exige redistribuir poder a los sectores excluidos, superar la discriminación por género y desmonopolizar la etnicidad del Estado; ha abierto el camino para lograr una democracia en un régimen de existencia que será muy difícil de cerrar.

BIBLIOGRAFÍA

- Bobbio, Norberto (1992). *Liberalismo y Democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Castillo, Pedro (7 de febrero de 2023). Pedro Castillo: “Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”. *El Salto*. <https://www.elsaltodiarario.com/peru/pedro-castillo-entrevista-exclusiva-carcel>
- Centro de Noticias del Congreso (7 de diciembre de 2022). Congreso de la República declara vacancia de Pedro Castillo y sucesión presidencial. <https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congreso-de-la-republica-declara-vacancia-de-pedro-castillo-y-sucesion-presidencial/>
- Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) (2023). <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/083.asp>
- Cotler, Julio (2005 [1978]), *Clases, estado y nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (tercera edición).
- García Linera, Alvaro (2017). *Democracia, Estado, nación*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Franco, Carlos (2022). *Acerca del modo de pensar la Democracia en América latina*. Lima: Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Instituto de Estudios Peruanos (julio de 2023). Informe de opinión. <https://iep.org.pe/noticias/iep-informe-de-opinion-julio-2023/>
- Latinobarómetro (2023). *Informe Latinobarómetro 2023*. Santiago de Chile. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=724>

- Macpherson, Crawford Brough (1981). *La democracia liberal y su época*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mariátegui, José Carlos (1931). El Problema del Indio. En *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Ciudad de México: Ediciones ERA.
- López, Sinesio (2010). Estado y ciudadanía en el Perú. En *El Estado en debate múltiples miradas*. Lima: PNUD.
- Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) (2021). <https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/EleccionesPresidenciales/RePres/T>
- Ojo Público (2021). Portal de noticias e investigación. www.ojo-publico.com
- Organización de Estados Americanos (OEA) (11 de junio 2021). Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú presenta informe preliminar. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-065/21
- Plataforma Nacional de Datos Abiertos (2021). Ministerio de Salud de Perú. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/fallecidos-por-covid-19-ministerio-de-salud-minsa>
- Quijano, Anibal (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, Edgardo (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Reisman, Ana Bazo (20 de julio de 2022). En su primer año de gestión, el Congreso buscó interpelar ministros cada 13 días. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/politica/congreso/en-su-primer-ano-de-gestion-el-congreso-busco-interpelar-ministros-cada-13-dias-analisis-gabinete-pedro-castillo-ecdata-noticia/>
- Tirado Sánchez, Arantxa (2021). *Lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley*. Madrid: Akal.

Os conflitos de classes e a crise da democracia no Brasil

ANDRÉ FLORES PENHA VALLE

Introdução

A existência de uma força social e política relevante, mobilizada pela implantação de uma ditadura, é a principal e inequívoca demonstração de uma crise da democracia, uma vez que um regime político só é verdadeiramente colocado em xeque na medida em que exista uma força que o derrube. Tal critério não é óbvio ou auto-evidente, tendo em vista as análises que associam esse tipo de crise ao enfraquecimento dos partidos tradicionais e/ou à ascensão de movimentos de extrema direita, a despeito de seus objetivos estratégicos.¹ A nosso ver, só é possível falar de *crise da democracia* quando uma conjuntura particular possibilita a mudança da forma de Estado e de regime político, mediante a ação de uma força social e política capaz de concretizar este objetivo. Ou seja, não se caracteriza pelo prolongado

- 1 Manuel Castells (2018) e Adam Przeworski (2020), que analisam a deterioração da democracia e a ascensão dos chamados *outsiders* na Europa e nos Estados Unidos após a crise de 2008, identificam a crise dos partidos tradicionais à crise do próprio regime político, atribuindo à emergência de novos atores políticos a crise da democracia, independentemente se estes novos atores se mobilizam –ou não– pela implantação de uma ditadura. Apesar de não serem bem-sucedidos na demonstração de suas teses principais, esses autores trazem contribuições importantes para a análise da deterioração da democracia no capitalismo contemporâneo.

processo de descredibilização e desgaste dos partidos e instituições democráticas, que pode subsistir ou ser aplacado sem levar ao fechamento do regime político, mas pela efetiva possibilidade de *ruptura*.

No Brasil recente, o crescimento molecular de agrupamentos golpistas e armados, que clamavam pelo retorno dos militares ao poder governamental, encontrou guarida e teve um salto de qualidade durante o governo de Jair Bolsonaro, quando passou a influenciar o movimento reacionário de massas organizado em torno da figura do então presidente. A conquista do governo, a penetração em ramos importantes da burocracia de Estado, sobretudo nos aparatos repressivos, e as ações concretas levadas a cabo por este movimento (manifestações contra as instituições democráticas, organização de milícias armadas em clubes de tiro, descredibilização das urnas eletrônicas, acampamentos em frente aos quartéis, invasão da Praça dos Três Poderes, *minutas do golpe* e outras tentativas de anulação do resultado das eleições presidenciais de 2022), nos permitem falar de uma força golpista relevante e de uma ameaça real ao regime político durante os anos de 2019 a 2023.

No entanto, esse movimento foi, com frequência, subestimado pelos analistas políticos, inclusive aqueles vinculados à esquerda e à centro-esquerda, seja no que diz respeito ao seu golpismo (tido como blefe ou *cortina de fumaça*), ou mesmo no período anterior, quando teve sua viabilidade eleitoral descartada (foi considerado inofensivo e até mesmo como candidato ideal a ser enfrentado em eventual segundo turno nas eleições de 2018). Tal menosprezo estaria relacionado à abordagem confinada ao terreno das instituições e/ou aos atributos individuais da liderança política, que desconsidera os interesses e conflitos sociais por trás da cena política. Dessa forma, Bolsonaro foi subestimado por sua filiação a um partido pequeno, o Partido Social Liberal (PSL), que dispunha de poucos recursos e representação parlamentar, o que teoricamente seria um obstáculo intransponível para as suas pretensões eleitorais; e foi subestimado

por ser uma figura tosca, abjeta e iletrada, supostamente incapaz, do ponto de vista moral e intelectual, de liderar um movimento político e governar, tampouco organizar um golpe de Estado.

Segundo Marx (2011, p.18), os conflitos sociais, em situações particulares e excepcionais, podem criar as “circunstâncias e condições que permitem a um personagem medíocre e grotesco desempenhar o papel de herói”. Em nosso caso, as modificações nas relações de classes produzidas pelo golpe do impeachment de Dilma Rousseff –que articulou, entre outras coisas, a coesão do bloco no poder em torno de uma ofensiva privatista e anti-trabalhista, a ascensão e radicalização do movimento reacionário de massas da pequena burguesia e das classes médias, a crise de representação partidária e a defensiva das massas populares– ajudariam a explicar porque o crescimento do bolsonarismo e sua chegada ao governo não foi um *raio em céu azul*.² Da mesma forma, a análise dos conflitos sociais no período do governo Bolsonaro até o início do governo Lula poderia explicar a dinâmica e a evolução da crise, assim como contextualizar a situação da democracia burguesa sob o novo governo, eleito por uma pequena margem de votos e em condições bastante distintas dos governos anteriores de Lula e Dilma Rousseff (2003-2014). Esse é o objetivo deste capítulo, ao qual dedicaremos as páginas seguintes.

O bolsonarismo e as bases sociais do governo Bolsonaro

Devemos iniciar com a distinção entre o bolsonarismo, enquanto movimento social, e as bases sociais do governo Bolsonaro, que envolvem outras forças sociais, preexistentes e distintas em relação àquele movimento. De acordo com Boito (2020), o bolsonarismo é um movimento reacionário de massas de caráter predominantemente

2 Sobre a chegada de Jair Bolsonaro ao poder governamental e o tipo de crise política que permite a ascensão de um movimento reacionário de massas, ver: Armando Boito (2021) e Danilo Martuscelli (2021).

pequeno-burguês e de classe média, em particular da alta classe média, que se mobiliza em uma luta política e ideológica permanente contra a esquerda e contra a democracia burguesa. Trata-se, por esse motivo, de um movimento *fascista* ou *neofascista*, posto que ocorre em uma nova etapa do capitalismo monopolista (o neoliberalismo) e em contexto distinto da organização e da capacidade de luta do movimento popular e socialista (seja em escala nacional, como internacional). Segundo Cavalcante (2020), o bolsonarismo é um movimento de baixa organicidade, que não possui um partido de massas organizado desde a base, como dispunha o fascismo clássico, mas que mobiliza seus membros e seguidores através da internet, funcionando como uma espécie de *partido digital*.

Apesar de Jair Bolsonaro ter construído a sua carreira parlamentar como representante corporativo dos militares de patentes médias e baixas das Forças Armadas e de Segurança, possivelmente a base pioneira do bolsonarismo foram os caminhoneiros autônomos, que em maio de 2018 organizaram uma paralisação nacional de dez dias para defender os interesses das empresas transportadoras.³ Os bloqueios nas estradas foram crescentemente politizados pela extrema-direita durante a paralisação, até serem tomados pelas bandeiras da *intervenção militar* e da candidatura de Jair Bolsonaro, aquela altura presidenciável e em pré-campanha pelo país. A extrema-direita conquistou o movimento através do discurso armamentista, que encontra apelo nos caminhoneiros autônomos, em sua maioria endividados e submetidos às condições de insegurança e violência nas estradas, como assaltos e roubos de cargas.

Os proprietários de terras, incluindo os pequenos e médios, também podem ser considerados uma das bases pioneiras do

3 Isso foi possível porque essas empresas tutelam a organização sindical dos caminhoneiros, por meio da Confederação Nacional das Transportadoras (CNT). Sobre isso e a caracterização da paralisação dos caminhoneiros como locaute, ver: Valle e Martuscelli (2018).

bolsonarismo. É a base rural do fascismo brasileiro, para fazer analogia a Gramsci (2020), cuja caracterização das duas bases do fascismo italiano é bastante instrutiva: a urbana (pequena burguesia e classe média) e a rural (proprietários de terras). O discurso armamentista e a repressão contra o movimento camponês e os povos originários, assim como os ataques aos órgãos de proteção ambiental, foram acolhidos entusiasticamente pelos proprietários de terras, que desejam a ampliação das fronteiras agrícolas e a exploração de terras indígenas e quilombolas. Com as medidas que facilitaram o acesso ao porte de armas, passaram a organizar milícias rurais por meio dos clubes de tiro, o que certamente contribuiu para o crescimento expressivo da violência no campo nesse período (Comissão Pastoral da Terra [CPT], 2023). Estiveram representados no governo através do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente).

Pequenos e médios comerciantes e industriais também aderiram à mobilização bolsonarista, a começar pela pandemia da COVID-19, quando se levantaram pelo descumprimento das medidas de isolamento social; mas também posteriormente, financiando as manifestações golpistas e as ocupações nos quartéis. E também a grande burguesia comercial varejista, com o engajamento de empresários como Luciano Hang e Salim Mattar, mas também na conversa divulgada pela imprensa em agosto de 2022, em que empresários do comércio de luxo, grandes varejistas e setor imobiliário foram flagrados discutindo o apoio a um possível golpe de Estado. Esta fração logrou ascender politicamente nesse período, chegando a ocupar cargos dentro do governo, como o próprio Salim Mattar, empresário do setor de locação de automóveis, que atuou como Secretário de Desestatização no Ministério da Economia comandado por Paulo Guedes.

De acordo com Cavalcante (2020), a força principal do bolsonarismo são as classes médias, principalmente a alta classe média. Essa é a base de massa politicamente ativa do bolsonarismo no meio urbano, que se manifestou em protestos de rua, motocicletas e desfiles

de jet-ski. É a expressão mais radicalizada, do ponto de vista reacionário, do movimento de massas das classes médias que foi às ruas em 2015-16 para derrubar o governo Dilma Rousseff, que hostilizou os políticos do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que compareceram naquelas manifestações, escorraçados como oportunistas, e que daquele momento em diante transitaria do apoio historicamente despendido ao PSDB para a adesão ao bolsonarismo (Salomão, 2023). Esteve representada no governo sobretudo através dos ministros Abraham Weintraub (Educação) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

Como veremos adiante, o bolsonarismo entrou em rota de colisão com o bloco no poder durante o governo Bolsonaro, uma vez que não se converteu em uma força submissa e manipulável pelas frações burguesas. No entanto, não foi a força social e política mais favorecida pelas decisões governamentais. Durante o governo, Bolsonaro implementou uma política neoliberal ortodoxa, que em seus aspectos privatistas e anti-trabalhistas beneficiou e foi apoiada unanimemente pelo grande capital, mas que em seus aspectos entreguistas priorizou o imperialismo e a burguesia associada ao capital estrangeiro, como os fundos e bancos de investimentos (vulgarmente conhecidos como *Faria Lima*). Estes últimos foram representados por meio dos ministros Paulo Guedes (Economia) e Roberto Campos Neto (Banco Central), mas outras frações do grande capital também tiveram sua representação no governo.

Os grupos de comunicação, ou pelo menos parte deles, foram representados pelo ministro Fábio Faria (Comunicações); as empresas do setor de saúde, pelo ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde); as burguesias industrial e comercial, pelo ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura); o setor agroexportador, pela ministra Tereza Cristina (Agricultura); e as frações regionais da burguesia, pelo ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). Assim como ocorreu com o fascismo clássico, em diferentes ocasiões Bolsonaro teve de

sacrificar o interesse econômico de sua base plebéia (classes médias, pequena burguesia, evangélicos conservadores) para satisfazer as demandas do grande capital, a exemplo da política de preços dos combustíveis da Petrobrás, que penalizou diretamente os caminhoneiros e os motoristas de aplicativos para satisfazer os interesses dos acionistas privados da estatal (isto é, a burguesia financeira associada e o capital financeiro internacional).

Outra força importante foram os militares, que atuaram como fiadores do governo Bolsonaro. Não exatamente os militares de baixa patente, que em grande parte fazem parte do bolsonarismo, mas os militares dos escalões superiores e a cúpula das Forças Armadas, que se aliaram ao bolsonarismo para impedir um retorno do PT ao governo e a continuidade da política de investigação dos crimes cometidos pela ditadura militar, entre 1964 e 1985. São estes os estratos aos quais nos referimos ao falarmos do *partido militar*. Se tornaram aquilo que Poulantzas (2019) classifica como *classe detentora* do aparelho estatal, ao terem ocupado algo entre 2 e 6 mil cargos no governo Bolsonaro. Além disso, obtiveram a maior quantidade de ministérios, através dos generais Augusto Heleno (Segurança Institucional), Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Defesa), Eduardo Pazuello (Saúde), Floriano Peixoto Neto e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Bento Albuquerque (Minas e Energia), entre outros, além do vice-presidente general Hamilton Mourão.

Os evangélicos conservadores, que são a principal base de apoio popular do governo, em função do discurso homofóbico e de defesa da família patriarcal, tornou-se determinante para a força eleitoral de Jair Bolsonaro, que quase foi reeleito em 2022. Apesar de constituírem um grupo social policlassista, possuem a população trabalhadora como parte significativa, senão majoritária, de seus adeptos, em particular os trabalhadores da superpopulação relativa (exército de reserva, massa marginal), que constituem o maior contingente

da população brasileira. Esses trabalhadores se vêem divididos entre a política econômica e social dos governos Lula e Dilma, e os valores assumidos pelo governo Bolsonaro. O crescimento da população evangélica e a relação personalista, sem organização e educação política, que Lula mantém com esses trabalhadores, explica porque parte de seu eleitorado migrou para a candidatura de Jair Bolsonaro e não para a candidatura petista de Fernando Haddad nas eleições de 2018, quando foi impedido de concorrer e liderava com folga as pesquisas de intenção de votos. Os evangélicos conservadores estiveram representados no governo principalmente por meio da ministra Damarens Alves (Direitos Humanos).

Por fim, a aliança do governo com o *centrão*, os partidos de patronagem que, embora sejam conservadores e de direita, se posicionam *ao centro* na polarização entre a extrema-direita e a centro-esquerda. Representa um bloco significativo de parlamentares que controla a Câmara e o Senado Federal, sem os quais não é possível obter maioria nas casas legislativas e evitar, assim, a abertura ou a aprovação de processos de impeachment (Rodrigues, 2022). Bolsonaro transitou do desprezo à aliança com este grupo durante a pandemia, diante da pilha de processos de impeachment que se avolumavam na mesa do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O apoio do *centrão* foi comprado com cargos e ministérios, mas sobretudo com a ampliação de recursos orçamentários para os parlamentares. Dessa forma, Bolsonaro pôde governar de modo impune, enquanto atrasava a compra de vacinas e comparecia às manifestações golpistas pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os conflitos de classes e o realinhamento político das frações burguesas

Apesar de Bolsonaro ter implementado uma política econômica favorável aos interesses do grande capital, em particular do capital

internacional e da burguesia a ele associada, a orientação bolsonarista em outros aspectos da política estatal desgastou essa relação e desenvolveu um novo tipo de conflito, envolvendo setores do grande capital e o bolsonarismo. Esse conflito iniciou durante a pandemia, com a política sanitária negacionista, e foi agravado pela política ambiental predatória, pela política externa isolacionista, e pelos sucessivos ataques ao processo eleitoral, que culminaram na tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. Estabeleceu-se, assim, uma relação ambígua entre o grande capital e o governo, de oscilação entre a unidade e o conflito, o que explica tanto a formação de uma oposição burguesa e a tentativa de construção de uma alternativa eleitoral independente, a chamada *terceira via*, como também as suas hesitações em aderir à bandeira do impeachment.

Em outro trabalho (Valle e Del Passo, 2021) mostramos como as classes sociais se dividiram em relação à abordagem negacionista do governo na pandemia. As classes médias e a pequena e média burguesia bolsonarista chegaram a ir às ruas para defender o governo e criticar as medidas de isolamento social. Outras classes, como a grande burguesia comercial e setores da indústria de transformação, defenderam o chamado *isolamento vertical*, restrito aos membros dos grupos de risco. Os proprietários de terras aderiram às críticas contra o isolamento social, mas pararam de se queixar logo que foram reconhecidos como serviço essencial. E parte dos trabalhadores da superpopulação relativa, como camelôs, trabalhadores de pequenos serviços e desempregados, prejudicados com as restrições sobre a circulação de pessoas, acolheram o discurso negacionista diante do dilema entre morrer do vírus ou morrer de fome.

Do lado contrário, setores do grande capital, a começar pelo capital financeiro, incluindo os bancos nacionais, a *Faria Lima* e as instituições financeiras estrangeiras, se opuseram ao negacionismo e defenderam abertamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). As empresas de telecomunicações, as

montadoras estrangeiras, a indústria de alimentos, as redes de supermercados, o grande comércio varejista integrado às plataformas de *e-commerce*, os produtores rurais voltados para o mercado interno, a indústria pesada e da construção civil, os setores iluministas das classes médias (progressistas e liberais-conservadores), e o proletariado organizado também se opuseram ao negacionismo e defenderam as medidas que vinham sendo adotadas pelos estados e municípios governados pela oposição. Um deslocamento importante aconteceu com a ruptura de parte das classes médias que vinham apoiando o governo, o que coincidiu com o rompimento de agrupamentos como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o #VemPraRua!, e na saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, em abril de 2020.

A divisão social que se estabeleceu em torno das medidas de combate à pandemia se reproduziria quase como um padrão nos demais conflitos impulsionados pelo governo. À exemplo da política ambiental predatória, de desmonte dos órgãos de preservação ambiental e de proteção aos povos originários, que contribuiu para o avanço das queimadas e do garimpo ilegal em terras indígenas e na Amazônia. A política de *passar a boiada*, como ficou conhecida pelo ministro Ricardo Salles, voltada aos interesses dos proprietários de terras, prejudicou diretamente o setor agroexportador, que viu os mercados dos países da União Europeia se fecharem para os produtos brasileiros, com o boicote dos supermercados e o veto do Parlamento Europeu contra produtos relacionados ao desmatamento.⁴ As grandes mineradoras, que têm o mercado europeu como um dos principais mercados, se opuseram ao projeto de lei que legalizaria o garimpo em terras indígenas, enviado por Bolsonaro ao Congresso Nacional, em proveito das pequenas e médias mineradoras.

Outro ponto de conflito envolveu a política externa isolacionista e de submissão ao governo Donald Trump nos Estados Unidos, que

4 Sobre o fracionamento do agronegócio, ver: Paraízo (2021) e Forlini (2021).

levou à perda de influência diplomática do Brasil e ao estremecimento das relações com importantes parceiros comerciais, em particular a China, principal comprador de commodities do país. O endosso de Bolsonaro a agressões e teorias conspiratórias difundidas por Donald Trump contra o governo chinês, responsabilizando-o pelo coronavírus, provocou reações importantes dos principais setores exportadores do país, em particular as tradings do agronegócio, preocupadas com possíveis retaliações e com a perda de seu principal mercado. Não obstante a demissão de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores e sua substituição pelo diplomata Carlos França, em março de 2021, resultante da pressão do setor agroexportador, não foi suficiente para reverter a imagem negativa do país no exterior, relacionada à figura do presidente.

O golpismo amalgamou os conflitos anteriores e sobrepôs todos eles, impelindo a formação de uma oposição burguesa, no decorrer de 2021 e 2022. As ofensivas do bolsonarismo tiveram momentos de avanço e de recuo, sobretudo quando contidas pelas reações do STF, que se converteu em um bastião da democracia burguesa nesse período. Mas, de modo geral, houve uma mudança de qualidade do movimento golpista no decorrer desse período. A primeira ofensiva ocorreu no início da pandemia, entre março e julho de 2020, com a crítica das medidas de isolamento social e ataques ao Congresso Nacional e ao STF. A segunda ocorreu em setembro de 2021, no feriado da Independência em 7 de setembro, quando militantes bolsonaristas de todo o país se reuniram em Brasília e simularam a sua *Marcha sobre Roma*, com pedidos de fechamento do STF e ataques ao sistema eleitoral. A terceira ocorreu durante o período eleitoral em 2022, em particular no feriado de 7 de setembro, quando Bolsonaro utilizou recursos públicos e mobilizou o pessoal do Exército para atos de campanha, em claro desafio à justiça eleitoral e a seus adversários. Por fim, a quarta ofensiva se iniciou ao término do segundo turno das eleições de 2022, em 31 de outubro, com as ocupações em frente

aos quartéis e as tentativas de impedir a posse do novo governo, que se estendeu até a intencionalidade de 8 de janeiro de 2023.

A oposição burguesa transitou da hesitação e condescendência, em 2020, para o rechaço explícito ao golpismo, em 2021. Naquele contexto, setores do grande capital, envolvendo os bancos nacionais, parte da *Faria Lima*, a grande indústria, as tradings do agronegócio e parte do comércio não-bolsonarista (como a empresária Luiza Trajano), organizaram manifestos em defesa do sistema eleitoral e em defesa das eleições em 2022. A marcha bolsonarista de 7 de setembro de 2021 foi frustrada pela não-adesão do *partido militar*, além do grande capital, ficando restrita à sua base militante, com financiamento e apoio logístico dos proprietários de terras e do pequeno e do médio capital. Isolado, Bolsonaro foi forçado a recuar e assinar um armistício, o qual foi redigido pelo ex-presidente Michel Temer, que desembarcou em Brasília para pactuar um acordo em que Bolsonaro se comprometeria a não dar um golpe desde que a oposição burguesa não assumisse a bandeira do impeachment, e vice-versa.

A frente ampla democrática e as eleições de 2022

Em meio a esses conflitos e ao escândalo da *Vaza Jato*, que expôs as ilegalidades e o caráter político da operação judicial que retirou Lula das eleições de 2018, o ex-presidente teve as suas condenações anuladas e os direitos políticos restabelecidos pelo STF, em março-abril de 2021. A delimitação do contexto é importante na medida em que não foi a pressão do movimento operário e popular a responsável pela elegibilidade do então ex-presidente. Desde o golpe do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o proletariado e as demais classes trabalhadoras acumularam derrotas e reduziram significativamente a sua capacidade de luta. A queda no número de manifestações de rua, de greves e de ocupações de terra, o caráter predominantemente defensivo das reivindicações, a perda de direitos e

a piora das condições de vida e de trabalho com as reformas neoliberais, caracterizam uma situação de defensiva do movimento popular nesse período (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos [DIEESE], 2023; Dataluta, 2020).

A recuperação dos direitos políticos de Lula se inscreve em um contexto de acirramento do conflito entre o neofascismo e o grande capital, mas disso não decorre que Lula tenha se tornado um simples instrumento desses últimos. O grande capital relutou a apoiá-lo, inclusive as frações que haviam sido beneficiadas por seus governos anteriores. Até o primeiro turno, a maioria do grande capital manteve-se vinculada à candidatura da terceira via, representada pela senadora Simone Tebet. Contudo, a tentativa de uma candidatura independente se demonstrou fracassada desde o princípio, com a luta fratricida e a incapacidade de as representações burguesas gerarem uma solução de unidade; mas sobretudo porque a polarização entre os únicos candidatos com audiência entre as massas inviabilizou o surgimento de uma alternativa. Nesse contexto, a oposição burguesa se relacionou de maneira pragmática com a candidatura de Lula, tendo a maior parte dela aderido apenas no segundo turno, e não sem hesitações.

Um episódio que marca a formação da ampla frente democrática ocorreu em julho-agosto de 2022, com a articulação de diferentes classes, frações de classes e grupos sociais na *Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!*, redigida por juristas e intelectuais vinculados à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e subscrita por intelectuais, artistas, funcionários públicos, profissionais liberais, movimentos populares e grandes empresários, incluindo parcela minoritária da *Faria Lima*. Os banqueiros e grandes empresários que aderiram de maneira decidida à oposição burguesa e à frente democrática, em sua maioria fazem parte daquilo que Armando Boito (2018) e outros caracterizam como grande burguesia interna, uma fração do grande capital nacional que oscila entre a subordinação e o conflito com o capital estrangeiro.

Além de reagir contra o negacionismo, à predação ambiental e ao golpismo, que atingiram de maneira desigual os seus diferentes segmentos, essa fração foi prejudicada pelas políticas de abertura econômica do governo Bolsonaro. Os bancos nacionais foram ameaçados pela atribuição do poder de decisão sobre a entrada de bancos estrangeiros ao Banco Central (BC), que se tornou formalmente independente no governo Bolsonaro.⁵ A internacionalização dos preços dos combustíveis da Petrobrás, a oferta de compras e obras públicas para o exterior, a abertura de capital das empresas aéreas e de telecomunicações, a redução da alíquota de manufaturados importados, são outras medidas que devem ser levadas em conta ao analisarmos o protagonismo desses setores na oposição burguesa, assim como os discursos de Lula e as suas tentativas de reorganizar a frente neodesenvolvimentista dos mandatos anteriores, envolvendo a grande burguesia interna e as massas populares.

A frente ampla democrática contou também com parcela minoritária, mas importante, da *Faria Lima*, representada por gestores de fundos e por economistas neoliberais, como Daniel Leichsenring, Armínio Fraga, Pérsio Arida, André Lara Resende, entre outros. Os economistas do *Plano Real* foram acompanhados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e por dirigentes históricos do PSDB, que haviam representado o capital internacional e a burguesia associada até a irrupção do bolsonarismo. Os governos de Joe Biden nos Estados Unidos, dos países da União Europeia e da China também compuseram essa frente política, ao defenderem o sistema eleitoral brasileiro e reconhecerem rapidamente o resultado que elegeu Lula no segundo turno. A contestação do imperialismo ao golpe revela a dimensão internacional do conflito entre o grande capital e o neofascismo e, conseqüentemente, da política de frente ampla democrática.

5 Nos referimos ao decreto 10.029/2019.

A vitória apertada de Lula no segundo turno, por 51 % a 49 %, não evitou o sucesso do bolsonarismo nas eleições para o Congresso Nacional e para os governos estaduais. Dos 27 senadores eleitos, o bolsonarismo e aliados elegeram 20; na Câmara dos Deputados o Partido Liberal, partido de aluguel do bolsonarismo, fez a maior bancada, com 99 deputados. Nas eleições para os governos estaduais, o bolsonarismo e aliados elegeram 13 dos 27 governadores eleitos. Mesmo com o inferno na terra, Bolsonaro quase foi reeleito e o bolsonarismo ampliou as suas posições no legislativo e nos governos estaduais. Esse é um dado importante para medir a correlação de forças, mas também para compreender a ofensiva empreendida pelo bolsonarismo após o segundo turno, seguindo o mesmo roteiro de outras crises políticas no período recente, em que a força derrotada por reduzida diferença de votos não reconhece o resultado e insufla o movimento golpista (a exemplo da crise brasileira de 2015-16, cuja origem remete à recusa de Aécio Neves em aceitar o resultado das eleições após ser derrotado no segundo turno em 2014).

Imediatamente após a divulgação do resultado que elegeu Lula para o seu terceiro mandato, os bolsonaristas tomaram as ruas e ocuparam as portas dos quartéis para pressionar as Forças Armadas por um golpe de Estado. O movimento golpista, financiado pelos proprietários de terras e pelo pequeno e médio capital do comércio e da indústria, se estendeu impunemente até a intentona de 8 de janeiro de 2023. Em 12 de dezembro, quando Lula foi diplomado pela justiça eleitoral em Brasília, os bolsonaristas tomaram as ruas, atearam fogo em carros e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Foi descoberta uma tentativa fracassada de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, que seria utilizada como pretexto para uma intervenção militar. Bolsonaro, que jamais reconheceu oficialmente a derrota, estimulou a mobilização golpista por meio do silêncio.

A radicalização do bolsonarismo não foi acolhida pelos aliados. O presidente da Câmara dos Deputados logo reconheceu o resultado

oficial do segundo turno e reprovou o movimento de contestação em frente aos quartéis. As Forças Armadas, apesar do envolvimento, da condescendência e do apreço às conspirações e ao golpismo, não aderiu efetivamente à intentona, pois foram enquadradas pelas reprimendas do governo norte-americano no decorrer de 2022. E os evangélicos conservadores não aderiram às manifestações. Ou seja, o bolsonarismo avançou sozinho em sua radicalização. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se o governo de transição, com uma composição heterogênea e representativa da frente ampla, incluindo empresários, economistas e políticos que alguns anos antes faziam oposição aos governos petistas e que apoiaram o golpe contra Dilma Rousseff. Se por um lado essa frente reforçava o isolamento do bolsonarismo, por outro lado ilustrava as condições impostas ao novo governo, representativa de uma correlação de forças distinta em relação aos governos petistas anteriores.

O novo governo

O isolamento do bolsonarismo foi determinante para o fracasso da intentona de 8 de janeiro. A tentativa de golpe foi amplamente rechaçada, tanto em nível internacional como nacional, inclusive pelos governadores aliados ao bolsonarismo, que compareceram à reunião de desagravo à democracia com o presidente Lula e os representantes das 27 unidades da federação, em 9 de janeiro. Além de isolado, o bolsonarismo foi acuado pela contra ofensiva do STF e da Polícia Federal, que prenderam e processaram centenas de golpistas, investigaram os financiadores das ocupações nos quartéis e das caravanas à Brasília, e descobriram a conspirata da cúpula bolsonarista para prender os ministros do STF e anular os resultados do segundo turno (caso da *minuta do golpe*, envolvendo o auxiliar de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid). Com a perda do mandato, e, conseqüentemente, da imunidade presidencial e do poder de interferir nas

investigações que avançavam contra si e o seu entorno, Bolsonaro e o bolsonarismo foram postos na defensiva.

A derrota e a defensiva do bolsonarismo são, sem dúvidas, um aspecto positivo na conjuntura que sucede a intentona de 8 de janeiro, mas, em si mesmas, são insuficientes para alterar o quadro geral desfavorável para o novo governo. A persistência deste movimento reacionário de massas é representativa de uma conjuntura reacionária, a qual deve ser agregada a tutela militar, a herança das reformas neoliberais e as chantagens do *centrão*. Os militares foram empoderados no período anterior e condicionaram o legalismo à impunidade de seus crimes e à manutenção dos cargos e privilégios obtidos durante o governo Bolsonaro. As reformas neoliberais aprofundaram a blindagem sobre os instrumentos de política econômica, sobretudo a política de juros, com a independência do BC e sua condução por uma diretoria nomeada por Bolsonaro. E a relutância do *centrão*, que não aceita perder o volume de recursos que adquiriu durante o governo Bolsonaro e pressiona Lula para ceder parte do controle do orçamento, em troca da maioria parlamentar.

Com a fraqueza do movimento popular, a sustentação do governo tem dependido, em larga medida, dos compromissos e concessões ao grande capital, incluindo a *Faria Lima*, cuja parcela minoritária apóia criticamente o governo. É sintomático a alteração da meta fiscal anunciada pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, no dia 12 de janeiro, quando voluntariamente abriu mão do déficit fiscal de 2,1 % do PIB, aprovado durante a transição, para um superávit de 0,1 % do PIB, por meio de um ajuste de R\$ 230 bilhões nas contas públicas. As prioridades da política econômica no primeiro semestre, com a atualização da regra fiscal restritiva, o chamado *teto de gastos*, para uma versão mais flexível porém incapaz de fazer política anticíclica, o chamado *arcabouço fiscal*; e a reforma tributária que simplificou os impostos indiretos mas manteve intacto o modelo regressivo, que isenta patrimônio, grandes fortunas e ganhos de capital, essas

medidas atendem prioritariamente, no primeiro caso, aos interesses do capital financeiro, tanto os dos bancos nacionais como os da *Faria Lima*; e no segundo caso, aos interesses do grande capital, em geral, com a redução da carga tributária.

No Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados, o governo depende da liberação de muitos recursos para conseguir obter maioria para aprovar os seus projetos –e apenas os projetos que o *centrão* aceita votar. Diante dos entraves sobre o seu governo, Lula tem buscado rearticular a frente neodesenvolvimentista com a política de atração de investimentos chineses na indústria e com a retomada das relações Sul-Sul, com as políticas sociais que aumentam o consumo doméstico, e com a revogação de medidas entreguistas do governo Bolsonaro (como a abertura do mercado de licitações e obras públicas e a política de preços da Petrobrás). Mas é sobretudo através da crítica aos juros altos e à política conduzida pelo BC que Lula tem sido mais bem-sucedido em seu intento, como demonstra a mobilização do movimento operário e popular e o apoio de grandes empresários e associações patronais do comércio e da indústria, até mesmo dos grandes bancos nacionais –que relacionam o juro excessivamente elevado à retração da demanda por crédito e ao aumento dos riscos de inadimplência.

Os compromissos e concessões ao grande capital e à *Faria Lima*, e a tentativa de rearticular a frente neodesenvolvimentista, apresentam duas tendências que refletem interesses distintos no interior da frente ampla. Por um lado, uma tendência social-liberal, que busca conciliar a política econômica ortodoxa com a política social progressista, suavizando as reformas neoliberais de Temer-Bolsonaro. É uma tendência defendida por parcela minoritária da *Faria Lima*, que apóia criticamente o governo e fez parte do governo de transição, representada fundamentalmente pelos ministros Fernando Haddad (Economia) e Simone Tebet (Planejamento). Por outro lado, uma tendência neodesenvolvimentista, que, sem romper com as reformas

neoliberais recentes, busca combinar medidas de proteção e incentivo à economia nacional com a política social progressista. É uma tendência que busca os interesses da grande burguesia interna na indústria, comércio e bancos, e o apoio das massas populares, representada pelo presidente Lula e pelo vice Geraldo Alckmin, que também acumula a função de ministro da Indústria e Comércio (Mdic), mas também pelos ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Márcio França (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação) e outros. Uma terceira tendência, satélite da anterior, a social-desenvolvimentista, crítica às reformas neoliberais recentes, defendida pelos movimentos populares e representada pelo ministro Luiz Marinho (Trabalho), pela Gleisi Hoffmann (presidente do PT) e por parlamentares de esquerda da base do governo.

Considerações finais

A estratégia atual do governo Lula é semelhante à estratégia adotada em 2003, quando implementou uma política econômica mais conservadora para neutralizar as contestações da burguesia associada e do imperialismo. Não seria equivocado dizer que essa também foi a estratégia adotada em 2015, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, quando a combinação de ajuste fiscal e juros altos produziu uma recessão econômica que erodiu a popularidade do governo e favoreceu o movimento pró-impeachment. Na conjuntura latino-americana recente, a eleição de candidatos progressistas que, uma vez no governo, aplicam um neoliberalismo moderado, têm levado à perda de popularidade e ao emparedamento pela oposição (caso de Argentina, Chile e Peru). No caso do Brasil, a oposição é dirigida por um movimento reacionário de massas que, embora na defensiva, é o principal beneficiado com o enfraquecimento do governo.

Nesse contexto, o movimento popular e socialista têm se dividido entre a adesão, a oposição e o apoio crítico ao governo (Arcary, 2023).

Os primeiros alegam que a correlação de forças é desfavorável, para justificar ou endossar as concessões e recuos na política econômica, à reboque da grande burguesia. Os segundos confundem independência política com isenção diante do fascismo, atacando o governo como inimigo principal ou como equivalente ao bolsonarismo, como se houvesse uma conjuntura de ascensão das lutas de massas em que a classe trabalhadora pudesse simultaneamente derrotar o bolsonarismo e o grande capital. E os terceiros reconhecem a necessidade da frente ampla para a derrota do bolsonarismo, desde que essa unidade não represente um sacrifício unilateral para os trabalhadores e a cassação de sua independência política.

Os partidários do apoio crítico defendem o governo dos ataques da extrema-direita, ao mesmo tempo em que o pressionam para tomar posições mais avançadas do ponto de vista democrático e popular. Essa parece ser a posição mais adequada, considerando a capacidade de luta reduzida dos trabalhadores e a persistência do movimento reacionário de massas, cuja defensiva atual está longe de levar à uma desagregação. O oposicionismo desconsidera essa ameaça e se confunde quanto às suas tarefas e inimigos principais; enquanto o adesismo contribui para o enfraquecimento do governo, na medida em que os compromissos e concessões ao grande capital e à *Faria Lima* limitam a sua capacidade de ação redistributiva, colocando em risco o seu apoio entre as massas populares.

O desenvolvimento dos conflitos e tendências aqui apresentados devem ser observados em análises de conjunturas posteriores.

BIBLIOGRAFIA

- Arcary, Valério (2023). Três táticas dividem a esquerda diante do governo Lula. *A Terra é Redonda*. <https://aterraeredonda.com.br/tres-taticas-dividem-a-esquerda-diante-do-governo-lula/>
- Boito Jr., Armando (2018). *Reforma e crise política no Brasil – os conflitos de classe nos governos do PT*. São Paulo e Campinas: Editora Unesp e Unicamp.
- Boito Jr., Armando (2020). Por que caracterizar o bolsonarismo como fascismo. *Crítica Marxista*, (50).
- Boito Jr., Armando (2021). O caminho brasileiro para o fascismo. *Caderno CRH, Salvador*, 34.
- Castells, Manuell (2018). *Ruptura: a crise da democracia liberal*. 1.ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar.
- Cavalcante, Sávio (2020). Classe média e ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro. *Crítica Marxista*, 50.
- Comissão Pastoral da Terra [CPT] (2023). Conflitos no campo Brasil 2022. Goiânia (GO): Centro de Documentação Tomás Balduino. <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6354-conflitos-no-campo-brasil-2022>
- Dataluta (2020). Relatório Dataluta Brasil / Coordenação Sobreiro Filho, J. Girardi, E. P. n. 21 (2020). Presidente Prudente, SP: NERA. <https://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/dataluta/periodicos-dataluta/relatorio-dataluta/brasil/>
- Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos [DIEESE] (2023). Balanço das greves de 2022. São Paulo: Dieese. <https://www.dieese.org.br/balancodasgreves/2023/estPesq104Greves.pdf>
- Forlini, Luana (2021). Os produtores de soja e o primeiro ano do governo Bolsonaro. En André Valle y Pedro Narciso (comps.), *A Burguesia brasileira em ação: de Lula a Bolsonaro* (pp. 279-304). Florianópolis, SC: Enunciado Publicações.
- Gramsci, Antônio (2020). Os dois fascismos. *Cadernos Cemarx. Campinas, SP*, 13.
- Lacerda, Marina Basso (2020). Jair Bolsonaro: a agenda política defendida em sua trajetória política. En Guadalupe, José Luis e Carranza, Brenda (comps), *O novo ativismo no Brasil: os evangélicos do século XXI* (pp.289-308). Rio de Janeiro, Konrad Adenauer Stiftung.

- Martuscelli, Danilo (2021). Nicos Poulantzas e a teoria política do fascismo: 50 anos depois. *Revista Princípios*, (161).
- Marx, Karl (2011). *O 18 de Brumário de Luís Bonaparte*. 1.ed. São Paulo, SP: Boitempo.
- Paraízo, Maria Angélica (2021). O fracionamento de classes no interior do agronegócio e os governos neodesenvolvimentistas. En André Valle y Pedro Narciso (comps.), *A Burguesia brasileira em ação: de Lula a Bolsonaro* (pp.111-138). Florianópolis, SC: Enunciado Publicações.
- Poulantzas, Nicos (2019). *Poder político e classes sociais*. 1.ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp.
- Przeworski, Adam (2020). *Crises da democracia*. 1.ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar.
- Rodrigues, Leandro (2022). O PMDB no impeachment de Dilma Rousseff: da patronagem à representação orgânica? [Dissertação de mestrado]. Universidade Estadual de Campinas.
- Salomão, Arthur (2023). Do PSDB ao lavajatismo: a representação política da alta classe média na crise política do governo Dilma [Dissertação de mestrado]. Universidade Estadual de Campinas.
- Valle, André e Del Passo, Octávio (2021). As frações burguesas e o governo Bolsonaro durante a pandemia da COVID-19 (2020-2021). *Revista Práxis e Hegemonia Popular*, 6(9), 21-45.
- Valle, André e Martuscelli, Danilo (2018). A paralisação dos caminhoneiros no Brasil (maio de 2018): força dirigente, alianças e interesses de classe em disputa. Seropédica (RJ): LIERI/UFRRJ.

Las Fuerzas Armadas y los límites de la democracia en Bolivia

LORETA TELLERÍA ESCOBAR

Introducción

El 10 de noviembre de 2019, en Bolivia se dio fin a treinta y siete años ininterrumpidos de democracia. La emergencia de un gobierno indígena popular activó desde su inicio, en el año 2006, todos los sistemas subversivos de los grupos conservadores que habían detentado históricamente el poder, tanto dentro como fuera del país. Tras catorce años de gobierno, la nacionalización de los recursos naturales, la conformación de una Asamblea Constituyente, la creación del Estado Plurinacional y la reducción de los niveles de pobreza, hicieron que el gobierno de Morales acumulara una serie de enemigos que aprovecharon hábilmente sus vulnerabilidades políticas para planificar su caída. En este contexto, la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, fue parte de un plan cuidadosamente preparado, a nivel interno, por los partidos políticos de oposición y los comités cívicos; y en lo externo, por el gobierno de Estados Unidos, como parte de la *guerra híbrida* desplegada contra los gobiernos de izquierda en la región.

En el recuento sucinto de los hechos del golpe, podemos ver que cada actor, cual obra de teatro, tuvo un guion preciso en tiempo y

espacio: la denuncia de fraude, las movilizaciones de las clases medias, los cabildos organizados por los comités cívicos, las noticias falsas de los medios de comunicación, las homilías de las iglesias, el motín policial, el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), y finalmente cual estocada artera, el comunicado leído por el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), William Kaliman, en el cual *sugería* su renuncia al presidente constitucionalmente elegido.

El rol jugado por la institución militar en este proceso fue trascendental. Tanto por su capacidad para traicionar y dejar desarmado al gobierno legalmente constituido; como por el apoyo irrestricto que dieron al gobierno de facto surgido después del golpe. El presente artículo busca reflejar este proceso, a través de la confrontación de dos de los mitos que forman parte de la narrativa militar, la *defensa de la democracia y el control civil-militar*, con los hechos vividos en América Latina durante el siglo XX y lo que va del XXI. Asimismo, el último acápite, da cuenta del poder que las FFAA siguen acumulando, no solo como herencia histórica de su impunidad y autonomía institucional, sino como otorgamiento del propio poder político, tanto nacional como foráneo, que ve amenazado su dominio ante el surgimiento de nuevas alternativas democráticas.

Las FFAA y el mito de la defensa de la democracia: el golpe de Estado en Bolivia

Una de las narrativas de las FFAA, que no solo se encuentra en las misiones constitucionales de los países de la región, sino también en el discurso cotidiano de los altos mandos militares, es el apego al orden constitucional, la defensa de la democracia y del gobierno legalmente constituido. Posiblemente, el énfasis que existe al respecto, se deba a que varios países de América Latina fueron parte de una larga historia de gobiernos dictatoriales encabezados por militares. Lo que hace que, muchas veces, esta narrativa se convierta en un mito a la luz de la historia pasada y presente.

Esta potestad auto atribuida de la garantía del orden y la estabilidad a través de procesos de pacificación social, hizo que en muchas oportunidades, los militares ante contextos de *desorden* y *anarquía* se convirtieran en *salvadores de la patria* y buscaran restaurar el orden, mediante la ocupación del poder político de manera dictatorial. Los gobiernos militares que surgieron en la década del sesenta, patrocinados por la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos y bajo el escenario de la Guerra Fría, con algunas excepciones –Velazco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, Omar Torrijos en Panamá–, respondieron no solo a intereses externos, sino también a los intereses de las élites económicas y sectores de clase media conservadora, que tuvieron como común denominador, paradójicamente, la ruptura del orden constitucional al que decían defender.

A pesar de que el militarismo del siglo XX en América Latina adquirió una variedad de formas, en todas ellas, la presencia militar fue contundente, y en la mayoría tuvieron resultados nefastos en materia de derechos humanos, institucionalidad civil y construcción democrática. En el tema de derechos humanos, la Doctrina de Seguridad Nacional junto con el Plan Cóndor en América Latina y los conflictos armados en Centro América, conformaron un escenario de uso desmedido de la fuerza por parte de las instituciones armadas.¹ En el primer caso, el asalto del poder político por los militares constituyó una de las páginas más negras de la historia regional, encarnado por el nivel de violación a los derechos humanos perpetrado contra *enemigos* ideológicos, personificados en miles de víctimas que fueron asesinadas, desaparecidas, exiladas y torturadas. Por su parte, los conflictos armados en Centroamérica (Guatemala y El Salvador) reflejaron el mismo nivel de violencia militar mostrado en el sur del

1 El Plan Cóndor, representó la integración nefasta de las FFAA del cono sur latinoamericano (Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia, Uruguay) para realizar operaciones conjuntas de limpieza comunista, a propósito de satisfacer intereses propios y externos de control político.

continente, mediante la violación de los derechos humanos a través de masacres y etnocidios realizados por personal militar contra la población civil, especialmente comunidades indígenas y campesinas.

En mayor y menor medida, las dictaduras militares supusieron un estancamiento del desarrollo de las instituciones civiles. Al encargarse los militares del gobierno, concentraron en sus manos todos los poderes del Estado, y con ello, las facultades económicas y políticas necesarias para gobernar un país. Esto provocó un retraso en la construcción de capacidades civiles para encarar estas tareas, lo que, sumado a la inherente ineficiencia militar en esta materia, repercutió negativamente en la construcción de la institucionalidad democrática, incluida la de las FFAA.

En la década del noventa, todos los países que habían padecido dictaduras habían transitado a la democracia. No obstante, tal como afirma Rouquié en su libro *A la sombra de las dictaduras* (2011), la historia ha demostrado que las *nuevas democracias*, quedaron rehenes de los regímenes anteriores. Si bien durante los procesos de transición se abordaron formalmente, en distinta medida, los temas de las relaciones civiles-militares y el control político sobre las FFAA, también se dio en los hechos, lo que se ha denominado un *pacto de reciprocidad* entre militares y gobiernos democráticos, que por un lado garantizaba la estabilidad política del gobierno de turno, y por otro, amplios márgenes de autonomía institucional.

Esta situación parece mostrar sus consecuencias en el siglo XXI, donde la irrupción militar en la política ha retornado de la mano de nuevos golpes de Estado. Los civiles han vuelto a golpear las puertas de los cuarteles, y al igual de lo que sucedía en el pasado con las oligarquías, “las burguesías latinoamericanas, cuando han sido derrotadas en las urnas, no han tenido rubor en acudir a la técnica del golpe de Estado para mantener sus privilegios de clase” (Roitman, 2019, p. 9). A todo esto, se suma que los gobiernos de Estados Unidos siempre están dispuestos a promover y/o avalar a los nuevos gobiernos golpistas.

El caso del golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019, es un ejemplo paradigmático de que el poder militar continúa siendo un obstáculo y a la vez una amenaza en la democracia de los pueblos; y que los golpes de Estado de nuevo tipo, o lo que se ha denominado el neogolpismo, tienen como uno de sus actores principales a las FFAA.² En esta perspectiva, la participación de la institución militar en el golpe se refleja a través de una serie de hechos y acciones sucedidos entre el 1 y el 10 de noviembre de 2019, que muestran muy bien el comportamiento pragmático de una institución cuyo rol de *defensa de la democracia*, es endeble frente a su naturaleza conservadora, racista y dependiente.

Fue así, que el 10 de noviembre por la tarde, el comandante de las FFAA, luego de haber pactado con los sectores reaccionarios del país y demostrar públicamente que como institución no estaban dispuestos a defender al gobierno legalmente constituido a la cabeza de Evo Morales, dieron a conocer un Comunicado de Prensa que afirmaba lo siguiente:^{3 y 4}

- 2 El neogolpismo sería una modalidad menos virulenta encabezada por civiles, con apoyo militar implícito o explícito, que pretende violar la constitución del Estado manteniendo cierta apariencia institucional (Tkatlian, 2009).
- 3 El 1 de noviembre de 2019, Fernando López, exmilitar y futuro Ministro de Defensa del gobierno golpista, se reunió en reserva con el Comandante de las FFAA, general William Kaliman, reunión en la cual logra obtener el apoyo militar para destituir a Morales de la presidencia (Comunicación personal con oficial cercano al general Kaliman, que fue ratificado posteriormente por el propio Luis Fernando Camacho (Página Siete, 28 de diciembre de 2019)).
- 4 El 4 de noviembre, el Comando en Jefe de las FFAA, saca un comunicado de prensa en el que afirman velar “por el mantenimiento de la democracia, la unidad del pueblo boliviano y la integridad de nuestra soberanía nacional”. (Comando en Jefe de las FFAA [Cmdo]efe, 4 de noviembre de 2019), sin hacer referencia al “gobierno legalmente constituido” como afirma la Constitución (CPE, 2009, Art. 244). Días después, cuando el conflicto social se agudizaba, el 9 de noviembre, saca otro comunicado de prensa que afirma que “ante la convulsión social, se encuentran totalmente cohesionados y que nunca se enfrentarán con el pueblo a quien se deben” (Cmdo]efe, 9 de noviembre de 2019). En otras palabras, garantizan que no saldrán a las calles a contener a los grupos violentos que piden la renuncia del presidente.

LAS FFAA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, COMUNICA A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE:

Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al Art. 20 de la Ley Orgánica de las FFAA y luego de analizar la situación conflictiva interna. SUGERIMOS al Presidente del Estado, que RENUNCIE a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.

Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizadados deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias.

La Paz, noviembre 10 de 2019 (Cdo)Jefe, 10 de noviembre de 2019).⁵

El 11 de noviembre, de manera sintomática y contundente, un tuit del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicita a las FFAA bolivianas “por cumplir con su juramento de defender no solamente a una sola persona, sino a la constitución de Bolivia” (El País digital, 11 de noviembre de 2019); y ese mismo día por la tarde, un comunicado del Comando en Jefe anunciaba que militares y policías saldrían a las calles para resguardar la paz y la estabilidad del país

No obstante, el 10 de noviembre en la mañana, aviones de la Fuerza Aérea salen a disparar con ametralladoras a campesinos que estaban bloqueando la carretera en el departamento de Oruro en favor del gobierno (Serrano, 2021, p. 66).

- 5 ARTÍCULO 20º.- Las atribuciones y responsabilidades fundamentales del Alto Mando Militar son: a. Definir los principios básicos doctrinarios que rigen la vida Institucional de las FFAA. b. Analizar las situaciones conflictivas internas y externas, para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. c. Fiscalizar el manejo de los recursos financieros y el patrimonio de las FFAA. d. Determinar los objetivos de las FFAA a fin de alcanzar la seguridad, la Defensa y el Desarrollo Nacional, (Ley Orgánica de las FFAA [LOFA], 1992)

(CdoJefe, 11 de noviembre de 2019), empezando así un proceso de *pacificación* que días después se convertiría en masacre.

Desde una mirada regional, no cabe duda que el caso boliviano fue uno más de los países con gobiernos de izquierda, que fueron víctimas de una contraofensiva organizada y financiada por el poder imperial, en coordinación con la oposición política y las élites económicas internas, que históricamente tuvieron a las FFAA como sus aliadas. Los golpes de Estado en Venezuela en 2002, Honduras en 2009 y Bolivia en 2019, son muestra clara de este fenómeno. Todos estos golpes mantienen semejanzas entre sí: a) los tres gobiernos fueron democráticamente elegidos y representaban una corriente de izquierda o progresista, defendían intereses nacionales en contra de la hegemonía de Estados Unidos y desarrollaron políticas de redistribución de la riqueza en favor de los sectores históricamente excluidos; b) en los tres casos se dio una activa participación de los militares en los procesos golpistas, en coordinación con grupos políticos de oposición, élites económicas, medios de comunicación y la iglesia católica; c) en los tres, no asumió la presidencia un militar, sino un gobierno civil interino avalado por los grupos conservadores/fascistas internos y externos; y d) en todos ellos se dio la participación directa del gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias gubernamentales y no gubernamentales.⁶

En las nuevas modalidades de golpe de Estado, los militares todavía mantienen un rol importante, pues si bien no encabezan los procesos golpistas, los garantizan y son un factor determinante. Esta institución, que actúa con credenciales democráticas al amparo de gobiernos civiles –pese a su pasado autoritario–, mantiene tendencias mesiánicas en relación al Estado. En la actualidad, tal como sucedió en pleno siglo XX, muchas FFAA de la región creen que están

6 En el caso de Honduras, a pesar de que Manuel Zelaya provenía de un partido tradicional, dio un giro hacia la izquierda en sus políticas gubernamentales y se sumó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

por encima del Estado, y lo que es peor aún, bajo las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos.

Las FFAA y el mito del control civil-militar: del neoliberalismo al Estado Plurinacional

La ciencia política y la sociología militar hablan de la existencia ineludible de un control civil/político sobre las FFAA en contextos democráticos, en oposición directa a lo que sucede en las dictaduras militares. A grosso modo, este control civil/político sería la “capacidad que tiene un gobierno democráticamente elegido para definir la defensa nacional y supervisar la aplicación de la política militar, sin intromisión de los militares” (Agüero, 1999, citado en Diamint 1999, p. 13). Sin embargo, en varios países de América Latina, esta capacidad es más un mito que una realidad.

Si bien las relaciones civiles-militares democráticas requieren un equilibrio armónico entre capacidad política y profesionalismo militar, en los hechos, el déficit de ambas y su conjugación en diversas mezclas, ha significado el desarrollo de un escenario de relaciones civiles-militares lleno de anacronismos. A propósito de ello, se ha caracterizado la identidad militar latinoamericana bajo el nombre de *ejércitos políticos*.⁷

En América Latina, las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, fueron causa y consecuencia visible de la ausencia de control político sobre las FFAA. En este período, quedó claro que los intereses institucionales eran más compatibles con la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la creación de un *enemigo interno*, que con los principios democráticos de sus respectivas constituciones. Por su parte, en los países donde se recuperó la

7 “Los ejércitos políticos son instituciones militares que desempeñan un papel activo y, con frecuencia, decisivo en la política nacional, justificando esta actuación como una extensión legítima de su papel profesional” (Kruijt y Koonings, 2002, p. 9).

democracia entre 1979 y 1990, los nuevos gobiernos civiles no controlaron por completo a los militares, ya sea porque no pudieron o porque no lo consideraban necesario.⁸ En este período, el grado de impunidad que la institución militar obtuvo después de las dictaduras o los conflictos armados, es fundamental para medir las capacidades de control político que los gobiernos democráticamente elegidos desarrollaron.⁹ Lamentablemente, la democracia en los años posteriores siguió pagando la factura de tal decisión. Las FFAA de la región se adaptaron rápidamente al contexto mundial y se convirtieron en instrumentos eficientes del militarismo hegemónico.

En el caso de Bolivia, la postdictadura osciló entre la impunidad y el castigo, lo que fue determinante para que los militares en el período democrático (1985-2003) adquirieran una importancia política trascendental en materia de contención/represión de la conflictividad social que atravesó el país, debido a tres principales causas: 1) la resistencia social a las reformas estructurales del Estado en materia de privatizaciones y liberalización del mercado laboral, 2) la lucha del movimiento cocalero contra las políticas antidroga dirigidas desde Estados Unidos, y 3) el rechazo de movimientos sociales emergentes a la presencia de empresas transnacionales vinculadas a la explotación de recursos naturales.¹⁰

8 Bolivia en 1982, Argentina en 1983, Uruguay en 1984, Brasil en 1985, Paraguay en 1989, Chile en 1990, entre otros.

9 “Con excepción de Argentina, todas las transiciones de regímenes militares a gobiernos civiles han sido acompañadas por legislación de amnistía explícita o regulaciones más implícitas. Para muchos analistas eso implica una impunidad de facto” (Kruijt, 2012, p. 99).

10 A pesar de haber tenido dictaduras militares en el periodo de 1964 a 1982 y no tener una ley de amnistía; al momento, el único juicio emblemático por crímenes de lesa humanidad se dio al ex general Luis García Meza (1980-1981), quien a través de un largo proceso que duró casi una década, fue condenado a 30 años de prisión el 21 de abril de 1993. A pesar de ello, dictadores militares que estuvieron más años en el poder o que fueron responsables de masacres sangrientas, como fue el caso de Hugo Banzer Suarez y Natusch Busch, vivieron y murieron en la impunidad.

En este contexto, la presencia militar en tareas de seguridad interna y orden público para reprimir los conflictos sociales y garantizar la estabilidad del gobierno de turno así como sus compromisos en materia antidrogas, hicieron que el país transitara por un proceso de militarización que tuvo adversas consecuencias para la democracia y la propia institucionalidad militar.

En el ámbito democrático, la construcción de un *pacto de reciprocidad* entre las FFAA y los gobiernos de turno, a cambio de la búsqueda de estabilidad y gobernabilidad en un escenario de conflictividad permanente, derivó en el otorgamiento de una serie de privilegios y prebendas institucionales. A esto, se sumó la impunidad militar ante la violación de los derechos humanos. En dichos actos, los militares gozaron de protección política, jurídica y parlamentaria, reflejando que todo el Estado estaba en sintonía con la respuesta militarizada, tanto al conflicto social, como a la lucha contra el narcotráfico. En este último aspecto, es necesario subrayar la extrema dependencia de las políticas antidrogas de los gobiernos neoliberales respecto a la agenda de seguridad de Estados Unidos.¹¹

A nivel institucional, las respuestas militarizadas frente al conflicto y la inseguridad, sumado a las prebendas políticas y la extrema dependencia externa de Estados Unidos en materia doctrinal y presupuestal, reflejó la ausencia de un proceso de reforma estructural del ámbito de defensa en el país, que abordara, entre otras cosas, un efectivo control civil, una política nacional de defensa y la definición de su horizonte estratégico.

Este período tuvo su punto límite entre los años 2003 y 2005, en los cuales las crisis económica, social y política se manifestaron en su máxima expresión. El descrédito de la *democracia pactada*, donde el poder político era un premio rotativo de las élites, junto al fracaso del

11 En todo el periodo, la intervención del Comando Sur, el Grupo Militar de la Embajada norteamericana, la NAS y la DEA en los planes, estrategias y operativos antidrogas fue categórica e inapelable.

modelo neoliberal y la intención manifiesta de seguir vendiendo los recursos naturales, lo que detonó la *Guerra del gas*, hicieron que los sectores excluidos se organicen y demanden un proceso de cambio radical.¹²

Esto se dio en diciembre de 2005, cuando Evo Morales ganó las elecciones presidenciales con 53,7 % de los votos, lo que implicó un cambio radical en la conformación del poder político. Por primera vez, un indígena cocalero ocupaba la presidencia de un país mayoritariamente indígena, y todo avizoraba, que se daría una relación conflictiva entre el nuevo gobierno y los militares. No obstante, contra todo pronóstico, en los catorce años del gobierno de Evo Morales, las FFAA actuaron más como aliadas que como enemigas. Esto puede deberse a varias razones: a) capacidad de adecuación pragmática al contexto político, tal como sucedió en el período neoliberal; b) necesidad histórica de buscar un horizonte estratégico dada su crisis funcional; c) espíritu de sobrevivencia por el descrédito que supuso para ellas, su participación en la lucha contra el narcotráfico y la masacre de octubre de 2003; y/o d) adhesión constitucional al triunfo abrumador de Evo Morales en las urnas, no solo en el año 2005, sino también en el 2009 y 2014, cuando ganó con el 64,2 y 61,4 % respectivamente.

Esta relación armoniosa se dio en un contexto de cambio de roles e imagen de los militares. De manera general, las principales acciones realizadas por el gobierno de Morales respecto a las FFAA, estuvieron enfocadas a que desarrollen tareas de carácter social (entrega de bonos, programa de alfabetización, campañas de salud, etc.), de apoyo

12 La *Guerra del gas* en octubre de 2003, marcó el final del ciclo neoliberal y el inicio de un proceso de transición a otro tipo de Estado. En dicha oportunidad, los militares salieron a las calles a reprimir al pueblo organizado, que se oponía, entre otras cosas, a un acuerdo para vender gas a Norteamérica vía Chile. El saldo fue 67 personas muertas y centenares de heridos, la posterior renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su huida a Estados Unidos donde actualmente permanece en la impunidad.

al desarrollo (lucha contra el contrabando, creación de empresas), de soberanía (resguardo de empresas nacionalizadas, expulsión de la DEA, creación de la Escuela de Comando Antiimperialista), y de inclusión (Programa de Igualdad de Oportunidades, mejora de los cuarteles, creación de tecnológicos para los soldados, etc.).¹³ Todo esto enlazado con el incremento del presupuesto de las FFAA, de 164 millones de dólares en 2005 a 593 millones en 2019 (Banco Mundial, 2023).

Bajo este escenario, todo parecía mostrar que los militares en Bolivia se sentían conformes con el gobierno de Evo Morales. No solo gozaban de una atención privilegiada, reflejada entre otras cosas, en un mayor presupuesto y equipamiento; sino también, lo manifestaban abiertamente a través de los discursos de los mandos militares, que se acercaban peligrosamente a la obsecuencia política.¹⁴

Sin embargo, la crónica ausencia de una reforma estructural de la institución militar tuvo su consecuencia en 2019. El mantenimiento de un sistema normativo y de formación anacrónico, y la existencia de amplios márgenes de autonomía respecto al poder político, provocó que las medidas adoptadas para construir unas FFAA plurinacionales, nacionalistas y anticoloniales fueran coyunturales y efímeras. Lo que demostró, entre otras cosas, la ausencia de un verdadero control civil/político sobre la institución, que frente al caos social, actuó pensando solo en sus dividendos corporativos y en favor

13 El objetivo era que postulantes indígenas/originarios puedan acceder a la carrera militar en el nivel de oficialidad.

14 Por ejemplo, en el acto de celebración de los 194 años de la creación de las FFAA, el Comandante en Jefe de la institución, general William Kaliman, aseveró que la institución castrense morirá “anticolonialista” y advirtió a “detractores y antinacionalistas” que no se permitirá cambiar la disciplina, estructura y jerarquía de esa entidad. Además, aseguró el apoyo a la nacionalización de los hidrocarburos que “transformó la estructura económica de Bolivia y las políticas del Estado que ahora benefician a los pobres y a los más necesitados” (Viceministerio de Comunicación, 7 de agosto de 2019).

de intereses conservadores y externos, tal como lo hizo en su pasado dictatorial.

El poder militar en el siglo XXI: el post golpe de Estado

En la actualidad, varios estudios sobre las FFAA afirman que la región es parte de un fenómeno al que denominan “nuevo militarismo”, “remilitarización” o “retorno de los militares” (Diamint, 2021; Verdes-Montenegro, 2019; Battaglino, 2015; Tickner, 2022; Kurtenbach y Scharpf, 2018). Este fenómeno da cuenta de un preocupante regreso de los militares a la escena política, ya sea como gendarmes, jueces o simplemente árbitros de la democracia. Situaciones que se manifiestan de manera clara en países tanto con gobiernos de derecha como de izquierda, es el caso paradigmático de lo que fue la apabullante presencia militar en la gestión presidencial de Bolsonaro en Brasil o lo que representa actualmente la Guardia Nacional en México.

Este proceso de militarización, si bien no es nuevo, representa un riesgo potencial para la democracia de nuestros países.¹⁵ Más aún cuando viene reforzado externamente por el militarismo de Estados Unidos, que a partir de la segunda mitad del siglo XX ha tenido una injerencia, en algunos casos absoluta, sobre las FFAA de América Latina.

En este escenario, la formación e ideología conservadora de los militares (salvo algunas excepciones como Cuba y Venezuela), junto con su tradicional rol de garantes de la seguridad interna, su elevada dependencia de doctrinas, armamentos y financiamiento foráneos, y la crónica incapacidad política para ejercer verdadero control civil sobre ellas, convierte a las FFAA en un factor de incertidumbre. Si a esto se agrega un contexto político de crisis e inestabilidad de gobiernos de izquierda o progresistas, no es raro que decidan –en el marco

15 Entendido como un proceso en el cual la ideología del militarismo –es decir el predominio de lo militar sobre lo político–, se expande y se afianza en las decisiones políticas y sociales de diversas maneras y con disímiles resultados.

de su pragmatismo institucional—, apoyar planes subversivos de élites políticas y económicas de derecha, tal como sucedió en el intento de golpe frustrado de Venezuela (2002) y en los golpes exitosos de Honduras (2009) y Bolivia (2019).

No obstante, los golpes de Estado contra gobiernos de izquierda, van más allá de un desfase institucional de los militares en democracia, son parte de una estrategia mayor que ha renovado su mecanismo de intervención estatal, e incorpora hoy en día actores tecnológicamente reforzados, como son los medios de comunicación, las nuevas derechas, las iglesias, el mundo empresarial, etc. A lo que se suma la permanente *cooperación* gubernamental y no gubernamental del gobierno estadounidense a militares, sistemas de justicia, empresarios y sociedad civil. Los objetivos son siempre los mismos: el total control de los recursos naturales de la región, que en la actualidad se ven en peligro debido a la emergencia de China y Rusia como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos (The White House, 2022), lo que convierte a América Latina en un territorio en disputa.

En este último caso, la secuencia de los acontecimientos post golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 en Bolivia, muestran lo temerarias que pueden ser unas FFAA que funcionan como garantes del régimen, más que como instituciones profesionales de un Estado de derecho.

En este caso, una vez consumado el golpe, además de su adhesión institucional al nuevo gobierno inconstitucional, los militares mostraron una actitud que vale la pena ser revisada a objeto de evaluar sus potencialidades antidemocráticas. Su actuación *pacificadora* en el proceso post golpe, su autonomía institucional en el gobierno de facto, y por último, su inefable rol camaleónico una vez recuperada la democracia, reflejan cuan peligrosas son frente a la construcción de gobiernos que defienden programas alternativos a la economía capitalista y la democracia liberal que promueve Estados Unidos.

Respecto al rol *pacificador* que desarrollaron en el período post golpe, su mayor resultado sin duda fueron las masacres de Sacaba y Senkata, realizadas el 15 y 19 de noviembre respectivamente. En ambos hechos, las FFAA actuaron amparadas por un Decreto Supremo que las eximía de responsabilidades, matando a una veintena de personas que se manifestaban en contra del gobierno de facto.¹⁶ En vista de los acontecimientos, varias instituciones de derechos humanos internacionales, se manifestaron contra el Decreto y la violación de los derechos humanos en el país.¹⁷ Una comisión de la CIDH denominada Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras una investigación minuciosa confirmó en agosto de 2021 que en Bolivia “La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado” (GIEI, 2021, p. 262), verificando que fueron partícipes de masacres, tortura, persecución y detenciones indebidas.

Todo este proceso de represión social se dio en paralelo al desembolso de enormes cantidades de dinero a las FFAA para la compra de material antidisturbios y agentes químicos, mismo que también fue enviado de países como Argentina (Página 12, 2022) y Ecuador (La Razón, 2022), lo que reflejó un plan de apoyo regional de los gobiernos de derecha al régimen de facto instalado en Bolivia.¹⁸

En este escenario, la crisis sanitaria del COVID-19 promovió la militarización de las ciudades y la postergación de las elecciones en dos oportunidades hasta octubre de 2020. La pandemia se convirtió

16 El artículo tercero del Decreto N°4078, afirmaba: “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal[...]”.

17 Amnistía Internacional (AI), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Clínica de los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, entre otras (Choque, 2021).

18 Con este objetivo, se ejecutó el Decreto Supremo N°4082 que asignó a los militares 34,7 millones de bolivianos para equipamiento.

en el pretexto perfecto para controlar a la población en un período post golpista, donde el miedo y la represión reemplazaron a la prevención y el tratamiento; con el dato anecdótico que el propio ministro de defensa fungió en una oportunidad como ministro de salud (Ministerio de Salud, 2020).

Por otra parte, en cuanto a los grados de autonomía institucional que las FFAA demostraron tener y ejercer en dicho período, basta con mencionar dos situaciones. Primero, la disponibilidad de presupuesto adicional, cuyo gasto estaba exonerado de los necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas “por razones de seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado”, lo que se tradujo posteriormente en graves acusaciones de corrupción en materia de adquisición de equipos antidisturbios (Quintana, 2021).¹⁹ Segundo, el caso de los ascensos a generales, cuando tras el retraso de la Asamblea Legislativa en aprobar la lista enviada del Ejecutivo, se dio la irrupción en sus instalaciones del Alto Mando Militar para dar un ultimátum a sus miembros (Cámara de Senadores, 2020), lo que desembocó en el ascenso inconstitucional de los generales por Decreto Supremo (La Razón, 2020).²⁰

Finalmente, el 20 de octubre de 2020, tras ganar las elecciones un candidato que pertenecía al mismo partido político del gobierno de puesto un año antes, las FFAA paradójicamente, demostraron la misma adhesión política que en el pasado. Retornaron los discursos del Alto Mando en favor de respetar la legitimidad del nuevo gobierno

19 “El Ministerio de Economía modificó el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), por el que no solo mantiene la no obligatoriedad de registrar las compras de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, sino que incorpora el término de confidencialidad y reserva de información para contrataciones por razones de seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado” (ERBOL, 8 de marzo de 2020).

20 Fue recién el 31 de marzo de 2022, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró nulos los decretos de ascenso a generales, firmados por Añez y su gabinete (ERBOL, 31 de marzo de 2022).

y sancionar a los militares que en el pasado no lo hicieron y se mostraron nuevamente nacionalistas y anticoloniales.²¹ Todo esto, ante la escasa capacidad de la nueva gestión gubernamental (2020-2025), tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, para entender la complejidad del potencial antidemocrático de la institución.

Ante esta puesta en escena, lo que realmente preocupa, es que más allá del cambio de presidente, permanecen las mismas FFAA. Aquellas que se adaptan de manera pragmática a los gobiernos de turno, sean democráticos o no; y que, en cualquier momento, salvo reforma estructural de por medio, se convertirán nuevamente en una amenaza a la democracia en Bolivia, como sucedió tantas veces en el siglo pasado y en noviembre de 2019.

Reflexiones finales

La construcción institucional de las FFAA en América Latina durante el siglo XX, se ha caracterizado por la presencia de una serie de mitos, dos de los cuales son: *la defensa de la democracia y el control civil-militar*. En mayor o menor intensidad, dependiendo del país, los militares a través de la historia han demostrado ser un actor con poder político capaz de dar fin a cualquier proceso democrático e insubordinarse a las normas que juran defender. Todo ello en búsqueda de intereses corporativos que confluyen sintomáticamente, en la mayoría de los casos, con los intereses de las élites políticas y económicas conservadoras y los intereses hegemónicos de Estados Unidos.

En lo que va del siglo XXI, el denominado *nuevo militarismo*, no es otra cosa que el reconocimiento del poder político de las FFAA; que si bien por un lado, es auto atribuido, al designarse como el

21 En la actualidad (junio de 2023), la justicia ha declarado prófugos a los ex comandantes generales de las FFAA, generales Kaliman y Orellana, y aproximadamente una docena de militares están siendo procesados por los delitos de golpe de Estado y masacres.

baluarte de sus respectivas naciones; por otro, es otorgado por aquellos grupos de poder político y económico que ven amenazados sus intereses frente a la emergencia de actores y procesos políticos de izquierda que promueven democracias soberanas e inclusivas. En un contexto de crisis de hegemonía imperial, los militares, así como lo fueron en el pasado, son los aliados perfectos para ir a contrapelo de la construcción de nuevas alternativas, que, entre otras cosas, suponga destruir los mitos sobre los cuales se ha construido su poder.

En el caso del golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, el poder militar, pragmáticamente camuflado en un discurso plurinacional, arremetió de manera artera, contra el gobierno nacionalista e indígena de Evo Morales. La ausencia de una reforma estructural de las FFAA luego de la recuperación de la democracia en 1982, cobró factura al gobierno y recordó la existencia de una institución históricamente colonial, racista y dispuesta a ser instrumento de intereses foráneos, siempre y cuando esto le reporte mayor autonomía y poder.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial (2023). *Military expenditure (current USD)-Bolivia*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.TOTL.P1?locations=BO>
- Battaglino, Jorge (2015). Políticos y militares en los gobiernos de la nueva izquierda sudamericana. *Política y gobierno*, XXII(1), 1 semestre de 2015, 3-43. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-20372015000100001&script=sci_abstract
- Cámara de Senadores (25 de mayo de 2020). ALP rechaza intromisión del Alto Mando Militar que con pedido de acelerar ascensos. <https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-rechaza-intromisi%C3%B3n-del-alto-mando-militar-que-con-pedido-de-acelerar-ascensos>
- Choque, Jaime (2021). *Golpe de Estado y fascismo en Bolivia*. La Paz: PIE-Europa Left.

- Comando en Jefe de las FFAA (2019). *Comunicados de prensa*. <https://www.facebook.com/people/Comando-en-Jefe-de-las-Fuerzas-Armadas-de-Bolivia/100064730256992/>
- Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009). Bolivia.
- Diamint, Rut (coord.) (1999). *Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella, Nuevo Hacer.
- Diamint, Rut (2021). Remilitarización en América Latina. En Grabendorf Wolf (Editor), *Militares y gobernabilidad* (pp. 333-352). Bogotá, FES. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/18384.pdf>
- El País digital* (11 de noviembre de 2019). Donald Trump respaldó el golpe de Estado en Bolivia. <https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/donald-trump-respald-el-golpe-de-estado-en-bolivia/24502>
- ERBOL (8 de marzo de 2020). Gobierno modifica Manual del Sicoes para compras de Policía y FFAA por confidencialidad. <https://erbol.com.bo/nacional/gobierno-modifica-manual-del-sicoes-para-compras-de-polic%C3%ADa-y-ffaa-por-confidencialidad>
- ERBOL (31 de marzo de 2022). El TCP declara inconstitucionales decretos de Añez para ascensos en las FFAA. <https://erbol.com.bo/nacional/el-tcp-declara-inconstitucionales-decretos-de-a%C3%B1ez-para-ascensos-en-las-ffaa>
- GIEI (2021). *Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019*. https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf
- Kruijt, Dirk y Koonings, Kees (2002). Fuerzas Armadas y política en América Latina: perspectivas futuras, *Iberoamericana II*, 8, 7-22, <https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/570>
- Kruijt, Dirk (2012). Las fuerzas armadas en América Latina, antes y hoy. *Ciencia Política*, (14), julio-diciembre 2012, 94-112. file:///C:/Users/Loreta/Downloads/Dialnet-LasFuerzasArmadasEnAmericaLatinaAntesYHoy-4781412.pdf
- Kurtenbach, Sabine y Scharpf, Adam (diciembre de 2018). The Return of the Military, *SSOAR Latin America*, (7). https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/60633/ssoar-2018-kurtenbach_et_al-The_Return_of_the_Military.

pdf;jsessionid=B2F3199C4E27DA5D5E72FC41F239BF13?sequence=1

- La Razón* (15 de julio de 2020). El Gobierno se salta el Legislativo y dicta por decreto el ascenso en las FFAA. <https://www.la-razon.com/nacional/2020/07/15/el-gobierno-se-salta-el-legislativo-y-dicta-por-decreto-el-ascenso-en-las-ffaa/>
- La Razón* (10 de marzo de 2022). Ecuador envió más de 8.400 municiones solicitados por el Gobierno de Añez en 2019. <https://www.la-razon.com/nacional/2022/03/10/ecuador-envio-mas-de-8-400-municiones-solicitados-por-el-gobierno-de-anez-en-2019/>
- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (30 de diciembre de 1992). Bolivia
- Página Siete* (28 de diciembre de 2019). Camacho da a conocer que su padre habló con policías y militares. <https://www.facebook.com/paginasiete/videos/camacho-da-a-conocer-que-su-padre-hablo-con-polic%C3%ADas-y-militares-para-que-no-sal/826313077827410/>
- Ministerio de Salud (9 de julio de 2020). López asume interinamente la dirección del Ministerio de Salud. <https://www.minsalud.gob.bo/4380-lopez-asume-interinamente-la-direccion-del-ministerio-de-salud>
- Página 12* (16 de junio de 2023). El gobierno boliviano confirmó la recepción de las municiones enviadas por la gestión de Macri. <https://www.pagina12.com.ar/427023-la-prueba-oficial-del-desvio-de-las-armas-a-bolivia>
- Quintana, Juan Ramón (2021). *Golpe de Estado en Bolivia. La contraofensiva imperial*. La Paz: Editorial del Estado.
- Roitman, Marcos (2019). *Por la razón o la fuerza. Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina*. Madrid: Siglo XXI.
- Rouquié, Alain (2011). *A la sombra de las dictaduras*. Buenos Aires: FCE.
- Serrano, Alfredo (2021). *Evo Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Tellería, Loreta y Gonzáles, Reina (2015). *Hegemonía territorial fallida. Estrategias de control y dominio de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012*. La Paz: CIS
- The White House (2022). *Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/>

- Tickner, Arlene (2022). *Hacia una lectura crítica del militarismo y la militarización*. Madrid: Fundación Carolina. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/02/AC-4.-2022.pdf>
- Tokatlian, Juan Gabriel (13 de julio de 2009). Neogolpismo. <https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/128159-41146-2009-07-13.html>
- Verdes-Montenegro, Francisco (2019). *La (re) militarización de la política latinoamericana*. Madrid: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/09/DT_FC_14.pdf
- Viceministerio de Comunicación (7 de agosto de 2019). FFAA afirman que morirán “anticolonialistas” y advierten que no permitirán que se afecte a la institución. <https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20190807/27470>

Las fisuras del pacto democrático

Notas sobre política argentina

MARTÍN CORTÉS

Un arma fue gatillada –se debate todavía hoy si una o dos veces– a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. La bala no salió. Años de odio mediático sobre su figura, montados a su vez sobre décadas de pasión excluyente hacia la vida política del pueblo por parte de nuestras clases dominantes, habían ya desembocado en crecientes y violentas manifestaciones callejeras contra ella y otras figuras de su espacio político. Pero ese día ya no hubo canalización simbólica o política posible para las diferencias. Se trataba de suprimirla. La hipótesis que explica el acontecimiento por la existencia de un loco –o un conjunto de locos– suelto en las inmediaciones de un domicilio no solo es insuficiente por las cada vez más claras –y a la vez menos investigadas en sede judicial– conexiones entre esos personajes y la derecha política argentina, sino también porque casi un año después del hecho, persiste una curiosa calma a su alrededor, como si nos resistiéramos a pensar, en toda su densidad, lo cerca que estuvimos de un incierto abismo. Si se yuxtapone la imagen de esa noche al significativo *democracia*, del cual estamos tan seguros, la incomodidad podría atravesar a propios y ajenos.

Los dos mayos de Cristina, o los límites de la democracia argentina

La mañana del sábado 18 de mayo de 2019, Cristina hace público un movimiento táctico que terminaría por definir la elección presidencial que se desarrolló en octubre de ese año. Llegando al final del período presidencial de Mauricio Macri, que había producido en cuatro años un retroceso verificable en prácticamente cada conquista que las clases populares habían logrado durante el kirchnerismo –y que trajo consigo, nuevamente, al Fondo Monetario Internacional a la política argentina, endeudándose, a partir de 2018 en más de 40.000 millones de dólares–, la oposición caminaba lenta pero sostenidamente hacia la unidad. Cristina era sin dudas la figura central, pero era resistida por sectores moderados o conservadores del peronismo, tanto como por figuras y sectores del progresismo que por diversas razones habían tomado distancia de su liderazgo y de su sector político. La discusión del momento, en materia de alquimia electoral, giraba en torno de si ella misma podría concitar un apoyo suficiente para ganar la elección. Quien sería ungido por Cristina aquella mañana, Alberto Fernández había popularizado, en 2018, una frase para definir la situación: “Con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede”. Lo hizo en el marco de un acercamiento con ella que cerraba unos diez años de frialdad: Alberto había sido una figura central en los primeros años del kirchnerismo, del que tomó distancia con fuertes críticas centradas en el estilo político y la excesiva confrontación. Ya para 2019, él mismo comenzó a relativizar su frase e intuir, y expresar, que Cristina podía ganar la elección. En cualquier caso, es ella misma, aquel sábado, la que interrumpe el suspenso y presenta la fórmula del opositor Frente de Todos: Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Lo que nos interesa subrayar son los argumentos que utiliza:

No tengo dudas. La situación del pueblo y del país es dramática. Y esta fórmula que proponemos, estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento de la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también, *no solo para ganar una elección, sino para gobernar*. Porque algo le tiene que quedar claro a todos y a todas... Se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido... Está claro, entonces, que la coalición que gobierne deberá ser más amplia que la que haya ganado las elecciones.

En los últimos años de mi gestión, y en especial desde que me despedí del gobierno con una Plaza de Mayo colmada de pueblo, como no se recuerda en la historia argentina, *he sido víctima de la más feroz y despiadada campaña de mentiras y difamaciones contra mi persona, mi familia y nuestro gobierno*. No los voy a nombrar. Ustedes saben quiénes son y cómo lo han hecho. Ellos solos se delatan por sus expresiones públicas y sus malas acciones (Fernández de Kirchner, 2019, subrayado nuestro)

Retomemos los dos subrayados, pues el segundo explica en buena medida el primero. Cristina termina el debate sobre si puede o no ganar la elección *sola* porque señala con claridad que no se trata solo, ni principalmente, de eso, sino más bien de poder gobernar. La situación que el nuevo gobierno, en caso de ganar, heredaría, es ruinoso en materia económica, pero la cuestión no se acaba allí. A ello se agrega una campaña de “mentiras y difamaciones” sobre su persona que deja ver la virulencia con que sería atacado, seguramente desde el primer día, un gobierno a su cargo.

La jugada táctica fue ampulosamente celebrada, porque efectivamente Cristina logró con ella copar el centro del tablero político, y englobar en la unidad a una serie de sectores del peronismo (algunos gobernadores provinciales, una parte no menor del movimiento sindical, algunos movimientos sociales) que mantenían distancias

con ella y su espacio político. Alberto Fernández, históricamente conocido como un *dialoguista*, y también como un operador político capaz de negociar con propios y ajenos, garantizaba con su sola presencia que venían tiempos más suaves en los modos de procesar las controversias políticas. Por su parte, la presencia de Cristina en la fórmula aspiraba no solamente a retener los votos, sino también a sostener de algún modo una orientación política acorde con sus años de gestión. Escasaron más los análisis que subrayaran, por debajo de la eficacia de la alquimia electoral, que la propia Cristina estaba admitiendo condicionamientos políticos a su figura que difícilmente puedan pensarse como plenamente democráticos. En rigor, Cristina estaba aceptando una derrota parcial, que le era infringida, a modo de operación de pinzas, por sectores de poder que la hostigaban y amenazaban de distintos modos y por partes de su propio espacio político que no mostraban mayor vocación por tomar su defensa como bandera o programa.

Cuatro años después, la cosa seguiría siendo parecida en los términos, pero bastante más aguda en su intensidad. Concluyendo el gris gobierno de Alberto Fernández, con una ruptura casi total en la relación entre presidente y vicepresidenta, una situación económica difícil de controlar y de gran prejuicio para las mayorías populares y, para no variar, con la omnipresencia del Fondo Monetario Internacional como prestamista de dinero y revisor de políticas, el dilema sobre el candidato, esta vez *oficialista* vuelve a aparecer, y nuevamente con Cristina en el centro del escenario. El 16 de mayo, esta vez de 2023, la vicepresidenta confirma lo que ya había sugerido más de una vez: no sería candidata a ningún cargo en las elecciones del mes de octubre. En una carta pública, con un sugerente título pedagógico (“A los compañeros y compañeras”) seguramente dirigido a aplacar las insistencias por su candidatura, recorre algo de la opaca situación económica y política y, sobre todo, muestra cómo aquella “campaña de mentiras y difamaciones” que denunciara en 2019 se había

trastocado en otra cosa mucho más dramática: a la ya tradicional saña mediática se había sumado definitivamente una decidida persecución judicial que tomaba la forma de la amenaza de proscripción y, finalmente, el “pasaje al acto”: el preciso momento en el cual los años de odio y veneno que rodearon a la figura de Cristina jalan del gatillo e intentan asesinarla. Decía Cristina en la mentada carta:

No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón (Fernández de Kirchner, 2023).

Con los “hechos recientes”, Cristina refiere a la intervención que la Corte Suprema había hecho en las elecciones provinciales de San Juan y Tucumán, suspendiéndolas unos pocos días antes de ser realizadas –e impugnando a los candidatos peronistas– a partir de una serie de presentaciones realizadas por la oposición de derecha de cada una de las jurisdicciones. Con facilidad, se podía leer allí una amenaza de intervención en el plano nacional también, sobre todo teniendo en cuenta que sobre Cristina pesa una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos que todavía está siendo discutida en sede judicial, pero que bien podía servir, como ella lo dice como elemento para excluirla de la elección. Cristina se corre del lugar de candidata, no tanto como del de conductora, aunque serán meses en los que una y otra vez invite al relevo generacional. La posibilidad de leer aquí una gran jugada táctica aparece forzosamente con menos margen que en 2019, de modo que solo nos queda la crudeza de la

aceptación de una derrota. Porque pareciera que ya no estamos hablando de una democracia *condicionada* por los poderes fácticos (al fin y al cabo, aunque los matices importan mucho, ¿qué democracia capitalista no lo está?), sino más bien de un sistema político vulnerado por la corporaciones judiciales, mediáticas y económicas en general, donde el fantasma de la supresión del otro, que la democracia argentina se enorgullecía de haber expulsado con su pacto refundacional en los años ochenta (volveremos sobre ese pacto), golpeaba nuevamente las puertas.

Kirchnerismo y lucha de clases en Argentina

La conexión entre la emergencia del kirchnerismo y la crisis argentina que estalla en diciembre de 2001 y que provoca la caída del gobierno de Fernando de la Rúa es tan innegable como compleja. Los años de resistencia al neoliberalismo produjeron una larga multiplicidad de organizaciones y movimientos que protagonizaron aquellas jornadas, tanto como los meses anteriores y sucesivos. La deslegitimación del sistema político, junto con la profunda crisis económica, sin embargo, no fueron suficiente para que desde aquella trama de organizaciones surgiera una alternativa *inmediata* para la resolución de la crisis. El tiempo que media entre diciembre de 2001 y mayo de 2003, cuando asume la presidencia Néstor Kirchner, es un período de intensificación del conflicto social y de rearticulación de la gestión económica y política del país. Eduardo Duhalde, figura central de un peronismo que tomaba distancia de la experiencia menemista de los años noventa –al menos en el plano económico–, comienza algunas tímidas reformas que toman distancia del consenso neoliberal, pero no logra recomponer la legitimidad política. La persistencia de una respuesta represiva frente a la protesta social –que tendría como momento *cúlmine* el asesinato de dos militantes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en una manifestación el día

26 junio de 2002– terminó por horadar definitivamente la proyección de la figura de Duhalde y forzó la convocatoria a elecciones presidenciales para abril de 2003. Lejos de presentarse allí una opción que tradujera explícitamente las energías sociales del 2001, la escena aparecía dominada por un peronismo dividido en tres candidatos (Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner) y por algunas otras opciones.¹

La elección es ganada por Menem con un magro 24 % de los votos, y un par de puntos atrás se acomoda Kirchner, apoyado por Duhalde. Lejos de haberse corrido decididamente a la izquierda, la sociedad argentina había vuelto a votar a Menem, y si se le sumaba otra opción explícitamente neoliberal como era la de Ricardo López Murphy, más del 40 % de los electores parecían confiar en una salida de la crisis por derecha. Kirchner, una figura poco conocida que provenía del sur profundo del país, prometía tímidamente la construcción de otro escenario. Con todo, el rechazo a Menem era muy fuerte en buena parte de la sociedad, y ante la evidente perspectiva de derrota en la segunda vuelta, decide renunciar a la misma.

Lo primero que nos interesa subrayar aquí es la llegada relativamente *casual* de Kirchner a la presidencia. Su nombre no circulaba entre los sentidos anti neoliberales en torno de diciembre de 2001, sin embargo, sería uno de sus más virtuosos intérpretes. Detengámonos en una curiosa excepción. En mayo de 2002, Nicolás Casullo, figura intelectual importante de la discusión argentina, que provenía de la experiencia setentista del peronismo de izquierda, escribe un

1 No haremos aquí una reconstrucción exhaustiva del proceso kirchnerista, sino tan solo de algunos momentos clave que nos interesa reconstruir para comprender la fisonomía de la ofensiva de la derecha que lo confrontó. Una lectura un poco más detallada del período político en cuestión puede encontrarse en Cortés y Tzeiman (2018). Asimismo, el libro reciente de Ulises Bosia (2023) propone una historización e interpretación del kirchnerismo –aunque analizando sobre todo los años que van de 2008 a 2015 que sustancialmente compartimos, y a la que nos referiremos más adelante.

enigmático texto en el diario Página 12. Un texto que las contingencias de la historia podrían haber dejado en el olvido, si las carambolas del 2003 no ponían a Kirchner en la Casa Rosada, o si Kirchner en la Casa Rosada no respondía de modo tan sorprendentemente atento a las sugerencias de ese texto, que más que posiblemente no había leído.

El texto de Casullo sostiene una intuición tímida, casi vergonzante, que liga la misteriosa figura de Néstor Kirchner con “un espacio tan legendario y trágico como equívoco en la Argentina: la izquierda peronista” (Casullo, 2002, citado en González, 2011, p. 80). Kirchner podría *resucitar* las energías de ese espacio frente a un peronismo que el mismo Casullo admite como *casi concluido* luego del menemismo, pero también más allá de aquel: “Lista de defecciones tan eterna y concreta que casi terminó siendo, desde 1955, la historia real del peronismo. La de sus defecciones” (Casullo, 2002, p. 81). Sin embargo, Casullo se apoya en aquel *casi* para esforzarse, incluso contra sus propios amigos (“Lo converso con mis amigos y el 80 % no lo ubica, lo semitienden en algún rincón de las imágenes del consciente pero no del todo”, Casullo, 2002, p. 82) por sostener la posibilidad, aunque sea mínima, de que el fantasma de la *tendencia* (y de la saga de la izquierda peronista que le antecede) reaparezca en el corazón mismo del peronismo. Y le deja planteado su dilema: “Si rompe con el peronismo corre el eterno peligro de quedarse solo, ser simple izquierda, ser no ‘negocio’. Si se queda adentro, ya nadie sabe en qué paraje en realidad se queda: corre el peligro de no darse cuenta un día que él tampoco existe” (Casullo, 2002, p. 82). Si la figura de Kirchner podía ser señal de alguna forma de retorno, no es menor tampoco la tarea que queda al intérprete de esos signos, aun en su soledad (pues ni sus amigos le creen).

Lo que nos interesa de Casullo no es solamente el hecho de que intuya algo que nadie más intuía, esto es, la posibilidad de que Kirchner trajera consigo nuevamente los viejos temas de la izquierda

peronista, sino la conciencia de que se trataba de un pequeño resquicio en un mapa dominado más bien por la posibilidad de la repetición. Casullo se detiene en un *casí*, en el peronismo que es *casí* la historia de sus defecciones, pero que justamente por no serlo del todo pareciera dejar una mínima posibilidad para una innovación que vendría, paradójicamente, de una de las vetas de su pasado. Asimismo, ese *casí* no remite solamente a la remota posibilidad de que Kirchner llegara al poder, sino también a la posibilidad de sostenerse allí sin sumarse a la mentada lista de defecciones. De algún modo, en lo que será una marca de todo el proceso político kirchnerista, Casullo nos deja ver que el acceso al poder político, cuando se hace en nombre de un proyecto popular, está siempre acechado por formas de poder real, internas y externas a las instituciones formales del Estado.

De modo que la llegada de Kirchner al gobierno deja pendiente el problema de la construcción de un poder político que lo sostenga. Aquí nos interesa señalar rápidamente algunas marcas de los modos en los que Kirchner reconstruye una relación entre Estado y masas, porque allí se cifran, tempranamente, algunos de los vectores que recorrerá la voluntad de revancha de las clases dominantes. Desde una rápida muestra de fuerte voluntad presidencial –que incluyó una toma de distancia de la figura de Duhalde– Kirchner convocó organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos a aproximarse al gobierno y tomar parte en la conformación de la agenda política. Asimismo, atacó algunos de los pilares más distintivos del período neoliberal precedente: impulsó una reforma de la Corte Suprema de Justicia, reimplementó los convenios colectivos de trabajo con centralidad del mecanismo de discusión paritaria, rearticuló una perspectiva regional de la mano de otros gobiernos progresistas en la región (lo cual alcanzó un momento decisivo en el rechazo, que Kirchner articuló sustancialmente con Lula y Chávez, a la propuesta norteamericana del Área de Libre Comercio de las Américas en la

cumbre de Mar del Plata en 2005) y, muy especialmente, promovió una revisión total del paradigma relativo a la cuestión de las violaciones a los Derechos Humanos en ocasión de la última dictadura cívico-militar. En una aproximación muy clara a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Kirchner promovió la caducidad de las leyes que habían limitado los juicios a los genocidas e instruyó una política muy activa de Memoria, Verdad y Justicia. Lejos de tratarse de un asunto del pasado, con esta política, Kirchner no solamente construyó la legitimidad de su perfil progresista, sino que identificó con claridad todo lo que quedaba vivo del proyecto político de refundación excluyente de la sociedad argentina que había implicado la dictadura. Con las derechas golpeadas por la crisis, ese flanco resultaba un punto débil sobre el cual Kirchner avanzó con decisión, reforzando la fuerza singular que esta lucha tiene y tuvo en la Argentina. Pero, esto es importante decirlo, su singularidad no es la del cándido consenso o la unanimidad moral, sino la de la construcción de una disposición hegemónica que ha obligado a las derechas a no reivindicar abiertamente –a veces por convicción, a veces por conveniencia– el genocidio. Pequeño *excursus* contemporáneo: tanto depende ese consenso de las relaciones de fuerza, que la restitución de la identidad del nieto número 133 que celebramos en los días en los que escribimos este texto, no fue saludada por ningún referente de la oposición política.

Para las elecciones presidenciales de 2007, el proceso político gozaba de estabilidad y proyección.² En ese marco, la candidata presidencial no sería ya Néstor sino Cristina Fernández de Kirchner. Gana las elecciones con bastante comodidad, en lo que parecía un camino

2 En este punto, se puede recuperar también el interesante libro de Adrián Piva (2015), que explica la *sutura* de la crisis que implicó el kirchnerismo. El trabajo es un aporte importante para dar cuenta de la dinámica de relaciones de fuerza que explica el proceso político, aunque, desde nuestro punto de vista, deja poco espacio relativo a la iniciativa política tomada desde las posiciones de conducción. Propusimos una discusión con estas tesis en Cortés y Tzeiman (2017).

de cómoda consolidación del proyecto kirchnerista. Sin embargo, poco más de tres meses luego de comenzar el mandato, Cristina se enfrentaría con el hecho político que de algún modo marca el punto de largada de la recomposición política de la derecha argentina. Frente al intento del gobierno, a través de la resolución ministerial 125 (ese número terminaría por nombrar históricamente al conflicto) de colocar retenciones móviles a las exportaciones de oleaginosas, se comienza a articular un sólido bloque social y político que resistiría esa medida de gobierno en las calles y en las instituciones, y que luego tendería a estructurarse en torno de la necesidad de cerrar la experiencia kirchnerista.

Paradójicamente, fue el relativo éxito del primer gobierno kirchnerista el que produjo las condiciones económicas y sobre todo políticas para la reacción de las clases dominantes. Alejado el fantasma de la crisis del 2001 y en el marco de una situación económica estable, los tradicionales bloques de poder comienzan a percibir de modo cada vez más urticante la intervención estatal como una ofensiva sobre su poder y su patrimonio. Así, las patronales agropecuarias –y con ellas los grandes grupos mediáticos, así como buena parte del sistema político– juegan sus cartas más fuertes no solo para detener la medida concreta, sino también para establecer un límite político sobre la capacidad del gobierno en materia de regulación económica. El avance de las políticas distributivas comenzaba a ser percibida como una agresión de clase. Con el fondo de la defensa de la propiedad privada que se veía amenazada por la voracidad impositiva nacional, el conflicto toma las rutas y la esfera pública. El gobierno, por su parte, decide también jugar todo su capital político, apostando a la movilización y multiplicación militante para defender la medida, y a señalar la articulación entre sectores mediáticos y económicos que amenazaban la vida democrática. *Carta Abierta*, un núcleo intelectual que se reúne y constituye alrededor de aquellas jornadas dramáticas –entre sus principales animadores estaban Horacio González y el ya

mencionado Nicolás Casullo–, utilizó una figura bastante acertada para describir el momento político: un “clima destituyente” había sido instaurado en la escena pública argentina, y el gobierno –y con él la democracia– devenían frágiles frente a la ofensiva conservadora. Ofensiva que, es preciso señalar, excedía largamente las oficinas empresariales y políticas, y lograba importantes apoyos en las calles, reviviendo con eficacia los viejos rencores de parte de las clases medias hacia el peronismo. Solo una muestra: cuando finalmente la resolución cayó, en virtud del voto del vicepresidente Julio Cobos en el Senado, decidiendo el empate en favor de las corporaciones agrarias –y abandonando de hecho la coalición entonces oficialista con esa acción–, la oposición y las distintas entidades del campo protagonizaron una multitudinaria concentración en el Monumento a los Españoles, situado en un importante cruce de calles de la Ciudad de Buenos Aires, enfrente del zoológico de la ciudad. La manifestación favorable al gobierno, por su parte, se concentró en las inmediaciones del Congreso Nacional. Mario Llabrás, a la sazón presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo: “Elegimos el Monumento de los Españoles. De ese lado estaremos nosotros, y enfrente queda el zoológico” (Clarín, 2008). Aunque llegaron luego disculpas y relativizaciones, demasiados símbolos juntos convivían en una sola frase: sintéticamente, una vez más se enfrentaba la próspera Argentina blanca llegada de Europa con la nación plebeya que bien podía ser reducida a la animalidad. El antiperonismo siempre fue una forma de racismo, aun contra la curiosa autopercepción argentina de que el racismo es un problema ajeno.

Si el conflicto del 2008 tiene una importancia crucial en la Argentina reciente, es porque allí se activan una vez más, y de manera intensa, las viejas discusiones en torno del proyecto de Nación para el país. En un interesante libro reciente, dedicado precisamente al análisis del proceso político argentino entre 2008 y 2015, Ulises Bosia (2023) señala la 125 como un parteaguas que termina por

configurar de manera más o menos precisa el contorno de dos bloques que se enfrentarían en los años sucesivos (hasta nuestro presente): una alianza nacional-popular-democrática y otra neo-liberal-conservadora (el autor le agrega, con confesas dudas dado su carácter meramente autopercebido, la figura de *republicana* a esta segunda, que aquí preferimos no concederle). La colisión entre esos bloques, que conoce además variados antecedentes en la historia argentina, tendría desde entonces momentos de aguda intensidad, y no es fuera de ella, sino en el extremo de su lógica interna, que situamos el *pasaje al acto* con el que iniciamos este texto.³ Ocurre que cuando hablamos de *confrontación* deberíamos evitar la tentación de referirnos a una mera pugna entre fuerzas mensurables con los mismos términos y las mismas estrategias de acción. Veamos: el gobierno sufre, objetivamente, una derrota en 2008. No solamente la resolución 125 cae, sino que siguen meses de zozobra, retracción de su fuerza en las calles y, ya en 2009 (al compás también de los coletazos de la crisis mundial) una dura derrota electoral en los comicios de medio término, lo que incluye nada menos que a la boleta que, en la provincia de Buenos Aires, encabezaba como candidato a diputado nacional el propio Néstor Kirchner. Pero la partida no estaba concluida. Nuevamente, no vamos a reconstruir detalladamente la dinámica política de los años sucesivos al gran conflicto de 2008. Lo que nos interesa señalar es que el kirchnerismo elige salir del atolladero apelando nuevamente a una fuerte voluntad política desplegada desde el Estado. Comienzan allí, luego de la crisis, las medidas más arrojadas, y en cierto sentido estructurales. Listemos rápidamente: en octubre de 2008, solo unos pocos meses después de la derrota y

3 Podría reenviarse aquí a al menos dos textos clásicos, el de Juan Carlos Portantiero (1977) sobre el *empate hegemónico* y el de Guillermo O'Donnell (1977) sobre las *alianzas*, sobre las articulaciones políticas que se enfrentaron en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, al menos hasta la instauración de la dictadura de 1976, y que en varios aspectos resuenan en nuestro mapa contemporáneo.

en el marco de la crisis financiera internacional, el gobierno reestatiza los Fondos de Jubilación y Pensión, invirtiendo de ese modo el signo de una de las políticas emblemáticas del neoliberalismo vernáculo. En 2009, y en el marco de un amplio debate público, se aprueba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, en un intento por democratizar el esquema mediático argentino, cuya concentración había tenido un peso saliente en los modos de interpretación del conflicto del 2008. En noviembre, también de 2009, y por medio de un decreto presidencial, se establece la Asignación Universal por Hijo, en lo que constituye una de las políticas de Seguridad Social más progresivas de la historia nacional, y del mapa regional también. En julio de 2010, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y en abril de 2012, ya en el segundo mandato presidencial de Cristina, se procedió a la estatización de la empresa petrolera nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que había sido privatizada durante el gobierno de Menem. La recuperación de YPF fue quizá una de las medidas más importantes del proceso político kirchnerista, por las memorias que movilizaba y por su significado estratégico para el desarrollo nacional.

Esta batería de medidas fue muy efectiva para la recuperación de la iniciativa política por parte del gobierno. Y volviendo una vez más a la dimensión regional de todo el asunto, quizá el punto de quiebre de la situación de derrota se verificó en los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, en mayo de 2010. No decimos que se produjo allí, sino que se verificó, porque justamente lo que sucedió allí fue que una inesperada multitud recorrió durante varios días el centro de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un festejo popular con pocos antecedentes en la historia nacional. A su vez, la presencia de figuras clave de la política latinoamericana (Chávez, Correa, Lula, Mujica) terminaron de confirmar que el proceso político en curso era un proceso latinoamericano, que a su vez nos ponía en diálogo con los viejos temas de la independencia y la soberanía política en la

región. La derrota de 2008 había sido dura y se había extendido más de la cuenta por fuerza de su expansión mediática, pero encontró en esas calles un límite. Unos meses después, en octubre de 2010, falleció sorpresivamente Néstor Kirchner, y una vez más las calles argentinas fueron inundadas durante varios días por una conmovida multitud. En 2011, Cristina fue por la reelección presidencial, y obtuvo nada menos que el 54 % de los votos, con casi cuarenta puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.

Del lado de la oposición, si bien las expectativas de rápida dilución del kirchnerismo que se habían despertado en 2009 se vieron rápidamente contestadas por la realidad, el conflicto de 2008 sentó las bases tanto de una fuerte articulación entre sectores políticos y económicos que adversarían al gobierno como el indicio de una metodología que comenzaría a replicarse: la ocupación del espacio público. Así, los años que mediaron entre 2008 y 2015 fueron mostrando de parte de las derechas distintas estrategias de horadación del adversario, que en varias ocasiones coincidieron con estrategias de horadación de la democracia. Si en términos electorales se fue conformando de modo cada vez más claro, y con escala nacional, el espacio del PRO centrado en la figura de Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la batalla se jugó también en la escena mediática, en las calles y, de manera creciente, en el ámbito judicial. En los años 2012 y 2013, se dieron importantes y masivas movilizaciones callejeras en contra de diversas medidas del gobierno. Muchas veces con consignas difusas e inorgánicas en términos de conducción política, aparecían como reacción frente a lo que era planteado como ataques a la libertad o la democracia por parte del gobierno (por ejemplo, las medidas que implicaban limitación para la adquisición de moneda extranjera, o el proyecto de reforma y democratización del Poder Judicial presentado por la presidenta en 2013). En sede judicial, mientras tanto, comenzó a multiplicarse un procedimiento de denuncia sistemática a funcionarios y

figuras próximas al gobierno. Quizá el caso paradigmático fue el de Amado Boudou, vicepresidente de Cristina en 2011-2015, y uno de los principales impulsores en 2008, desde su cargo en la Administración Nacional de la Seguridad Social, de la mencionada reestatización de los fondos jubilatorios. Como si nunca se le hubiera perdonado semejante afrenta, fue uno de los primeros crucificados en sede judicial: primero exitosamente anulado como jugador político, luego encarcelado, ya durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquello que hoy se teoriza de modo más aceptado y generalizado como *lawfare* comenzaba a asomarse con claridad. Los medios continuaban con su encono contra el gobierno y contribuían en lo que estuviera a su alcance para articular políticamente a la oposición.

2013 fue de algún modo el año clave en términos de quiebre de la relación de fuerzas. Con el gobierno arrastrando algunos problemas de gestión de la situación económica, con disputas internas que se agudizaban (influidas en parte por la necesaria discusión sobre la sucesión de Cristina –no podía presentarse, por limitaciones constitucionales, a un nuevo mandato presidencial–), y con elecciones de medio término que presentaban una perspectiva preocupante para el oficialismo, el conflicto se tendió a agudizar. En el ya mencionado texto de Bosia, se subraya el período 2013-2015 como el de una intensificación del conflicto político, fundamentalmente como una ofensiva desembozada de los sectores de poder concentrados sobre el gobierno. Allí se debe destacar, por un lado, la ruptura del espacio político gobernante, Frente para la Victoria, con la salida de la figura de Sergio Massa y su Frente Renovador. Massa ganaría holgadamente la elección legislativa en el distrito más importante, la provincia de Buenos Aires, y lo haría con un discurso decididamente crítico de la gestión de Cristina. Por el lado empresarial, también 2013 conocería una intensificación de la ofensiva. Las grandes empresas (bancos, medios, exportadoras), agrupadas en el Foro de Convergencia Empresarial atacarían decididamente al gobierno, preparando una

suerte de programa genérico (baja de impuestos, respeto a la división de poderes, a la propiedad privada y a la libertad de prensa, independencia judicial, etc.) para quien lo sucediera. Los últimos años del gobierno de Cristina conocieron, entonces, una intensificación del conflicto político que dejó ver, además, que el problema argentino hundía parte de sus raíces fuera de la Argentina. Precisamente, desde inicios de 2013, se montó una decidida ofensiva articulada por los llamados *Fondos buitres*, fondos especulativos que habían comprado deuda argentina a precios reducidos, y que litigaban contra el país en foros internacionales y, esencialmente, en la Justicia norteamericana por el pago del precio nominal, contra lo acordado con la gran mayoría de los acreedores en las reestructuraciones de 2005 y 2010. El gobierno resistió cuanto pudo los embates financieros, nacionales e internacionales, para lo cual no solo no contó con la colaboración de la oposición política sino más bien con el estricto alineamiento de esta con el sistema financiero internacional.

El gobierno llega con ciertos límites y tensiones internas a las elecciones de 2015 y, como dijimos, sin la posibilidad de reelección de Cristina. La oposición llega en ascenso, montada sobre las múltiples ofensivas –y otras– aquí consignadas, y con la ascendente figura de Mauricio Macri como candidato. Vale también una nota regional: esas estrategias de horadación de la legitimidad democrática del gobierno no fueron un aislado hecho argentino. El mismo 2008 del *conflicto del campo*, se había iniciado en Bolivia con la llamada *Masacre de Pando*, en la que más de una decena de campesinos indígenas partidarios de Evo Morales son asesinados por opositores al gobierno en la zona de la *Medialuna*, que perseguía su autonomía respecto de la Bolivia hegemónizada por el proceso político conducido por Morales. En 2009, se dio el golpe de Estado, en Honduras, contra Manuel Zelaya. En 2012, se destituye por la vía parlamentaria al presidente paraguayo Fernando Lugo. En su conjunto, los gobiernos progresistas sufrían diversas formas de asedio e interrupción

democrática en la región y, en rigor, 2015 es el año del primer triunfo estrictamente electoral de la derecha, que sin embargo no puede leerse sin las múltiples formas de debilitamiento que la escena democrática argentina venía siguiendo.

Entre la derrota de 2015 y el intento de asesinato de Cristina que evocamos al inicio de este texto, pasaron siete años sobre los que no vamos a abundar demasiado. Dos breves cuestiones sobre ese *intermezzo*, uno sobre el gobierno de Macri, otro sobre el de Alberto Fernández. El gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, implicó una precisa *revancha* sobre el proceso kirchnerista. Algunos hechos marcaron eso de modo muy particular: en primer lugar, que una de las primeras medidas tomadas –solo cuatro días luego de asumir– fue la reducción de las retenciones a las oleaginosas, lo cual fue además celebrado con un importante acto, con la presencia del propio Macri, en la localidad bonaerense de Pergamino, una de las zonas más emblemáticas del campo argentino, y por ende también de los enfrentamientos de 2008. Siete años más tarde, se asumía finalmente el triunfo del bloque agrario, y se celebraba en consecuencia. Unos meses más tarde, en marzo de 2016, Argentina resuelve el pago de la deuda total reclamada por los fondos buitres. Además de la derrota histórica que esto implicaba, se reiniciaba oficialmente el ciclo de endeudamiento que se radicalizaría dos años después con el retorno del Fondo Monetario Internacional al país. En el plano judicial, también el macrismo en el poder implicó un paso adelante en las amenazas a la vida democrática que se habían sugerido los años anteriores. Por un lado, en enero de 2016, es detenida en Jujuy la militante y líder de la organización Tupac Amaru Milagro Sala (hoy continúa detenida, con prisión domiciliaria). Una larga invención y reinención de causas aseguró su detención, pero sobre todo delineó el mensaje de orden (y racismo) que el sistema político estaba emitiendo. Unos meses después, en abril de 2016, Cristina es convocada a declarar en sede judicial, en lo que constituyó uno de los mojones

fundamentales de la intensificación de la persecución judicial sobre su figura. El *lawfare* ya no era solo amenaza.⁴

El gobierno de Macri tuvo por supuesto una férrea resistencia, en la calle y también en las instituciones. De algún modo, estuvo atravesado por una doble tensión que finalmente lo llevaría a complicar su gestión y ser derrotado en 2019. Por un lado, la dificultad de articular un proyecto de nación sustancialmente excluyente con el ejercicio democrático del gobierno sobre una sociedad que no solo no venía de una crisis –aun con las tensiones efectivas que había en materia económica– sino que estaba atravesada por relaciones de fuerza en el marco de las cuales los sectores populares habían logrado consolidar una buena cantidad de conquistas. De allí los infinitos modos en los cuales, antes y después de asumir el gobierno del Estado, la derecha desplegó estrategias de ofensiva que excedían las reglas democráticas. Por otro lado, en una suerte de tensión complementaria e incluso superpuesta con la anterior, la posibilidad de ofrecer un proyecto con ambición hegemónica para garantizar la conducción de la sociedad se chocaba con la sed de revancha de no pocos sectores internos al edificio macrista. Esa revancha era política tanto como económica –es decir, contra figuras y organizaciones representativas del proceso anterior y en la persecución de una restitución inmediata de los recursos que las clases dominantes percibían como propio– y horadaba las propias posibilidades del proyecto político de la derecha de mantenerse sustentable.

Si Macri llega a la derrota electoral como efecto de las insuficiencias estratégicas de su proyecto político (y tanto es así que es verdaderamente peculiar que haya sido el primer presidente en no lograr la reelección en un contexto de apoyo de todos los sectores económicos concentrados, de apoyo de una derecha regional que

4 Para un análisis general del gobierno de Macri, atendiendo especialmente a sus dificultades para enlazar proyecto hegemónico y democracia, ver Tzeiman (2017).

se había fortalecido sustantivamente en los últimos años, y de apoyo explícito de las grandes potencias económicas, especialmente de Estados Unidos), también hay que recordar el mayo del 2019 al que hicimos referencia al inicio. Cristina admite la derrota parcial de su espacio, pero sobre todo de las posibilidades de la democracia argentina de alojar un nuevo período expansivo, frente al acecho de una derecha rearmada y a la herencia de deuda que el macrismo dejaba. Además, el propio espacio político peronista, en 2019, se mostró una y otra vez reticente a aceptar nuevamente la conducción de Cristina. Basta recordar, como dijimos al inicio, que partes importantes del Partido Justicialista la contrariaban, que las centrales sindicales en su mayoría no la acompañaban y que, en términos generales, el clima político parecía inclinarse por una salida moderada como el gesto más sabio frente a la apremiante situación. Se acumulaban las críticas retrospectivas a la *crispación* y el exceso de pasiones políticas que el kirchnerismo había suscitado, y se auspiciaba un retorno a una forma de diálogo político con aspiraciones reconstructivas de una escena pública lacerada por grandes contradicciones.⁵ Cristina cedió. Para ganar, pero, como ya subrayamos, sobre todo para poder gobernar. Así, la moderación como alternativa tuvo finalmente su oportunidad. El contexto fue inusitadamente desfavorable, no solo por la herencia recibida, sino también por la pandemia que llegaría a pocos meses de iniciado el gobierno, luego la guerra y demás. En cualquier caso, los resultados fueron magros, en la medida en que la vocación de diálogo del presidente Fernández con los sectores de poder no moderó los ataques contra Cristina y su sector político, ni tampoco fungió de plataforma para la construcción de un volumen político que permitiera emprender grandes transformaciones. Por el

5 Nos permitimos referir a una nota que escribimos en 2019 a propósito del *consenso moderado* que se imponía desde los más diversos ángulos de cara a la crisis del macrismo y el papel de Cristina en el posible retorno del peronismo al poder (Cortés, 2019).

contrario, primó una tendencia a rehuir de los conflictos y confrontaciones, lo que redundó en la persistencia, apenas morigerada, de las grandes marcas de desigualdad que había dejado el macrismo.⁶ Como sabemos, la ofensiva de las derechas no solo continuó, sino que, como vimos, se tornó visiblemente incompatible con un sentido más o menos convencional de vida democrática.

Es preciso entender el drama detrás de los dos mayos de Cristina a los que aludimos. La opción por la moderación está lejos de ser simplemente una estrategia política a la cual le quepa luego el juicio sobre su eficacia. Es en realidad una respuesta frente a un lento pero persistente proceso de angostamiento de los márgenes democráticos que es propio de nuestros tiempos pero que también tiene una larga historia. Cada vez que nuestras clases dominantes percibieron la perturbación de sus intereses mostraron pocas credenciales democráticas. En la historia argentina esa perturbación ha tomado diversos nombres de figuras y movimientos políticos, pluralidad que excede obviamente el espacio y alcance de estas páginas. El núcleo del asunto: las clases populares movilizadas, tanto como las figuras que de diversos modos condensaron esa posibilidad. La potencial activación plebeya del peronismo –a veces historia efectiva, a veces amenaza, a veces tan solo añoranza– ocupó en muchas ocasiones, a partir de la irrupción de ese movimiento político, el lugar de aquello que venía a alterar la naturaleza de las cosas. Si se lo podía domesticar, era aceptado con entusiasmo al interior del sistema político, mientras que, si asomaba su pasión por el *exceso*, aparecían distintas estrategias –algunas políticas en sentido amplio e institucional, otras políticas en sentido descarnado, como violencia– de mitigación o cancelación del peligro. La perturbación, en todo caso, cancela el problema sobre el carácter verdadero o falso, atinado o exagerado, más o menos

6 Una síntesis, que compartimos, de los resultados opacos de la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, puede leerse en Tzeiman (2023).

profundo, de la amenaza en cuestión, y nos deja en el terreno del más estricto realismo político: lo que termina por definir la situación es la intensidad de la *reacción* de los sectores dominantes. Estábamos demasiado seguros de que ese tipo de proceder había concluido.

La falla en el origen: los límites del pacto democrático

El intento de asesinato de Cristina puso en escena una profunda crisis de la democracia argentina. Digámoslo claramente: no asistimos a la constatación de una serie de anomalías que la amenazan desde afuera, sino más bien a las dificultades que ella misma tiene para responder a sus límites y a su crisis. En ese sentido, es erróneo pensar el presente como el drama de la *polarización política*, como si las divergencias sobre los modos de gestión de la vida civil se fueran simplemente corriendo hacia los extremos. Lo que hemos visto, por el contrario, es una progresiva radicalización de las derechas, cada vez más gustosas de enarbolar discursos de odio que, dicho sea de paso, no son odio sin más, sino odio con objetos delimitados por aquella amenaza plebeya, cualquiera sea el nombre o la forma que tome. Y ese odio tiene sus causas. No la mera existencia, sino la movilización, reivindicación y ampliación de derechos. Lo que indigna, conmueve y espanta es la visibilización revoltosa del exceso en la escena pública. Y la democracia, nuestra democracia, fue capaz de albergar todo eso sin conmoverse.

La respuesta a todo esto no fue una polarización en espejo hacia la izquierda. No hay aquí lugar para una *teoría de los dos odios*, como lo hubo, y lo hay, para la *teoría de los dos demonios* como grilla interpretativa de una cierta derecha cultural para la política argentina de los años setenta. En este sentido, permítasenos aquí una hipótesis de cierre: la dinámica política que describimos rápidamente, que se inició con la sorpresiva emergencia del kirchnerismo en 2003 y cerramos aquella noche de septiembre de 2022 revela en su conjunto

los límites del pacto democrático sobre el cual descansa –o cree descansar– la vida política argentina. En 1984, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola, por entonces figuras cercanas al presidente Raúl Alfonsín y protagonistas de la escena intelectual progresista de aquella década, escribieron un texto que de algún modo cristaliza las pretensiones de la transición democrática. “Crisis social y pacto democrático” sugería la existencia de dos tipos de reglas para pensar el juego político democrático: las reglas constitutivas y las reglas normativas. Las primeras establecen el punto de partida, el horizonte y la base a partir del cual es posible el juego mismo. Las normativas implican modificaciones internas al propio juego, es decir que dan cuenta de la variabilidad del juego mismo, sin que este deje de serlo (esto último implicaría, por el contrario, la modificación de las reglas constitutivas). La traducción, a esta altura evidente, al lenguaje de la transición sería más o menos así: la democracia debe ser concebida por todos los actores sociales como una regla constitutiva, en cuyo interior es posible disputar la variabilidad de las reglas normativas. Esta es la idea de *pacto democrático*, en palabras de los autores: “un compromiso que, respetando la especificidad de los movimientos sociales, delimite un marco global compartido dentro del cual los conflictos puedan desenvolverse sin desembocar en la anarquía y las diferencias coexistan sin disolverse” (Portantiero y De Ípola, 1988, p. 187). La derecha ya no haría golpes de Estado, la izquierda ya no haría revoluciones.

El problema es que la firma del pacto, como suele suceder, suponía algunas cláusulas cuanto menos opacas. Mientras la izquierda, o al menos buena parte de ella, hacía su tarea de toma de distancia de proyectos totalizantes (temerosa del destino totalitario intrínseco que tendrían), la derecha contenía sus simpatías hacia el poder militar en un contexto de relaciones de fuerza totalmente transformadas a su favor. Las reglas constitutivas, para las derechas, reposaban en realidad en el brutal despliegue que el neoliberalismo llevó adelante

en la América Latina de los ochenta y noventa. Así, la *letra chica* del pacto no era otra cosa que un estado de las *relaciones de fuerza* que se pretendió cristalizar: un movimiento popular diezmado por el genocidio y una geopolítica neoliberal en entusiasta expansión global. En ese marco, las reglas de la democracia funcionaron más o menos ordenadamente hasta que, en el siglo XXI, el kirchnerismo cuestionó, de hecho, ese legado y esos límites, consagrando o incluso produciendo *otra* relación de fuerzas. Y aquí esto es fácilmente extensible a un clima regional. Si antes aludimos a las distintas formas de interrupción de la vida democrática de nuestros países que se impulsaron desde las derechas regionales, lo hicimos precisamente porque lo que tenían en común era el ataque a procesos que habían respetado las reglas democráticas que se habían suscripto algunas décadas atrás, pero que habían ignorado esa *letra chica*. Fue así que las democracias comenzaron a resquebrajarse e interrumpirse, combinando clásicos golpes militares con nuevas formas de cercenamiento de la legalidad. El cinismo que señala a las propias fuerzas populares como antidemocráticas no es solo el testimonio de una época en la que se puede decir cualquier cosa, sino fundamentalmente la confesión más profunda de aquello que los sectores dominantes entienden por democracia.

Otro mayo de Cristina: en 2022, en el marco del doctorado *honoris causa* que recibiera en la Universidad del Chaco Austral, la vicepresidenta expuso la conferencia “Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática” (Fernández de Kirchner, 2022). Con la figura de la insatisfacción democrática intuía el desapego creciente de franjas de la población respecto de la democracia. Y la razón de ello estaría precisamente en el peso sustantivo que factores no democráticos –condicionamientos económicos, instituciones corrompidas tomadas por esos mismos condicionamientos– tienen en la vida presuntamente democrática de la nación. El problema está en que la insatisfacción democrática no genera necesariamente una voluntad

reparadora sobre la democracia, sino que puede producir, por el contrario, una disposición general hacia la desconfianza que refuerce su debilitamiento.

Si se sigue a fondo el argumento en torno de la insatisfacción democrática, podríamos pensarlo más allá de la coyuntura inmediatamente actual sobre la cual la pretende proyectar Cristina. Si la insatisfacción democrática es el síntoma de una democracia incompleta, cuyo lado oscuro opera sobre la sociedad debilitando las posibilidades de la vida en común, antes que tratarse de nuestro drama presente, estamos frente a la precisa descripción del pacto democrático. En tanto aquel dejaba una zona importante de la actividad económica y política fuera del plano de la deliberación, la insatisfacción constituiría casi una consecuencia necesaria.

En este sentido, podríamos decir que el kirchnerismo estableció una relación algo paradójica con los ochenta: revelando los límites internos del pacto democrático, salvó a la democracia de su condena a la insatisfacción. Y si lo hizo, fue precisamente porque se animó a cuestionarla, a tensar sus presupuestos y a añadirle una serie de sentidos que no venían con ella. Una astuta lectura de la potencia de la movilización y organización popular desplegada en la resistencia al neoliberalismo, junto a una aguda capacidad de iniciativa desde las instituciones del Estado permitieron que ese juego se sostuviera de modo virtuoso durante más de una década, y que, precisamente por ello, suscitara una violenta reacción que, mirada de este modo, no fue mucho más que el intento por volver a reducir la democracia a su expresión más acotada.

En el fondo se trata, por supuesto, de relaciones de fuerza. Y por eso no es antojadizo ni voluntarista el modo o las posibilidades de constitución de una articulación virtuosa capaz de tensar o reinventar la vida democrática. Hoy los tiempos son más sombríos y menos promisorios. Sin embargo, la moderación como respuesta a esta encrucijada, por su parte, se parece demasiado a poner la otra mejilla.

Y los resultados positivos de esa opción continúan sin llegar. Habrá que continuar intentando intuir, bajo el lodo de una coyuntura adversa, dónde están aquellos elementos que inquietan o perturban al orden. Por lo general, la movilización plebeya y las grandes figuras que la sintetizan están de diversos modos allí, y no habría que abandonarlos como horizonte aun si no agotan el complejo tema de las estrategias políticas. En todo caso, está visto que la inercia del pacto democrático conduce a la insatisfacción, al anquilosamiento, a la reducción a la mera forma. La democracia, aquella que vale para la vida de los pueblos, solo es posible si viene sustentada por la apuesta política que sabe de su fragilidad y que por ello no descansa en el trabajo de tensarla.

BIBLIOGRAFÍA

- Bosia, Ulises (2023). *El segundo kirchnerismo (2008-2015)*. Buenos Aires: Prometeo.
- Clarín (10 de julio de 2008). El campo vuelve a la protesta con marchas y al costado de la ruta. https://www.clarin.com/ediciones-antiores/campo-vuelve-protesta-marchas-costado-ruta_0_HkZGvi2RaYl.html
- Cortés, Martín (22 de abril de 2019). La grieta y la pasión por la moderación. *Oleada*. <https://oleada.com.ar/la-grieta-y-la-pasion-por-la-moderacion/>
- Cortés, Martín y Tzeiman, Andrés (2017). Discutir el Estado: Dilemas estratégicos a la luz de los procesos políticos latinoamericanos. *Theomai*, 35, 201-219.
- Cortés, Martín y Tzeiman, Andrés (2018) La democracia al límite y los límites de la democracia. Reflexiones a partir del proceso político argentino (2003-2015). En Gabriel Vommaro (comp.), *Estado, democracia y derechos. Controversias en torno a los años kirchneristas* (pp.177-207). Los Polvorines: CLACSO-UNGS.

- Fernández de Kirchner, Cristina (16 de mayo de 2023). A los compañeros y compañeras. <https://www.cfkargentina.com/a-los-companeros-y-companeras/>
- Fernández de Kirchner, Cristina (18 de mayo de 2019). En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. <https://www.cfkargentina.com/en-la-semana-de-mayo-reflexiones-y-decisiones/>
- Fernández de Kirchner, Cristina (6 de mayo de 2022). Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática. <https://www.cfkargentina.com/conferencia-estado-poder-y-sociedad-la-insatisfaccion-democratica-en-la-entrega-del-doctorado-honoris-causa-de-la-uncaus/>
- González, Horacio (2011). *Kirchnerismo: una controversia cultural*. Buenos Aires: Colihue.
- O'Donnell, Guillermo (1977). Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. *Desarrollo Económico*, 16 (64), 523-554.
- Piva, Adrián (2015). *Economía y política en la Argentina kirchnerista*. Buenos Aires: Batalla de Ideas.
- Portantiero, Juan Carlos (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. *Revista mexicana de sociología*, 39(2), 531-565.
- Portantiero, Juan Carlos y De Ípola, Emilio (1988). Crisis social y pacto democrático. En Juan Carlos Portantiero. *La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia, entre el estado y la sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Tzeiman, Andrés (2017). *Radiografía política del macrismo. La derecha argentina: entre la nación excluyente y el desafío democrático*. Buenos Aires: Caterva.
- Tzeiman, Andrés (2023). El retorno del peronismo al gobierno en Argentina (2019-2023): de la ilusión al fracaso. *Enfil* (en prensa).

Tercera parte

**Radicalización autoritaria
y crecimiento de las
extremas derechas:
experiencias políticas,
imaginarios y
representaciones**

Entre el defensismo neoliberal y la psicología de masas

Las hermenéuticas conservadoras
frente a la insurrección chilena

CLAUDIO AGUAYO BÓRQUEZ

Introducción

A cincuenta años del golpe de Estado, el debate sobre la Unidad Popular chilena ha estado signado por un gigantesco poder simbólico retroactivo por parte de la nueva derecha.¹ Viejos consensos y prohibiciones significantes, como la de no reivindicar públicamente a Pinochet, retroceden frente a una nueva derecha desafectada, que ve en la dictadura un período dorado del capitalismo chileno –sucedido por un igualmente dorado período de consolidación neoliberal (1990–2018). Después de décadas de auto-silenciamiento y camuflaje, hoy día los diputados de derecha gritan “viva Pinochet” en las salas del congreso nacional, frente a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. El golpe vuelve a aparecer como el

1 Sobre ello, véase, por ejemplo: *Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular*, de Daniel Mansuy (2023), o el difamatorio libro de Nicolás Márquez, *La dictadura comunista de Salvador Allende* (2023). Me es imposible ahondar en el contenido de ambos textos en el presente trabajo, pero remito a mi reseña del libro de Daniel Mansuy (Aguayo, 2023).

mal necesario para salvar la vida nacional frente a un país catastróficamente en crisis, producto del experimento socialista de Salvador Allende (Mansuy, 2023). Y un vigoroso 36 % de la población chilena, según las últimas encuestas, cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de estado (Sanhueza, 2023). A tres años de un estallido que fue considerado como fin del neoliberalismo, derrumbe del modelo (Mayol, 2015), iniciativa de una comunidad sublevada (Bengoa, 2021), o nacimiento de un nuevo pueblo (Ruiz, 2020), la vitalidad del pinochetismo parece carcomer a segmentos enormes de la sociedad chilena, cuyo electorado votó masivamente al ultraderechista Partido Republicano en las elecciones del consejo constitucional, en mayo de 2023.

La revuelta de octubre de 2019 pareciera haber combinado –de un modo relativamente virtuoso hasta 2021– lo que Ernesto Laclau (1976) llamó “interpelaciones ideológicas nacional-populares”, con el programa de la izquierda chilena. Si los primeros días de la insurrección mostraron, a tajo abierto, las heridas de la reproducción material de las clases subalternas, a medida que transcurrieron las semanas el debate se fue desplazando gradualmente hacia la cuestión constituyente –y eso no puede ser leído como el efecto de la espontaneidad de masas, sino de su vértice politizado. Al mismo tiempo, sin embargo, y aquí reside quizás la paradoja, la izquierda constitucionalista producía una brecha con lo que podríamos llamar el contenido social-clasista de la protesta, un enconado divorcio entre el deseo o la *potentia multitudinis* (Kwek, 2015) de las masas, y la estrategia constitucional de una izquierda afincada doblemente en el estado como palanca de cambio social y en la reproducción ideológica y material de las clases medias profesionales. En otros términos: un divorcio entre la querrela del excedente (Zavaleta, 1986) y el civilismo mesocrático. Al mismo tiempo, la dinámica de las “luchas de clases en Chile”, parafraseando a Marx, comporta una ausencia en su

espiral de desarrollo: la ausencia de un *paralaje* diferente al de la clase media profesional y del empresariado católico chileno.²

Desde luego, y como ha sido ya señalado por autores como Pablo Stefanoni (2021), la derecha radical gana terreno precisamente ahí donde la izquierda tuvo alguna vez sus bastiones. Y es que el voto obrero, o si se quiere, el voto popular, subalterno, siempre estuvo determinado por una violencia esencial, colectiva (Merleau-Ponty, 1957). Durante la elección de 2021 que puso a Gabriel Boric en el poder, de hecho, los sectores populares se movilaron autónomamente –sobre todo en Santiago– para derrotar un boicot en el transporte público, probablemente diseñado desde el gobierno de Sebastián Piñera.

En su premiada novela *Regreso a Reims* (2015), Didier Eribon muestra cómo sus padres, votantes históricos del Partido Comunista Francés, dieron un vuelco electoral hacia el *Front Nationale* y la candidatura fascistoide de Jean-Marie Le Pen. Las elecciones, dice Eribon, son “una guerra de clases que se da por medio de la boleta electoral” (p. 138), y el desplome electoral de la izquierda en favor de las nuevas derechas, en sectores históricamente obreros, debe explicarse en ese contexto. Eribon indica que se trata de una reconstitución grupal,

- 2 Un artículo del profesor Grinor Rojo, publicado el 7 de septiembre de 2022, calificaba a los votantes del rechazo como una “masa racista, antifeminista y furiosamente homofóbica”, “gente que no tuvo educación cívica”. Este artículo representa, quizás, el mejor ejemplo de la furiosa reacción mesocrática contra los votantes que dieron el triunfo al rechazo, muchos de ellos afincados en sectores populares ultra-paupe-rizados por el neoliberalismo –lo que incluye a personas privadas de libertad, en las cárceles el rechazo a la nueva constitución ganó ampliamente. Las burlas por redes sociales al votante rechazo por parte de la izquierda mesocrática tocaron un límite cuando circularon una sorprendente cantidad de *memes* de gente en situación de vulnerabilidad votando rechazo. Es la tesis del deterioro cognitivo del pueblo chileno. Acaso esta interpretación maniquea y pobre de los comportamientos electorales y de su no-transparente vínculo con la lucha de clases, sea un ejemplo del empobrecimiento intelectual y teórico de la izquierda chilena convertida en apéndice civilista y democratista de la clase media profesional y burocrática.

clasista, ahí donde la izquierda se niega a hablar de clases sociales, para abandonarse a un lenguaje de la fragmentación. El sufragio aparece entonces como el último recurso de un punto de vista huérfano, redistribuido en el lenguaje de la multiplicidad y de los individuos, en las retóricas de la focalización social y de las intervenciones pasivas.³ Paradójicamente, el núcleo de verdad de los triunfos de la ultraderecha en los territorios históricamente proletarios es que representan “pasos al acto”, al decir de Lacan (1995), de la subjetividad clasista. A merced de la desorganización y de la ausencia de una perspectiva estratégica de la parte obrera, en el marco de un resentimiento global contra la nueva élite, el resultado de la revuelta chilena fue, paradójicamente, una restauración del fascismo.⁴

En el otro polo de estos pasos al acto, la derecha decide reinventarse, asumir tesis insostenibles como la del *marxismo cultural*, que indica que la cultura postmoderna habría obligado a la ideología socialista a inocularse en el mercado mediante dispositivos culturales (Laje, 2022), o a ficcionar una batalla global entre globalistas y anti-globalistas, como en el filósofo ruso Alexander Dugin (2013). Si estas intervenciones son capaces de interpelaciones ideológicas sostenibles en el seno de los desplazados, es porque cumplen con un requisito de lo que José Luis Romero (1978) llamaba la “derecha

- 3 “Al borrar del discurso político de la izquierda toda idea de grupos sociales en conflicto unos con otros, se creyó que se había logrado privar, a quienes votaban juntos, de su propia posibilidad de representarse como un grupo cimentado por intereses comunes e intereses compartidos. Se los condujo a individualizar su opinión y se disoció dicha opinión de la fuerza que contenía en otro tiempo, condenándola así a la impotencia. Pero esa impotencia se convirtió en rabia. El resultado era ineludible: el grupo se reconstituye bajo otra forma, y la clase social que los discursos neoconservadores de la izquierda habían deconstruido encontró nuevos modos de organizarse y mostrar su punto de vista” (Eribon, 2015, p. 136).
- 4 En contraste con la revuelta, por ejemplo, de 1957 en Santiago, de características similares por su grado de violencia y asociación con el lumpenaje, pero con una fuerte intervención organizada de la militancia izquierdista y las organizaciones sindicales (Thielemann, 2023).

paradójica”, una derecha volcada ideológicamente hacia la izquierda. En fin, una derecha que responsabiliza a las élites –supuestamente liberales, izquierdistas y urbanas– de la precariedad y la falta de oportunidades entre los desplazados, reproduciendo al mismo tiempo una contradicción campo-ciudad nunca resuelta del todo. Particularmente en Estados Unidos, país que puede considerarse el laboratorio de la ultraderecha global, términos como los de *latte liberal* o *limousine liberal* (Krauthammer, 2007), pretenden denunciar la hipocresía de quienes, llevando un estilo de vida hedonista, promueven la frugalidad entre los desposeídos. Ya tempranamente el escritor conservador David Brooks mostró en *Bobos in Paradise* (2001), la fusión entre la burguesía cosmopolita y la izquierda esnob. Es la tesis de las dos naciones: una nación de *bobos* cosmopolitas, sofisticados y liberales, y otra nación de estadounidenses comunes y corrientes, auténticos (Frank, 2004).

La tesis del presente ensayo es que la derecha supo aprovechar la crisis política y social no únicamente calcando fórmulas de la nueva derecha global y su paradójica inclinación al populismo. La derrota de la convención electa en 2021, de la propuesta constitucional en 2022 y de la izquierda en su conjunto en 2023, también tiene un correlato en las capacidades de producción discursiva, interpe-lación ideológica y producción significativa de la intelectualidad de derechas. En todo caso, este correlato no es unitario, fluctúa entre liberales y nacionalistas, entre libertarios y espiritualistas, etc.⁵ Lo que resulta de esta divisibilidad de las ideas de derecha, imposibles de subsumir en un mismo campo de acción –como mostraré en el presente ensayo– es una suerte de *interregno* de las ideas de la clase dominante, para usar los términos de Gramsci (2010, p. 313). Asumir

5 Una plétora de *think tanks* de derecha y ultraderecha, inspirados ya sea en el pensamiento socialcristiano, en Friederich Hayek y Milton Friedman, o en el nacionalismo católico del siglo XX chileno, dan cuenta de esta diversidad (Barreda, Rodríguez y Sánchez, 2023).

la perspectiva analítica gramsciana del interregno implica no solo decir que lo nuevo no termina de nacer, sino ante todo que existe una crisis orgánica de la hegemonía. Es también una crisis de las ideologías orgánicas, estructurales y una proliferación de los ideogramas arbitrarios, *queridos* (Gramsci, 2010, p. 364).

Miedo a las masas y tecnocentrismo epistémico

A pocos días de la revuelta de octubre de 2019, el escritor y filósofo Arturo Fontaine Talavera –presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de los *think tanks* más poderosos de la derecha chilena– escribía una columna titulada “Asonada en Chile”. Fontaine explica la crisis recurriendo a las imágenes del “goce prohibido”, de la “pulsión de muerte”, que haría uso del fuego aniquilador y destructivo contra la república. Una voluntad excepcionalista animaría tanto a los que protagonizan el fuego de la revuelta, el lumpen y su estela de saqueos e incendios, como a la izquierda parlamentaria. Fontaine llamó en dicho artículo a contener este gran acceso al goce prohibido, esta hecatombe del poder desatado de las llamas, mediante la represión policial. El análisis de Fontaine –evidentemente sesgado en torno a las causas de la violencia, incapaz de dar cuenta del desbalance estructural que está implicado en la crisis, el agotamiento de un modelo de privatización generalizada de los bienes públicos, la sensación de humillación ciudadana en un país con los mayores índices de desigualdad de la región– reinaugura tempranamente un dispositivo ideológico que vemos proliferar intensamente durante el octubre chileno, la psicología de masas.

En América Latina, la psicologización de las masas es un artilugio conocido al interior de las ideologías dominantes. Vista dentro de la división foucaultiana en términos de epistemes, la psicología de masas apenas alcanza para un subcapítulo del positivismo. Sin embargo, como indicó alguna vez Horacio González (2000) su productividad

y capacidad de interpelación ideológica se extienden más allá. La importancia del psicologismo de masas consiste en que sus ideologemas arbitrarios se dan espacio rápidamente en la configuración de los estados, llegando a influir en las *etnicidades ficticias* nacionales, al decir de Etienne Balibar, deviniendo ideologías orgánicas (Balibar y Wallerstein, 1991). En el caso chileno, las psicologías de masas de inicios del siglo XX tienen expresión en la necesidad de una parte considerable de la élite, de lidiar con lo que llamo el problema de una doble frontera nacional: en primer lugar, la frontera que divide la cultura colonial al norte del río Biobío y los mapuche hacia el sur y, en segundo lugar, la frontera interna de la ciudad urbana, la división entre una ciudad “ilustrada, opulenta, cristiana”, el “Santiago propio”, como dice Benjamín Vicuña Mackenna, y la “inmensa cloaca de infección y de vicio, de crimen y de peste”, allende los límites de la ciudad (Vicuña Mackenna, 1872, p. 24). Esta doble frontera de la naciente sociedad capitalista produce, por un lado, la fantasía nacional del *pueblo originario*, y por otro las múltiples teorías sobre el roto chileno y el mestizaje *gótico-araucano*.⁶

Para el caso contemporáneo, la reconstrucción del psicologismo permite a la derecha caracterizar un sujeto: el *octubrista*, es decir, el sujeto de la protesta social. En una entrevista concedida el 21 de octubre de 2019, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, intelectual rawlsiano conocido por su versatilidad, pasaba formalmente a la reacción de derecha frente a la revuelta de octubre. Peña, con su locuacidad habitual, habla ahí de los “estallidos pulsionales”, de la “conmoción generacional”, de las “pandillas orgiásticas,

6 La épica nacional del roto chileno es el elemento sustancial de la etnicidad ficticia chilena. El roto es una figura viril y resiliente que soporta su condición obrera como fusión mestiza entre la raza originaria guerrera de Arauco y la sangre española (Palacios, 1902). En las psicologías de masas de inicios del siglo XX resalta una preocupación vital por una orilla proletaria de la ciudad que se mueve como un “gusano pulsátil” al decir de Gabriel Tarde (Barrows, 1981, p. 192).

carnavalescas”: “lo que ocurrió fue una especie de contagio inevitable, emocional, instintual [sic] hasta cierto punto” (2019a). A partir de esta reacción, en febrero de 2020 Peña publica su libro *Pensar el malestar*, en el que desarrolla esta lectura psicologizante y patologizante de las masas de octubre. El argumento de Peña se basa en una paradoja orteguiana: a medida en que los chilenos han accedido al consumo, se han vuelto más insatisfechos, al mismo tiempo que “poseídos por la pasión del consumo” (Peña, 2020, p. 60).⁷ De tal manera que la insurrección debe ser explicada en los términos de una colosal arremetida de la subjetividad insatisfecha contra el mundo: “la idea de que no hay fundamentos, distintos a la subjetividad, para sentar las bases de la vida en común” (Peña, 2020, p. 113) habría sublevado el “malestar de los jóvenes” (Peña, 2020, p. 112). La revuelta de octubre sería entonces una suerte de rebelión moral de la plebe insatisfecha: la modernización chilena de las últimas décadas habría producido, según Peña, un “cambio en las condiciones materiales de la existencia” que “hoy día parecen mejores que nunca”, pero también unas expectativas irrealistas en las nuevas clases medias (Peña, 2020, p. 11).

Los argumentos de Peña muestran una tendencia a recuperar la psicologización de las masas, pero especialmente de la juventud, a la que considera portadora de una esquizofrenia colectiva (“ruptura en la cadena signifiante”, señala citando a Lacan). Entregados a la “experiencia alucinadora de la euforia” (Peña, 2020, p. 26), los jóvenes son víctimas de una desorientación frente a la vida moderna. En el fondo, se trata de un clamor ultraconservador, toda vez que raya en

7 La tesis de Peña carece, en el fondo, de toda originalidad: es una repetición, para el caso chileno, de los argumentos de Ortega en su famoso ensayo *La rebelión de las masas*, de casi un siglo de antigüedad. Las masas de octubre son muchedumbres mimadas, constituyen lo que Ortega llama una “invasión vertical de los bárbaros”, y son el resultado de la modernización que hace la vida “cada vez mejor [...] pero cada vez más complicada” (Ortega, 1966, p. 203).

una hipótesis sobre la carencia de sentido del mundo, que al mismo tiempo que se pavonea en la alabanza sin límites del mercado como esfera de libertad ciudadana, fustiga las consecuencias negativas de la contrarrevolución neoliberal, comenzada durante la dictadura militar de Pinochet: “la generación nacida en los noventa sufre de una anomia, de falta de orientación normativa y está entregada a su propia subjetividad” (Peña, 2020, p. 34).⁸

Formalmente adscrito al centro político, Peña saca a relucir aquí una deuda con el intelectual católico chileno Pedro Morandé, quien efectúa la crítica de derecha más lúcida al proyecto de reformas neoliberales encabezado por la dictadura. Sin embargo, la crítica al neoliberalismo de Morandé no deja de ser conservadora y tradicionalista. Se trata de una reivindicación de los valores católicos y la religiosidad popular –la lógica *sacrificial* como la llama él– capaz de resistir el universalismo modernizador del desarrollismo y el economicismo neoliberal. Con todo, Morandé es el primero en identificar, dentro de los límites del pensamiento de derecha, un tipo de contradicción o paradoja interna a la modernización chilena, entre una esfera de los valores y la cultura profundamente sacrificial y religiosa, y una modernización cuya ideología sociológica constituye, para el autor, una confianza extrema en la “funcionalidad de las estructuras” (Morandé, 2017, p. 148). La interpretación de Morandé, que merece un capítulo aparte por su importancia actual en Chile, se instituye a partir de tres presupuestos epistémicos: la contradicción entre sociedad y comunidad, o entre la planificación desarrollista y la esfera cultural de los valores, el predominio de una tecnocracia que solo puede proclamarse por “sujetos abstractos y, por tanto, desculturizados” (Morandé, 2017, p. 39), y finalmente en una exigida sobrevaloración del papel de la técnica, de la tecnocracia y de los técnicos en

8 Como había hecho Peña (2015) en su libro anterior, aparecido en respuesta al filósofo estadounidense Michael Sandel, *Lo que el dinero sí puede comprar*.

las sociedades modernas.⁹ Esta suerte de epistemología social tecnocentrista tiene la ventaja, para las ideologías conservadoras, de que es capaz de sostener una equiparación sistemática entre la modernización capitalista y el marxismo, que no serían sino expresiones de una misma forma esencial, la técnica moderna (Morandé, 2017, p. 56). Se produce aquí una asunción radical, conservadora, aparentemente contestataria, de las viejas hipótesis del *imperio global de la técnica* que sedujeron ya tempranamente a historiadores de derecha en Chile, como Mario Góngora (1981) o Jaime Eyzaguirre (1991).

La importancia del tecnocentrismo de Morandé es que permite, al mismo tiempo, una lectura de los eventos de crisis de las sociedades capitalistas como expresiones de un desánimo psíquico-cultural, de lo que la sociología durkheimiana llama *anomia*. En otros términos, la obra de Morandé y de sus discípulos, ha provocado un encuentro del viejo dispositivo de las psicologías de masas, con sus análisis de las crisis e irrupciones populares como casos de neurastenia social y *contagio* (es el término leboniano por excelencia), con la epistemología social existencialista y tecnofóbica que plantea que las sociedades modernas, el desarrollo del capitalismo y la consolidación de las clases dominantes debe ser explicada a partir del predominio planetario de la técnica. La técnica aparece como la verdadera causa de las relaciones sociales capitalistas, y sus crisis de legitimidad,

9 El Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) ocupa un lugar predominante en la vida intelectual de la derecha, agrupando en torno a él a autores como Hugo Herrera (*Octubre en Chile*, 2019), Daniel Mansuy (*Salvador Allende: La Unidad Popular y la izquierda chilena*) y Josefina Araos, discípula de Pedro Morandé. Esta última resulta especialmente relevante por su oposición a la Convención Constitucional de 2021, a la que consideró habilitada por un constructivismo abstracto que no tenía en cuenta las realidades nacionales más profundas. Discípula de Pedro Morandé, Araos anticipó el fracaso de la Convención apoyándose en una lectura de la cultura chilena como opuesta al autoritarismo abstracto de la Convención, carente –según ella– de comprensiones que permitieran leer el choque entre el sentido común y los conceptos de la propuesta constitucional (cf. Araos, 2021).

las insurrecciones, como desajustes anómicos-culturales.¹⁰ Morandé expresa esto en los términos de una contradicción cuasi-existencial, cultural, entre un “pueblo sin técnica” y una “técnica sin pueblo”, es decir, entre un iluminismo tecnocrático y un pueblo culturalmente no-moderno (Morandé, 2017, p. 65).

Carlos Peña hace suya esta tesis cuando afirma que la “intensa socialización que exigen las sociedades contemporáneas se encuentra acompañada de un sentimiento de intensa soledad y aislamiento” (Peña, 2020, p. 100), o que “lo que ocurre [...] es que la técnica escapa, obviamente, a la política, generando una sensación de ajenidad” (Peña, 2020, p. 107). Los bienes de la modernización incluyen esa paradoja interna, esa situación límite para la que, con todo, no hay solución (Peña, 2020, p. 101). Este fetichismo epistémico de la técnica tiene, finalmente, como su contracara más natural y axiomática una psicologización del sujeto, una explicación de su situación histórica a partir de una historia más prístina, más original, más auténtica que la pura historia de las estructuras y relaciones sociales que lo constituyen –lo que Morandé, siguiendo a Octavio Paz, llama *intrahistoria* (Morandé, 2017, p. 138).

Eugenio Tironi, intelectual orgánico de la transición chilena, también va a insistir en la pérdida de la calidez de las relaciones humanas, en la crisis del ethos cultural, para explicar la revuelta de octubre, a la que califica como *desborde*: “El desborde es un fenómeno gatillado por procesos fundados en la ciencia y la técnica, que imprevistamente se sale de su cauce y produce conmociones que se expanden como las epidemias, como el contagio” (Tironi, 2020, p. 16). Tenemos todos los elementos conjuntivos de la reacción conservadora

10 Marx pondría la técnica en el corazón de las relaciones capitalistas, pero subordinada a la producción de plusvalía relativa y la reproducción ampliada del capital. Ha sido el capital, para Marx, en su necesidad de convenir una posición de ventaja respecto al poder del trabajo, el que ha empujado a la técnica. Marx utiliza el concepto de *composición orgánica del capital* para caracterizar esta relación (Marx, 2022, p. 703).

ante la revuelta chilena en esta cita: una rebelión contra el gobierno de los expertos de la técnica –es lo que insinúa Tironi– ha producido un *contagio*, una *epidemia* de violencia y destrucción. Las tesis de la locura epidémica y la sugestión colectiva son predominantes, como ya señalé, desde muy temprano en la intelectualidad dominante latinoamericana. Su actualización y persistencia se debe, quizás, a algo que observara Gyorgy Lukacs en 1923, a saber, que la *historia ideológica* de las clases dominantes es una suerte de lucha desesperada contra la comprensión de la naturaleza de la sociedad por ellas producida, una producción sintomática de artefactos teóricos –ideologías arbitrarias, en términos de Gramsci– que contribuyan a aplacar el síntoma de la lucha de clases (Lukács, 2016, p. 76). La técnica puede aparecer, de esta manera, como el artefacto causal, simultáneamente, de las crisis y del bienestar capitalista, del bien y del mal. En ese mismo ardid, las masas son víctimas de su propia densidad cultural, de su soledad, de su insatisfacción, de su *malestar*.

Romanticismo católico y contrarrevolucionario

No hay que olvidar la familiaridad entre el tecnocentrismo y lo que el filósofo alemán Carl Schmitt llama *filosofía política de la contrarrevolución* (2006). Schmitt consideraba que la modernidad había destruido la internidad del poder real de la república cristiana, su capacidad para mantener unidas *potestas* y *auctoritas*, la vida interior valórica y la vida exterior político-económica (Schmitt, 2006, p. 61). La modernidad sería en este sentido la historia de un divorcio. La importancia del pensador español Juan Donoso Cortés, para Schmitt, reside precisamente en que representa un punto máximo del pensamiento católico a propósito de esta separación entre *interno* y *externo* (Schmitt, 1952). Donoso explicaba la modernidad a partir de este mismo tipo de paradojas psicologicistas, pese a su ubicación al interior del tradicionalismo y el reaccionarismo estrictamente católicos.

La modernidad debía aumentar radicalmente la represión exterior o externa –la policía, la legalidad, los derechos civiles, en fin, la técnica– porque una represión interna, más originaria, se había debilitado (Donoso, 1954, p. 47). La desintegración del mundo religioso provoca una disminución de los sentimientos católicos, y con ello, provoca el aumento de “la represión política, la tiranía” (Donoso, 1954, p. 47). Con ello, Donoso parece convenir con el culturalismo tecnocéntrico, en la medida en que el poder político aparece como una exterioridad respecto a un mundo cultural deteriorado. Esta es la base de la comprensión teológico-política de la modernidad, como encarnación de unas fuerzas apocalípticas, contra las que la espiritualidad debe efectuar su propia guerra interna.¹¹

Si los intelectuales de la psicologización de las masas como Fontaine, Peña o Tironi constituyen un contingente culturalista y secular de las reacciones conservadoras a la revuelta de 2019 en Chile, las intervenciones que analizo en este apartado se caracterizan por un misticismo, a veces católico, a veces nacionalista, centrado en la imagen de una unidad espiritual subyacente, dañada por la modernidad neoliberal –paradójicamente, esto indica un *antiliberalismo* (Holmes, 1996) de derecha que merece toda la atención. También constituyen la promesa o la utopía rota de un capitalismo de lazos sociales humanos, comunitarios, prístinos, valóricos o *intrahistóricos*, al decir del viejo Morandé. Se trata de un romanticismo capitalista, que espera encontrar, detrás de la cáscara de la sociedad neoliberal, una vía a la acumulación más preocupada del territorio, del paisaje, o inclusive del pueblo.

11 Con ello, Donoso parece convenir con el culturalismo tecnocéntrico, al menos en un punto, a saber: que el poder político aparece como una exterioridad respecto a un mundo cultural, valórico, profundamente deteriorado. El enemigo más poderoso surgido de esta disolución universalista de los valores católicos, para Donoso, es el socialismo, al que califica como “fuerza de destrucción invencible que, no siendo católica, es forzosamente satánica” (Donoso, 2021, p. 57).

Acaso de toda la intelectualidad criolla envilecida con el octubre chileno, Lucy Oporto represente la pluma más versátil, la más apremiada, la que más se aferra a una retórica rapaz, enarbolando el sentimiento aristocrático del espíritu nacional frente a la alteridad de las masas. En una línea muy similar a la de Peña, signada más arriba, Oporto lee la revuelta como una continuidad desbocada del consumo de masas; como un estallido de consumidores insatisfechos (2022). La revuelta sería el producto del “cinismo y la ironía ofrecidos en esta época como transgresión, marginalidad, alternatividad, subversión, o espuria y rentable danza sobre el abismo, en medio de la consolidación y apoteosis de la sociedad de consumo y su hedonismo nivelador” (Oporto, 2022, p. 201). Frente a ese hedonismo, convertido en revuelta por efecto de un “envilecimiento satánico” del pueblo, la autora reclama una existencia espiritual más auténtica, una “vitalidad poética de un mundo popular y campesino ya perdido” (Oporto, 2022, p. 58). La jerga de Oporto escotomiza una reacción conservadora frente al síntoma capitalista por excelencia, el goce ilimitado, convertido en fundamento de toda movilización subjetiva –incluida la revuelta. Sin embargo, ha sido su fórmula de caracterización, *lumpenconsumismo*, la que más goza de difusión y buena prensa en Chile, con entrevistas en programas radiales y televisivos, y que caracteriza el octubre chileno como una irrupción de “saqueadores y escorias varias”, dominados por la compulsión de “tener, poseer, destruir”.¹² La revuelta representaría el “hundimiento de Chile en la última oscuridad”, una “horda autocomplaciente de consumidores voraces, ya madura para una barbarie abierta e impune” (Oporto, 2022, p. 160).

Lo relevante de esta retórica es que anticipa en la revuelta una resurrección oscurantista del fascismo, equivalenciando los actos de

12 Hago alusión aquí al título del artículo más importante de Oporto hasta el momento, capítulo central de su libro *He aquí que debes armarte de fortaleza* (2022).

violencia popular de 2019 con eventos como el golpe de estado de 1973 y el bombardeo del Palacio de La Moneda.¹³ Es un artillugio, por lo demás, muy católico: toda su piedad se resume en una melancolía capitalista por las imágenes y los monumentos cristianos, en una nostalgia por una vida perdida, así como en la ilusión de un consumo que no sea lumpen, desenfrenado, hedonista –en un consumo católico. Por eso dice Oporto que lo siniestro aparece ahí donde surge “el silencio de Dios, la extinción del espíritu, la energía de los muertos capturada por el olvido, la indolencia depravada, el bárbaro hedonismo de esta época” (Oporto, 2022, p. 103). El problema de esta argumentación, con todo, es de carácter estructural. La censura de la dialéctica anuncia su reemplazo por el lenguaje jungiano.¹⁴ Dicha inaptitud para la dialéctica termina provocando un corte maniqueo entre las rebeliones buenas, humanas, católicas, espirituales, y lo que Marx llamaba las “revoluciones feas”, en las que las “realidades toman el lugar de las palabras” (Marx, 2019, p. 394). Este corte maniqueo, que puede rastrearse en los equívocos epistemológicos e histórico-políticos del concepto mismo de lumpen, olvida que las grandes insurrecciones de masas han estado siempre habitadas por deseos propios de la sociedad en la que desenvuelven, y que son formulaciones parciales de la tendencia capitalista a la crisis (Clover, 2016).¹⁵

Apenas un mes después de comenzada la asonada de masas en Santiago, el filósofo y militante de derecha Hugo Herrera publicó su opúsculo urgente, *Octubre en Chile*. El libro de Herrera está signado

- 13 Es importante mencionar que Oporto hace referencia al octubre chileno como “huevo de la serpiente” (p. 71), haciendo alusión, desde luego, a la película de Ingmar Bergman sobre la Alemania de Weimar. En esto podría coincidir con Oporto, pero en términos completamente diferenciados.
- 14 Al respecto, véase aquel famoso ensayo de Carl Gustav Jung, titulado “Wotan”, en el que el autor lee las transformaciones políticas y sociales de la Alemania nazi como expresiones de arquetipos cuya profundidad permanece insondable, misteriosa.
- 15 “The first relation between riot and crisis is that of surplus” (Clover, 2016, p. 12).

por el lenguaje religioso.¹⁶ El autor escruta la revuelta chilena en términos de una irrupción milagrosa y telúrica (*fuerza insondable* o evento metafísico). Habría una discordancia profunda entre la historia concreta, entre la vida íntima del “pueblo”, “inescrutable”, “misteriosa” (Herrera, 2019, p. 32) y una vida visible, hacia afuera. Desde luego aquí el modelo fundamental hace eco no solo del pensamiento religioso, católico –de nuevo entroncado con Morandé– sino también de la propia simbología de la revuelta. Por un lado, en efecto, tenemos la normalidad neoliberal y por otro el pueblo que irrumpe en octubre: “el pueblo es acontecimiento [...] y la vinculación del pueblo con la divinidad permite abrir el hecho popular a consideraciones menos reduccionistas que las más usuales” (Herrera, 2019, p. 40).

Este libro habilita el lenguaje para una derecha “nacional-popular”, pero sobre todo telurista y psicologizante. Una reducción del sujeto al paisaje existe aquí en la forma poética de lo telúrico, que alude claramente a las marcas geológicas de Chile para volver comprensible el espíritu nacional: “somos alma, cuerpo y suelo, y nuestra relación con la tierra es expresión y también causa de nuestra relación con nosotros mismos” (Herrera, 2019, p. 52). La solución a la revuelta estaría, por de pronto, en esta reducción metafísico-telurista de la revuelta a la geología del ser chileno, en una intervención que reconcilie el carácter infausto del pueblo chileno (Herrera, 2019, p. 61) con las instituciones de la república.

16 También por la influencia del nacionalismo vernáculo y lo que se conoce en Chile como “ensayismo del centenario”, que constituyó una reacción de las capas intelectuales oligárquicas y mesocráticas a lo que se conoció como la “cuestión social chilena”, es decir, el ámbito del crecimiento de la miseria. Me refiero sobre todo a Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina. Especialmente a Edwards y su concepto antioligárquico de *fronda aristocrática*. Con posterior a la revuelta, Herrera publica su libro *Pensadores peligrosos: La comprensión según Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora* (2021), donde recoge el pensamiento del nacionalismo criollo. Herrera además es un especialista en el pensamiento de Carl Schmitt.

Esta interpretación contrasta con la mirada negativa de Lucy Oporto respecto de la revuelta. En vez de una lectura católica y aristocrática del resentimiento popular como actividad propia del hedonismo y el lumpenconsumismo de masas, lo que prevalece en Herrera es la mixtificación del pueblo, y especialmente la reducción del pueblo al paisaje telúrico del ser nacional. Esta reducción metafísica, en cualquier caso, se ubica en el mismo marco comprensivo de Oporto, aquel enfocado en las fuerzas espirituales y en la mirada existencial del pueblo chileno. La lectura de Herrera, sin embargo, parece extraer del hecho apoteósico de la rebelión popular unas consecuencias positivas para la derecha, una solución romántico-conservadora: la reconciliación entre pueblo y paisaje, entre “existencialidad de la tierra” (Herrera, 2019, p. 56) e institucionalidad.¹⁷ La revuelta representa, de este modo, un desafío comprensivo para la derecha: “las instituciones son los modos de dar cauce y expresión a los anhelos y pulsiones populares: son, ellas mismas, maneras de comprender” (Herrera, 2019, p. 112).

De hecho, en su libro subsecuente, *Crisis epocal y republicanismo popular* (2020), Herrera indica que “hubo tiempos en los que el Estado gozó en Chile de lucidez espacial y territorial, y gracias a ellos fueron pensados el tendido de la red ferroviaria, la colonización del sur, la fundación de escuelas” (Herrera, 2020, p. 21). El ferrocarril y la colonización de escuelas serían efecto, en esta auténtica ficción capitalista, no de las necesidades de expansión del capital mercantil, rentista o industrial, sino de una *lucidez espacial*, de una comprensión existencial de la esencia telúrica del pueblo chileno. Aquí se halla uno de los principales problemas teóricos que nos lega el pensamiento de derecha surgido al calor de la revuelta chilena de 2019: la retrotopía

17 El pueblo ofrecería, dice Herrera – siguiendo a autores conservadores como Alberto Edwards, o Francisco Antonio Encina – un “polo concreto” frente a la despolitización promovida por el “economicismo” ideológico de la derecha tradicional, entendido como “polo abstracto” (p. 101).

(Bauman, 2017) de un capitalismo lúcido, justo, comunitario. Esta retrotopía desarrollista y deseconomizada olvida que es, de hecho, el propio capitalismo el que impide “romper el hacinamiento”, fundar “plazas grandes de árboles altos y frondosos”, “sistemas de transporte holgados”, como quiere Herrera (Herrera, 2020, p. 25). Finalmente, esta hipótesis de un capitalismo de la paz social, tempranamente criticada por Lenin (1976) a propósito de la teoría económica de Sismondi, expresa los límites del concepto mismo de *neoliberalismo*, que sugiere tras bambalinas la posibilidad de un capitalismo más social, menos voraz, menos salvaje.

Detrás de esta nostalgia por un capitalismo de la paz social, resuena el ideal mesocrático de una civilización industrial armoniosa, heredera del corporativismo o del modelo fordista, así como el sobrentendido de un capital no-neoliberal, no-desregulado, no-anárquico. Finalmente, se oculta, tras esta cuota de nostalgia capitalista, la naturaleza destructiva del lazo social inherente al capitalismo, como identificó Lacan, que subsume las relaciones humanas en el puro valor de cambio (Holland, 2015). Alternativamente, la comunidad imaginaria de una nación que es capaz de reconciliar la comunidad política con el mercado, representa la *deseconomización* de la reflexión teórica y filosófica que advertiera Lukács (2019), como rasgo central en la fascistización irracionalista del pensamiento.

Conclusiones

Las ideologías conservadoras (más allá del mote político y coyuntural de la *derecha*), reaccionaron frente a la crisis política de 2019 recurriendo a una diversidad de artilugios de larga data en el pensamiento hegemónico latinoamericano. Constatamos una rearticulación sofisticada, comprometida con el capitalismo tardío y el proyecto de restauración neoliberal, de la psicología de masas, ya utilizada previamente para explicar las rebeliones *neurasténicas* en Brasil (Da Cunha, 2018), el

comportamiento de las multitudes en Argentina (Ramos Mejía, 1912; 1988), el destino racial de la población indígena boliviana (Arguedas, 1912), o la importancia del carácter mestizo de la cultura chilena y el carácter nacional (Palacios, 1902; Morandé, 2021). Las categorías del contagio, del descalabro emocional, de la insatisfacción de las aglomeraciones o de la plebe, recuerdan aquí la poderosa intuición althusseriana respecto del psicologismo: el predominio de una hipótesis de continuidad entre la naturaleza biológica de los sujetos y su existencia cultural y política (Guillot, 2011).

Esta hipótesis de continuidad naturaleza-cultura funciona como telón de fondo de la suposición de que, en el momento de la revuelta, se desatan en realidad pasiones que serían irracionales, “instintuales” como dice Carlos Peña, irreconocibles para la razón y el orden simbólico. Hablaríamos entonces de una irrupción del *hombre* en estado de naturaleza (Althusser, 2016, p. 61). Este desborde de lo natural en lo humano sería producido por descalabros producidos en la *esfera de la técnica*, que es la única capaz de explicar lo social. En ese sentido, he planteado que el psicologismo funciona aparejado a un tecnocentrismo epistemológico. La técnica y su contraparte, los expertos, producirían un resentimiento catastrófico, un “pueblo sin técnica”, como había afirmado Morandé.

Finalmente, esta psicología de masas tecnocentrista adquiere un sentido trágico, en la medida en que la *modernización* chilena incluye esta dimensión de insatisfacción generacional, expresada también como tendencia al sacrificio. La modernización “deteriora los grupos primarios de pertenencia”, lesiona “los anhelos de comunidad” imposibles de satisfacer, dice Peña (2020, p. 207), pero este debilitamiento de la comunidad y de la cultura en la modernización son consecuencias inevitables. Por lo mismo, la solución trágica a la que anhela secretamente este psicologismo, es la mera represión de los sublevados, su sujetamiento al orden institucional –para que la modernidad siga.

En segundo lugar, el romanticismo ofrece un tipo de análisis similar, pero esta vez aún más deseconomizado. Mientras Peña todavía recurre a las fuerzas de abstracción social del mercado como explicatorias de una insatisfacción primitiva, etológica y cultural expresada como *malestar*, el romanticismo no recurre a explicaciones sociológicas de esta índole. Es una filosofía de la historia: Chile estaría desunido de su espíritu, de su existencia *telúrica*, de la continuidad entre su pueblo y su paisaje. Lo que me parece decisivo en este plano de las ideas de derecha en Chile es la persistencia del ideal reaccionario, con todas sus letras. Es decir, el resurgimiento de la teología política –que es una reducción de la política a la esfera del milagro o, como dice Marilena Chaui (2021), una teologización de los conceptos políticos seculares. Por eso, la dupla que escogí, los intelectuales Hugo Herrera y Lucy Oporto, aunque parece llegar a conclusiones opuestas –una que ensalza al pueblo, otra que lo caracteriza como envilecimiento satánico y lumpenfascismo– responde en realidad a un mismo tendido epistémico, el reemplazo de la fuerza viva del concepto por el mitologema, o, para utilizar la vieja terminología especializada, el teologúmenon. La tesis de una honda pérdida del espíritu, de la muerte de Dios en la revuelta, es el inverso teológico-político de la tesis del pueblo como “*deus absconditus*” y “*dios silente*” (Herrera, 2019, p. 76).

Una derecha más laica, finalmente, ha respondido a muchas de estas lecturas especulativas. Valentina Verbal representa una de las voces más intransigentes del monetarismo neoliberal chileno y el liberalismo pro-capitalista. Para la autora, conceptos como el de *neoliberalismo*, o incluso *pueblo*, serían formulaciones abstractas, constructivismos sociales inaptos para entender la realidad. Verbal identifica lo que llama un *anticapitalismo soft* interno a la derecha (Verbal, 2020, p. 38), que asume una “crítica moralizante al modelo”. La autora percibe correctamente que en este anticapitalismo soft –que yo he preferido definir como nostalgia romántico-capitalista– pervive la fidelidad ideológica a una “comunidad de origen y

destino” (Verbal, 2020, p. 40) que coquetea abiertamente con los mitologemas del fascismo. Para Verbal, el sistema de libre mercado es la garantía misma de la existencia de la democracia. Contra toda una literatura que desmiente la relación favorable entre triunfalismo de mercado y democracia (Sandel, 2012; Grestle, 2022), Verbal, casi como atascada en el famoso documental de Milton Friedman *Free to Choose* (1980), considera que los mercados son fundamentales para la democracia. Acusando a Herrera de “animismo” e “interpretaciones intuitivo-colectivistas” (p. 47), Verbal parece reafirmar el individualismo metodológico thatcheriano que dominó durante el ciclo neoliberal. Estamos, en cualquier caso, en medio de un período de ajustes ideológicos, de una confusión de los tiempos o, como diría Ernst Bloch (2019), de un momento no-sincronicidad (*Ungleichzeitigkeit*).

En este peligroso interregno, las ideas de derecha ofrecen varias formas de atavismo, nostalgias capitalistas, utopías rotas de un país empresarial y un reino de la libertad. El fetiche que se encuentra detrás de esta variedad de ideologías parciales, arbitrarias en los términos de Gramsci, es la idea de que la revuelta sería otra cosa respecto al capitalismo chileno, que no se explicaría a partir de su internidad a la crisis. Con todas las diferencias interpretativas que hallamos entre el psicologismo, el romanticismo y el defensismo neoliberal, la revuelta aparece siempre como milagro, como evento venido desde un afuera insondable. Esto provoca una vigorosa incapacidad de arreglos y acuerdos ideológicos al interior de la clase dominante chilena, dividida entre empresarios católicos, neoliberales radicales laicos como Verbal, corporativistas y animistas como Herrera, liberales culturalistas como Peña, etc. Aprovechar esta división parece ser una tarea probable para las fuerzas emancipatorias, pero ello solo puede partir de una clarificación de la coyuntura del octubre chileno, de una historia inmanente, material, dialéctica y rigurosamente crítica de la revuelta.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguayo, Claudio (2023). El Allende de Daniel Mansuy: un espejo arreglado. *Rosa, una revista de izquierda*. <https://www.revistarosa.cl/2023/07/17/allende-de-mansuy/>
- Althusser, Louis (1978). *La revolución teórica de Marx*. México: Siglo XXI Editores.
- Althusser, Louis (2016). *Psychoanalysis and the Human Sciences*. Nueva York: Columbia University Press.
- Althusser, Louis (2016). *Psychoanalysis and the Human Sciences*. New York: Columbia University Press.
- Araos, Josefina (2021). Estudio preliminar. En Morandé, Pedro, *Cultura y modernización en América Latina*. Santiago: IES.
- Arguedas, Alcides (1912). *Pueblo enfermo. Contribución a la psicología de los pueblos Hispanoamericanos*. Barcelona: Viuda de Luis Tasso.
- Balibar, Etienne y Wallerstein, Immanuel (1991). *Race, Class, Nation*. Londres: Verso Books.
- Barreda, Mikel, Ruiz Rodríguez, Leticia y Sánchez, Gema (2023). Cuando los think tanks entran en campaña: el caso de Chile. *Colombia Internacional*, 114, 123-151.
- Barrows, Susanna (1981). *Distorting Mirrors: Visions of the Crowd in Late Nineteenth Century*. Yale: Yale University Press.
- Bauman, Zygmunt (2017). *Retrotopia*. Nueva York: Polity.
- Bengoa, José (2021). *La comunidad sublevada: Ensayos y crónicas*. Santiago: Catalonia.
- Bloch, Ernst (2019). *Herencia de esta época*. Madrid: Tecnos.
- Brooks, David (2001). *Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There*. Nueva York: Simon & Schuster Edition.
- Chauí, Marilena (2021). Theological-Political Power: Spinoza against Schmitt. *Crisis & Critique*, 8(1).
- Clover, Joshua (2016). *Riot. Strike. Riot*. Londres: Verso Books.
- Da Cunha, Euclides (2018). *Os Sertões*. Sao Paulo: Pinguin Random House Brazil.
- Donoso Cortés, Juan (1954). Obras completas II, *Discurso sobre la dictadura*. Madrid: Rialp.
- Donoso Cortés, Juan (2021). *Ensayo sobre el liberalismo, el catolicismo y el socialismo*. Illinois: Monee.

- Dugin, Alexander (2013). *La cuarta teoría política*. Madrid: Ediciones Nueva República.
- Eribon, Didier (2015). *Regreso a Reims*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Eyzaguirre, Jaime (1991). *Ideario y ruta de la emancipación chilena*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Fontaine Talavera, Arturo (24 de octubre de 2019). Asonada en Chile. *Letras libres*. <https://letraslibres.com/politica/asonada-en-chile/>
- Frank, Thomas (2004). *What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America*. Nueva York: Metropolitan Books.
- Góngora, Mario (1981). *Ensayo histórico sobre la noción de estado en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Gonzalez, Horacio (2000). *Restos pampeanos*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.
- Gramsci, Antonio (2010). *Antología*. México: Siglo XXI Editores.
- Grestle, Gary (2022). *The Rise and the Fall of the Neoliberal Order*. Londres: Oxford University Press.
- Guillot, Pascale (2011). *Althusser y el psicoanálisis*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Herrera, Hugo (2019). *Octubre en Chile: Acontecimiento y comprensión política*. Santiago: Katancura.
- Herrera, Hugo (2020). *Crisis epocal y republicanismo popular*. Santiago: Ediciones del Puangue.
- Herrera, Hugo (2021). *Pensadores peligrosos: La comprensión según Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora*. Santiago: UAH Editorial.
- Holland, John (2015). The Capitalist Uncanny. *Journal of the Circle for Lacanina Critique*, 8.
- Holmes, Stephen (1996). *The Anatomy of Antiliberalism*. Harvard: Harvard University Press.
- Jung, Carl Gustav (1970). Wotan. En *Collected Works of C. G. Jung*. Princeton: Princeton University Press.
- Kewek, Dorothy (abril 2015). Power and the Multitude: A Spinozist View. *Political Theory*, 43(2), 155-184.
- Krauthammer, Charles (25 de febrero de 2007). Limousine Liberal Hypocrisy. *Times*. <https://web.archive.org/web/20070319210156/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1599714,00.html>
- Lacan, Jacques (1995). *El Seminario. Libro 3: "Las psicosis"*. Buenos Aires: Paidós.

- Laclau, Ernesto (1976). *Fascism and Ideology*. En *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: Verso Books.
- Laje, Agustín (2022). *La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha*. Ciudad de México: HarperCollins México.
- Lenin, Wladimir (1976). *Sobre el romanticismo económico*. En *Obras*. Moscú: Progreso.
- Lukács, Gyorgy (2016). *Historia y conciencia de clases*. Buenos Aires: Ediciones Razón y Revolución.
- Lukács, Gyorgy (2019). *The Destruction of Reason*. Londres: Verso Books.
- Mansuy, Daniel (2023). *Salvador Allende. La izquierda chilena y la unidad popular*. Santiago: Taurus.
- Márquez, Nicolás (2023). *La dictadura comunista de Salvador Allende*. Santiago: Grupo Unión.
- Marx, Karl (2019). *Political Writings*. Londres: Verso Books.
- Marx, Karl (2022). *El Capital, crítica de la economía política. Libro I*. México: Siglo XXI.
- Mayol, Alberto (2015). *El derrumbe del modelo*. Santiago: LOM Ediciones.
- Merleau-Ponty, Maurice (1957). *Fenomenología de la percepción*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Morandé, Pedro (2017). *Cultura y modernización en América Latina: Ensayo sociológico acerca de la crisis del desarrollismo y su superación*. Santiago: IES ediciones.
- Morandé, Pedro (2021). *Cultura y modernización en América Latina: Ensayo sociológico acerca de la crisis del desarrollismo y su superación*. Santiago: IES.
- Oporto, Lucy (2022). *He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza*. Santiago: Katancura.
- Ortega y Gasset, José (1966). *La rebelión de las masas*. Madrid: Revista de Occidente.
- Palacios, Nicolás (1902). *Raza chilena*. Valparaíso: Imprenta Alemana.
- Peña, Carlos (2015). *Lo que el dinero sí puede comprar*. Santiago: Taurus.
- Peña, Carlos (2020). *Pensar el malestar*. Santiago: Taurus.
- Peña, Carlos (22 de octubre, 2019). *Tele Trece. Chile en crisis: Entrevista a Carlos Peña [video]*. <https://www.youtube.com/watch?v=rrtBEuUaDxM&t=378s>

- Ramos Mejía, Jose María (1971). *Las multitudes argentinas*. Buenos Aires: Secretaría de la Cultura de la Nación Argentina.
- Rojo, Grínor (2022). La derrota. *Blog de LOM*. <https://lom.cl/blogs/blog/la-derrota>
- Romero, José Luis (1978). *El pensamiento político de la derecha latinoamericana*. Buenos Aires: Paidós.
- Ruiz Encina, Carlos (2020). *Octubre chileno, la irrupción de un nuevo pueblo*. Santiago: Taurus.
- Sandel, Michael (2012). *What Money Can't Buy: The Moral Limits of the Market*. Nueva York: Farrar, Strauss and Giroux.
- Sanhueza, Ana María (2023). Un 36 % de los chilenos cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado que lideró Pinochet. <https://elpais.com/chile/2023-05-30/un-36-de-los-chilenos-cree-que-los-militares-tuvieron-razon-en-dar-el-golpe-de-estado-que-lidero-pinochet.html>
- Schmitt, Carl (1952). *Interpretación europea de Donoso Cortés*. Madrid: Rialp.
- Schmitt, Carl (2006). *Teología política I y II*. Madrid: Trotta.
- Schmitt, Carl (2007). *Romanticismo político*. Madrid: Trotta.
- Stefanoni, Pablo (2021). *La rebeldía se volvió de derechas*. México: Siglo XXI Editores.
- Thielemann, Luis (2023). *1957: El proletariado se toma Santiago*. Santiago: Editorial Tesis XI.
- Verbal, Valentina (comp.) (2019). *Octubre chileno, reflexiones sobre democracia y libertad*. El hundimiento de la derecha chilena frente a la crisis de octubre. Santiago: Libertad y Desarrollo.
- Vicuña Mackenna, Benjamín (1872). *La transformación de Santiago: notas e indicaciones respetuosamente sometidas a la Ilustre Municipalidad*. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio.
- Zavaleta Mercado, René (1986). *Lo nacional popular en Bolivia*. México: Siglo XXI Editores.

Historia reciente de la derecha conservadora en Colombia

Auge, crisis y recomposición
del uribismo (2002-2022)

GINA PAOLA RODRÍGUEZ

Introducción

El uribismo es un movimiento político de derecha conservadora liderado por Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de Colombia y senador de la República en cuatro oportunidades. Si bien desde 2013 se halla nucleado en torno al partido Centro Democrático, los orígenes y alcances del uribismo trascienden esta organización. Es importante aclarar que el movimiento uribista no es uniforme ideológicamente, sino que admite matices entre las opiniones de su líder y sus ideólogos, los políticos que han integrado las coaliciones de gobierno y sus votantes.

Con toda su heterogeneidad, el movimiento gestado por Uribe ha sido un parteaguas en la historia reciente de Colombia. Su arribo a la presidencia de la República en 2002 no solo coronó el fin de un bipartidismo centenario, sino que configuró un escenario de disputa político-ideológica con una clara definición del campo de la derecha conservadora, liderada por el propio Uribe, y una izquierda menos homogénea en su liderazgo, pero con especial protagonismo electoral luego de décadas en la periferia del juego democrático.

En tanto hito en la manera en que las derechas hacen política en América latina, el uribismo ha sido motivo de un amplio tratamiento en la ciencia política colombiana e internacional con miras a su caracterización y comprensión. El presente capítulo abona a este campo de conocimiento a partir de la distinción de dos tipos de estrategias que, en nuestra lectura, han dado forma a este movimiento: por un lado, aquellas dirigidas a su construcción simbólica, y por otro, aquellas orientadas a la construcción de un orden en los territorios por la vía militar.

Por estrategias de construcción simbólica nos referimos al aparato discursivo a través del cual el uribismo ha apuntado a la creación de un conjunto explícito de significados articulados intersubjetivamente por el grupo social compuesto por sus ideólogos, copartidarios y simpatizantes. Sin llegar a constituir un discurso coherente y carente de fisuras, la construcción simbólica del uribismo logró condensar a lo largo de dos décadas un conjunto de significados que guiaron a los miembros de su colectividad hacia una acción compartida y hacia la percepción de una realidad común. Dicho núcleo puede sintetizarse en dos elementos: la imagen de Uribe como un líder carismático que encarna los valores más tradicionales de la sociedad colombiana y la promoción de un modelo de orden autoritario del cual se halla excluida cualquier expresión de izquierda.

Las maneras de construcción simbólica del uribismo han sido objeto de numerosos trabajos que es imposible reseñar en estas páginas. Dentro de los más cercanos a nuestro interés de indagación, conviene distinguir un primer grupo de investigaciones concentrado en las estrategias mediáticas, los discursos de campaña y la imagen política de Uribe Vélez. López de la Roche (2014) describe la centralidad de los medios de comunicación en el proceso de reorientación afectiva de los colombianos que le permitió al expresidente construirse una imagen mesiánica y gozar de una altísima popularidad, pese a los hechos de corrupción y violación de derechos humanos

que rodearon sus dos gobiernos, al tiempo que tender un manto de sospecha y descalificación sobre la oposición política tanto legal como armada. Morales Castro (2022) estudia los discursos, spots y elementos gráficos de las campañas de Uribe Vélez, y sus sucesores, Juan Manuel Santos e Iván Duque, haciendo visible un doble fenómeno: la personalización de la política, bajo la figura de Álvaro Uribe, y la despersonalización de los candidatos sucesores, cuya valía radicó en su cercanía con el líder político antes que en sus cualidades individuales o partidarias. Otros trabajos se han ocupado de formas concretas de construcción retórica del uribismo, como el uso de los argumentos *ad hominem* en la configuración del enemigo político, a través del signo ideológico *terrorismo* (Delgado Marulanda, 2013); o la apelación al pueblo a partir de la movilización del antagonismo patriota-antipatriota (López Bayona, 2021). Una parte más de la literatura antecedente discute el carácter populista del uribismo con opiniones divididas. Están quienes, siguiendo la teoría populista de Ernesto Laclau, lo definen como un movimiento multiclasista y neo-populista de derecha que recibe apoyo electoral uniforme por todos los estratos sociales (Galindo Hernández, 2007; Patiño y Cardona, 2009; López Bayona, 2012; Fierro, 2014) y quienes refutan esta concepción argumentando que es un movimiento neoconservador que poco tiene que ver con el populismo, en tanto su apoyo electoral es mucho más grande entre los estratos altos que en los bajos y su discurso no evidencia el componente anti-elitista típico de los modelos populistas (Galindo Hernández, 2007; Kajsiu, 2017). Nuestra mirada coincide con esta última postura (Rodríguez, 2014, 2021).

Dado que las estrategias de construcción simbólica del uribismo han sido ampliamente tematizadas, nuestro trabajo va a enfocarse en el segundo tipo de estrategias identificado: aquellas dirigidas a la expansión y control de los territorios por la vía de la coerción; esto es, a las acciones armadas sobre las que se apoyaron los poderes locales

y regionales aliados al uribismo con miras a garantizar sus intereses políticos y económicos.

Nuestra hipótesis es que el éxito del uribismo quedaría insuficientemente explicado sin analizar su vinculación con las dinámicas del conflicto armado interno colombiano; siendo necesaria para su comprensión la incorporación de la estrategia armada estatal y paraestatal desplegada para la consolidación de un modelo de país para los grandes propietarios del que Uribe fue precursor. De este modo, si bien el uribismo comparte ideas y valores con otros movimientos y partidos de derecha conservadora de la región en el siglo XXI, su particularidad se halla en el recurso sistemático a la violencia armada con dos propósitos: la eliminación física y simbólica de la oposición política y la conformación de un bloque en el poder con capacidad para articular los intereses políticos y económicos de empresarios, terratenientes, transnacionales y élites locales, en torno a un proyecto nacional conservador y contrainsurgente. En este proyecto, las fuerzas armadas, el narco-paramilitarismo y sus derivaciones jugaron un papel trascendental.

La emergencia: de Uribe al uribismo

Uribe Vélez dio sus primeros pasos en la política a finales de los años setenta de la mano del Partido Liberal, en cuya representación ejerció los cargos de ministro de trabajo (1977-1978), director de la Aeronáutica Civil (1980-1982), alcalde de Medellín (agosto-diciembre 1982), concejal de Medellín (1984-1986), y gobernador de Antioquia (1995-1998). Durante esta última gestión, Uribe hizo explícita su apuesta por los servicios especiales de seguridad privada organizados a través de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia (CONVIVIR). Estas organizaciones habían sido creadas por el gobierno nacional en 1994, ante el aumento de las acciones de grupos guerrilleros, para operar en zonas de combate donde el orden

público fuese precario. A posteriori, se comprobó que las CONVIVIR promovieron la expansión de grupos paramilitares, razón por la cual, pese a la derogación del cuerpo legal que les dio origen, no se debilitaron ni desaparecieron sino que se fortalecieron en la clandestinidad con el apoyo de empresarios, terratenientes, transnacionales y políticos locales.¹

Entre 1996 y 2002, se produjo la expansión y unificación de los grupos paramilitares bajo la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que supo traducir todo su poder militar en una enorme capacidad para capturar rentas públicas y privadas y penetrar los órganos de seguridad, las agencias del Estado, los partidos políticos, los cuerpos colegiados y el Poder Judicial (Romero, 2007). En julio del 2001, los miembros del Estado Mayor de las Autodefensas y más de cien políticos y funcionarios de diferentes regiones del país (gobernadores, senadores, representantes, concejales y alcaldes) firmaron un pacto secreto acordando el desarrollo de un proyecto político que prometía *refundar al país*. El documento confidencial y secreto se conoció en 2006 como el *Pacto de Santa Fe de Ralito* (López, 2010). Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), los grupos paramilitares alcanzaron dimensiones inéditas a comienzos de los dos mil: treinta y nueve estructuras con múltiples frentes y facciones armadas y más de 35 mil integrantes responsables del 47 % de las víctimas letales y desaparecidos, lo

1 Según consta en un informe del Ejército Nacional: “Esta iniciativa se convirtió en un arma de doble filo para el Gobierno ya que, al permitir la creación de unidades privadas de seguridad con acceso a información y armas, los grupos de Autodefensas existentes crearon diversas Convivir en zonas del país con intereses particulares, fortaleciendo así durante estos años sus organizaciones. Este fenómeno junto con las organizaciones de Autodefensas existentes desde los años 80 y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Castaño, serán las bases a partir de 1997 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”. (Informe 748-CI-00812, Ejército Nacional de Colombia, “Análisis sobre el fenómeno de las autodefensas en los territorios desde la perspectiva del Ejército Nacional”, 61, citado por la CEV, 2022, p. 376).

que los convierte en el actor armado más violento del conflicto colombiano (CEV, 2022, p. 296). El escalamiento del paramilitarismo coincidió temporalmente con el ascenso de Uribe Vélez a la escena política nacional.

En 2002, ante la imposibilidad de lograr el aval del Partido Liberal para las elecciones presidenciales, Uribe fundó el partido Primero Colombia con el cual alcanzó la presidencia en dos elecciones consecutivas (2002-2006 y 2006-2010). En medio de ambos comicios, el partido se mantuvo inactivo, sin militantes, y sin ninguna representación en otros ámbitos regionales o locales, poniendo en evidencia su carácter instrumental y personalista. La campaña electoral de Uribe capitalizó el descontento nacional por el fracaso de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). El desgaste de las conversaciones anidó en la opinión pública la idea de que la guerrilla no tenía un compromiso de paz serio. Para completar el cuadro de antagonismo, la animadversión generalizada hacia la guerrilla coincidió con el discurso antiterrorista global que siguió al ataque contra las Torres Gemelas (Rodríguez, 2014).

El auge: los gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010)

Las elecciones legislativas de marzo de 2002 fueron el inicio de un proceso de expansión y proyección de diversas élites políticas y económicas regionales hacia la política nacional de la mano de la violencia paramilitar. Con una participación relativamente baja (42,9 % del padrón), en línea con el abstencionismo histórico de un país donde el voto no es obligatorio, estos comicios estuvieron marcados por la falta de garantías en los territorios afectados por el conflicto armado (García Sánchez, 2010). En cuanto a los resultados, se observó una tendencia mayoritaria de los partidos tradicionales: el Partido Liberal obtuvo un total de ochenta y tres curules sumando senado y cámara, y el Partido Conservador 41. En paralelo, se notó una mayor

presencia de partidos de derecha de reciente creación, que expandieron su participación en el poder legislativo y que, tras el triunfo de Uribe en mayo de ese mismo año, se sumaron a la coalición de gobierno. Si bien se trata de nuevas fuerzas, no puede decirse que constituyeron una renovación de la política en tanto sus líderes ya contaban con largos antecedentes. El partido Alas Equipo Colombia, liderado por el cesarense Álvaro Araujo Castro, logró ocho escaños; el partido Cambio Radical, del bogotano Germán Vargas Lleras, alcanzó nueve curules; y el Movimiento Nacional Conservador, liderado por el barranquillero Roberto Gerlein, senador durante ocho periodos consecutivos, obtuvo siete escaños. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002a) En mayo de 2002, las elecciones presidenciales dieron por ganador a Álvaro Uribe con el 54 % de los votos válidos. Uribe derrotó al candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, e hizo frente al sindicalista y exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, cuya candidatura testimonió el crecimiento nacional de la izquierda democrática en cabeza del Polo Democrático Independiente (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002b).

Diversas investigaciones apuntan como hipótesis explicativa del ascenso meteórico del uribismo al papel jugado por la alianza entre políticos locales, empresarios, terratenientes y grupos paramilitares en su apoyo a la candidatura de Uribe (López, 2010; Romero, 2007, 2011; Ronderos 2014; Rodríguez, 2021). A manera de ejemplo de este *modus operandi*, la justicia colombiana estableció que, en el caso del senador por el departamento del César, Álvaro Araujo Castro (2002-2006), el logro de su curul fue posible gracias a una alianza tejida con el bloque Norte de las AUC al mando del paramilitar “Jorge 40”. En la indagatoria rendida ante la Corte Suprema de Justicia, Araújo reconoció que asistió a una reunión con este líder paramilitar, previa consulta con el alto gobierno, al igual que su hermano Sergio, quien sostuvo varias reuniones con Rodrigo Tovar, otro jefe paramilitar, también por solicitud del gobierno nacional. En marzo

de 2010, Araujo fue condenado a nueve años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. Meses después obtuvo el beneficio de detención domiciliaria (*El Espectador*, 18 de marzo de 2010).

Como el de este senador, se han relevado más de un centenar de casos de políticos que pergeñaron acuerdos con grupos paramilitares en las elecciones de 2002 y 2006. Según datos de Ungar y Cardona (2010), del total de congresistas que ocuparon una curul durante el cuatrienio 2002-2006, sesenta y uno tenían procesos judiciales vigentes por vínculos con el paramilitarismo. Para el período siguiente, 2006-2010, el número de congresistas investigados ascendió a sesenta y seis, de los cuales cuarenta y cuatro fueron detenidos o pedidos en orden de captura. La misma investigación hizo un seguimiento de los proyectos de ley presentados por la *bancada parapolítica*, y constató que estos versaron sobre temas de interés para las *autodefensas*, tales como: “modificaciones a la figura de la extradición, reelección inmediata para el presidente Álvaro Uribe Vélez, reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, reforma a las Facultades de la Fiscalía General de la Nación, proyecto de apropiaciones adicionales a las funciones presidenciales, reglamentación de la figura del habeas corpus y modificación de la moción de censura en el Congreso.” (Ungar y Cardona, 2010, pp. 282-283).

Si bien solo una porción del conjunto de proyectos propuestos por la bancada uribista fue finalmente aprobada, otros fueron declarados inexecutable por la Corte Constitucional. Dos reformas sustanciales de la Constitución fueron posibles gracias a la iniciativa de los *parapolíticos*: la reforma política de 2003, que estableció las reglas de juego políticas, electorales y partidistas que dieron forma a la elección de representantes para el cuatrienio 2006-2010, y la reelección presidencial inmediata que habilitó el segundo mandato de Uribe.

A la luz de la reforma política, numerosos parlamentarios electos en 2002 se agruparon para solicitar la personería jurídica de un

nuevo partido o movimiento político. Así nacieron partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Partido de la U, casos típicos de “captura instrumental de los Partidos Políticos”, entendida como “la creación de un partido político de manera que, desde el principio, la estructura ideológica responda a los intereses predominantes del grupo promotor” (Garay, 2008, citado por Ungar y Cardona, 2010, p. 400). Por su parte, la aprobación de la reelección presidencial inmediata permitió la continuidad de la política de seguridad de Uribe, que claramente favorecía los intereses de los paramilitares en proceso de desmovilización y de los *parapolíticos* que continuaron ocupando curules en el Congreso para el periodo 2006-2010, gracias al halo de popularidad del mandatario. De las cien curules del senado, sesenta y una fueron para el uribismo, mientras que el número ascendió a noventa y siete de ciento sesenta y seis escaños en la cámara de representantes, incluido el de la circunscripción especial de colombianos en el exterior. Una prueba más de que Uribe era el líder indiscutido de la derecha fue que el histórico Partido Conservador desistió de presentar un candidato propio a las elecciones presidenciales de ese año. Declarado ganador con el 62 % de los votos a la presidencia, Uribe cobijó bajo su ala a las fuerzas que oscilaron entre el liberalismo conservador y el conservatismo tradicional.

En la vereda del frente, el balance para los partidos de oposición fue dispar: mientras el Partido Liberal perdió buena parte de las curules obtenidas en 2002, el Polo Democrático Alternativo (antiguo PDI) coronó su debut en las elecciones legislativas al alza con diez senadores y siete representantes a la cámara. Otro aspecto novedoso de esta elección fue el ingreso de partidos evangélicos, como el Movimiento MIRA, al Congreso y a la coalición en el poder.

Álvaro Uribe concentró todo el esfuerzo de sus dos mandatos presidenciales en un programa con tres frentes: la recuperación militar de los territorios dominados por las guerrillas a través de la Política de Seguridad Democrática (PSD), la convalidación del poder

conquistado por los paramilitares y sus políticos aliados a través de la ley de *Justicia y Paz*; y la consolidación de un proyecto económico de patria para los propietarios bajo el discurso de la confianza inversionista.

La Política de Seguridad Democrática (PSD)

Fiel a la retórica patriótica de George W. Bush, Uribe concibió e implementó la PSD como una ofensiva militar amplia y sistemática contra todos los grupos guerrilleros, que promovía el involucramiento de la sociedad civil en la lucha contrainsurgente a través de redes de informantes y delatores. Los recursos del Plan Colombia, aprobado durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002), fueron centrales para fortalecer a las fuerzas armadas y rediseñar la estrategia contraguerrillera. El gasto militar creció constantemente a lo largo de las dos administraciones de Uribe llegando a representar el 3,86 % del PIB en 2009 (Stockholm International Peace Research Institute, 2019). Uno de los supuestos del nuevo plan era que fumigando los cultivos de coca también se debilitaría el poder territorial de las guerrillas, que habían perdido zonas de control por la incursión paramilitar. Para lograr el éxito de la seguridad democrática, Uribe se ocupó personalmente de supervisar el combate contra la insurgencia, incrementando las exigencias a las fuerzas militares. La obtención de resultados fue posible, en parte, gracias al proceso de reingeniería de las fuerzas armadas, pero también en virtud del despliegue del Plan Patriota, desarrollado con asesoría y financiación estadounidense.²

- 2 El Plan Patriota fue la operación militar más larga y sofisticada realizada por las fuerzas armadas y la policía colombiana en contra de las guerrillas de las FARC desde la Operación Marquetalia de 1964. Fue puesto en marcha en 2004 como complemento del Plan Colombia, una vez que una misión militar colombiana se trasladó secretamente al Comando Sur de los EEUU para pedir ayuda a comienzos de 2003. El objetivo informado a los medios de comunicación fue el de capturar o eliminar a miembros del Secretariado de este grupo guerrillero, destruir la infraestructura

Como parte de la PSD, Uribe propuso un polémico Estatuto Antiterrorista que fue aprobado por el Congreso dos veces, pero que la Corte Constitucional declaró inexecutable en 2004. Dicho estatuto facultaba a las fuerzas armadas para la interceptación o registro de correspondencia y demás formas de comunicación privada, el empadronamiento o informe de residencia de los habitantes del territorio nacional y la ejecución de detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial. De esta manera, la PSD reeditaba la doctrina de seguridad nacional que en otros tiempos habilitó todo tipo de abusos estatales, recortes de libertades y medidas de excepción con el pretexto de preservar el orden público.

Cuando las acciones amparadas en el derecho no fueron suficientes para mostrar resultados, las fuerzas militares acudieron a las ejecuciones extrajudiciales y a la acción mancomunada con los grupos paramilitares para mejorar sus indicadores. El fenómeno conocido como *falsos positivos*, implicó el secuestro y asesinato de jóvenes por parte de brigadas del Ejército y la Policía que los engañaron con promesas de dádivas o empleos para después ejecutarlos y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. A cambio de los resultados operacionales *exitosos*, los miembros del ejército obtuvieron retribuciones económicas, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2021) estima que los *falsos positivos* dejaron más de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008.³

Después de años de negar su existencia, e incluso calificar los casos como falsas denuncias, Uribe y sus copartidarios aceptaron la

logística de su retaguardia estratégica y debilitar de una manera crítica al núcleo militar más duro de las FARC localizado en el sur del país: el Estado Mayor Bloque Oriental (EMBO) (Rodríguez, 2021).

3 La JEP es una Corte transicional producto del acuerdo de paz con la guerrilla firmado en 2016 que busca el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto sin emitir condenas penales.

ocurrencia de los *falsos positivos* a medida que los militares implicados daban su testimonio ante la JEP. Sin embargo, deslindan al líder del Centro Democrático de cualquier responsabilidad directa y apuntan a mostrar las acciones de su gobierno en aras de corregir las fallas de algunas manzanas podridas de las fuerzas armadas.⁴ Más recientemente, ante la ampliación y detalle en las confesiones de los militares, Uribe se manifestó decepcionado y dañado en su buena fe por parte de los militares y policías.⁵

A la fecha de escritura de este trabajo, ni Álvaro Uribe ni su ministro de defensa –el ahora expresidente Juan Manuel Santos–, ni ningún funcionario de las zonas afectadas por ejecuciones extrajudiciales, han sido investigados formalmente por estos hechos. A la individualización de las responsabilidades en cabeza de mandos medios y bajos del Ejército le han seguido acciones rayanas en la impunidad como el retiro discrecional de oficiales y la investigación a 800 miembros de las fuerzas armadas y la policía bajo un régimen de justicia especial, frente a un universo de más de 5700 denuncias según cifras de Human Right Watch (2015). La izquierda política, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los ambientalistas también fueron declarados objetivo militar por Uribe, quien

- 4 Reza el comunicado del Centro Democrático: “La política de Seguridad Democrática del Expresidente Álvaro Uribe y las acciones de su Gobierno estuvieron enmarcadas –sin excepción alguna– en el marco legal del respeto y la defensa de los Derechos Humanos y de todo el ordenamiento legal nacional e internacional. Cuando se tuvieron indicios de delitos por parte de la Fuerza Pública, se actuó con celeridad y contundencia. No hay un soldado o un policía de Colombia que pueda decir que el expresidente le dio un mal ejemplo de palabra o de obra (Centro Democrático, Twitter, 22 de diciembre de 2022, negrillas en el original)
- 5 “Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la Fundación de Herbin Hoyos, qepd, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gbno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi Gbno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia” (Uribe Vélez, Twitter, 28 de junio de 2023)

los estigmatizó como “colaboradores de la guerrilla” o “terroristas vestidos de civil” (*El Tiempo*, 4 de febrero de 2007). Esta etiqueta ha sido funcional a la intención de descalificar cualquier crítica a sus políticas e invisibilizar los hechos de corrupción y vinculación con el narco-paramilitarismo de decenas de políticos de su coalición de gobierno, que tomaron estado público en el escándalo conocido como *parapolítica* en el 2006 (Romero, 2007; López, 2010).

Las justificaciones del uribismo en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas contra campesinos, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y estudiantes, integrantes de la oposición política, organizaciones sociales y de mujeres persisten hasta hoy, en un discurso que las relativiza en aras del objetivo mayor de la lucha contra el terrorismo. El negacionismo de lo ocurrido se une a una suerte de revisionismo de derecha que apunta a una reescritura de la historia clave contrainsurgente. Las masacres, asesinatos y desplazamientos son adjudicados a las guerrillas o al crimen, o bien lamentados como daños colaterales de una cruzada dolorosa pero necesaria para salvar a la patria de la amenaza comunista. Como ha esclarecido la CEV esta persecución también alcanzó

[...] a quienes denuncian o hacen control de los abusos, como periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a empleados públicos, particularmente jueces y magistrados, que en virtud del ejercicio de su función terminaron siendo vistos como obstáculos para la estrategia de guerra o para la impunidad de los crímenes que se cometieron (CEV, 2022, p. 476).

La convalidación del paramilitarismo

El efecto previsible de la Política de Seguridad Democrática fue un desbordamiento del fenómeno paramilitar en la sociedad colombiana que tornó imperativa la generación de un proceso atinente a su desmonte. Uribe Vélez autorizó a la Comisión Episcopal para

entablar contacto con los grupos paramilitares y en octubre de 2002 distintos bloques de las AUC manifestaron su disposición para declarar un cese de hostilidades e iniciar un proceso de paz. El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, adelantó los primeros contactos con dichos grupos. Posteriormente, la ley 975 de 2005, reguló lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de los paramilitares. La llamada ley de *Justicia y Paz* fue presentada por el gobierno como un paso ineludible en el camino hacia la reconciliación en un país desangrado por la violencia, ofreciendo garantías para el desarme y la reinserción a la vida civil de los paramilitares al tiempo que verdad y reparación para sus víctimas. Sin embargo, lo que se fraguó fue un proceso discrecional que redujo al mínimo la exposición penal de los paramilitares. La ley habilitó la desmovilización de más de 35 mil hombres en armas que fueron eximidos de cualquier responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, solo por declarar su decisión de desmovilizarse y contribuir *decisivamente* con la paz. De este modo, los paramilitares pudieron disfrutar de beneficios de la ley, como tomar parte del proceso sin importar que hubiesen participado en actividades del narcotráfico, gozar de la rebaja de hasta una décima parte de las condenas (jubileo), y cumplir penas alternativas en las que la privación de la libertad nunca superó los ocho años (CIDH, 2013; Rodríguez, 2021).

La negligencia judicial, sumada a la incoherencia y manejo inapropiado de la información correspondiente al proceso de desmovilización por parte del ejecutivo, en cabeza del Comisionado Restrepo, terminaron haciendo inoperante el proceso de Justicia y Paz. Los datos suministrados por las distintas autoridades sobre el armamento entregado por los desmovilizados y los bienes incautados para adelantar los programas orientados a la reparación fueron prácticamente inútiles, tanto a los fines del resarcimiento simbólico y material de las víctimas, como a la administración de justicia por los delitos cometidos. El acceso a la verdad se vio afectado por atentados contra

la transparencia que fueron desde la infiltración de reconocidos narcotraficantes dentro de las filas del paramilitarismo y el camuflaje de sus dineros, actos delictivos y redes mafiosas en las negociaciones de *paz*, hasta la confesión parcial y amañada de los desmovilizados. Las irregularidades llegaron incluso a la desmovilización de grupos ficticios como el bloque Cacica La Gaitana, que llevó al propio comisionado Restrepo a evadir sus responsabilidades ante la justicia y mantenerse prófugo (*Semana*, 12 de febrero de 2022).

Cuando la ventana hacia las responsabilidades estatales en la violación de derechos humanos empezó a abrirse, Uribe Vélez ordenó la expulsión del proceso de dieciocho líderes paramilitares y su extradición inmediata a los Estados Unidos, dejando a medio contar la historia de sus atrocidades, y sin saldar sus deudas con las víctimas y con la justicia. El balance del proceso de Justicia y Paz fue, como se ve, deficitario. Si bien logró que algunos líderes paramilitares confesaran sus crímenes y divulgaran información acerca de cómo operaban sus grupos, un alto porcentaje de la estructura militar y criminal se recicló en una nueva generación paramilitar que quiso presentarse como un fenómeno de nuevo cuño desligado de las AUC: las Bandas u organizaciones criminales emergentes (BACRIM).

Más recientemente, en el afán por mostrar al paramilitarismo como un asunto del pasado y nomenciar a los actores armados surgidos tras el Acuerdo de Paz de 2016, el gobierno colombiano rebautizó las estructuras de los antiguos *paras* con diversas etiquetas: grupos delincuenciales organizados (GDO) o grupos armados organizados residuales (GAOR); definiciones que los hacen indistinguibles de las disidencias de las FARC (aquellas fracciones que optaron por rearmarse y abandonar el proceso de paz iniciado de La Habana en 2016), o de insurgencias con estatuto político propio como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (INDEPAZ, 2017).

Si bien la tercera generación paramilitar es, en efecto, un archipiélago de organizaciones mafiosas con un amplio repertorio delictivo,

no hay que perder de vista que, en lo que hace al control político y económico en los territorios, su influencia persiste. Los testimonios de varios líderes de las AUC recolectados por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (2022) permitieron establecer que, aunque estas desaparecieron como organización centralizada, el paramilitarismo como proyecto de expansión y control territorial, político y económico del *establishment* en las regiones sigue funcionando. La estrecha imbricación de los grupos paramilitares en la política nacional viene siendo reportada en los informes de riesgo elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE) desde el año 2007. En estos se identifican los factores pasivos y activos que afectan la libertad, transparencia, autenticidad e igualdad en los procesos electorales y se incorpora como variable de análisis la presencia de nuevos grupos, bandas emergentes, reductos no desmovilizados del paramilitarismo y estructuras en formación. Los hechos y acciones violentas que, según la MOE (2007), afectan directamente el debate electoral incluyen amenazas, atentados, secuestros y asesinatos de candidatos, funcionarios públicos y periodistas, el desplazamiento forzado, el rearme o el surgimiento de nuevos grupos paramilitares y acciones como los llamados *paros armados*. En la misma vía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una sentencia dictada en el año 2012 concluyó que:

[...] la adhesión de los dirigentes políticos a ese proyecto de las autodefensas no operó por temor, miedo, reverencia o coacción, sino que fue el fruto de un contubernio consciente y voluntario con la finalidad de conservar, consolidar o adquirir el poder político y en ese propósito se llegó a cooptar con las autodefensas el poder público que dimanaba de las diferentes alcaldías y gobernaciones cuyo control por parte del grupo ilegal armado fue total en los departamentos de Córdoba y Sucre (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2012, p. 3).

La existencia de una alianza para el despojo de tierras tejida entre paramilitares, fuerzas armadas, sectores civiles y funcionarios públicos, ha sido documentada por el Centro de Memoria Histórica (CNMH) en varios informes en los que describe los mecanismos de terror por medio de los cuales fue posible el acaparamiento de tierras y la puesta en marcha de toda una suerte de negocios lícitos e ilícitos agroindustriales, forestales, de ganadería intensiva y minería durante los gobiernos de Uribe (CNMH, 2012, 2018).

Dentro de las violaciones a los derechos humanos que aparejaron este proyecto, cabe contar la toma militar y el desplazamiento de población en actuaciones conjuntas de fuerzas militares y paramilitares; la apropiación fraudulenta o por la fuerza y la compra a precio vil de grandes extensiones de tierra; la implementación de proyectos económicos de gran escala en asociación con agentes privados legales e ilegales, y públicos; y el repoblamiento armado para ejercer control social en los territorios liberados por la guerrilla (CNMH, 2018).

El proyecto de una patria propietaria labrado por la vía armada tuvo su complemento en la vía legislativa. La alianza para el despojo recurrió a la promulgación de diversas leyes y programas de economía agraria que favorecieron los intereses de los inversores paramilitares y sus socios. Entre muchos ejemplos, pueden contarse la ley 939 de 2004 que benefició a los cultivadores de biocombustibles; el programa Agroingreso seguro que benefició con subsidios millonarios a latifundistas y testaferros; y la ley 1182 de 2008, de saneamiento a la propiedad inmueble, que abrió el camino para la legalización de tierras adquiridas ilegalmente (Rodríguez, 2014, 2021).

Crisis y recomposición del uribismo (2010-2018)

Impedido para presentarse para un tercer mandato presidencial, Uribe designó como vocero-candidato para el periodo 2010-2014 a Juan Manuel Santos. Una grieta se produjo entre ambos cuando

este decidió abandonar el guerrerismo de la seguridad democrática para iniciar conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC-EP. Desde entonces, la operación mediático-ideológica de Uribe y sus copartidarios consistió en exacerbar el campo de adversidad en el que Santos, las FARC y la izquierda democrática eran un enemigo a vencer, que demandaba más uniformidad ideológica, más seguridad y más orden.

Desde el 2013, el partido Centro Democrático que se ubicó en la extrema derecha del espectro político, aglutinó a los uribistas acérrimos en una plataforma programática de cinco pilares: seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, Estado austero y descentralizado y diálogo popular. El nacionalismo antifariano alimentado durante años, fue la bandera agitada por el uribismo en su tránsito del gobierno a la oposición. La polarización entre una agenda de paz y una de guerra tuvo en vilo tanto al primer gobierno de Santos como a su reelección.

Para las elecciones de 2014, Uribe ungió como candidato a Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda durante su segundo mandato y presidente del Partido Centro Democrático. La elección de Zuluaga se explica en buena medida como un aprendizaje tras la *desobediencia* de Santos. Se trató de una candidatura para hacer un frente contra el terrorismo y recuperar el rumbo que desvió el presidente Santos, quien se hizo elegir con la promesa de continuar y defender las tesis del uribismo y gobernó con otras (Rodríguez, 2014). Al ser el conflicto armado el eje de las discusiones de campaña, cuestiones estructurales como el modelo económico, las relaciones con EE.UU. y la agenda social pasaron a un segundo plano. En la primera vuelta electoral de 2014, Óscar Iván Zuluaga obtuvo el 29,25 % de los votos, mientras que el presidente Santos obtuvo el 25,69 %. Como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta, se llevó a cabo una segunda vuelta electoral el 15 de junio de ese año, en la cual Juan Manuel Santos fue reelegido con el 50,95 % de los votos, mientras

que Zuluaga obtuvo el 45,00 %. Santos logró inclinar la balanza a su favor gracias al apoyo de un sector importante de la izquierda democrática en el balotaje (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2014a).

Para 2016, la sociedad colombiana experimentaba su nivel máximo de polarización a propósito del Plebiscito por la paz. En una sociedad profundamente dividida, Uribe se puso a la cabeza de la campaña por el *No* a los acuerdos con las FARC, y no escatimó en la búsqueda de apoyos. La participación de los partidos evangélicos en este debate se dio acercando coincidencias entre los valores conservadores del uribismo y la agenda antiderechos de los grupos religiosos. Si bien los evangélicos no se alinearon del todo con Uribe, se mostraron cercanos a su ideario en cuestiones como la política de seguridad democrática, la promoción del libre mercado y la defensa de los valores *pro-vida* y *pro-familia*. El triunfo del *No* fue una clara victoria del uribismo pero también para los evangélicos, que aprovecharon para hacerse visibles movilizándose contra la educación sexual propuesta desde el Ministerio de Educación del gobierno de Santos y acentuando la polémica contra la *ideología de género* que, desde su mirada, favorecía los Acuerdos de paz (Rodríguez, 2014; Goldstein, 2020).

En pleno auge de las luchas feministas en América latina, el uribismo halló en un discurso de circulación internacional que confunde la perspectiva de género con una ideología totalitaria –que atentaría contra nuestro *ser biológico natural*– un nuevo terreno para la polarización de la sociedad colombiana (Giordano y Rodríguez, 2019). Solo los efectos de una operación ideológica que reactivó el odio al comunismo y le imputó la responsabilidad de desestabilizar la familia, el heteropatriarcado y la propiedad, pueden explicar la adhesión de una gran masa del electorado colombiano que apoyó a Uribe, no obstante los escándalos de violación de derechos humanos, corrupción y criminalidad que para aquel momento habían tomado

estado público. Frente a estos, la estrategia judicial y mediática del uribismo para enfrentar las acusaciones en su contra ha consistido en la negación tajante de la responsabilidad del ex presidente, y su individualización en militares y políticos. Cuando se los reconoce, se afirma su gravedad, pero se oculta su sistematicidad, adjudicando su ocurrencia a la indisciplina de ciertos miembros del Ejército y la policía o a la corrupción de políticos díscolos sobre los que no se ejercía ningún control.

Ante el avance de los Acuerdos de paz con las FARC, y la publicidad que alcanzaban los hechos de corrupción y violación de derechos humanos que involucraban a Uribe Vélez y los políticos de su colectividad, parecía poco probable que el uribismo tuviera éxito en las elecciones presidenciales de 2018. Su líder apostó por Iván Duque, un candidato inexperto, con escasos antecedentes en la política y serias falencias en sus intervenciones públicas. Lo acompañó como candidata a vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, una mujer con mayor trayectoria, proveniente del Partido Conservador.

En línea con el análisis de Gamboa Gutiérrez (2019), podemos decir que el triunfo de Iván Duque en 2018 puede explicarse en la explotación de la crisis humanitaria venezolana en la retórica de campaña. Si años atrás el enemigo de la patria se identificaba con *los terroristas y los guerrilleros*, ahora la amenaza provenía del *castro-chavismo*, una fuerza de límites porosos, pero con efectos letales para convertir a Colombia en una *segunda Venezuela*. Estas operaciones de transitividad inocularon el miedo entre los colombianos que veían con preocupación la situación del país vecino y temieron caer en la precaria situación de los millones de venezolanos que llegaban al país. También los problemas y dilaciones en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC alimentaron el fortalecimiento de la facción guerrerrista del uribismo, que entendía como una dádiva inmerecida el otorgamiento de oportunidades a los desmovilizados de la guerrilla en detrimento de la gente de bien que vivía de su

trabajo. La diatriba uribista adoptó niveles insólitos de violencia en figuras como las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, tristemente célebres por sus dichos y publicaciones en *twitter*, que alternaban entre *fake news*, agresiones a la oposición y todo tipo de exabruptos contra el proceso de paz. Este método de interpelación caló hondo en un sector del electorado afín a la mano dura, que mantiene al Centro Democrático con buena salud en el poder legislativo. En 2014, logró obtener diecinueve de ciento dos escaños en el senado y veinte de ciento sesenta y seis en la cámara; mientras que en las elecciones legislativas de 2018, retuvo diecinueve de ciento ocho escaños en el senado y aumentó a treinta y dos de ciento setenta y dos su representación en la cámara (Registaduría Nacional del Estado Civil, 2014b).⁶

El gobierno de Iván Duque (2018-2022) pasará a la historia como aquel cuyas políticas exacerbaron las desigualdades y contradicciones sociales a un punto en el que el descontento social se tornó insoportable. Las protestas sociales tomaron los centros urbanos del país y lograron juntar en la calle a sectores diversos: estudiantes, jóvenes desempleados, trabajadores precarizados, indígenas, mujeres, personas LGBTQI; en un paro nacional con sucesivas jornadas en noviembre del 2019 y abril de 2021. Los postergados del país, mayormente afectados con el manejo de la pandemia, vieron en el paquete de reformas económicas de Duque y su incumplimiento de los Acuerdos de paz la gota que rebalsó el vaso. La ola de movilizaciones fue ferozmente reprimida por los Escuadrones antidisturbios de la Policía Nacional, que cometieron más de 2 mil actos de violencia contra los manifestantes, entre los que se cuentan: homicidios, violencia física, detenciones arbitrarias, agresiones oculares, disparos

6 El aumento en la totalidad de curules entre las elecciones de 2014 y 2018 obedece a la creación de nuevos escaños correspondientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de paz previstas en los Acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC en 2006.

de arma de fuego, violencia sexual y desaparición forzada (Temblorres-Indepaz, 2021).

Uribe sufrió el coletazo de la mala performance de la gestión Duque durante y después de la pandemia. Su imagen entró en franco desgaste con el avance de las doscientas noventa y cinco investigaciones judiciales que lo involucran por fraude procesal, soborno, ejecuciones extrajudiciales, presunta vinculación con las masacres del Aro y la Granja, y el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, entre otros delitos. El presidente más votado de la historia de Colombia llegó a sus niveles de desaprobación más altos en 2021, cuando un 73 % de los encuestados manifestó su rechazo (Datexco, febrero de 2023). La impopularidad de Uribe le afectó finalmente en el terreno electoral, al punto de no poder posicionar un candidato en las elecciones presidenciales que dieron como ganador al izquierdista Gustavo Petro.

Conclusión

En este capítulo, recorrimos algunos hitos de la derecha conservadora representada en el movimiento que orbita en torno a la figura de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y la actualidad. Sostuvimos que, junto a la estrategia simbólica de construcción de la imagen del líder en torno a valores tradicionales como la familia, el orden y la propiedad, su mayor éxito consistió en la instalación de un modelo de orden de *mano dura* en el sistema de representaciones de los colombianos. Junto a esta construcción simbólica discurrió una estrategia armada que, anclada en la violencia militar y paramilitar, proyectó una refundación de la patria para los grandes propietarios. La política de seguridad democrática, la convalidación del paramilitarismo y la promoción de la seguridad inversionista, fueron los pilares que sostuvieron al uribismo en sus momentos de emergencia y auge. Uribe ha negado todas las acusaciones en su contra y ha alegado que es

víctima de persecución política. La situación es compleja y ha generado debates y polarización en la sociedad colombiana.

Los proyectos autoritarios en Colombia, de los cuales el uribismo es un capítulo más, han sido la respuesta a diversas dinámicas sociales, políticas y armadas que han buscado ampliar el sistema social y político, haciéndolo más incluyente y abierto. El principal obstáculo con el que chocan las iniciativas progresistas es una cultura política centenaria que continúa anclada al imaginario social del orden, la autoridad, la tradición y la jerarquía, como baluartes de la nación. Este imaginario contribuye a recrear prácticas tradicionales de carácter autoritario y excluyente, que reducen la democracia a su expresión formal como un conjunto de mecanismos procedimentales sin mayor proyección transformadora, y que minimiza la participación de los sectores subalternos.

El nacionalismo contrainsurgente alimentado en veinte años de uribismo dividió profundamente a los colombianos. Si se analiza con detenimiento la población victimizada durante y después del uribato, se advierte que la disputa de la derecha conservadora por el poder no tuvo como objetivo principal a las guerrillas. De hecho, una vez desmovilizadas las FARC, los asesinatos de líderes sociales, firmantes de paz, indígenas, campesinos y ambientalistas, demuestran que en la mira del uribismo se hallan más bien los sectores de izquierda civilista que vienen ganando espacio en la política colombiana desde 2002. En su momento fue el Polo Democrático Alternativo y ahora es el Pacto Histórico, así como las redes de intelectuales, defensores de derechos humanos y simpatizantes de la izquierda democrática los verdaderos destinatarios del discurso guerrerrista del uribismo, que desde sus inicios apostó por atizar la polarización, la irascibilidad e intolerancia de los colombianos cansados de vivir en crisis permanente.

Las guerras del uribismo se libran hoy en las redes sociales, los medios de comunicación y los estrados judiciales, en una estrategia

más defensiva que ofensiva, que pugna por mantener a Uribe en la impunidad a través de vericuetos legales y propuestas de reforma de la constitución que lo benefician. La crisis del uribismo ha provocado que algunos de sus antiguos socios hayan tomado distancia e incluso vislumbren un futuro del uribismo sin Uribe. Conocidas las capacidades de reconversión del exmandatario y sus aliados más leales, y su poder de daño en el rol de opositor, hay razones para dudar que su dominio esté cerca de extinguirse. Su influencia mediática y política se mantiene vigente y la virulencia e hipervigilancia ejercida por los uribistas sobre el gobierno de Gustavo Petro, comprometen seriamente la gobernabilidad del país.

BIBLIOGRAFÍA

- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2012). *Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones de los paramilitares*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2018). *Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico*. Bogotá: CNMH.
- Comisión de Esclarecimiento de la Verdad [CEV] (2022). *Hay futuro si hay verdad. Informe final*. Bogotá: CEV.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2013). *Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia*. CIDH.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (12 de enero de 2012). *Sentencia Procesados Jesús María Imbeth y otros*. Bogotá.
- Datexco (febrero de 2023). *Pulso País Colombia*. <https://www.datexco.com/data/pulso-pais-colombia>
- Delgado Marulanda, Alba L. (2013). La polémica en el discurso del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez: Los argumentos ad hominem y su función como configuradoras del enemigo político, el “terrorismo”. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (22), 91-108.

- El Espectador (18 de marzo de 2010). Condenan a nueve años de cárcel a Álvaro Araújo Castro. <https://www.elespectador.com/judicial/condenan-a-nueve-anos-de-carcel-a-alvaro-araujo-castro-article-193753/>
- El Tiempo (4 de febrero de 2007). De “terroristas de civil” calificó el presidente Álvaro Uribe a políticos del desmovilizado M-19. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3425653>
- Human Right Watch [HRW] (2015). *El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles*. HRW.
- Fierro, Marta (2014). Álvaro Uribe Vélez populismo y neopopulismo. *Análisis político*, 27(81), 127-147.
- Galindo Hernández, Carolina (2007). Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. *Iconos-Revista de Ciencias Sociales*, (27), 147-162
- Gamboa Gutiérrez, Laura (2019). El reajuste de la derecha colombiana. El éxito electoral del uribismo. *Colombia Internacional* (99), 187-214. <https://doi.org/10.7440/colombiaint99.2019.07>
- García Sánchez, Miguel (2010). Bajo la mira de los actores armados. Retberg, Angélica (ed.), *Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Giordano, Verónica y Rodríguez, Gina P. (2019). Luchas memoriales y estrategias de poder de las derechas en América Latina hoy. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (31), 19-36.
- Goldstein, Ariel (2020). *Poder evangélico: cómo los grupos religiosos están copando la política en América*. Buenos Aires: Marea Editorial.
- Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] (2021). *Comunicado 019 de 2021. La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos*. <http://surl.li/jstas>
- INDEPAZ (2017). Dejación de armas y sometimiento. XII Informe sobre la presencia de grupos paramilitares. Indepaz, Bogotá. <https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/10/Informe-2017-narcoparas.pdf>
- Kajsiu, Blendi (2017). Una teoría socio-morfológica del populismo: el caso del uribismo, 2002-2010. *Análisis Político*, 30(90), 209-225. <https://doi.org/10.15446/anpol.v30n90.68561>

- López Bayona, Álvaro (2012). *Patria y pueblo - un análisis del discurso político del uribismo en clave populista*. [Tesis de Magíster], Universidad de los Andes, Bogotá.
- López Bayona, Álvaro (2021). Patriotas versus antipatriotas: la construcción retórica del pueblo y su enemigo elaborada por el discurso uribista. *Reflexión Política*, 23(47), 83-97.
- Independiente. DOI: <https://doi.org/10.29375/01240781.4126>
- López de la Roche, Fabio (2014). *Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos*. Bogotá, Debate.
- López, Claudia (2010). *Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá: Debate.
- Misión de Observación Electoral [MOE] (2007). Retos electorales, riesgos y recomendaciones. Bogotá, MOE. <https://www.moe.org.co/retos-electorales-riesgos-y-recomendaciones-2007/>
- Morales Castro, Vanessa (2022). El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: Discursos e imagen política. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (112), 310-335. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi112.4107>
- Patiño, Luis G. y Cardona, Porfirio (2009). El neopopulismo: una aproximación al caso colombiano y venezolano. *Estudios Políticos*, (34), 163-184.
- Registraduría Nacional del Estado Civil (2002a). Histórico de resultados electorales. Congreso 2002. <https://web.registraduria.gov.co/elecciones2002/index.htm>
- Registraduría Nacional del Estado Civil (2002b). Histórico de resultados electorales. Presidente 2002. <https://web.registraduria.gov.co/2002PRP1/index.htm>
- Registraduría Nacional del Estado Civil (2014a). Histórico de resultados electorales. Elegidos Congreso 2014. https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/elegidos_congreso_de_la_republica_2014-2018_1_.pdf
- Registraduría Nacional del Estado Civil (2014b). Histórico de resultados electorales. Presidente 2014. https://elecciones.registraduria.gov.co/esc_pre2v_2014/
- Rodríguez, Gina P. (2014). Uribe y Santos: ¿la misma derecha? *Nueva Sociedad*, 254, 84-99.

- Rodríguez, Gina P. (2021). *El Leviatán en la sombra. Condiciones socio-históricas de la violencia parainstitucional en Colombia*. EdUNLPam, Santa Rosa.
- Romero, Mauricio (2007). *Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Intermedio-Corporación Nuevo Arco Iris.
- Romero, Mauricio (2011). *La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política*. Debate.
- Ronderos, María T. (2014). *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Aguilar.
- Rutas del Conflicto (2021). Los rostros de las víctimas mortales durante el paro. <https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-mortales-paro>
- Semana (12 de febrero de 2022). Escándalo por desmovilización del Bloque Cacique La Gaitana, a punto de quedar en nada. <https://www.semana.com/nacion/articulo/escandalo-por-desmovilizacion-del-bloque-cacique-la-gaitana-a-punto-de-quedar-en-nada/202200/>
- Stockholm International Peace Research Institute (2009). *SIPRI Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International Security*. Oxford University Press.
- Temblores e Indepaz (2021). *Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021*. <https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-CIDH-VIOLENCIA-POLICIAL-PROTESTA-SOCIAL.pdf>
- Ungar, Elizabeth y Cardona, Juan F. (2010). Reformas políticas y reelección ¿La legitimación de la parapolítica? En López, Claudia (ed.), *Y Refundaron la Patria* (pp. 389-426). Bogotá: Debate- Corporación Nuevo Arcoiris.

La derecha mexicana y los laberintos de la Cuarta Transformación

Una relación especular

JAIME ORTEGA Y FRIDA VILLALOBOS

En este texto, analizamos la relación *especular* entre la derecha mexicana contemporánea con el proceso denominado Cuarta Transformación, es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se trata de un vínculo *especular* en la medida en que dicha corriente social y política perdió asidero social en 2018 y ha tenido que construir su programa a partir de la reacción inmediata a las acciones del gobierno de AMLO y al significado del proyecto de la Cuarta Transformación. Como en otros pocos momentos de la historia mexicana –el cardenismo entre 1936-1940, por ejemplo– la derecha se ha encontrado conflictuada, en una situación de ensayo y error de su visión de futuro, pues su fuente principal viene dictada desde fuera de ella, es decir, a partir de la marea reformista que hizo eco en sectores importantes de la sociedad, cuestionando a dicho espectro político de manera frontal. Aunque con reticencias han tenido que interpretar –de manera limitada y sin ancla de poder– este tiempo político, intentado adecuarse a él.

Es bien cierto que el panorama actual de la derecha mexicana es de depresión, pero a pesar de su desconcierto, mantiene una base

social importante, misma que ronda en el 20 % del electorado y que puede crecer según las condiciones regionales de la nación. Además, mantiene aproximadamente el 30 % de la composición de la Cámara de Diputados y el 35 % en Cámara de Senadores y fuerte influencia y vínculos en la agenda con el Poder Judicial, de tal forma que no se encuentra desprotegida ante el impulso de cambio que recorre México.

La trama principal de su actividad, en este periodo, es la de superar el golpe que la sociedad mexicana le dio en la elección de 2018, mismo barrió sus liderazgos y su horizonte de futuro. En esta tarea, navega a contracorriente, pues sus liderazgos, discurso, programa y el conjunto de su visión del mundo se encuentra en entredicho, y en ello juega de manera decisiva la crisis del capitalismo global, así como el hartazgo social de un país que no vivió ningún paréntesis progresista en la dominación neoliberal.

El caso mexicano muestra no tanto la emergencia de nuevas agendas derechistas, sino su intento de sobrevivencia ante un proceso de reforma del Estado, motivo por el cual se puede hablar de una crisis. Dicho momento de desconcierto, como dice Fernando Buen Abad en una entrevista, se denota a partir de que el ciclo neoliberal comenzó a desfondarse y el discurso de las derechas ha tenido que pasar a asumir los registros dominantes de la izquierda: “Que lo hacen porque sus propias banderas no les alcanzan. Eso sucede porque ellos hoy no tienen banderas que defender, porque casi todas las que tienen están quemadas, vencidas. Eso es parte de la crisis intelectual de la derecha” (*Cubaperiodistas*, 7 de julio 2023). En tanto que Carlos Illades, un intelectual lejano al proyecto de la Cuarta Transformación, ha insistido en que las derechas opositoras han debido retomar el discurso de cambio, pero rumbo a los combates inmediatos todos deben afincarse como una *cierta* izquierda (*Sinembargo*, 7 de julio 2023). Estamos lejos de otros horizontes en donde las derechas se afirmaron con soltura, no obstante, dentro de la misma derecha

existe un ala que se reivindica bajo los ideales más conservadores y se presenta con esas banderas, misma sobre las que diremos algo más adelante.

La mexicana es una derecha en transición, atravesada por conflictos, dilemas y una situación novedosa para ella. Dicho estado no será permanente, pero en la coyuntura actual (marcada por el influjo de la Cuarta Transformación) se denota con claridad a partir de determinados elementos. El análisis político que se realiza en estas páginas contempla la existencia de distintas formas de élites. En este sentido, aclaramos que no consideramos que ellas sean el único ni el más importante agente del conflicto político, pero la propia temporalidad política marcada por el discurso plebeyo del gobierno de AMLO vuelve a la categoría operativa para identificar conflictos y contradicciones. Dichas élites responden a conjuntos más amplios, como son las clases sociales, pero estas solo se expresan a partir de organizaciones, liderazgos y partidos.

La pertinencia del discurso sobre las élites es que, en una coyuntura como la de la Cuarta Transformación, identifica de mejor manera los intereses en juego. Efectivamente, no siempre es sencillo distinguir entre las élites políticas y las económicas o de ambas con las intelectuales. Esto, en gran medida porque en el período político anterior no se denotaban sus rasgos tan nítidamente. Las élites políticas perdieron piso al encontrar que sus organizaciones partidarias ya no eran efectivas electoralmente, su capacidad de negociación se erosionó tras la debacle que supuso el 2018; las económicas se debilitaron parcialmente, al perder su privilegio de influencia y decisión sobre parcelas significativas de la riqueza pública y las intelectuales y académicas al ser cuestionadas en su influencia y vínculo con el mercado y el poder neoliberal. De tal manera que se puede decir que estas elites son la expresión contemporánea de la derecha mexicana, misma que perdió en 2018 el monopolio sobre el poder que gozó durante cuarenta años. Ni destruida, ni desalojada totalmente

de aparatos claves del Estado, su función como elites es preservar sus privilegios a costa de los derechos de la sociedad, elemento que las define de manera estructural.

La relación *especular* de la derecha mexicana en su crisis actual dará fisonomía a nuevas formas organizativas, variaciones discursivas –que pueden ir desde radicalizar el discurso autoritario neofascista, hasta volverse la derecha travestida de supuestas simpatías izquierdistas– y un entramado programático diverso. Pero ese es un proceso que está aconteciendo y que la elección de 2024 contribuirá a definir en un rumbo más claro. Ahora, en forma de zig-zag, la derecha mexicana resiste al embate hegemónico de la Cuarta Transformación, que entre uno de sus componentes más prístinos está en la capacidad desorganizativa de sus adversarios (Ortega, 2023). En el proceso de resistencia, sin embargo, se encuentra también su propia modificación y alteración de presupuestos y visiones del mundo, así sea de manera tangencial o pragmática.

Las derechas y el neoliberalismo

El establecimiento y desarrollo del régimen neoliberal fue producto de una simbiosis entre diversos espectros de la derecha en el que se puso al Estado al servicio de los intereses de estas élites empresariales. Por un lado, las élites partidarias con dos cabezas: el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por otro, las empresariales (nacionales y extranjeras) beneficiadas por la apertura comercial, no vinculadas de manera necesaria a ambas instancias políticas, aunque con fuertes y perdurables vasos comunicantes, que desembocaron en un extendido fenómeno de *puertas giratorias* de funcionarios públicos que al finalizar sus actividades gubernamentales se convertían en trabajadores del capital. Se trató en ambos casos de élites políticas y económicas que condujeron el precarizado Estado mexicano entre 1982 y 2018, teniendo como base

la corrupción en sus diferentes escenarios. A lo largo de ese amplio período sostuvieron énfasis diferenciados en sus programas y proyectos, destacándose la simbiosis entre empresarios y políticos con el grupo político que ocupó el Estado entre 2000 y 2012 o los aires *reformistas* del grupo neo-priísta en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Para una mirada de conjunto, este matiz resulta irrelevante, pues ambas promovieron de manera decidida la precarización de la soberanía popular y nacional a partir del influjo del poder del mercado. Sin embargo, resulta conveniente señalarlo por su eventual y temporal unificación frente a la Cuarta Transformación.

Además de ambos grupos con sus propios rostros y discursos, contaron con sus respectivos intelectuales y variaciones político-ideológicas, importantes ellas para comprender la crisis identitaria de las derechas opositoras. El PAN se sumó a la andanada democrática de la transición, entendiendo por esta una forma del liberalismo autoritario que permitía un recambio de elites excluyendo lo popular, elemento al que le muestran una patente fobia. En tanto que las nuevas agendas de la sociedad penetraron en sectores de la derecha neoliberal, por ejemplo, el PRI apoyó en determinados espacios la despenalización del aborto o simpatizó con la agenda de derechos asociados al LGTB+; asimismo en el PAN se ha dado una tímida simpatía con la agenda pro-abolición de las corridas de toros en la Ciudad de México. A todo ello deben sumarse componentes generacionales y regionales que generan tensiones en la actualidad. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, en lo esencial se encontraban de acuerdo: el impulso de un modelo neoliberal de participación restringida, conducido por élites políticas o empresariales.

El régimen neoliberal condicionó la participación política de la sociedad, permitiendo que las élites políticas y económicas encontraran su asiento en el poder durante cuarenta años. En lo político, primó la tendencia hacia el bipartidismo, particularmente en los años en donde el nacional-revolucionario Partido de la Revolución Democrático

(PRD) actuó como una tímida fuerza anti neoliberal (1988-2006). El conjunto de leyes, reglamentos e instituciones fueron diseñadas por el bipartidismo (en muchas ocasiones con la complacencia del PRD o de sectores *socialdemócratas* de este, quienes finalmente se quedaron con el membrete de una formación política prácticamente extinta), manteniendo en dichas organizaciones un monopolio feroz de la representación política. Eran los partidos y *esos partidos en específico*, los que se arroparon la posibilidad de la competencia electoral y, por tanto, de la designación de gobierno y el reparto de canonjías a partir de los espacios de gobierno. La élite empresarial, abierta a hablar, negociar, presionar y en ocasiones confundirse con la élite política, aceptó dicho acuerdo pues le beneficiaba mantenerse al margen de la disputa pública para entrometerse decididamente en las definiciones presupuestales y de política económica.

Además de los sectores específicamente políticos y económicos, hay que sumar a un conjunto de la sociedad rechazado en sus concepciones del mundo a partir de la hegemonía neoliberal. Es decir, sectores de la sociedad beneficiados por el régimen de la libre competencia, de la captura del Estado por grupos empresariales y de la precarización de la soberanía nacional. Se asumen a estos como *grupos medios* de la sociedad, conectados con la economía global, culturalmente alejados del nacionalismo y con una militancia decidida en el cosmopolitismo neoliberal y con privilegios derivados del lugar en la estructura social. Los temas principales en donde se denota la hegemonía neoliberal dentro de la sociedad refieren a la actividad de núcleos que festejaron y promovieron la retirada del Estado de la regulación social, se beneficiaron del uso de un debilitado aparato estatal para la gestión de inversiones a determinados grupos empresariales, impulsaron el fomento del agronegocio como mecanismo fundamental de la producción agropecuaria y el mantenimiento de privilegios sociales de un ejército de consultores, provenientes de élites universitarias (privadas, pero también públicas como en el caso

del Centro de Docencia e Investigación Económica) que suplían las tareas del servicio público estatal.

En suma, la simbiosis derechista se sirvió durante cuarenta años de los recursos del Estado y de las empresas paraestatales para obtener contratos de servicios pagados desde el dinero público, generaron una creciente tendencia a la evasión de impuestos y gestionaron la obtención de subsidios, entre muchas otras artimañas. En el centro de todo ello, se destaca el uso de la herramienta de la corrupción, misma que generó la concentración de la riqueza en pocas manos y la emergencia de nuevos millonarios, quienes estuvieron acostumbrados a someter el poder público a los designios del gran capital. Esto abrió enormes brechas de desigualdad e instauró una violencia estructural propia de un régimen como el neoliberal. Las derechas en México se unieron bajo el *telos* del interés individual para formar el gran pacto político de subordinación entre Estado y elites empresariales.

Todo esto se vino abajo –en gran medida, aunque no totalmente– con la irrupción del fenómeno nacional-popular encarnado en el liderazgo de AMLO. El tres veces candidato a la presidencia (en 2006, en 2012 y 2018) logró establecer una amplia alianza social que desbarató el escenario de poder político y económico que detentaban las elites en su conjunto, colocando en serios aprietos a la alianza neoliberal que había gobernado durante las últimas cuatro décadas. En el centro de su discurso, se encontró la denuncia del *estado corrupto* (Gómez, 2023) y de la perversa alianza entre elites económicas y elites políticas; mismo que generó en la sociedad un consenso que le llevó a obtener más del 50 % de votos. El demoledor golpe a la forma neoliberal de gobernar, solo puede comprenderse en el marco de la grave crisis que vive el neoliberalismo y la búsqueda de alternativas para enfrentar los retos por venir.

Crisis ideológica e identidad política en el nuevo escenario

El resultado electoral de julio de 2018 cimbró la forma de organizar la vida de las derechas, ahora devenidas en *oposición*. No solo se trató de un duro revés electoral, de la pérdida de la posición más importante en el Estado, sino, además, de la incapacidad de construir y ofrecer a la sociedad una concepción coherente y articulada del gobierno. AMLO, en su estilo especial de comunicar y a partir de acciones políticas diversas, dejó a la oposición derecha sin los mecanismos tradicionales para combatirlo, pues frente a los grandes medios de comunicación, estableció una forma muy particular de interpelación; todas las mañanas en conferencia da a conocer los avances y dificultades de su gobierno; atacando a sus adversarios y *marcando la agenda*. Con ello, las derechas han perdido brújula frente a ciertos lugares comunes. Veamos algunos de los más importantes.

El primero y más importante es que AMLO tiene una visión de la historia de la nación. En un tiempo político global que demanda el regreso a diversas formas de la soberanía—así sea inmediata o precaria—, los opositores de la derecha mexicana carecen de un anclaje fuerte en la historia de la nación. Su recurso discursivo de hablar en clave de un tiempo futuro no encuentra resonancia en la sociedad, pues tras cuatro décadas de desgaste, empobrecimiento y pérdida de vínculos sociales, esto aparecía como un desajuste entre los deseos y aspiraciones comunes y la perspectiva política que esas élites ofrecían. Amparado en el discurso de la Cuarta Transformación, AMLO colocó sus baterías en situar su acción presente en un largo recorrido histórico, algo en lo que no hay opositor —ni intelectual ni político— que pueda contrarrestar o medianamente criticar con soltura. En la declaratoria de festejo anual a personajes significativos, han desfilado los nombres de revolucionarios radicales como Emiliano Zapata o Ricardo Flores Magón. En esos casos, ha sido la oposición de izquierda la que ha levantado argumentos en contra del vínculo que se

establece entre ellos y el gobierno de AMLO. En cambio, solo con el homenaje a Francisco Villa en 2023 la derecha buscó realizar un ejercicio crítico de carácter histórico de la narrativa presidencial (De los Reyes, 2023), por lo demás insuficiente.

A diferencia de lo esperado por las derechas, AMLO no trasmu-
tó –nunca lo fue– en un anti-imperialista furibundo. Consciente del vínculo natural que México tiene con Estados Unidos, apuntaló una vieja tradición de la izquierda nacional-revolucionaria que consistía en buscar interlocutores en el vecino país, así fueran incómodos. De tal manera que el *chavismo* ferozmente anti-imperialista que la derecha alertó durante más de una década como una posibilidad ante un gobierno de AMLO, pronto se diluyó en una política exterior esencialmente pragmática. Por supuesto que existen tensiones y diferencias con Estados Unidos, no son pocas las fricciones y enfrentamientos, pero esos acontecimientos lejos están de ser usados por la oposición en forma proactiva. La firma del nuevo Tratado de Libre Comercio (denominado T-MEC), y el conjunto de acciones denominado *nearshoring* (relocalización) han dejado a México como el socio comercial más importante y han desvanecido la bandera de la derecha de acusar al presidente de ser un opositor a los Estados Unidos. Por el contrario, la relación actual es mejor que en sexenios pasados en la medida que AMLO ha marcado distancia sobre lo que no es negociable para México e instaurado el principio de que la nación no es más una colonia.

Otro factor decisivo, que contrasta con la manera en que se han construido agendas de las derechas contemporáneas, es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. AMLO no ha sido un militante abierto por la despenalización del aborto, motivo que generó una fisura con el movimiento social, que será tratada más adelante. Pero esa inacción –tampoco se ha negado– ha desmovilizado al sector de la derecha más crítico de lo que un nuevo lenguaje político conservador ha denominado la *ideología de género*. No encontrando

en AMLO a un enemigo declarado en este rubro, se ha perdido un aglutinante y más bien ha terminado de ser costoso para la oposición derechista su posición tibia. En este caso, algunos derechistas han acusado al presidente de *conservador*, lo cual resulta, cuando menos, irónico. Motivo aparte, es importante decir que esto no ha obstado para que el derecho de las mujeres a decidir avance en los tiempos de la Cuarta Transformación (Valero, 2023).

La oposición de izquierda ha tomado de forma adversa la defensa de la familia que hace AMLO, así como la utilización del ejército para la construcción de obras de infraestructura. Lo interesante es que familia y ejército son dos de los tropos más cuidados y cultivados por las derechas. Cuando AMLO revira el discurso de la familia hacia la protección y el cuidado y echa mano de la institución más sólida del Estado mexicano (la militar) no para el combate policial sino para la construcción de grandes obras, arrebatada dos banderas a la oposición derechista, que no puede pronunciarse abierta ni uniformemente sobre este tema. Las derechas pueden criticar las obras del gobierno, pero tienen que ser cuidadosos en reclamar algo a sus ejecutantes. Pueden acusar de conservador al presidente, pero no declararse en contra de la familia y el ejército. Este ha sido uno de los elementos más significativos, pues no hay asomo de que un sector de la institución militar simpatice con la derecha para intentar algún tipo de golpe.

Todas estas confusiones de la derecha en realidad pagan el propio discurso construido por ella. Los malos cálculos de la oposición se dejan ver claramente en su relación especular, pues fueron ellos quienes construyeron una discursividad donde AMLO aparecía como la versión mexicana del *chavismo*, del *populismo* e incluso del *proto-comunismo*. A ello hay que sumar la habilidad del presidente, que, manteniéndose en márgenes de izquierda, no han comprometido más allá de lo necesario. La capacidad de AMLO de ordenar el espacio político-discursivo contribuye a la crisis de las derechas.

En la crisis de la derecha mexicana, también juega, por supuesto, la recomposición global del espectro político. Como ha explicado Pablo Stefanoni (2021) en los últimos años asistimos a la emergencia de renovados discursos de esta crisis identitaria. Mientras que las derechas clásicas rechazan la agenda LGBTQ+, el investigador argentino ha encontrado una alianza de algunos sectores de ese conglomerado social con las derechas (Israel, Alemania). Mientras las derechas clásicas apuntalan su identidad en deportes como las corridas de toros (como la española), existen nuevas derechas que han sido denominadas como *eco-fascistas* pues rechazan el maltrato animal en pos de una vida propia ascética, propia de una nueva blanquitud. Algunas derechas son negacionistas del calentamiento global y otras apuntalan un discurso neo-malthusiano. La agenda de las derechas se construye de manera mundial, pero su encarnación local hace la diferencia en matices significativos. Las mutaciones de las derechas a escala global tienen su explicación en el fenómeno de crisis del neoliberalismo. Así, encontramos a sectores que construyen hoy, desde la derecha, un regreso de la soberanía estatal, mientras critican a lo que denominan *la agenda del globalismo*. En contraste, otro sector de ese conjunto político defiende a capa y espada el libre mercado como el gran artífice de la civilización.

La crisis del modelo neoliberal impacta decididamente en el ordenamiento simbólico y conceptual de las derechas a lo largo y ancho del mundo. En México, a esa situación hay que sumar la de una coyuntura desfavorable, donde fueron expulsados del control de un sector importante de las decisiones políticas y económicas y enfrentan a un líder político con gran habilidad.

Hasta el momento, el formato principal de despliegue del programa de las derechas ha sido, como señalamos, *especcular*, es decir, de reacción en espejo a lo dicho por AMLO. La capacidad de hegemonía de la Cuarta Transformación, aunque limitada, tiene en la desorganización de sus adversarios y opositores su principal fortaleza. Las

derechas se encuentran al mismo tiempo en un estadio de recomposición y reorganización, pero también de desgranaje y pérdida de identidad. La razón es que deben responder a un nuevo escenario y en el proceso no han abandonado todas sus certezas ideológicas, pero han adoptado algunas de las más novedosas que resuenan en una sociedad deseosa de cambios. En este proceso, se han generado algunos elementos más significativos de la coyuntura.

En esta recomposición y reorganización de las derechas, es evidente el incesante intento por mantener un vínculo con los sectores sociales más vulnerados por el neoliberalismo (es decir, la política que cultivaron). En 2023, las encontramos levantando banderas de *izquierda*, de las que habían estado alejadas por generaciones. Al tiempo, generan narrativas en los medios de comunicación intentando meterse en cada rincón ideológico en el que calculan que AMLO y su gobierno no han respondido de manera suficiente. No obstante, la crisis neoliberal les ha imposibilitado que su discurso sea aceptado socialmente, pues no hay forma de defender el régimen neoliberal desde ningún escenario, siendo las derechas artífices de este formato.

¿Movimientos sociales hacia la derecha?

De manera general, la adopción de nuevos derechos y demandas de la sociedad ha sido un elemento capitalizado por las formaciones de izquierda, en sus diversas variantes. La centralidad del movimiento de mujeres amparado bajo una nueva generación del feminismo (la cuarta ola), del respeto y fomento de la diversidad sexual y de los reclamos en torno al cambio climático, son parte de este entramado. El discurso público sostenido por elites, universitarios, clases medias y otros sectores con influencia social considerable están llenos de ellos.

Sin embargo, estos despliegues argumentativos no están al margen de las diferencias de clase y de las diversidades ideológicas sostenidas en lo individual por sus participantes. Mientras que en algunos

casos –Brasil– el movimiento de mujeres se confrontó con el expresidente Jair Bolsonaro configurando una polaridad, en el caso de México encontramos una balcanización del movimiento propia del momento político. Así, un sector importante de quienes encabezan las demandas alrededor de estas agendas progresistas se ha alejado del gobierno de la Cuarta Transformación, sumándose directa o indirectamente a la oposición de derecha.

En el caso del feminismo, es donde resulta más palpable el conjunto de tensiones, dándose fenómenos encontrados que configuran la actual crisis identitaria de las derechas. Por un lado, la Cuarta Transformación impulsó la despenalización del aborto y legalizó este derecho en once estados de la República; por el otro, un sector considerable de mujeres ha manifestado su oposición al gobierno al responsabilizarlo de los feminicidios, haciendo caso omiso de las acciones en este rubro (Alanís, 2023). Esto ha generado un doble despliegue: por un lado, un sector del feminismo ha simpatizado con la derecha al criticar al gobierno; por el otro, un conjunto de integrantes de la derecha política ha adoptado el feminismo como bandera. Esto último es quizá lo más llamativo del período actual. Entre mujeres empresarias e integrantes de la élite política –especialmente del PAN– el feminismo era identificado, hasta hace poco, exclusivamente con las izquierdas y, por tanto, rechazado. En el período de la Cuarta Transformación, vemos una identificación como feministas de las mujeres de la derecha política. En el intento de adaptarse a los tiempos de cambio, algunas de ellas, por ejemplo, sostienen que se puede ser feminista sin apoyar la causa de la despenalización del aborto, como lo señala la joven diputada panista Ana Villagrán, quien insiste que hay que disputar el feminismo a la Cuarta Transformación (Villagrán, 2021). Así, se ha configurado de mayor forma un feminismo neoliberal que ha disputado “con un cinismo absoluto”, dice Elvira Concheiro, al gobierno de AMLO (*Chal político*, 2023).

En la temática del movimiento LGBTIQ+, encontramos más distancia y ambigüedad, pero novedades. Además de un impacto menor en la vida pública mexicana (frente a la presencia de estos sectores en las sociedades como las europeas o norteamericana) es cierto que el consenso ha sido más difícil de romper entre las derechas. Tradicionalmente opuestas a la diversidad sexual, de a poco, las derechas, especialmente el PAN, han tenido que reconocer su existencia y fomentar una perspectiva especial en su discurso. El proceso de mercantilización de días como el *del orgullo* han favorecido este cambio de actitud. Así, es posible ver al alcalde derechista y promotor del *cartel inmobiliario* –que especula dramáticamente sobre el suelo ciudadano–, Santiago Taboada, haciendo la campaña propia del día del orgullo de la diversidad sexual. No es casual que sectores *libertarios*, minoritarios en la vida política, hayan acusado que esa organización ha capitulado ante la *ideología de género*. Sectores más jóvenes –especialmente mujeres– han encabezado la apertura hacia discursos hasta entonces considerados un monopolio de las izquierdas. Las jóvenes generaciones de panistas, es decir, los futuros cuadros de la derecha, hablan de la diversidad sexual, del feminismo y de la ecología: todo ello en relación especular a la Cuarta Transformación.

El tema del ambientalismo ha sido selectivamente utilizado por las derechas. Especialmente en lo que refiere al fetichismo de *energías limpias* y de la *transición energética*, mismas que han servido para criticar las obras de infraestructura de la Cuarta Transformación. Lo que es claro es que, a diferencia de otras derechas globales, la mexicana no es negacionista del cambio ambiental. Ha incorporado, en términos mercantilizantes, esta agenda, siguiendo un camino típicamente militante del capital.

Otro tema que ganó importancia entre algunas derechas fue el de la pandemia. Aunque ha habido un sistemático ataque en contra de la estrategia seguida por el gobierno mexicano, lo cierto es que esto ha obligado a la oposición de derecha a desplazar cualquier

argumento negacionista. En la ciudad de México, se dieron ínfimas manifestaciones en contra de las medidas de confinamiento y de vacunación. La reacción del gobierno mexicano, criticada por la oposición, fue muy parecida a la de cualquier otro lugar: el número de muertos, la complejidad del proceso de tipo de vacunación, insistir en la importancia de las *marcas* de la vacuna. La Cuarta Transformación salió bien librada de este proceso, a pesar de las profundas dificultades de la situación.

Finalmente, es importante decir que en México no existen sectores relevantes del movimiento *libertario*. Así, las derechas abiertamente anti feministas, anti ambientalistas y anti diversidad sexual son una gota de agua en un mar social inmenso. Todo ello permite suponer que élites políticas y sus organizaciones tendrán cismas una vez que tengan que retomar su identidad, pero por el momento ven reconfigurando el orden tradicional de su discurso, permitiendo la incorporación de nuevas demandas y también límites al momento de enfrentar el discurso enarbolado por AMLO y la Cuarta Transformación.

En este nuevo escenario, las derechas no han estado a la altura de las circunstancias del acontecer y transformación. Las derechas se posicionan de manera utilitaria del discurso feminista, de la diversidad sexual, del ambientalismo o de la igualdad; pero ello no es suficiente para contrarrestar la perspectiva abierta por el cambio de régimen político.

La derecha se reagrupa y busca su líder

La derecha, devastada por el ciclón que supuso el triunfo electoral de AMLO en 2018, busca salvarse. El espacio vacío que dejó la ausencia del poder presidencial no pudo ser tomado por los desgastados aparatos partidarios, que, si bien cuentan con un respaldo social considerable según regiones, quedaron en la lona. Ese lugar fue ocupado

rápido por un personaje que ya venía prefigurándose como la nueva cabeza de la élite político-empresarial.

Este año 2023, con la pérdida de la elección del Estado de México, el bastión más importante del PRI, y uno de los estados más importantes para la definición de las elecciones presidenciales, el escenario de la oposición de derecha es cada vez más exigente y desesperante. Acostumbrados por el pasado reciente a generar personajes mediáticos, no cuentan en la actualidad con figuras respetables y presentables. A este desprestigio se suma que numerosos funcionarios de alto nivel de sexenios pasados se encuentran en la cárcel o siendo investigados por corrupción, lavado de dinero, entre otros delitos. Hoy les resulta difícil el panorama para lograr posicionar a un representante de la oposición que pueda hacer frente a lo que parece una derrota predecible.

Así, bajo el ropaje de la *filantropía* y la preocupación por la educación y ante el vacío dejado por los aparatos electorales, el empresario Claudio X. González se convirtió en la nueva cabeza derechista. Alejado de las viejas preocupaciones de la derecha histórica –familia, religión, aborto– expresa el pragmatismo de la búsqueda de la tabla de salvación. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto el “señor X”, como se refiere a él AMLO, se posicionó como una figura clave de presión hacia el gobierno. Lo hizo a partir de su papel como promotor de una *guerra santa* en contra de los profesores sindicalizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, a los que trató de doblegar mediante el impulso de una contra-reforma educativa. A decir de Luis Hernández Navarro en el año 2013: “Pero a Claudio X. González le tiene sin cuidado que el país arda. Lo suyo es hacer política en nombre de la enseñanza. Él sigue adelante con su prédica denigratoria contra el magisterio y la educación pública” (Hernández Navarro, 2013).

Fue a través de su organización *de la sociedad civil*, llamada *Mexicanos Primero*, que fue ganando espacios de negociación frente al

gobierno y de rechazo por parte del magisterio: “El espíritu pendenciero de González no tiene límite. Acostumbrado a mandar, exige obediencia de políticos, funcionarios y maestros. Los trata como subordinados” (Hernández Navarro, 2015). La capacidad de ocupar el espacio político se le presentó, finalmente, con el ascenso del gobierno de AMLO. A partir de 2018, “el señor X” ocupó el centro del espacio político de las derechas. A ello ha tenido que negociar con las elites partidarias, a las cuales ha logrado manipular a su conveniencia a partir de la debilidad de estas. Sin embargo, él mismo ha tenido que sortear aquello de que solo esos partidos eran vehículos de la decisión política. Las leyes que generaron las élites en el período neoliberal se han revertido en su contra. Así, a lo largo de estos años, hemos visto pasar una serie de alianzas políticas y *frentes opositores* en las elecciones locales, sin ninguna perspectiva real de consolidarse. El nuevo líder ha tenido que sortear la situación de un entramado institucional que no le permite zafarse de los logos y símbolos de organizaciones en descomposición, pero no poder vivir sin ellos.

Pero Claudio X. González y la alianza que fermenta es un híbrido programático y pragmático. El feminismo, las mujeres, el aborto, el medio ambiente, la corrupción, la educación y cualquier otro tema son solo medidas de disputa y no ejes de un programa. Quizá la única que sigue siendo unificadora es la creencia en la superioridad empresarial del libre mercado. Naturalmente y en voz de las propias figuras de estos frentes, los principios de la derecha no están en detalles sociales, sino en anclajes históricos: la propiedad privada, la familia, la meritocracia, la modernidad, la autoridad, y desde cualquier frente que se quieran posicionar, evidentemente las contradicciones internas les hacen hundirse a sí mismos. Finalmente, tras ir de fracaso en fracaso, han optado por correrse a la izquierda: hoy la oposición al gobierno de AMLO tiene que manifestarse como progresista, de avanzada... de izquierda, y, acorde con los tiempos,

buscando liderazgos femeninos. Situación inédita y pasajera, dada la trayectoria de esa corriente.

La situación actual es sumamente difícil para las oposiciones de derecha. Soportan el ancla de vivir con el PRI y el PAN; pero no pueden participar políticamente sin estas siglas. Sus principios básicos están intactos pues son militantes de la forma capitalista de la reproducción de la vida, pero tienen que aceptar que el neoliberalismo generó frustración y desazón social. El señor X se presenta como el cerebro de la coalición y con ello arrastra a numerosas organizaciones no gubernamentales y la *sociedad civil*, como artífice del freno a los principales cambios.

Una distinción: derechas y conservadores

La derecha mexicana existe como representación política y social. Sin embargo, en el lenguaje de la Cuarta Transformación lo que aparece en primera fila no es ella, sino el conjunto asociado a la referencia hacia los *conservadores*. Bien podría imaginarse una identificación entre una y otra categoría. Pero no necesariamente es así.

Si la categoría de derecha tiene su anclaje en una perspectiva amplia, la de los conservadores aún más. La figura a la que recurre AMLO recoge la propia historia nacional. Denota que este grupo social y político, el de los conservadores, es proclive a denostar la soberanía nacional, a despreciar lo popular por su elitismo y a traicionar en busca de riqueza cualquier programa político. En la narrativa histórica de la Cuarta Transformación, existen solo dos perspectivas: el partido liberal y el partido conservador. Del lado del liberalismo, se encuentran episodios como la separación en el siglo XIX entre Iglesia y Estado, las reformas que permitieron un Estado moderno y las luchas en los campos de batalla por la soberanía, continuación en el siglo XX de la gesta nacional-revolucionaria con apoyo de las izquierdas. Del lado de los conservadores se encontrarían sus opuestos inmediatos.

En el discurso presidencial, no solo en las élites económicas y políticas se encuentra ese elemento conservador, también en las institucionales. Particularmente costoso para la idea de reformar el régimen político ha sido la persistencia de anclajes conservadores en las instituciones. Se trata de una tendencia al interior del Estado y sus instituciones que promueve la construcción de diques al cambio político. La lucha contra este régimen político no es sencilla, pues a lo largo de cuatro décadas se encargaron de construir un entramado técnico-jurídico para cruzar leyes, reglamentos, disposiciones, circulares, etc., con el fin de armar un escenario burocrático y de laberinto, haciendo titánico el cambio en la forma de gobernar y ejercer el poder. Así también, al interior del aparato estatal se formaron redes de funcionarias y funcionarios formados en el neoliberalismo, y a su vez formaron una nueva burocracia afín al individualismo burgués, con una única perspectiva del libre mercado y la reducción gradual del Estado. Con ello, desde dentro del propio aparato estatal siguen intentando tejer estas redes de poder hacia donde se pueda. Así, un conjunto de funcionarios públicos y otros sectores, harían las veces de artífices de fortalecer a la derecha en la medida que frenan los cambios que se promueven a fin de terminar con el neoliberalismo. Dos han sido los principales: la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral (INE). No son, por supuesto, los únicos, pero sí los más relevantes en la batalla política.

Por fuera del espectro político bipartidista y de los grandes grupos económicos, se tienen a una serie de funcionarios o expertos que, desde las instituciones estatales, socavan la soberanía estatal y la perspectiva de reforma política. Particularmente en el debate de una reforma electoral, se mostraron como anclajes neoliberales, dispuestos a bloquear cualquier modificación al orden establecido. Un claro ejemplo es el intento del INE y del Tribunal Electoral por censurar los espacios de comunicación presidencial, so pretexto de las elecciones de 2024.

Las manifestaciones más amplias en contra de la Cuarta Transformación han sido lanzadas desde acciones que surgen de ambas instituciones. Al ser uno un poder y el otro una institución autónoma, no hay ningún tipo de control democrático sobre ellas. Este ha sido uno de los grandes huecos del proceso de cambio, que no ha sido posible sortear. La denuncia de que sirven a sus propios intereses contrasta con el discurso de que son organizaciones *contra-mayoritarias*. Es decir, sus propios cabezas y quienes le siguen afirman que están más allá de cualquier perspectiva democratizadora.

No se trata de militantes ni líderes de la derecha, en el sentido tradicional, pero en el entramado de la disputa política sí pertenecen al campo conservador que ha alentado la reorganización de la derecha opositora, orquestando un golpe frontal y constante a las reformas que se han impulsado en la Cuarta Transformación. En dado caso, los conservadores juegan un papel de mayor incidencia, pues al arrojarse tras el poder judicial o los organismos autónomos, promueven, desde su supuesta independencia política, a las derechas opositoras.

¿La derecha está en casa?

La Cuarta Transformación es un período de reforma política, misma que modifica los vínculos entre el Estado, la sociedad y el mercado. El gobierno que la inauguró, el de AMLO, fue producto de una amplia coalición electoral. Variopinta, incluyó empresarios, antiguos militantes comunistas, colectivos sociales, organizaciones de bases, enclaves católicos, grupos evangélicos, y una variedad más extensa de expresiones socio políticas. El partido al que se le asocia, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es resultado de un cruce similar de genealogías. Es por ello que en el análisis de las derechas y los momentos conservadores sea preciso mirarla, pues en su amplitud contempla la incorporación de tendencias más allá de

la izquierda. Se trata de un análisis arriesgado, pero que habla de la propia complejidad del tiempo mexicano.

MORENA sostiene, en la forma, un programa de avanzada. Construido en la discusión amplia de una intelectualidad crítica y de izquierda, éste muestra una concepción progresista de la sociedad. Sin embargo, el salto a la realidad es más difícil que un catálogo de buenos deseos. La confrontación política en la que actúa MORENA es la de un espacio político atravesado por numerosas agendas, liderazgos, vínculos con expresiones locales y múltiples contradicciones que no se resuelven en su totalidad. Así, existe un ala claramente de derecha en MORENA, articulada por los mismos motivos con los que se suele asociar a dicho espectro político: la defensa de la *familia tradicional*, la oposición a la diversidad sexual, el voto en contra del derecho a decidir por parte de las mujeres (*La Jornada*, 11 de octubre de 2019).

Todo ello se expresa de manera más prístina a nivel local, en donde las viejas elites políticas y económicas han abandonado las expresiones del bipartidismo neoliberal para sumarse, de último momento, a la coalición gobernante. En estados como Aguascalientes, Baja California, Puebla, Chiapas o Coahuila esto ha sido particularmente claro. La Cuarta Transformación no ha llegado al terreno local con toda la potencia que lo hizo en el nivel nacional y ello explica esta colusión entre intereses políticos y económicos con la forma local de reproducir la política. A ello se suma la adhesión de una organización caracterizada por la corrupción como lo es el Partido Verde, tradicionalmente asociado a las agendas conservadoras y neoliberales. Dicha organización mantiene un férreo control desde un dominio oligárquico del estado de Chiapas. Es decir, se trata de un panorama local mucho más matizado, lleno de acuerdos, alianzas y *transfuguismo*.

En esencia, es un escenario en el que se intenta una y otra vez reconstruir esos tramos de control y vínculos de lo local a lo global

y viceversa, de elites de poder enconadas desde lo más profundo y con prácticas añejas y bien aprendidas sobre cómo metamorfosearse para seguirse reproduciendo, desde cualquier lugar y con cualquier color.

Así, otro momento palpable está aconteciendo en el periodo actual (junio-septiembre de 2023) y se refiere a la elección de la candidatura de la coalición. En ella participan cuatro personajes asociados a MORENA, uno al Partido del Trabajo y otro al ya mencionado Verde. Tres de los personajes de MORENA y el del Verde pueden ser catalogados, sin ningún matiz, como conservadores. En el caso del candidato más fuerte de ese grupo, Marcelo Ebrard, se sostienen incluso propuestas tecnofascistas, bajo el conocido discurso de la seguridad ciudadana (*El País*, 10 de julio de 2023). No analizaremos los perfiles de quienes se proyectan como una continuidad de izquierda, pues no es el interés en este texto. Lo cierto es que la posibilidad de un florecimiento de las opciones de derecha viene dada, en este período, por la capacidad de minar la perspectiva plebeya y democrática al interior de la coalición gobernante.

Vox sin voz

En un acto realizado el 19 de noviembre de 2022, múltiples líderes y activistas ultraconservadores se reunieron en la Ciudad de México bajo el auspicio de la Conferencia Política de Acción Conservadora. Comandados por un actor de segunda fila, aglutinaron al neo-conservadurismo o lo que otros han llamado neo-fascismo. Se trata de una órbita que se juega entre la admiración al republicanismo norteamericano y a la influencia de Vox, la Carta de Madrid y otras expresiones de la derecha contemporánea. Héctor Alejandro Quintanar (2023) señala que esta agenda es particularmente preocupante en su crecimiento en América Latina, en tanto que Temoris Grecko (2023) señala el espíritu ultraconservador de los fundadores de Vox, mismo

que tiene raigambre mexicana –para enojo de los neocolonialistas españoles– sobre la base de la organización de El Yunque.

El día de hoy la agenda *neo-fascista* está presente en México, pero mantiene un perfil bajo, casi indistinguible. Aguardando su hora, labra su programa a la espera de encontrar mejores condiciones para emerger. Su eclipsamiento es producto de la emergencia nacional-popular, de un aire reformista en la sociedad mexicana y de la crisis de la forma de reproducción del capital. Sin embargo, como parte del elenco nacional, con sus concomitantes vínculos internacionales, esperará la hora de avanzar, como en Estados Unidos o España.

Aún no ha terminado el mes de julio y a un año de las elecciones de 2024 uno de estos grupos dio su primer asomo de participación política. En el norteño estado de Chihuahua, obtuvo su registro –mismo que le da acceso a financiamiento– un partido local llamado *México republicano*, mismo que se ha identificado en las notas de prensa como un partido de la extrema derecha. A decir de una de las recensiones periodísticas, su líder –un ex funcionario menor de la Secretaría de Gobernación de la época de Felipe Calderón– dijo: “Queremos defender la vida desde su propia concepción, las libertades, la propiedad y queremos defender la familia. Sí, esos principios, eso quiere decir la ultraderecha (...) eso somos. No nos da pena y no nos da vergüenza. No somos de izquierda” (Ramírez, 2023).

Conclusiones

La existencia de señales que alertan sobre grupos neo-fascistas o de derecha extrema se ha dado con alarma, por ejemplo, en conciertos de agrupaciones musicales españolas que han tenido foros en la Ciudad de México. También existen versiones locales, sobre todo en el norte, de *supremacismo*, como el ya mencionado caso del partido *republicano* de Chihuahua. Sin embargo, la coyuntura mexicana actual, signada por un proyecto nacional-popular, eclipsa, al menos

momentáneamente, su florecimiento. Por su parte, las derechas históricas, subidas en el tren neoliberal, han descarrilado su concepción del mundo con ese modelo de reproducción del capital.

Por supuesto, no se encuentran derrotadas. Pero sí subsumidas. Esto es muy claro en la lucha política rumbo a la elección de 2024, en donde han camuflado sus obsesiones y prejuicios clásicos. Uno de ellos es la propensión elitista por el racismo: tradicionalmente, han desdeñado a los pueblos indígenas, los han mantenido en calidad de subalternos; pero ha sido tal la manera discursiva que supuso la Cuarta Transformación, que la oposición de derecha ha inventado rápidamente una candidata mujer de *ascendencia indígena*. Al tiempo que, en la conformación del programa opositor a la continuidad ideológica del gobierno actual, han señalado que no retirarán los programas sociales que se han consolidado en el período actual. Aunque el camino es largo para la decisión del futuro inmediato de quién y cómo ocupa el gobierno en el próximo sexenio, las cartas están ya echadas y ellas muestran una derecha queriendo ser menos identificada como tal y más preocupada por ganar espacio entre un electorado deseoso de dejar atrás el paradigma neoliberal.

BIBLIOGRAFÍA

- Alanís, Fabiola (2023). Que no nos arrebatan el derecho a la esperanza. *Memoria*, 284.
- Canal Catorce. Debate Público (25 de julio de 2023). Video de Youtube. Mesa de análisis con Pablo Gómez <https://www.youtube.com/watch?v=9zLhdKW6Ro8>
- DelosReyes, Reynaldo (1 de julio de 2023). La división villista. *Letras Libres*. <https://letraslibres.com/revista/reynaldo-de-los-reyes-patino-la-division-villista/>

- La Jornada* (11 de octubre de 2019). Legisladores de Morena en Colima, contra despenalización del aborto. <https://www.jornada.com.mx/2019/10/11/estados/032n1est>
- Infobae* (25 de febrero de 2020). Contrastes en el PAN: tomaron la bandera del feminismo con fuerza, pero promueven leyes anti-aborto. <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/25/contrastes-en-el-pan-tomaron-la-bandera-del-feminismo-con-fuerza-pero-promueven-leyes-anti-aborto/>
- Cubaperiodistas* (7 de julio de 2023). Hay una crisis intelectual en la derecha. <https://www.cubaperiodistas.cu/2023/07/fernando-buen-abad-hay-una-crisis-intelectual-en-la-derecha/>
- El País* (10 de julio de 2023). Marcelo Ebrard presenta su propuesta de seguridad: “Vamos a disfrutar el México más seguro de la historia”. <https://elpais.com/mexico/2023-07-10/marcelo-ebard-presenta-su-propuesta-de-seguridad-vamos-a-disfrutar-el-mexico-mas-seguro-de-la-historia.html>
- Sin embargo* (19 de julio de 2023). Maoístas, trotskistas, oportunistas. De Creel a Claudio, de Robles a Xóchitl. <https://www.sinembargo.mx/19-07-2023/4385770>
- Grecko, Temoris (2023). El Yunque está más cerca que nunca de llegar al poder... en España. *Milenio* <https://www.milenio.com/internacional/el-yunque-esta-mas-cerca-que-nunca-de-llegar-al-poder-en-espana>
- Hernández Navarro, Luis (19 de febrero de 2013). Claudio X. González y la política. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2013/02/19/opinion/021a1pol>.
- Hernández Navarro, Luis (16 de junio de 2015). Claudio X. González, el energúmeno. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2015/06/16/opinion/015a2pol>
- Mujeres en Resistencia. Chal Político No. 2 (10 de julio de 2023). Video de Youtube. Chal político: con Elvira Concheiro. <https://www.youtube.com/watch?v=u1Rg-f2gv3Q>
- Ortega Jaime (2023). Hegemonía precaria. La 4T mexicana y lo nacional-popular. *Cuadernos del CIESAJ*, 22.
- Quintanar, Héctor (21 de julio de 2023). Vox: del franquismo discreto a la reconquista de AL. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/07/21/politica/vox-del-franquismo-discreto-a-la-reconquista-de-al>

- Ramírez, Itzel (28 de julio de 2023). De ultraderecha, así es uno de los nuevos partidos políticos en Chihuahua. *La verdad*. <https://laverdadjuarez.com/2023/07/28/de-ultraderecha-asi-es-uno-de-los-nuevos-partidos-politicos-en-chihuahua/>
- Stefanoni, Pablo (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires: Siglo XXI.
- Valero, Perla (2023). ¡Libres y soberana! La lucha por el derecho al aborto. México: CEMOS.
- Villagrán Ana (5 de marzo de 2021). ¿Por qué voy a marchar este 8 de marzo? *La silla rota*. <https://lasillarota.com/opinion/columnas/2021/3/5/por-que-voy-marchar-este-de-marzo-356200.html>

Radicalización autoritaria en la Argentina contemporánea

Sobre los imaginarios de la política
en la crisis neoliberal

LUCÍA WEGELIN

La crisis del 2008 no solo fue una crisis financiera que puso fin a la era de éxito del ideario económico neoliberal, junto con las promesas de un capitalismo globalmente integrado sin fricciones, sino que significó también la profundización de una crisis de las democracias liberales que se expresa de diversos modos en los sistemas políticos contemporáneos. Observando procesos políticos diversos se viene sosteniendo que lejos de dar lugar a una superación del modelo neoliberal del capitalismo (como sugerían, por ejemplo, Duménil y Lévy en *La gran bifurcación*, (2015)) la crisis ha sido gestionada mediante un reajuste antidemocrático (Dardot y Laval, 2017) de los sistemas políticos. Trump y Bolsonaro se volvieron íconos de este nuevo momento político del orden capitalista en el que se resquebrajaron los consensos democráticos, pero hay ejemplos en todos los continentes del crecimiento del éxito electoral de los discursos de derecha ultra, radical, extrema o neo-fascista (como sostiene Cas Mudde “no existe consenso académico sobre los términos correctos con los que designar el movimiento en general y sus diversos sub-grupos” (2021, p.18)).

Pero ¿de qué tipo de transformación política se trata? ¿Se puede pensar como el despliegue del anti-democratismo despolitizador inherente a la extensión total de la racionalidad neoliberal, como viene sugiriendo la interpretación de autores como Brown, Laval y Dardot? ¿O se trata más bien de un cambio de la estrategia política del capital que desata, para sostener su lógica de producción y reproducción, una guerra contra las poblaciones, como sostiene Lazzarato? Aunque ambas interpretaciones se nutren de la perspectiva foucaultiana, entre ellas se ponen en juego versiones bien diferentes de esa teoría del poder en función de distintas interpretaciones del momento político actual del capitalismo neoliberal. Mientras que la versión de Brown retoma *El nacimiento de la biopolítica* para interpretar al neoliberalismo como la extensión de una racionalidad económica que para ella no solo erosiona las soberanías estatales (Brown, 2015a) sino que moldea incluso una moral que dicta máximas (economizadas) con efectos des-democratizadores sobre las sociedades neoliberales (Brown, 2015b), Lazzarato critica el efecto teórico-político que tuvo el concepto de *Gubernamentalidad neoliberal* en tanto habría desplazado la centralidad que la violencia tenía en su concepción del poder, desconociendo la política de guerra contra las poblaciones que, para él, caracteriza al capitalismo actual. “La insistencia con que Foucault define las técnicas de poder como ‘productivas’, que nos pone en guardia contra toda concepción del poder como ‘represiva’, destructiva y bélica, no se corresponde con la experiencia que tenemos del neoliberalismo” (Lazzarato, 2020, p. 71).

Insistir en los mecanismos impersonales y capilares en los que se produce la dominación capitalista no permite visualizar lo que Lazzarato piensa como un cambio de estrategia política del capital que hoy sobrevive extendiendo la violencia sobre las poblaciones. De eso se tratan para él los fascismos contemporáneos que se caracterizarían porque ya no es el Estado el que despliega su violencia contenida porque –en esto coinciden Lazzarato y Brown– el neoliberalismo lo

ha vaciado de poder, sino el propio capital que ha desatado su *máquina de guerra* desterritorializada.

La lectura de Lazzarato acierta en destacar el aspecto destructivo del neoliberalismo, poniendo en el centro del análisis no solo su violencia actual sino la violencia con la que nació el proyecto económico en las dictaduras latinoamericanas (y qué, según él “la versión edulcorada del neoliberalismo” de Laval y Dardot pasaría por alto” (Lazzarato, 2020, p. 91)). Además, al hacerlo muestra cómo los análisis foucaultianos se sostienen sobre una mirada que despolitiza la dominación al concebirla como una operación de dispositivos que se habrían automatizado y adquirido vida propia logrando una dominación sin sujetos, sin decisiones y por lo tanto sin política.¹

Sin embargo, su interpretación carga con el problema de borrar la especificidad de la violencia neoliberal contemporánea, volviéndola una expresión desnuda de la violencia intrínseca de la ambición ilimitada del capital: “La ruptura que constituyen los nuevos fascismos no proviene del exterior del capitalismo, en ocasión de las crisis; en verdad, el fascismo está profundamente arraigado en la organización del trabajo (abstracto e indiferente a cualquier valor de uso [...]) y del consumo (abstracto e indiferente a cualquier modo

1 En un sentido parecido al que sugiere Lazzarato, en un trabajo reciente hemos desplegado una crítica a la perspectiva foucaultiana que concibe al neoliberalismo como “nueva racionalidad política”, un nuevo “modo de gobierno” que convierte a la economía en la grilla de inteligibilidad de lo social, una racionalidad sin sujeto cuyo objeto es la sociedad misma sometida a la lógica mercantil y, de esa manera, borra el espacio epistemológico para la pregunta política (Wegelin, 2021). Allí sostenemos que desde la perspectiva foucaultiana el neoliberalismo habría transformado los modos de gobierno sobre los hombres de manera tal que ya no requeriría de ninguna mediación subjetiva para conseguir su expansión y por eso no tendría sentido preguntarse por sus modos de legitimación o justificación ni tampoco por la acción política neoliberal, pues la política misma se habría transformado en una racionalidad que se expande por lo social.

de producción)” (Lazzarato, 2020, p.104).² Si bien su interpretación destaca la dimensión violenta de la política en el neoliberalismo, interpretarla como el despliegue de la violencia del capital borra la especificidad política de este momento histórico que estamos intentando pensar. Señalar la transhistoricidad de la violencia neoliberal resulta necesario para insistir en que los fascismos contemporáneos no son anti-capitalistas, ni la crisis de las democracias el mero efecto del despliegue despolitizador de una racionalidad económica, sino una expresión política de la violencia propia de la dominación capitalista. Pero la lectura de la transformación política actual como una mutación hacia una biopolítica de la guerra que actualiza la violencia inherente al capital no explica la novedad de esa actualización ni permite abrir la pregunta por las condiciones que la hacen posible hoy. Al fin y al cabo, la ruptura la produce *el capital* que tiende a aparecer en sus análisis como el sujeto político de la historia capaz de decidir según su voluntad un modelo de dominación, frente al que lo único que se contrapone es el llamado a la voluntad destructora de otro sujeto político –inexistente en las condiciones históricas según el propio Lazzarato y por eso incluso– capaz de producir una ruptura revolucionaria.³

- 2 En el mismo sentido Lazzarato sostiene que “La asombrosa velocidad con que la democracia puede convertirse en fascismo tiene sus raíces en la ceguera producida por la división del trabajo y el consumo, que en grados diferentes, afecta a todos. El ‘no ver’, el ‘no sentir’, se extendió por Europa sin tener que enfrentarse con mayores obstáculos” (Lazzarato, 2020, p.165)
- 3 En *La fábrica del hombre endeudado*, Lazzarato parece más consciente del peligro de la interpretación subjetivante ya que allí justifica la posibilidad de hablar de una *economía de la deuda* como instancia capaz de unificar la multiplicidad de dispositivos sociales, políticos y económicos en tanto se trataría de una unidad *operacional*, ya que “el capitalismo no tiene una estructura o un sistema: se elabora, se transforma, se organiza (...) según los imperativos de la explotación y la dominación” (Lazzarato, 2013, pp. 122-123). Sin embargo, incluso allí quedan opacos los posibles motivos o condicionalidades de una transformación política como la que describe en su último libro.

Tanto el voluntarismo político que se desprende de esta consideración de la violencia del capital, como el borramiento de toda politicidad operada por la consideración del neoliberalismo como una racionalidad inherentemente anti-democrática, comparten el problema de subjetivar al capital o al neoliberalismo como agentes, o bien de la política de la guerra o de la despolitización des-democrátizadora. Por esa operación de subjetivación que pone el foco en la intención y el proyecto del sistema de dominación, se borra de ambos modelos el momento de la disputa de sentidos en la crisis de las democracias contemporáneas, o bien porque se interpreta esta crisis como resultado de la voluntad de la máquina de guerra del capital, o bien porque se la lee como resultado del éxito absoluto del despliegue de la racionalidad neoliberal. Ninguno de esos diagnósticos habilita un análisis sobre los modos contradictorios en los que se traducen sus hipótesis sobre las mutaciones del poder en el capitalismo contemporáneo a las *expectativas políticas* de los ciudadanos o sus imaginarios sobre *lo político*. Abandonando la perspectiva de la teoría del poder foucaultiana, partiremos aquí desde una pregunta hermenéutica sobre lo que esperan los ciudadanos de la política y cómo se la representan, no para asumir que ese es el estado de *lo político* y *lo democrático* hoy, sino para interrogar qué condiciones subjetivas explican, condicionan y habilitan la crisis de las democracias en esta etapa del neoliberalismo.

Para la comprensión de la transformación política que se expresa en los fascismos contemporáneos, resulta necesario abrir la pregunta sociológica por las condiciones de posibilidad del éxito de la máquina de guerra del capital o de la racionalidad neoliberal, asumiendo que el proyecto de dominación del capital –ya sea a través de la violencia o de la economización de la política– requiere de procesos de legitimación en los que participan las representaciones de los ciudadanos. En *Undoing the demos* Brown sí se preocupa por lo que la racionalidad económica le puede estar produciendo a los imaginarios democráticos en tanto reconoce que la economización

no solo erosiona las soberanías estatales sino que también moldea una moral gobernada por el principio de la utilidad que desplaza a los valores democráticos. Esa racionalidad que Brown reconstruye a partir de la doctrina neoliberal de Hayek y Mises tendría, según ella, la consecuencia en el nivel de los imaginarios sociales de la despolitización ya que no sobrevive ni la confianza en la decisión política ni los valores que podrían oponer una diferencia frente a la economización. Pero aquí su análisis no va más allá de las consecuencias lógicas del anti-democratismo que anida en la doctrina. Recién en *In the Ruins of Neoliberalism. The rise of antidemocratic politics in the West* (2019), Brown destaca que el autoritarismo que se anuda en la figura de Trump resulta de una articulación política novedosa y no es solo el resultado del despliegue de lo que en el neoliberalismo como racionalidad ya estaba en germen y por eso se trataría de *un Frankenstein*.⁴ Pero allí tampoco Brown se sumerge en el estudio de los imaginarios sobre la política y las expectativas sociales en los ciudadanos sino más bien en las nuevas articulaciones que el proyecto neoliberal emprende luego de su crisis, que irían más allá de los que estaba anunciado en la doctrina de sus fundadores.

De la interpretación de Lazzarato, no emerge la pregunta por la legitimidad porque la máquina de guerra desatada implicaría más bien la eliminación de ese momento de construcción de las adhesiones subjetivas; y sin embargo, los discursos autoritarios crecen y la violencia logra cada vez más adhesiones. Aquí nos interesa interrogar sobre las condiciones de posibilidad del éxito de esos discursos y su articulación con los imaginarios democráticos, que según Brown, habrían sido erosionados por la neoliberalización social. Si estas estrategias autoritarias tienen creciente capacidad de movilización, es porque las que han cambiado son, también, las condiciones

4 Edición en español: *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente* (Tinta Limón, Traficantes de Sueños y Futuro Anterior, 2020). Aquí se trabajó directamente con la versión en inglés.

de posibilidad subjetivas para la política hoy. Aquí nos preguntamos entonces, en el nivel de los imaginarios, ¿se puede encontrar la despolitización que Brown describe como proyecto de la racionalización neoliberal de la vida? ¿Cómo aparece la disposición subjetiva a la politización de la violencia? O en todo caso, ¿cómo se articulan esas dos posibilidades de lectura de los efectos subjetivos de la crisis del neoliberalismo? ¿Qué expectativas políticas sobreviven en la ciudadanía de un neoliberalismo post-crisis? ¿Cómo se transformaron los imaginarios sobre la democracia y sus capacidades?

Postularemos esas preguntas al material discursivo producido a través de una serie de grupos focales realizados durante los últimos tres años en la Argentina: 1- 10 grupos focales fueron realizados en mayo y octubre de 2021 con participantes de diferentes centros urbanos del país a través de una plataforma virtual de videollamadas grupales, en el marco del proyecto PISAC-COVID 19 titulado “Identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la postpandemia: un estudio multidimensional sobre las incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina” (<http://encrespa.web.unq.edu.ar/>). 2- 10 grupos focales fueron realizados en noviembre de 2021 con participantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del proyecto PICT-FONCYT titulado “La crisis de la democracia: gobernanza transnacional, desigualdades sociales y autoritarismo como desafíos de las sociedades capitalistas”. 3- 12 grupos focales fueron realizados en febrero de 2023, de modo presencial con participantes de AMBA y de modo virtual con participantes de diferentes regiones del país en el marco del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (<http://www.unsam.edu.ar/leda/grupos-focales.asp>).⁵

5 En las citas textuales del material discursivo proveniente de estos trabajos se utilizará la referencia numérica (1, 2 o 3) aquí presentada para señalar de qué proyecto de

En todos los casos, coordinamos el diseño y la realización de los grupos junto con el equipo del Grupo de Estudios Críticos sobre ideología y Democracia de la Universidad de Buenos Aires (<http://gcediigg.sociales.uba.ar/>), siguiendo los criterios metodológicos con los que venimos trabajando desde 2015. Los participantes se agruparon por criterios de edad y último voto, buscando el grado justo de homogeneidad interna que nos permitiera avanzar en el debate de temas que suscitan polémica (Petracci, 2007). De todos modos, no se especificaron los perfiles de los grupos en las citas textuales para resguardar el anonimato de los participantes, pero también para evitar una lectura que extraiga inferencias de determinación directa entre voto y posicionamiento ideológico, en un trabajo cualitativo que no fue construido con ninguna pretensión de representatividad. Además en la interpretación que proponemos de los fragmentos textuales también se evitan ese tipo de lecturas, que siempre requerirían de la contrastación con datos cuantitativos provenientes de encuestas probabilísticas.

En la realización de los grupos focales, se utilizaron preguntas abiertas y técnicas psico-proyectivas que confrontan a los participantes con un material-estímulo ambiguo y cargado emocionalmente ordenado en una pauta-guión que orientó las conversaciones. Las cuestiones que se escogen para realizar los análisis proyectivos no son ambiguas en su estructura retórico-formal, sino en el sentido de que “las respuestas posibles se encuentran más al nivel de la expresión emocional que al nivel de los hechos” (Adorno, 2009, p. 173). Estas herramientas metodológicas permiten interrogar sobre las justificaciones y los argumentos de las reacciones (propias y de los otros participantes) frente a los estímulos de manera que permiten indagar en el momento racional y confrontarlo con las expresiones

investigación proviene cada cita, incluyendo también la referencia al mes y año en el que se realizó el trabajo de campo en cada caso.

emocionales. Esta doble dimensión –afectiva y racional– de los discursos aquí recogidos resulta central para un análisis atento a la dimensión contradictoria de los imaginarios sociales como el que proponemos.

La política que resta

Si asumimos, al menos como punto de partida, la perspectiva hermenéutica debemos comenzar por preguntar qué sentidos llenan al término *política* en la ciudadanía argentina contemporánea.

MODERADOR (MOD): ¿Se sienten representadas o no por la política?

MUJER (M): ¿Por la política que hay actualmente?

MOD: Sí.

M: No.

M: No, de hecho no sigo la política.

M: No tengo conocimiento, no puedo opinar.

M: Muy poco conocimiento de la política.

M: Como que la política ahora en general, como lo vemos como algo malo, hipocresía, muchas mentiras, corrupción, como que yo diría que ya uno queda con eso y no creo que nos represente.

MOD: ¿El Congreso no las representaría en este momento?

M: Quizás por eso tampoco tenemos conocimiento de algo que no nos representa. (1, Mayo 2021)

El desinterés es una primera respuesta asidua que bloquea el intento de llenar de sentido el término y, cuando se lo supera, los sentidos son valoraciones negativas que manifiestan un rechazo manifiesto.

Esas valoraciones sitúan a la política en el terreno de lo falso o incluso la ficción pero es interesante leer cómo cuando la política se convierte en ese escenario ficticio se padece la desilusión, o la decepción es decir que se sostiene una expectativa sobre lo que la política debería hacer y no hace.⁶ En ese sentido, la despolitización no parece solamente ser índice de un momento de desafección política o de apatía sino que también abre las puertas a un tipo de afecto distinto.

HOMBRE (H): Lamentablemente en la Argentina no hay política, hay politiquería barata, ordinaria, de cuarta, y mucha gente no lo percibe o no lo quiere percibir porque está con relativa comodidad. [...]

MOD: Me quedo con esta duda: ¿Cuál es la diferencia entre política y politiquería?

H6: La política son las acciones para lograr un objetivo, y la politiquería es esto que vemos de acomodar gente, las vacunaciones VIP. Todo eso es politiquería, que hablo de este lado porque si tengo que hablar de lo que hace la oposición en este momento es vergonzante, vergonzante. Tendrían que ir todos presos (1 de octubre de 2021).

M: Yo pienso que estamos naufragando, sin rumbo. Y por lo menos no escucho ninguna propuesta concreta de hacia dónde vamos a ir o de qué manera va a mejorar la situación. Yo creo que la economía es el tema principal que preocupa, pero que viene atrás de eso todo lo que es educación, salud, el presupuesto, la demanda habitacional, que nada, depende del lugar donde estés, pero yo entiendo que en todo el país es terrible: no poder pagar un alquiler y el poco acceso que hay a la vivienda propia.

6 M: Para mí, por la edad que tengo, yo ya vengo de vuelta, soy abuela y analizo la política y todo lo que sucede, es todo circo lo que hacen, se matan para llegar a ocupar un cargo y después de lo que prometen no cumplen con nada. Yo estoy totalmente decepcionada de la política. (60-75, *FdT*)

MOD: Vos decís que estamos como naufragando, que no está claro hacia dónde vamos. En principio parece que no vamos a ningún lado. ¿Y quién tiene el timón? ¿Alguien tiene el timón o está como vacío ese lugar?

M: Yo siento que está vacío. Como que, no sé. Yo soy docente, me dedico a hacer mi trabajo y los políticos deberían hacer su trabajo. La verdad que no tengo idea cómo se gestiona el país, no tengo idea cómo se gestionan las políticas económicas, de salud, no sé. Por lo menos acá donde vivo yo hay pocas noticias. El gobierno provincial es casi nulo y el gobierno municipal solamente hace cosas que yo veo en redes para las fotos. Te enterás de los eventos después de que suceden y no veo un gran crecimiento, no veo mejoras en lo cotidiano como se supone que uno debería vivir más tranquilo (3, Febrero, 2023).

De la política, se espera la fijación de un rumbo colectivo que habilite el despliegue de caminos de vida personales. Garantizar la educación, la salud y el acceso a la vivienda sigue apareciendo como una responsabilidad del Estado, pero, frente a esa expectativa, la realidad es la de la inacción, ya sea por incapacidad o por la falta de decisión y voluntad. El vacío de ese lugar de conducción es uno de los modos en los que se experimenta subjetivamente la crisis de soberanía estatal, que claramente produce una desorientación que abre al menos dos caminos. Por un lado, la neoliberalización de la vida construye las condiciones para una privatización de la experiencia, la auto-responsabilización individualizante de un sujeto que ya no espera ni busca nada del Estado, de los políticos ni de ninguna instancia colectiva, o bien porque se piensa bajo la ideología del emprendedor que el neoliberalismo le propone en su rostro triunfante –tal como describen Laval y Dardot al *hombre empresarial* (Dardot y Laval, 2013, pp.133-156) – o porque el neoliberalismo –y su crisis– destruyó los

lazos de integración social y quedó completamente desprendido de la imagen de la interdependencia colectiva, sumido en la urgencia de la satisfacción de necesidades inmediatas.⁷

M: Ojo, yo ahora voté al oficialismo y probablemente, tal vez lo haga de nuevo, no lo sé, pero sinceramente... no. Yo creo que hoy en día, por la situación, es como que estamos nosotros más enfocados en decir cómo salgo adelante después de todo el desastre de estos dos últimos años. A nivel pandemia a todos nos afectó, muchos se quedaron sin laburo, muchos se quedaron sin casa o se fueron a vivir de nuevo con sus padres. Por mi lado, yo estoy más enfocada con... como decirlo no tan dramáticamente: sobrevivir. Y que no le falte nada a mi familia, y ya. Digamos, no estoy buscando quién me represente porque yo siento que hoy en día, nadie (2, Noviembre, 2021).

Esa privatización de las expectativas que desplaza el lugar de lo colectivo implica también una revalorización de la familia como instancia primaria –y única– de dependencia que abre la posibilidad para lo que Melinda Cooper rastreó como un conservadurismo familiarista propio de la doctrina neoliberal (Cooper, 2017), Brown interpretó en su último libro como la posibilidad de una nueva articulación política entre el neoliberalismo y el conservadurismo y aquí pensamos como una articulación ideológica que explica y opera sobre la despolitización.⁸ Pero, por otro lado, la crisis de soberanía experimentada como vaciamiento del espacio de la acción y la decisión política produce enojo en quienes aún sostienen la representación

- 7 Como sostiene Judith Butler “La racionalidad neoliberal impone la autonomía como ideal moral al mismo tiempo que desde el poder se destruye esa misma posibilidad en el plano económico, porque convierte a toda la población en seres potencial o realmente precarios [...]” (Butler, 2017, p. 21).
- 8 Sobre las coincidencias y tensiones entre esas interpretaciones del neoliberalismo autoritario hemos trabajado en “Hacia una epistemología crítica del neoliberalismo autoritario: N. Fraser, M. Cooper y W. Brown en discusión” (2021).

de la interdependencia entre las vidas individuales y el todo y por lo tanto esperan algo de quienes conducen el destino colectivo.

MOD: ¿cómo te ves vos de acá a cinco años?

H: Todo depende del próximo gobierno.

MOD: O sea, te parece que cambia el gobierno. Igual no vas a estar: si cambia el gobierno va a cambiar tu situación.

H: No, no depende de eso. Depende de las políticas que implementen. La mano de obra, la producción, son fundamentales para el crecimiento. Pero es muy difícil, la verdad que estamos hundidos en un pozo donde se ve que no es fácil salir (3, Febrero, 2023).

Quizás como saldo del trauma global que significó la pandemia –que nos expuso a una vulnerabilidad compartida visibilizando nuestra dependencia de decisiones de otros–, quizás por la fragilidad padecida ante la sucesión y sobredeterminación de crisis que atravesó la Argentina en los últimos años (crisis de deuda, sanitaria, inflacionaria), o quizás por el recuerdo reciente del Estado social del kirchnerismo, en la Argentina sobrevive una conciencia de la interdependencia asociada a una expectativa de que sea el Estado y los políticos los que nos *saquen del pozo*. Eso no significa que no proliferen los discursos críticos a la *dependencia del Estado de bienestar* personificada en los *dependientes* que en Argentina incluso han asumido el estigmatizado nombre de *planeros* –discursos funcionales a la avanzada neoliberal, tal como ha mostrado muy claramente Nancy Fraser (2013, p. 83). Pero resulta evidente que, junto con la supervivencia de ese discurso típicamente neoliberal, que tiene la potencia de criticar al mismo tiempo al Estado por improductivo, al gasto público por excesivo y a los individuos-beneficiarios por no auto-responsabilizarse por su destino, sobrevive también una conciencia de la interdependencia que no sólo sigue depositando en la política un conjunto de expectativas,

sino que a la vez interrumpe la imagen romantizada del emprendedor como héroe solitario.⁹

H: Desde la pandemia empezó mucho el tema del emprendimiento también. No estoy trabajando, ¿qué hago? ¿De dónde saco plata? ¿Qué tengo para vender? Y como que empezó mucho ahí el emprendimiento, mucha gente empezó a hacer cosas. Lo que antes, hace 30 años, para nuestros viejos era una changa, algo en negro. Y ahora somos emprendedores

Mod: ¿Y Cómo te parece que les fue a los que empezaron a vender cosas en la pandemia? ¿Tenés como el resultado?

H: A mucha gente les fue bien y a muchos no. Mitad y mitad. No es que es la panacea que descubrí un lugar en el que a todos les va bien, no (3 de febrero de 2023).

M: Es verdad, a veces siendo un emprendedor trabajas más horas que si estuvieras bajo dependencia

H: Trabajás 24/7.

M: Es que sí, a toda hora

Mod: Pero uno podría decir, que como estás vos solo, sos más libre que trabajando para otro.

M: No, porque tenés que vender. O sea, si vos no vendes, no comés (3 de febrero de 2023).

H: Y, en casos como el mío, yo creo que falta de parte del Estado, del gobierno, ayuda, sería la palabra, no que me regalen las máquinas que necesito, pero sino que me den algún buen plan de cuotas para poder comprarlas, que no me hagan todo más difícil de lo que es,

9 Hemos trabajado sobre el discurso emprendedor en “La libertad precarizada. Nuevas formas sociales de padecimiento en el mundo del trabajo” (2019).

sino que estoy necesitando algo para trabajar, no estoy pidiendo que me hagan en cuotas un viaje a Europa, entonces estaría bueno que te lo faciliten un poco (3 de febrero de 2023).

La precarización generalizada hizo que se vuelva evidente que el empujamiento no sólo requiere un tipo de esfuerzo que conduce a la sobre-explotación, sino que además requiere –al menos en determinadas circunstancias críticas– de algún tipo de ayuda, apoyo o impulso estatal. El problema es que –quizás por las decisiones del gobierno argentino durante la pandemia, un gobierno en el que el kirchnerismo tenía un rol importante– esa conciencia de la interdependencia que abre una expectativa en relación al Estado y su conducción política, no se traduce en una mayor politización sino en un enojo con quienes toman malas decisiones que aparecen cada vez más como un otro distante.

M: Yo estoy re enojada con la clase política, yo por ahí como que escuché a la persona que opinó que tiene que ser gente inteligente, bien formados, mirá cómo han dejado la patria los bien formados, son todos estudiantes universitarios, todos profesionales. Yo mandaría a un ama de casa a dirigir el gobierno y sabes cómo salimos del fango. Las amas de casa somos las que tenemos el secreto de cómo llevar una economía adelante porque hacemos malabares para llegar a fin de año y llegar a llevar el plato de comida a la mesa. Mirá cómo está la patria con los bien formados y estudiados.

M: Hasta la seguridad podemos arreglar las amas de casa.

M: Esos que han hecho posgrados en Harvard y qué se yo, los prepararon para cagar a la gente, para eso fueron preparados (1 de octubre de 2021).

Y, vamos a meterlos a todos en una bolsa, por lo menos, políticos en general, porque, bueno, como dice Jero, si bien estuvo el peronismo,

ya es como una mezcla, estos últimos años ya no se sabe qué son, por un lado son peronistas pero hay radicales, también liberales, hay de todo un poco, así que para mí sería políticos en general (3 de febrero de 2023).

Es la frustración del que aún espera algo de la política lo que suscita ese enojo contra quienes aparecen como responsables de no cumplir el rol de conducirnos por fuera de la crisis. La alternancia entre las dos mayores fuerzas políticas en el gobierno argentino contribuye a esa operación de homogeneización de los políticos como un otro, todos igualmente responsables de su incapacidad o falta de voluntad de cumplir con su tarea y ponerle fin a una crisis que ya no tiene la temporalidad de la excepción.¹⁰ y ¹¹

H: Yo digo que estamos igual. Porque las palabras que van diciendo los otros, desastre, decadencia, es más de lo mismo. En ningún gobierno dijimos estamos espectacular. Entonces estamos igual. Siempre estuvimos mal, un desastre, diferentes gobiernos... para mí es más de lo mismo, lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre (2, noviembre, 2021).

A: No, la crisis es responsabilidad de la clase política en general, me parece a mí. Porque quedó demostrado que los dos modelos que gobernaron estos últimos años, uno más que el otro, pero los dos fracasaron, los dos. Las medidas que adoptaron uno y otro fueron parches, en su momento, lo siguen siendo, parches, y nada de lo que

- 10 Luego de que Cristina Kirchner dejara el gobierno en 2015 ante el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje, el kirchnerismo volvió al gobierno en 2019, formando parte de la coalición del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández al poder.
- 11 Un primer análisis de las narrativas temporales de la experiencia de la crisis puede encontrarse en el informe nº 4 que realizamos desde el LEDA, “Encrucijadas de la política en la post-pandemia” (2022).

se implementó favoreció en líneas generales al país (2 de Noviembre de 2021).

Esa operación de homogeneización tiende a liquidar, imaginariamente, lo que en la política hay de conflicto y contribuye a la lectura de que ella produce escenas de ficción: el desacuerdo entre posiciones diferentes sólo puede ser falso si los políticos aparecen como iguales.

H: ¿Sabés cuál es el claro ejemplo de los políticos? La escena de Esperando la Carroza, de tres empanadas, lo mismo. Los políticos están ahí, “mirá, se están cagando de hambre toda esta gente”, y los tipos están en su mesa, con su champán y sus cuentas bancarias. Y ese es el claro ejemplo de la política argentina (2 de Noviembre de 2021).

Así, tanto para quienes se enojan por el fracaso de las expectativas depositadas en la política como para quienes se refugian en una privatización de las expectativas –ya no depositadas en ninguna instancia colectiva– la política se imagina del otro lado de una *nueva grieta, la verdadera* frente al falso conflicto proyectado por las dos mayores fuerzas políticas.¹²

M: A veces no tiene mucho sentido lo que se debate en el Congreso y otras cosas quedan en nada. Es, más que nada, político, no es tanto la necesidad que tienen los pueblos en ese momento. Claro, no sé, por ejemplo, una ley ambiental. O la ley de etiquetado de las comidas. Que costó mucho, costó mucho, era algo necesario pero lo volvieron haciendo algo político, como una guerra de empresarios contra el pueblo. No sé si me explico.

12 También en el informe “Encrucijadas de la política en la post-pandemia” (2022) presentamos una lectura de esa transformación de la escena política argentina.

MOD: ¿Qué significa “algo político”? “Lo terminaron haciendo algo político...”

M: Claro, porque como que lo mezclan. Es como que yo soy de este partido y te digo: “el empresario es malo, no quiere hacer esto por vos, entonces la culpa es de él”. Y la mayoría de los que están en el parlamento, en el Congreso, son empresarios. No sé si se entiende.

MOD: Sí, sí. Pero ahí, que es algo político... A ver, te lo pregunto así: que sea político, ¿es algo bueno o malo?

M: Y, a veces, es malo (2 de noviembre de 2021).

Aquí opera un desplazamiento de sentido que no sólo coloca a la política en el lugar de lo falso sino que la piensa como falso conflicto o incluso como la capacidad de fabricar conflictividad allí donde no tendría por qué haberla. La percepción de vacío en la conducción del rumbo colectivo que podría leerse como índice de una crisis de representación está sobredeterminada por esta otra cuestión: el único sentido con el que se llena el término *política* –vacío en tanto espacio de identificación– es el de lo falso, la mentira, la ficción. Eso quizás sirva para comprender la particularidad del momento anti-democrático, al menos en la Argentina: no se trata sólo de la desconfianza en lo colectivo y la apatía de la participación, de una sociedad gobernada por la racionalidad social neoliberal que destruyó la soberanía política mercantilizando todas las estructuras y lazos de integración, sino también del enojo contra quienes falsamente sostienen el espacio de la política, solo sostenible como ficción.

La posibilidad de una politización autoritaria

Indagando en el orden de los imaginarios en torno a la política en el material que surge de los grupos focales podemos identificar al menos tres elementos que ayudan a comprender el éxito político

creciente de discursos antidemocráticos que no se restringen a privatizar en términos de contenidos o mercantilizar las formas del discurso público, sino que incluso legitiman o incitan a la violencia de modo manifiesto. Por un lado, sigue habiendo en un tipo de subjetividad cierta expectativa en relación a la política de modo que la perpetuidad de las crisis del neoliberalismo a nivel local y global se experimenta como un fracaso de esa esperanza, un fracaso que suscita el enojo contra quienes lo personifican: los políticos. A la vez, esos que fracasan aparecen como un otro cada vez más distinto al sujeto-ciudadano y homogéneo internamente. El tercer elemento de esta constelación de sentidos es la semántica de la falsedad con la que carga la política que resta, lo cual también aviva el fuego de la expectativa fracasada.

H: Sí, también, me parece también que Milei es algo diferente a lo que vienen haciendo los políticos, digamos, y lo que me gusta de él es esa sed de venganza que tenemos, que tiene el pueblo, eso es lo que yo creo que representa mucho también, lo que muchos quieren, esa sed de poder, de meter en la justicia a la gente que metió mano en el dinero del pueblo. Eso es una de las cosas que más me llama la atención, y aparte como dijo la señora, que es un tipo que lee, que estudia, y eso no se encuentra mucho en la política, gente que estudia y que lea y que sepa; es muy importante

Mod: Me interesó esa idea de la sed de venganza ¿en qué consiste esa sed de venganza, por qué existe eso, Juan?

H: Y, por el tema de la sed de venganza me refiero a lo que es meter preso a los corruptos, lo que todo el pueblo queremos, teniendo un poco de poder, poder hacer pagar a los políticos que estuvieron y que se enriquecieron con el dinero del pueblo, que hasta ahora nadie todavía creo que cayó, ni nadie está condenado por eso tan grave,

así que yo en eso es también apuesto a él, a que se haga justicia (3 de Febrero de 2023).

Esos elementos que dan sentido y cualifican al rechazo a la política en la Argentina contemporánea, a la vez explican la posibilidad del éxito de un tipo de discurso político que legitima la violencia contra la *casta política* como el de Javier Milei.¹³ Con ese discurso, se logró politizar la frustración de quienes aún tenían expectativas en la política y por eso pueden responsabilizarla *in toto* por no encontrar salida a las crisis. Pero no habría que creer que esa frustración solo es traducible en el enojo contra los políticos como responsables de no cumplir con las expectativas sobre ellos proyectadas. La profundización de un catastrofismo que es capaz de justificar una salida violenta es otro de los modos en los que se puede traducir la frustración de las expectativas en una salida política democrática a la crisis.

MOD: Vos, H. ¿Dirías que lo que dice Milei de quemar el Banco Central es democrático o antidemocrático?¹⁴

H: Violencia es mentir. Los políticos siempre nos mintieron. Y este mensaje no sé si va como chiste, porque aquella persona que quema algo es como un golpe de estado, y la argentina ya tuvo varios, la hemos pasado por momentos bien y por momentos mal. Pero creo que ese mensaje es en forma de chiste. Pero a nivel político entiendo, es lo que diría cualquier persona. Cansado, harto. Por partes muy inteligente y por partes bien populista.

- 13 Ya desde las elecciones legislativas de 2021 la campaña de Milei, autodefinido como libertario, se centra en un discurso contra “la casta política”, como se puede rastrear en diversas declaraciones del candidato a presidente por La Libertad Avanza en 2023. Cfr: *Parlamentario.com* (26 de agosto de 2021); *El cronista* (20 de febrero de 2022); *El economista* (5 de julio de 2023).
- 14 Se utilizó como estímulo una nota periodística que recogía una entrevista a Milei en la que él sostenía que él haría explotar el Banco Central. Cfr: *El cronista* (12 de agosto de 2021).

MOD: ¿Democrático o antidemocrático?

M: Democrático. Hay un montón de situaciones que pasaron que conllevan a la violencia... para mí es un comentario gracioso, hasta en un punto me cae bien, es una expresión.

MOD: ¿Vos decís que está expresando algo que se viene arrastrando?

M: Sí, obvio, la gente está cansada de no poder vivir bien. Uno trabaja para pagar... y el día a día, el consumo es costoso, y a veces tenés que elegir prioridades. La gente necesita trabajar, ganarse su dinero, hay falta de trabajo, la inseguridad que hay es tremenda (3 de febrero de 2023).

La violencia aparece justificada –o al menos naturalizada como un *chiste*–, pero a la vez se legitima su utilización en el marco de la democracia en función de la falta de respuestas; es decir, la democracia parece ampliar sus límites hasta incluir modos de la violencia contra instituciones del Estado democrático porque ella misma no logra abrir un camino hacia un futuro post-crisis.

Parecería entonces que la radicalización autoritaria es posible porque los canales institucionales que la democracia ofrece para resolver conflictos aparecen como agotados o impotentes ante la experiencia de la perpetuidad de la crisis, pero también porque los imaginarios democráticos se han debilitado. Ese vaciamiento de sentidos democráticos del que hablaba Brown implica una desolidarización que habilita la incitación a la violencia (en este caso contra las instituciones, en otros contra los políticos pero también eventualmente contra un otro social señalado como culpable) y a la vez deja al concepto de democracia tan vacío que es capaz de incluir esos discursos y prácticas violentas.¹⁵

15 En el Capítulo 1 de *Undoing the demos* ella plantea una pregunta ausente en los análisis de Foucault del neoliberalismo que allí le interesa retomar: “¿Qué sucede

M: Pero la gente que lo votó a Hitler... ¿Vos escuchaste eso también, no? En ese momento no quería a los judíos. Yo tenía una vecina... No, no, no, no digo que está bien que venga a matar. Pero yo digo que si una persona me dice, mira, ahora toman el poder. Empezamos a cortar los planes, que la gente empiece a laburar... Produzcamos laburo, que vengan empresas de afuera que va a haber trabajo. Si una persona me dice eso, no me importa que saquen los planes sociales, que saquen lo que quieran.

Mod: Pero... ¿Y si mueren personas?

M: ¿En mi opinión para mí? No, porque yo estoy en contra de eso. A ver, yo estoy en contra de que vengan los militares, estoy en contra de los extremos. Pero si viene una persona con el discurso que tenía Hitler cuando empezó. No diez años después cuando se le ocurrió hacer esa barrabasada, ¿me entiendes? Esa barbaridad. Pero cuando empezó era este libreto, ¿me entendés? El de va a haber trabajo, el de te voy a arreglar las calles, el de la gente no va a tener hambre. [...]

Por ejemplo, ustedes me están dando el ejemplo de Milei, que tiene muchos conocimientos, ponele que nos arregla el país en 10 años, qué sé yo. Pero saca a los militares, empieza todo lo eufórico, todo, y ahí está el sacrificio, donde vos pensás, bueno, me arregla el país en 10 años, pero en 10 años empieza el holocausto.

Mod: ¿Y entonces?

Y entonces eso ya sería hacer un sacrificio que yo capaz puedo llegar a afrontarlo, porque de toda la gente, de todos los presidentes que tenemos, ninguno vamos a saber qué es lo que va a pasar dentro de unos años, aunque digan, aunque digan (3 de febrero de 2023).

con los elementos constitutivos de la democracia– su cultura, sujetos, principios e instituciones– cuando la razón neoliberal satura la vida política?” (2015b, p. 27). La traducción es propia.

El debilitamiento de los imaginarios democráticos que Brown describe como efecto de la neoliberalización de la sociedad, es una condición que hace posible la reducción de la democracia al momento del voto, pero aquí, incluso, lo que ese vaciamiento termina habilitando en un contexto de crisis, es una justificación de la violencia del holocausto, ya no como un “más allá de la democracia” sino como un momento suyo. Los gobiernos militares sí siguen apareciendo como lo otro de la democracia pero no operan como un límite a la radicalización autoritaria ya que la violencia que se moviliza aparece como un sentido capaz de llenar el “estuche vacío” de las democracias del neoliberalismo en crisis. El autoritarismo político del que somos contemporáneos no se piensa a sí mismo como antidemocrático a pesar de que es capaz de: habilitar la destrucción de instituciones de la democracia, convocar a la violencia contra los representantes-políticos, justificar la violencia contra un otro social (los judíos en el holocausto o los “planeros” hoy) y justificar y convocar a la interrupción del sistema electoral.

H: Quería decir eso, yo soy de la idea de los políticos en la Plaza de Mayo con un tiro en la frente, soy de esa idea [...] (3 de febrero de 2023).

A: Estoy de acuerdo un poco con lo que decía JM, me parece que a veces también tanta pasividad, como en nuestro país, de hacer y dejar hacer, a veces es contraproducente. No digo llegar al 2001, no fue sano, pero quizás también fue algo que se venía gestando, es una olla a presión, y yo hoy por hoy también veo que Argentina es una olla a presión. Veo muchos elementos, al margen de la situación económica, que nos hacen estar así al borde del precipicio, y... mucho descontento en general con los políticos y con toda la situación. A ver, yo no soy de los que piensan que sos un antidemocrático, que sos un fascista por interrumpir al gobierno del que le va mal. Si le va mal, a

ver, si está haciendo las cosas mal, ¿para qué tenés que estar esperando cuatro años? Ehm... ¿Por qué tenés que estar esperando cuatro años cuando las cosas no van? Nadie está hablando de imponer una dictadura militar, te fue mal, te lo hacemos saber con nuestro descontento general. En lo posible sin violencia, porque también eso es un tema complicado, muy... muy difícil (2 de noviembre de 2021).

El trabajo con el material discursivo producido a través de grupos focales es interesante justamente porque permite ver y analizar estos desplazamientos de sentido de los imaginarios que llenan el término democracia que se pasan por alto en preguntas directas sobre si se está *a favor o en contra*. De todos modos, corresponde leer en estos desplazamientos dos cuestiones a la vez: por un lado hay una alarma que enciende en tanto la violencia se convirtió en una herramienta política no sólo legítima sino identificable como democrática; pero por otro, es evidente que hay un consenso social logrado sobre que los golpes militares no son una herramienta política legítima en la actualidad política argentina. Parecería que la urgencia hoy no es entonces la de fortalecer a la democracia como mandato moral abstracto, sino más bien la de llenarla de sentidos capaces de contener la frustración de la experiencia de las crisis. La posibilidad de una democracia que contenga en su interior a la radicalización autoritaria y no pueda identificarla como su otro parece ser el peligro más inminente.

Sobre las mutaciones políticas en la Argentina contemporánea

Abriendo la pregunta por cómo se transformaron los imaginarios sobre la política en la Argentina contemporánea encontramos una desconfianza en las capacidades de la política que podría leerse como un efecto en las subjetividades de la racionalidad neoliberal desplazando al poder soberano, tal como lo describe Brown. Sin embargo,

hemos mostrado la trama discursiva que convierte esa desconfianza, expresada muchas veces en la desidentificación total con los representantes, en enojo, en tanto hay una subjetividad que aún está enlazada a ciertas expectativas de que la política sea la que abra el camino hacia un futuro post-crisis.

La desconfianza en las capacidades de la política se bifurca entonces en dos posibles transformaciones de los imaginarios sobre ella: si de un lado habilita la retirada hacia el mundo privado y la apatía en relación a lo colectivo que podríamos pensar como despolitización, del otro es capaz de suscitar la politización de las expectativas frustradas a través de la convocatoria a la violencia. De ese modo, se vuelve posible que la disposición subjetiva a la violencia política crezca junto con la fragilización imaginaria del poder soberano. En el nivel de los imaginarios, la política no desaparece de cuajo –no hay solo renuncia individualista al poder de lo colectivo– pero tampoco se transforma en violencia desnuda, sino en justificaciones de modos de la violencia política legítima que, a la vez, sostienen su diferencia con las dictaduras militares.

En ese sentido, una lectura que recupere la insistencia de Lazzarato en la continuidad de la violencia del capital podría llevar a desconocer esta particularidad de la radicalización autoritaria que caracteriza a los imaginarios políticos en la Argentina contemporánea: ellos no se reconocen a sí mismos como antidemocráticos aunque justifiquen y movilicen modos de la violencia que no sólo son antidemocráticas por implicar la destrucción de un otro social sino incluso por manifestarse contra instituciones y formas de la democracia. La atención sobre las contradicciones en el nivel de los imaginarios nos pone en alerta sobre la dimensión contradictoria del fenómeno político que, al menos en Argentina, debe poder pensarse como una politización autoritaria que rechaza a la política o un anti-democratismo que no rechaza a la democracia.

BIBLIOGRAFIA

- Adorno, Theodor (2009). Estudios sobre la personalidad autoritaria. En *Escritos Sociológicos II. Primera parte*. Madrid: Akal.
- Brown, Wendy (2015a). *Estados amurallados, soberanía en declive*. Barcelona: Herder.
- Brown, Wendy (2015b). *Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution*. New York: Zone Books.
- Butler, Judith (2017). *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.
- Cooper, Melinda (2017). *Family Values. Between Neoliberalism and the New Social Conservatism*. New York: Zone Books.
- Cuesta Micaela, Wegelin Lucía (marzo 2022). Encrucijadas de la política en la post-pandemia (Informe nº 4). Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. <https://www.unsam.edu.ar/leda/docs/P1>
- Dardot, Pierre y Laval, Christian (2013). *La nueva razón del mundo*. Barcelona: Gedisa.
- Dardot, Pierre y Laval, Christian (2017). *La pesadilla que no acaba nunca*. Barcelona: Gedisa.
- Duménil, Gerard y Lévy, Dominique (2015). *La gran bifurcación. Acabar con el neoliberalismo*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- El cronista* (20 de febrero de 2022). La escatológica frase de Javier Milei contra la “casta política”. <https://www.cronista.com/economia-politica/la-escatologica-frase-de-javier-milei-contr-la-casta-politica/>
- El cronista* (12 de agosto de 2021). Milei insiste con “volar por los aires el Banco Central” y con su teoría de “Alberto títtere”. <https://www.cronista.com/economia-politica/milei-campana-sin-filtro-desde-volar-por-los-aires-al-banco-central-hasta-alberto-titere/>
- El economista* (5 de julio de 2023). Explotó Milei: “Cada minuto que dedican a operarme por exponer a la casta, es proporcional al que esconden a los culpables de la decadencia nacional”. <https://eleconomista.com.ar/politica/explo-to-milei-cada-minuto-dedican-operarme-exponer-casta-proporcional-esconden-culpables-decadencia-nacional-n63943>
- Fraser, Nancy (2013). *Fortunes of feminism. From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*. Londres: Verso.
- Mudde, Cas (2021). *La ultraderecha hoy*. Barcelona: Paidós.

- Lazaratto, Maurizio (2013). *La fábrica del hombre endeudado: Ensayo sobre la condición neoliberal*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Lazaratto, Maurizio (2020). *El capital odia a todo el mundo*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Parlamentario.com (26 de agosto de 2021). Javier Milei: “la casta política es la única que progresa y nos quiere pobres”. <https://www.parlamentario.com/2021/08/26/javier-milei-la-casta-politica-es-la-unica-que-progrese-y-nos-quiere-pobres/>
- Petracci, Monica (2007). La agenda de la opinión pública a través de la discusión grupal. En Kornblit Ana Lía (comp.), *Metodología cualitativas en Ciencias Sociales* (pp.77-89). Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Wegelin, Lucía y Prestifilippo Agustín (2019). La libertad precarizada. Nuevas formas sociales de padecimiento en el mundo del trabajo. *Argumentos. Revista de crítica social*. 21. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/4964>
- Wegelin, Lucía y Alquezar, Micaela (2021). Hacia una epistemología crítica del neoliberalismo autoritario: N. Fraser, M. Cooper y W. Brown en discusión. *Entramados y perspectivas*, 24. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/6988>
- Wegelin, Lucía (2021). ¿Ideología o racionalidad? Interrogaciones epistemológicas sobre la relación neoliberalismo-democracia a partir de la perspectiva foucaultiana. *Política y Sociedad*, 58(3). <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/71154>

Crisis, violencia, miedo y conservadurismo

La reconfiguración en marcha
de la derecha ecuatoriana

SOFIA LANCHIMBA VELASTEGUI

Introducción

El crecimiento de grupos reaccionarios y la radicalización de la derecha no es un fenómeno lejano en Ecuador. Si bien a grandes rasgos parecería que Lenin Moreno y Guillermo Lasso responden a las derechas tradicionales, habría que hacer énfasis en algunas reconfiguraciones en marcha que habilitan y envalentonan expresiones de ultraderecha y permiten la proliferación de fuerzas antidemocráticas.

En específico voy a sostener que durante el gobierno de Guillermo Lasso hemos observado cómo la derecha ha ganado terreno en la batalla cultural para imponer su propia interpretación de la democracia, cómo ha desplegado un neoliberalismo necropolítico que va destruyendo las esferas de lo social y dejando el terreno allanado para la gobernanza criminal, cómo la movilización de valores tradicionales fomenta discursos y prácticas anti derechos, cómo se ha priorizado el discurso de seguridad y militarización por encima del de justicia social y cómo en este camino la anulación de opositores políticos amenaza la democracia.

Todas estas reconfiguraciones en curso generan un escenario de múltiples crisis que se ilustran de manera dramática en las masacres carcelarias, la escalada de la violencia –se prevé que al cierre del 2023 Ecuador se haya convertido en el país más violento de la región (Mella, 2023) y el repunte de la migración de quienes buscan mejores condiciones fuera del país.

En el plano político, esto se evidencia en la aplicación de la *muerte cruzada*. Esta figura fue utilizada por Guillermo Lasso para disolver la asamblea legislativa y llamar a elecciones anticipadas y así evitar su destitución en medio de un juicio político, en el que se le acusaba de peculado. Por si fuera poco, en estas elecciones anticipadas han aparecido candidatos cuya principal bandera de campaña es acercarse al modelo Nayib Bukele: “mano dura”, xenofobia y violación de derechos humanos, es decir, mayor autoritarismo.

El regreso de la derecha en Ecuador: las estrategias discursivas que preparan el terreno

Durante la década de los noventa, la derecha había mantenido un discurso de consenso y de gobernabilidad con el que pretendía anular el conflicto y la política contenciosa, sin embargo, en un país fértil para la movilización social, esta estrategia no iba a durar mucho. Las movilizaciones que se desplegaron durante la década mencionada reavivaron el conflicto como elemento central de la política. Para las elecciones del 2006, el partido de la *Revolución Ciudadana* aprovechó la dinámica del campo social, la extrapoló al campo político y generó una estrategia discursiva de diferenciación frente a la partidocracia, la *prensa corrupta* y lo que denominó *la larga noche neoliberal*.¹

1 Uso el concepto campo político en el sentido bourdesiano, para “pensar cómo las distintas oposiciones que operan en el espacio social se trasponen en un conjunto de relaciones políticas capaces de reflejarlas, invertirlas, condensarlas o polarizarlas” (Eyal, 2005, pp. 179-180).

La estrategia de diferenciación amigo/enemigo, ellos vs. nosotros creó un clivaje que posteriormente será conocido como correísmo vs. anticorreísmo. Mientras los otros representaban la crisis, la pobreza y la corrupción, la revolución ciudadana se presentaba a sí misma como ciudadanos de *manos limpias* y *corazones ardientes* que impulsarían el desarrollo del país.

Este clivaje permitió una clara marcación de fronteras políticas entre el correísmo y el resto de los actores políticos y funcionó electoralmente durante ocho años. La estrategia fue tan efectiva que éste se convirtió en el principal clivaje del campo político ecuatoriano desde los años dos mil. De tal manera que los opositores de derecha e izquierda se agruparon en un amorfo anticorreísmo.

La estrategia sostenida principalmente por la derecha a través de los medios de comunicación, de *figuras generadoras de opinión pública* y redes sociales fue invertir el significado de lo que se entendía por correísmo. El significado que antes había tenido un contenido positivo dejaba de tenerlo y era identificado como autoritarismo. Asimismo, sus partidarios eran tachados de *borregos*, es decir, personas sin criterio propio que actúan como el resto de la manada. Y fue con la crisis de los *commodities*, a partir del 2014, que este significado se impuso.

Convencidos de que el correísmo era una lacra con la que había que acabar, el siguiente paso fue demolerlo, lo que a su vez significaba dismantelar el Estado. Una vez más el discurso del *Estado obeso* volvía para convencer a todos que era necesario su adelgazamiento. Una tarea iniciada por Lenin Moreno y continuada por Guillermo Lasso.

Si el correísmo era identificado como autoritarismo quedaba la cancha abierta para usar el poder simbólico e imponer una interpretación propia sobre la democracia. Recordemos que “el poder simbólico es la capacidad de imponer divisiones legítimas dentro de un espacio social, haciendo así que grupos o clases sean “visibles y

verosímiles” (Eyal, 2005, p. 181). Este cambio de contenido había sido disputado en el campo de las ideas, pero fue la llegada al gobierno de Lenin Moreno, la que permitió usar el poder simbólico para dismantlar el legado del correísmo. Moreno gobernó acompañado de sectores empresariales, la banca, medios de comunicación y apoyado en la asamblea legislativa por partidos de derecha, a pesar de haber llegado a la presidencia por el movimiento Alianza PAIS.

Las movilizaciones del 2019 fueron el escenario propicio para observar, por un lado, el respaldo en bloque de la derecha al gobierno de Moreno y por otro, su contenido racista que propiciaba la defensa de la propiedad y la ciudad. Partidos como el PSC y CREO se mostraron al desnudo para criminalizar la protesta social y exigir su represión.

Para entonces, el correísmo había experimentado tanto desprestigio que un actor político que en ese momento podía ser identificado con la izquierda afirmó “es preferible un banquero que una dictadura” para referirse al correísmo. Otros tantos siguen cuidándose de ser identificados con el correísmo so pena de ser anulados como actores políticos. La polarización correísmo/anticorreísmo se había convertido en una espada de doble filo.

La derecha por fuera del gobierno de Moreno se dedicó a encumbrar la defensa de la *democracia* y la *libertad*. Esta batalla de ideas y el uso del poder simbólico reconfiguró el clivaje del campo político y allanó el camino para que Lasso ganara las elecciones. Es así como para el 2021, con el terreno preparado, Lasso se presentó a sí mismo como un demócrata dispuesto a “acabar con la persecución política”. El clivaje correísmo vs. anticorreísmo se había convertido en autoritarismo vs. democracia. Sin embargo, el concepto de libertad tenía un contenido específico para Lasso: libertad de mercado.

Durante el gobierno de Lasso se despliega una estrategia política con cuatro componentes: 1) neoliberalismo necropolítico, 2) revitalización de valores conservadores, 3) securitización de la política

(estados de excepción y militarización) y 4) desprestigio de opositores políticos.

El gobierno de Lasso, que cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales y de los grandes medios de comunicación, ha desplegado un ultraneoliberalismo resumido en *dejar morir* y *dejar matar*. Por un lado, hay una ausencia del Estado en las áreas sociales y por otro, hay un fortalecimiento de las esferas represivas: el aparato militar y policial ha cobrado fuerza en medio de constantes estados de excepción y un discurso de seguridad que habla de enemigos internos, terrorismo y violencia criminal. Además, hay un uso del poder político para desprestigiar a los opositores y socavar su legitimidad como actores del campo político: el correísmo y el movimiento indígena han sido calificados como narcotraficantes y terroristas respectivamente.

Durante los últimos seis años, Moreno y Lasso han gobernado con medidas antidemocráticas: estados de excepción, decretos, uso de la fuerza pública, militarización, criminalización de opositores políticos y represión para contener el malestar social. Además, han asegurado el apoyo creciente de la embajada de Estados Unidos y mantienen vínculos con las derechas regionales y globales.

Estos gobiernos, también, han habilitado una radicalización de derecha. En este tiempo hemos visto una ruptura de lo que era públicamente aceptable: hay una creciente oleada reaccionaria que se manifiesta sobre todo en redes sociales a través de comentarios racistas, misóginos, xenófobos y aporofóbicos que no temen decir que hay que “matar indios”, dejar morir a quienes están en las cárceles o expulsar a los extranjeros.

Neoliberalismo necropolítico: la crisis como condición para el autoritarismo

El neoliberalismo sienta las condiciones de posibilidad para el auge del autoritarismo debido a que debilita espacios sociales como la

educación, el trabajo, la salud o la vivienda y al mismo tiempo promueve la securitización de la política y el fortalecimiento de la represión. Para ello hay que entender al neoliberalismo no solo como el impulso del libre mercado y la desregulación del Estado, sino como “un régimen de existencia de lo social y un modo del mando político” (Gago, 2014, p. 9). Es decir, como una “nueva racionalidad”, “una serie de tecnologías, procedimientos y afectos que impulsan la iniciativa libre, la autoempresarialidad, la autogestión y, también, la responsabilidad sobre sí.” (Gago, 2014, p. 10). Y que sobrevive renovando nuevas formas extractivas-desposesivas y generando dinámicas de servidumbre y conflictividad (Gago, 2014).

Durante el gobierno de Lasso, podemos decir, además, que este es un neoliberalismo necropolítico. Con ello me refiero a que es una forma de gobierno que ha generado contextos de precariedad y abandono que dejan a algunos cuerpos a merced de la muerte. Esta situación se retrata en terribles imágenes de masacres carcelarias, violencia generalizada y asesinatos a lo largo del país, especialmente en provincias como Esmeraldas y Guayas. En palabras de Mbembe observamos “formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la muerte)” (Mbembe, 2011, p. 74) en las que la vida pierde su valor y algunos cuerpos son usados como meras monedas de cambio.

Lasso asumió el gobierno en mayo de 2021 con una clara agenda neoliberal: apertura de la economía, recorte del gasto público y reforma tributaria. Sus primeros pasos en el gobierno estuvieron encaminados a una ambiciosa desregulación y apertura comercial a través del ingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial del que el país había salido en el 2009. Con esto buscaba ofrecer mejores condiciones a capitales privados para el mercado externo, especialmente para la agroexportación, importación y sector petrolero. El mercado interno, sin embargo, no recibió la misma atención.

Su segundo movimiento fue el envío del *Proyecto de Ley Económico Urgente para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal* que buscaba flexibilizar más la contratación laboral, agilizar las privatizaciones y profundizar la desregularización financiera. Un proyecto de ley que respondía a las condiciones del FMI y no a las necesidades económicas del país –que debía paliar la pobreza y el desempleo. Además, la política fiscal recaía en la clase media sin afectar a los sectores de más altos ingresos. Una jugada que se daba en medio del escándalo de los Pandora Papers, el *offshore* con que Lasso ha escondido su capital y ha eludido sus obligaciones fiscales. El proyecto de ley fue rechazado, sin embargo, Lasso siguió persiguiendo sus objetivos a través de otros proyectos de ley y decretos ejecutivos.

Las privatizaciones y las desregulaciones han sido parte del gobierno de Lasso. Y aunque no lo logró en el caso del Banco del Pacífico, ha impulsado la participación de capitales privados en diferentes campos. A través del decreto 95 sobre política petrolera ordenó la duplicación de producción de petróleo y la participación del sector privado. A través del decreto 151 sobre política minera profundiza el extractivismo, promueve el incremento de concesiones mineras en territorios indígenas y no garantiza la protección de estos. En el caso del sector eléctrico, a través del decreto 238, el gobierno también buscaba la participación del sector privado. Además, las desregulaciones para favorecer al sector financiero mediante el decreto ejecutivo 695 limitan la acción de la Controlaría en la supervisión de los recursos públicos en entidades financieras. Se advierte también una eventual privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS– al insinuar una falta de liquidez.

Si bien el gobierno de Lasso no logró privatizar, en estricto sentido, activos públicos y el proyecto de ley económica urgente fue rechazado; la ausencia y desregulación del Estado ha generado una situación de abandono. Mientras el Estado pierde terreno, la violencia criminal y el narcotráfico ganan espacio. En el 2021, 281 personas

privadas de la libertad fueron masacradas y en el 2022, 123 fueron asesinadas en medio de una disputa entre bandas criminales. Una metáfora terrible son las ruedas de prensa que ofrecen las bandas criminales mientras el gobierno mantiene el silencio.

A la crisis económica, se suma el miedo generado por el crecimiento de la violencia criminal. Dos condiciones que abren el escenario para el desarrollo de derechas radicales. No hay una gobernanza estable y no hay una credibilidad en las instituciones. Este es un gobierno paralizado y desbordado que permite estados de excepción de facto.

Conservadurismo: revitalización y movilización de valores tradicionales

Lasso, además de representar a una derecha con intereses económicos, expresa el resurgimiento del conservadurismo que intenta frenar agendas progresistas ligadas a la conquista de derechos de mujeres y población LGBTQI. Es conocido que el banquero miembro del Opus Dei se presenta a sí mismo como alguien que defiende la familia tradicional y la religión. Además, se opone al aborto y en las filas de su partido participan activamente antiderechos. De esta manera, representa el slogan *tradición, familia, propiedad*, que en momentos de movilización popular aparecen unidos a la defensa de la Patria y la propiedad privada.

La defensa de lo tradicional tiene un componente racial y de clase, la familia tradicional es blanca y propietaria. Por ello, no es extraño que el mismo concepto de marcha blanca usada por antiderechos haya sido usada durante las movilizaciones del 2022. En esa ocasión, para defender el orden, la paz y la propiedad privada y aprovechar para dar rienda suelta a sus expresiones racistas y de clase.

En lo que refiere al aborto, Lasso vetó parcialmente el proyecto de ley de aborto en casos de violación (France24, 2022). El proyecto

legislativo estaba enfocado en permitir que mujeres embarazadas producto de una violación pudieran abortar hasta la semana 12 de gestación y en el caso de mujeres, adolescentes y niñas de las zonas rurales o remotas pudieran hacerlo en un plazo de hasta 18 semanas. Entre algunos temas, no aceptó el tratamiento diferenciado y sugirió la unificación de plazos, exigió la incorporación de la objeción de conciencia para los profesionales de la salud y la eliminación del término *personas gestantes*.

La presencia de Lasso en el gobierno y su promoción de los valores tradicionales habilita el fortalecimiento de grupos anti derechos y antigénero como el Frente Nacional por la Familia o Ecuador Provida, quienes además han emprendido acciones de incidencia pública. Como sucede en otros países estos grupos están organizados y demuestran tener un papel activo no solo en la política institucional, también en la toma de la calle a través de las marchas blancas. Su papel promueve el afianzamiento cultural de una derecha ultraconservadora.

La obsesión de la ultraderecha con el género es un ataque contra la igualdad y no es exclusiva de Ecuador. Lo que nos recuerda la hipótesis de Wendy Brown: “el nuevo populismo de derecha se nutre directamente de la herida del privilegio destronado que la blanquitud, el cristianismo y la masculinidad garantizaban a aquellos que de otra forma no eran nada, ni nadie” (Brown, 2021, p. 26).

En este escenario, grupos antiderechos se han atrevido, por ejemplo, a proponer un proyecto de ley familia que en el fondo busca impedir el aborto, imponer el matrimonio heterosexual y devolver a las mujeres al lugar de sumisión en el que estaban.

Securitización de la política: estados de excepción y militarización

Lasso ha logrado imponer un discurso de seguridad por encima del de justicia social y con ello fortalecer las esferas represivas. En lugar de establecer una política integral para combatir la violencia criminal, la pobreza, el desempleo, el despojo territorial producido por procesos extractivos y el malestar social; Lasso se ha concentrado en establecer la existencia de múltiples amenazas que sirvan como pretexto para aplicar medidas extraordinarias como los estados de excepción y el uso de las fuerzas armadas en el campo civil. Podemos decir que durante su gobierno se ha extendido una securitización de la política. “El concepto de securitización hace referencia a los actos de habla de una autoridad considerada como legítima, que designa una amenaza a la que hay que responder con una actuación de emergencia” (Demurtas, 2019).

En los últimos años, ha habido un crecimiento del narcotráfico, la violencia criminal y una presencia cada vez más activa de crimen organizado transnacional en el Ecuador: asesinatos, cuerpos colgados de un puente, vehículos bombas, asesinatos a policías y funcionarios públicos, sicariatos, delincuencia organizada, extorsionadores, secuestros, robos violentos, etc. Frente a ello, el Estado ha sido incapaz de garantizar la seguridad y el bienestar de los ecuatorianos.

La violencia que hemos observado, en específico, en las cárceles responde a una lucha de poder entre diferentes grupos criminales. Las cárceles se han convertido en centros de poder y disputa del crimen organizado, acopio de armamento, y recintos de tortura y ejecución extrajudicial.

Todo esto no sería posible sin la participación o aquiescencia del Estado y sus funcionarios. En concreto, los grupos criminales han ofrecido indicios de la negociación y pacto que mantienen con el gobierno de Lasso (Plan V, 2023). En diciembre de 2021, el embajador

estadounidense declaraba la existencia de narcogenerales en Ecuador a quienes se les retiraba la visa estadounidense (CNN, 2021). Y hace poco el ministro del interior, Juan Zapata, confirmó que un hombre con uniforme policial que aparecía respaldando una de las ruedas de prensa de las bandas criminales, emitida desde la cárcel, era efectivamente un agente policial (Teleamazonas, 2023). Casos como estos llevan a preguntarse si las fuerzas de seguridad responden a los poderes civiles o son canales de transmisión de otro tipo de intereses.

La política de seguridad de Lasso se ha desplegado a través de decretos de excepción, una creciente militarización de la sociedad y la declaración del terrorismo como amenaza para el Estado. Hasta marzo de 2023, Lasso había decretado quince veces estados de excepción, la mayor cantidad de ellos por temas de inseguridad (Sánchez, 2023).

En este camino, el primer paso ha sido preparar el terreno para que la opinión pública sea favorable a medidas securitistas sin importar su costo. Desde los medios de comunicación, se insiste en el miedo, la inseguridad y la violencia. Desde el Estado, Lasso ha intentado llevar a cabo reformas jurídicas como la reforma a la Constitución para viabilizar la complementariedad de las fuerzas armadas para el combate contra el crimen organizado. Esta reforma no se llevó a cabo, sin embargo, en la práctica, los constantes estados de excepción han permitido una creciente militarización de las calles.

El siguiente paso previo fue la reforma y ampliación del delito de terrorismo a través de la *Ley Orgánica Reformativa a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral*. Una figura que ha sido usada para criminalizar a líderes sociales, opositores políticos y la protesta social. La creciente aceptación de medidas represivas y el apoyo al autoritarismo en general son recogidos en los últimos datos de Latinobarómetro. El

19 % de los encuestados en Ecuador en este año apoya un estilo de gobierno autoritario, frente al 16 % de 2020 (Primicias, 2023).

Lasso ha buscado imponer medidas policiales para controlar a la sociedad, para ello, el siguiente paso ha sido el fortalecimiento del aparato represivo y su blindaje. Por un lado, las fuerzas armadas y policiales han cobrado relevancia política en medio de la discusión sobre seguridad; por otro lado, se han emitido leyes, reglamentos y decreto que establecen marcos de excepcionalidad y que blindan a las fuerzas represivas bajo la excusa de que necesitan apoyo para enfrentar a la delincuencia. La *Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su reglamento* crea privilegios que en el fondo buscan garantizar la impunidad a la violencia policial y militar. Este tratamiento especial reduce el control sobre estas fuerzas y establece un marco jurídico que podría garantizarle impunidad en casos de violación a derechos humanos.

Parte de la política de Lasso ha sido transferir el problema a los ciudadanos y las personas dedicadas a la seguridad privada. A través del Decreto 707, autorizó el porte de armas de uso civil y estableció que las compañías de vigilancia y seguridad privada prestaran servicios de apoyo y auxilio al Estado (Lasso, 2023a).

Durante los dos años de gobierno de Lasso, la violencia criminal fue en aumento y las medidas para combatirlo han sido inefaces. En ese escenario y bajo la misma premisa securitista, en mayo del 2023, emitió el Decreto ejecutivo 730 (Lasso, 2023b) por el cual declara al terrorismo como amenaza de Estado y dispone que las fuerzas armadas ejecuten operaciones militares en todo o parte del territorio nacional con todos los medios a su disposición. Además, establece privilegios para quienes cometan excesos, pues se dispone que el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) establezca un trato diferencial para personal militar y policial.

El contenido de este decreto atenta contra el derecho a la protesta. Pues la ambigüedad con la que se usa la figura de terrorismo podría recaer sobre líderes sociales, defensores de derechos humanos y de la naturaleza y organizaciones sociales. La figura de terrorismo ha sido históricamente usada para criminalizar a disidentes y opositores políticos. De tal manera que bajo una misma figura legal estarían los grupos criminales y las organizaciones sociales. Es decir, no hay una diferenciación entre quienes representan una amenaza real y una ficticia, como tampoco del nivel de peligrosidad que cada uno representa.

Los resultados de la agenda securitista han sido el incremento en el número de policías, mayores recursos, más armamento, militares en las calles, posibilidades de cyberespionaje y, sobre todo, la reapertura de acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos y el uso de la amenaza para garantizar las concesiones mineras.

Las políticas securitistas que se han llevado a cabo en Ecuador están alineadas con la agenda de Estados Unidos en la región: asegurar recursos y garantizar la pacificación y control de la población. El narcotráfico, sin embargo, afecta sus intereses, por eso hay una mayor participación en el país.

En el 2018, estalló un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo y un equipo periodístico de *El Comercio* fue secuestrado (BBC, 2018). A partir de entonces, la presencia e intervención de Estados Unidos ha ido en aumento: en el 2018 se reabrió la Oficina de Cooperación en Seguridad, en el 2019 se reabrieron las oficinas de la USAID y se estableció la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.

El 19 de julio de 2023, Ecuador y Estados Unidos firmaron el Memorando de Entendimiento en Materia de Seguridad que estará vigente durante los próximos siete años. El Ministerio de Defensa ecuatoriano informó que este Memorando incluye cuatro ítems: intercambio de información, fortalecimiento de capacidades de las

Fuerzas Armadas, entrenamiento y capacitación y adquisición de recursos.

La firma del memorando, que Lasso llamó *Plan Ecuador* en relación con el *Plan Colombia*, advierte la cesión de soberanía y la intervención de Estados Unidos en la crisis interna del país. “Se trata de una estrategia que impulsa el gobierno ecuatoriano para alinearse con los intereses de Washington a cambio de ayuda militar, económica y social” (Córdova-Alarcón, 2022). La experiencia previa en Colombia advierte que acuerdos como este solo intensifican la violencia criminal e institucional y uno de los peores resultados fueron los *falsos positivos* –civiles no beligerantes asesinados y que fueron reportados como bajas en combate. El Estado perdió soberanía respecto a la lucha antidrogas y se expandió el paramilitarismo.

Una vez legitimado el escenario de inseguridad y miedo, la amenaza se puede expandir a otras áreas y trasladarse a otros contextos. Usando este recurso, Lasso declaró la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado a través del decreto 754. En la práctica, este movimiento busca asegurar procesos extractivos ligados a intereses de transnacionales y servirá para desplazar militarmente a quienes se opongan a proyectos mineros.

Ya no solo se trata de desplazar a poblaciones campesinas e indígenas, ahora están dispuestos al uso de la violencia, lo que pone en grave riesgo la vida de defensores de los derechos de la naturaleza y poblaciones en conflicto. El extractivismo se impondrá con la violencia y la militarización de los territorios.

Además, la *Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral* permite la militarización de concesiones mineras y la declaración de éstas como Áreas Reservadas de Seguridad del Estado. Es decir que tendrán *cláusulas especiales de seguridad*. Las medidas securitistas en este caso tienen como finalidad la expansión de la frontera extractiva. Y si bien hay resistencia territorial, es claro que el avance del

modelo militarista empeora las condiciones de quienes defienden los territorios.

Desprestigio de opositores políticos: enemigo interno, terroristas, narcotraficantes

Desde el gobierno de Lenin Moreno y las movilizaciones del 2019 se ha ido perfilando y construyendo un *enemigo interno*. Este concepto, propio de la doctrina de seguridad nacional, busca convencer a la ciudadanía de que una persona o grupo de personas representan una amenaza al colectivo y que por el bien de todos es necesaria su neutralización o eliminación. Los intelectuales de derecha se han dado a la tarea de señalar al movimiento indígena, a sus líderes y organizaciones como *terroristas*. Durante el gobierno de Lasso, a esta narrativa se ha sumado una adicional: se los acusa de tener vínculos con el narcotráfico. Lasso afirmó, por ejemplo, que las movilizaciones del 2022 fueron financiadas por el narcotráfico (El Universo, 2022). En el caso del correísmo se ha insistido en sus vínculos con el narcotráfico. Este tratamiento a los opositores políticos genera un desprestigio que busca anularlos como actores políticos.

A manera de cierre

Escribo este capítulo a pocas semanas de la disolución de la asamblea legislativa y en medio del llamado a nuevas elecciones. El 17 de mayo de 2023 mediante el decreto ejecutivo 741, Lasso disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones anticipadas (Lasso, 2023c). La disputa por la presidencia encuentra un eje común entre todos los candidatos: el discurso securitario y la aplicación de *mano dura*. En varios casos, incluso se hace uso de discursos xenófobos y se prometen actuaciones que implican la violación de derechos humanos.

Y aunque todos coinciden en la urgencia por atender la seguridad del país, poco se reconoce que las instituciones estatales están corrompidas, que la policía y las fuerzas armadas están atravesadas por los intereses del narcotráfico. Y que su fortalecimiento, falta de control, uso en el campo civil, carta abierta para *combatir el crimen* o garantizarles impunidad solo hará que la violencia se incremente.

Lasso termina su mandato con el 10 % de credibilidad y con el terreno allanado para la crisis y el miedo. Ecuador está viviendo una crisis multinivel que no ha sido atendida y cuya única respuesta ha sido la aplicación de medidas antidemocráticas. La desigualdad no atendida, así como la enorme inseguridad en la que vive la población crean un campo perfecto para autoritarismos que pueden usar el miedo y la incertidumbre.

Una orientación hacia la democracia requiere inversión en sectores sociales: educación, salud, trabajo, vivienda. Sin redistribución y sin igualdad política no es posible la democracia. En la coyuntura próxima, además, los actores políticos progresistas deberán tomar en cuenta la necesidad de articular un frente político amplio en defensa de la democracia.

BIBLIOGRAFÍA

- BBC (2018, abril 2). Quiénes eran los miembros del equipo periodístico de El Comercio de Ecuador que murieron mientras estaban secuestrados por un grupo disidente de las FARC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43619102>
- Brown, Wendy (2021). *En las ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente (1a ed)*. Madrid: Traficantes de sueños.

- CNN (16 de diciembre de 2021). EE.UU. señala a “narcogenerales” en Ecuador por presunto vínculo con el crimen. <https://cnnespanol.cnn.com/video/eeuu-narcogenerales-ecuador-militares-redaccion-mexico/>
- Córdova-Alarcón, Luis (18 de octubre de 2022). Plan Ecuador e intervención por invitación. <https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/plan-ecuador-e-intervencion-invitation>
- Demurtas, Alessandro (2019). Veinte años de la teoría de la securitización: Puntos fuertes y débiles de su operacionalización. *Análisis Jurídico - Político*, 1(1), 167-187.
- El Universo (21 de junio de 2022). Lasso apuntó que el narcotráfico financió el paro nacional con \$ 15 millones. <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/lasso-apunto-que-el-narcotrafico-financio-el-paro-nacional-con-15-millones-nota/>
- Eyal, Gil (2005). La construcción y la destrucción del campo político checoslovaco. En *El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática*. Barcelona: Gedisa.
- France24 (16 de marzo de 2022). Ecuador: El presidente Lasso veta parcialmente el proyecto de ley de aborto en casos de violación. <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220316-ecuador-ley-aborto-lasso-femismismo>
- Gago, Verónica (2014). *La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Lasso, Guillermo (2023a). Decreto Ejecutivo No.707. https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
- Lasso, Guillermo (2023b). Decreto Ejecutivo No.730. https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
- Lasso, Guillermo (2023c). Decreto Ejecutivo No.741. https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
- Mbembe, Achille (2011). *Necropolítica: Seguimiento de sobre el gobierno privado indirecto* (E. Falomir Archambault, Trad.). Barcelona: Editorial Melusina, S.L.
- Mella, Carolina (10 de julio de 2023). La inseguridad en Ecuador escala a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo Gobierno. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2023-07-10/la-inseguridad-en-ecuador-escala-a-niveles-historicos-y-se-impone-como-prioridad-del-proximo-gobierno.html>

- Plan V (31 de julio de 2023). ¿Por qué el último supuesto pacto mafioso es distinto al del 2022? <https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/que-el-ultimo-supuesto-pacto-mafioso-distinto-al-del-2022>
- Primicias (21 de julio de 2023). Apoyo al autoritarismo aumenta en Ecuador, dice Latinobarómetro. <https://www.primicias.ec/noticias/politica/autoritarismo-gobierno-aumento-ecuador-latinobarometro/>
- Sánchez, Emilia (20 de marzo de 2023). Ecuador tiene 15 estados de excepción desde mayo del 2021. *Expresso*. <https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-15-estados-excepcion-mayo-2021-154571.html>
- Telemazonas (27 de julio de 2023). Juan Zapata confirma que hombre con uniforme que aparece en video de alias 'Fito' es Policía. <https://www.youtube.com/watch?v=W9drWyjDiQ>

Velhas ideologias, novas roupagens

Perspectivas do fascismo atual
a partir da experiência da nova direita
europeia e latino-americana

TATIANA POGGI E REJANE HOEVELER

Introdução

Esse texto tem como objeto as novas formas de manifestação e organização política da extrema-direita e do neofascismo, especialmente através dos coletivos e partidos integrantes da Nova Direita. É um texto de caráter panorâmico, possibilitando uma visão global do problema a partir de uma reflexão comparada sobre a organização da chamada Nova Direita no norte e no sul global. Um recorte desta amplitude tem por certo limitações, todavia tem a vantagem de ser capaz de ressaltar a peculiaridade das novas formas do fazer político e o poderoso potencial de articulação transnacional do conservadorismo no mundo contemporâneo, com métodos inovadores, garantido pelas novas tecnologias. Nossas breves reflexões tratarão, portanto, de uma problemática presente, da construção social de formas extremas do conservadorismo, em sua maioria neofascistas, nascidas do aguçamento das contradições do capital em sua conformação neoliberal, mas que, em muitos sentidos, absorve determinados aspectos da agenda econômica desse modo de reprodução social.

Para entender as formas contemporâneas de fascismo é preciso abandonar a ideia da simples reprodução de uma experiência passada, reencenação nostálgica dos velhos tempos; ou do paradigma do fascismo como problema europeu. Nesse aspecto é especialmente válida ainda hoje a reflexão de Poulantzas (1972, pp.72-74; 77-99) do fascismo como um processo ou as mais recentes análises de Evans (2010), Paxton (2007, pp. 13-49) e Mann (2008, pp.11-49) diferenciando o fascismo enquanto movimento e regime. O processo de fascistização ganha força em momentos de crise social generalizada, quando as contradições de classe e os conflitos internos do bloco no poder se aguçam de tal modo, revelando um quadro agudo de crise política (crise de representação) e ideológica. Essa situação de extrema vulnerabilidade, frustração e insegurança social abre espaço para a emergência de lideranças salvacionistas e soluções de força.

A crise orgânica do capital que veio se desenhando no mundo desde a década de 1970, aliada às reações conservadoras às conquistas democráticas, de ampliação de cidadania e representatividade de grupos subalternos, têm contribuído para gerar um ambiente de vulnerabilidade social, acirramento político e deslegitimação das instituições políticas liberais.

As Novas Direitas no norte e no sul global estão pautadas pelo neofascismo, ainda que procurem se esquivar de símbolos e de uma conexão direta com o fascismo histórico, assumindo um verniz moderno. Seu conteúdo político e ideológico é neofascista, no sentido em que se conforma como uma alternativa capitalista autoritária e violenta em múltiplas dimensões, promovendo um arcabouço cultural e histórico eurocentrado, o engajamento ativo e vivaz de um determinado padrão humano etnocentrado e excluindo radicalmente tudo aquilo que não se enquadre nesse padrão. O horizonte societário é, portanto, o de um etnoestado, procurando legitimar a nação com base em argumentos étnico-culturais e de um passado mítico (mito de origem), orientados pelo princípio *sangue e solo*, no caso

europeu, ou pela experiência da colonização, no caso da América Latina, com uma idolatria à (ex)metrópole.

No sul global, o padrão humano eurocentrado também será reproduzido e isso ajuda a explicar a contraditória relação da Nova Direita do sul global com determinado nacionalismo, sua repulsa à cultura popular, à tudo que é regional, sua ojeriza aos povos originários. Nesse sentido, pretendemos retomar o debate sobre o processo de colonização da alma de que nos falava Frantz Fanon. Um processo histórico de dominação altamente sofisticado, produzido conscientemente pelo europeu desde a colonização e reproduzido pelos colonizados do sul global. Rasgando a ferida colonial, Fanon dizia:

O negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano(...). Todo povo colonizado –isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural– toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será (...). Sentimento de inferioridade? Não, sentimento de inexistência. O pecado é preto como a virtude é branca (Fanon, 2008, pp. 27, 34 e 125).

Mesmo após a conquista da emancipação política, estamos ainda presos aos grilhões do imperialismo e de padrões eurocentrados; independentes, mas colonizados na alma; livres, mas ainda escravos da Europa. O colonizado aprendeu a odiar sua mestiçagem, sua herança negra e de povos originários, sempre silenciada, escondida, apagada. A branquidade é uma relação de poder tão sedimentada e profundamente arraigada que “ela se afigura como o estado normal e universal do ser, o padrão pelo qual todo o resto é medido e em cortejo com o qual todos os desvios são avaliados” (Ware, 2004, pp. 16-17). Assim, muitos *brancos* cá de baixo não se veem ou se sentem como

nativos da terra, mas europeus na América. Nos povos originários, negros e mestiços foi inculcido o desejo de ser branco, de falar como branco, comportar-se como branco, vestir-se como branco, rezar como branco. Tornar-se branco é tornar-se humano. É ser reconhecido, respeitado, ter virtude e, quem sabe até, amado. É enquadrar-se no padrão, tornar-se menos visível e assim escapar, ainda que momentaneamente, à discriminação. Tornar-se branco, portanto, é a grande conquista almejada e, traumáticamente, nunca alcançada. Desse sofrimento padecemos todos no sul global: *brancos*, negros, povos originários e mestiços.

Isso posto, procuraremos apresentar os processos sociais e históricos da construção da Nova Direita na Europa e na América Latina, suas formas e organização e articulação política em meio ao neoliberalismo, atentando para o processo dialético da colonialidade contemporânea, no qual o padrão sócio-étnico-cultural europeu é afirmado e reforçado.

Nova Direita na Europa: origens históricas e debate conceitual

O debate em torno da caracterização da Nova Direita europeia, bem como dos conceitos de etnopluralismo e de direito à diferença vêm gerando uma das mais acaloradas polêmicas teóricas dentre os especialistas nos temas do fascismo e extrema-direita pelo mundo. Seria a Nova Direita europeia neofascista, uma manifestação da extrema-direita ou ainda uma expressão do populismo de direita?

Muitos autores afirmam que a Nova Direita europeia seria algo distinto do fascismo, manifestando-se através de novos meios políticos fora da via parlamentar e procurando manter o formalismo republicano de modo a integrar-se à sociedade liberal sem propostas de rupturas com a ordem institucional. A ênfase na novidade fez com que adotassem outros instrumentais conceituais como extrema-direita (Mudde, 2000; Ignazi, 1992; Falter e Schumann, 1988),

direita radical (Bell 1963. Kitschelt e McGann, 1995. Sedgwick, 2019) ou o populismo de direita (Betz e Immerfall, 1998; Minkenberg, 2000; Mudde, 2007).

Outras importantes referências como Walter Laqueur (1996) e Roger Griffin (1991) adotam o conceito de neofascismo para caracterizar a Nova Direita. Talvez o mais notável deles seja Griffin, através da sua chave do neofascismo como renascimento ou nova manifestação do mito palingenético ultranacionalista.

Dentre as referências marxistas, alguns autores ponderam o uso do conceito de neofascismo, entendendo que este só se aplicaria a tentativas de perpetuar ou regenerar o fascismo. Mais apropriado para a Nova Direita seria pensar em pós-fascismo, um fenômeno em transição, integrante da constelação fascista, mas distinto, assumindo novas formas e um delineamento ideológico errático, instável e contraditório, próprio do atual regime de historicidade (Traverso, 2019, p.13). Outros, porém, pensam a chave eurística do neofascismo como um fenômeno transnacional, ainda que com variações nacionais (Copsey, 2013, 2020; Finchelstein, 2017).

Historicamente, o fascismo na Europa veio se organizando a partir de movimentos sociais nacionais e assumindo a forma de partidos políticos de massa, investindo fortemente na estratégia político-parlamentar. Esta característica se fará presente nas suas expressões do pós-guerra, observando-se na Europa, mais que nos EUA, a presença de partidos políticos neofascistas. Todavia, é notável a diversificação das formas de atuação e organização política. A estratégia político-pedagógica e de disputa ideológico-cultural veio se popularizando particularmente a partir da década de 1980, não raro ainda associada à estratégia político-parlamentar.

A Nova Direita europeia se apresenta como uma rede de partidos políticos, organizações, sites, revistas, *think tanks*, institutos, fundações e centros de formação, apostando em novas formas de organização e ação política para o fascismo contemporâneo em meio

à democracia liberal. Esses coletivos procuram se inserir nos debates públicos a partir do investimento na produção e distribuição de novos materiais de mídia, novos termos e conceitos.

Conceitos como etnopluralismo (Eichberg, 1978, pp. 72-75) e direito à diferença (Benoist, 1980, pp. 10-19) foram criados por dois dos maiores intelectuais neofascistas europeus –Henning Eichberg e Alain de Benoist– na tentativa de dissociar formalmente a Nova Direita europeia do fascismo histórico, afirmando o direito ao respeito às diferenças étnicas, culturais e históricas dos povos. Ressaltam, contudo, que a melhor forma de preservar a essência desses povos e culturas é a separação radical e mútua exclusão entre povos, de modo a evitar a miscigenação e influência cultural (Guibernau, 2007, p.156). Esses conceitos deixam explícita a crença na pureza étnico-cultural como princípio, o horror à mistura de raças/povos e a afirmação de uma herança/ancestralidade europeia, uma essência histórica, cultural e civilizacional europeia, ocidental e etnicamente caucasiana, ligada a um território.

Analogamente, haveria um suposto respeito por outras culturas, outros povos e sua herança, porém rejeitando veementemente o multiculturalismo, a miscigenação e inclusive a vida integrada entre diferentes povos, em favor de um separatismo radical. Esse aspecto supostamente antirracista, democrático, anticolonial e de valorização das culturas nativas presente nos conceitos de etnopluralismo e de direito à diferença vem gerando incertezas quanto ao direcionamento político da Nova Direita, mas revelam bastante sobre o contexto no qual foram forjados.

Em meio às lutas democráticas por ampliação da cidadania, às guerras de descolonização e à afirmação de diversos movimentos de grupos subalternos, os fascistas do pós-guerra procuraram se renovar, capturando as pautas por valorização de identidade e ancestralidade de grupos subalternos –que só fazem sentido a partir do entendimento de que essas lutas se contrapõem a uma estrutura de

poder– para afirmar a sua identidade e ancestralidade, que vêm no sentido oposto, reforçando estruturas de poder. O que se observa é uma estratégia oportunista de apropriação e desonestidade intelectual pelo uso distorcido de certos conceitos e pautas da esquerda.

Assim, por trás da defesa do direito à valorização de grupos subalternos e à ancestralidade de povos não-brancos, o que está oculto, mas é gritante, é o direito à valorização da identidade e ancestralidade europeia, ocidental e caucasiana. Em síntese, o que a Nova Direita europeia busca afirmar é o direito à branquidade. Uma Europa para europeus – esta é a nova cara do racismo, da xenofobia e do neofascismo. Um fascismo renovado, com uma face humana ou uma mente aberta, nas indagações irônicas de Tamir Bar-On (2016) e Nigel Copsey (2013).

Copsey (2020) recupera a origem do termo e das primeiras manifestações históricas de neofascismo, quando em 1946 veteranos italianos da defunta República de Salò fundaram o *Movimento Sociale Italiano* (MSI). Este coletivo é considerado por boa parte da literatura como a primeira organização neofascista da Europa, guardando muito do legado fascista, especialmente em sua fase mais enfiada, de movimento, e uma boa dose de nostalgia por Salò (Mammone, 2008; Camus e Nicolas Lebourg, 2017).

O MSI cumpriu um papel fundamental na organização do neofascismo na Europa, promovendo encontros, reunindo militantes, entusiastas e intelectuais com o propósito de fortalecer laços entre fascistas europeus, estimular a organização política em outros países europeus e criar um movimento voltado para o projeto de uma nação europeia. Os dois encontros em 1950 e 1951 foram fundamentais para a articulação desse movimento, tendo se tornado um espaço privilegiado de articulação política. Lá estavam presentes mais de sessenta delegados vindos da Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Suécia, Suíça, Noruega e emigrados do Báltico, dentre eles, grandes figuras do neofascismo como: Julius Evola, filósofo

italiano e principal figura influenciadora do MSI e outros coletivos neofascistas italianos; Ernesto Massi, acadêmico italiano e liderança do MSI; Oswald Mosley, fundador da *British Union of Fascists*; Francis Parker Yockey, filósofo norte-americano precursor do paleoconservadorismo e fundador do *European Liberation Front*; Maurice Bardèche crítico literário francês, defensor do regime de Vichy, figura pioneira do negacionismo do Holocausto e fundador do *Comité National Français*; Karl-Heinz Priester, ex-oficial da *Waffen-SS* e militante do *Nationaldemokratische Partei Deutschlands*; e Per Engdahl, líder da *Sveriges Fascistiska Kamporganisation* (Copsey, 2020, p. 7; Camus e Lebourg, 2017, p. 70).

Do encontro de 1951, ocorrido em Malmö, na Suécia, nasceram duas importantes iniciativas neofascistas que procuravam recuperar o sonho de Mussolini de uma Internacional Fascista, promovendo o nacionalismo pan-europeu, uma forma romântica de supranacionalismo europeu, um eurofascismo. A principal delas foi o *European Social Movement* (ESM), seguida de um grupo de rebeldes liderados por René Binet, que considerou as propostas do ESM muito tímidas e se organizaram para fundar um coletivo mais radical, o *New European Order* (1954). Apesar das diferenças em termos de tática, observa-se uma unidade ideológica, política e de referencial teórico-filosófico (Camus e Lebourg, 2017, p.70).

Nacionalmente, observamos o surgimento de alguns partidos, centros de estudos e periódicos neofascistas advogando o nacionalismo pan-europeu: *Union Movement* (1948) na Inglaterra; *Sozialistische Reichspartei* (1949), *Deutsche Reichspartei* (1950) e *Nation Europa* (1951) na Alemanha; *Freiheitliche Partei Österreichs* (1955) na Áustria em 1956; *Centro Studi Ordine Nuovo* (1956) na Itália. O eurofascismo é, portanto, a primeira forma como o neofascismo se apresenta.

O ideal pan-europeu e eurofascista tomou novo impulso no final dos acalorados anos 1960 e ao longo dos anos 1970 com as mobilizações de movimentos sociais ligados ao campo da esquerda.

A onda das lutas por alargamento de direitos, representação e libertação nacional, gerou impactos no campo da direita: por um lado a reação negativa, contraposição aberta, que mobilizou grupos terroristas e coletivos mais radicalizados; por outro um movimento intelectualmente sofisticado de apoio ao direito à diferença e à valorização da ancestralidade, que incluiria, conseqüentemente, o direito à branquidade.

Esse segundo caminho será a marca da Nova Direita europeia, procurando se distanciar do legado fascista e de ideias abertamente racistas e eurocêntricas, ainda que fascismo, racismo e eurocentrismo estejam contidos em sua proposta de balcanização radical do mundo. A preservação e valorização da Europa como comunidade passaria ainda por um sentimento antiestadunidense, uma atitude nativista, materializada em um corporativismo e protecionismo europeu, travestidos de luta anti-imperialista e crítica à globalização. Assim, a Nova Direita europeia captura de forma inteligente e hábil as lutas emancipatórias dos movimentos progressistas, inverte o sinal, se colocando favorável às pautas desses movimentos e causando enorme confusão e desconforto político. Se todos os povos devem ter o direito garantido à valorização da sua história e ancestralidade, contrapor-se à branquidade e à ancestralidade europeia se torna uma expressão antidemocrática, racista e até fascista! Uma jogada intelectual brilhante!

A década de setenta testemunhou uma transformação particularmente importante nos partidos e organizações da Nova Direita. O MSI vivenciou um racha em 1969, perdendo alguns militantes para dissidências de caráter terrorista, *Ordine Nuovo*, *Fronte Nazionale* e *Ordine Nero*. Ao longo dos anos sessenta, o MSI veio se afastando de sua herança fascista, símbolos e alusões diretas ao nacional-socialismo, bem como da defesa da violência direta e ataques terroristas, construindo uma imagem pública mais convencional, o que lhe rendeu melhores resultados na eleição de 1972. Em 1995, Gianfranco

Fini muda o nome do partido para *Alleanza Nazionale*, reforçando ainda mais o apartamento com o passado fascista (Camus e Lebourg, 2017, pp. 61-62).

Como veremos, essa estratégia de disfarce ou ocultamento das afinidades fascistas e de renúncia formal à violência direta será uma marca da Nova Direita europeia, visando galgar melhores resultados eleitorais, atrair uma base maior de apoiadores e normalizar propostas políticas com conteúdo fascista. Nesse sentido, entendemos que a forma é republicana, porém o conteúdo é neofascista.

Na França, o movimento *Ordre Nouveau*, surgido em 1969, funda em 1972 o *Front National*, muito influenciado pela experiência italiana de adequação republicana. É nesse momento que Benoist revisa sua defesa política colonial e passa também a reconsiderar suas definições de nacionalismo e racismo, em favor do direito à diferença. O *Front National*, liderado até 2011 por Jean-Marie Le Pen, teve sucesso em congregar e oferecer uma orientação política comum para diversas forças conservadoras, servindo de guarda-chuva para neofascistas, ex-pujadistas, monarquistas e veteranos da guerra da Argélia. Le Pen ainda se destacou como liderança extremamente carismática, agitando massas crescentes ao longo dos anos oitenta e noventa. Além dos comícios cada vez mais lotados, ele participou de programas de televisão, rádio e contribuía correntemente para o jornal do partido (Shields, 2007, p. 219). Sua filha Marine, ao assumir a liderança do partido em 2011, teve êxito em manter uma mobilização de massa, fazendo um bom aproveitamento político do cenário de agravamento da islamofobia, do aumento da imigração e avançando na modernização das mídias, levando o partido ao mundo virtual.

O *Groupement de Recherche et d'Étude pour la Civilisation Européenne* (GRECE), maior *think tank* da Nova Direita francesa também passou por transformações com a maior circulação dos textos de Evola na França e pelo fortalecimento dos laços entre Benoist e Armin Mohler, pai da Nova Direita alemã. Entre os anos setenta e

oitenta o GRECE, bem como os principais periódicos da Nova Direita francesa (*Nouvelle École*, *Éléments* e *Krisis*) incorporam influências dos pensadores da revolução conservadora alemã, se aproximam ainda mais da Nova Direita italiana e gradativamente se afastam da perspectiva do racismo biológico em favor do etnodiferencialismo (Taguieff, 1985).

Também na Alemanha observamos um processo de adequação republicana no *Nationaldemokratische Partei Deutschlands* (NPD) após o fracasso eleitoral de 1969. Fundado em 1964, o NPD é um dos primeiros partidos neofascistas na Alemanha, formado por antigos militantes e apoiadores do partido nazista, e experimentou dificuldades em se estabelecer em um país que logo ao final da guerra instituiu leis severas de proteção à democracia, tornando ilegal grupos, partidos, a ostentação de símbolos, produção de literatura ou qualquer peça de propaganda nacional-socialista. Apesar desses desafios, o NPD conseguiu se manter como uma força político-parlamentar relativamente sólida ao longo dos anos 1960, tendo conquistado inclusive cadeiras em sete câmaras estaduais (Jaschke, 2013, p. 24). O fracasso nas eleições de 1969, somado a crises internas do partido, levaram à sua transformação no sentido da adequação republicana, da defesa do etnopluralismo e da renovação de pautas ligadas à questão de gênero e do meio ambiente.

Tal inflexão no partido, tal como no GRECE e no MSI, gerou dissidências, que levaram ao surgimento de grupos de terroristas clandestinos. Desse racha nasceram *Europäische Befreiungsfront* e *Aktion Widerstand*; em 1983 *Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten* e uma rede de células independentes conhecida como *Freienkameradschaften*, bastante populares na Alemanha Oriental a partir da reunificação (Camus e Lebourg, 2017, p.131).

Na Alemanha, contudo, a Nova Direita só irá se consolidar como força política nas décadas de oitenta e noventa. Podemos dizer que é o contexto da reunificação e da afirmação do neoliberalismo que

verdadeiramente impulsionam a Nova Direita na Alemanha. Esses processos estão diretamente ligados à virada intelectual e moral promovida pelo governo de coalização conservadora neoliberal do chanceler Helmut Kohl (CDU) desde 1982.

Segundo Salzborn (2016, p.42), durante a era Kohl foram abertas as portas do *mainstream* para ideias e posições da Nova Direita alemã, especialmente o nacionalismo *völkisch*, tido como uma posição política socialmente aceitável, e revisionismos historiográficos, que relativizavam a responsabilidade alemã, colocando *o povo* na posição de vítima do nacional-socialismo. Além disso, os anos noventa foram tempos, nos quais assassinatos, incêndios e ataques com motivação racial eram subinvestigados pelas autoridades públicas. Na mídia, diversos intelectuais próximos da Nova Direita como Karlheinz Weißmann e Ernst Nolte conseguiram construir redes e estabelecer formas recíprocas de interação com o público, difundindo suas ideias para uma audiência mais ampla. Assim, durante aproximadamente vinte anos, posições extremistas encontraram espaço no público geral, ressonando para fora da cena neofascista, o que ajudou a engrossar a fileira de simpatizantes.

Nesse momento, surgem novos partidos alinhados com a Nova Direita, *Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei* (1979), *Republikaner* (1983) e *Deutsche Volksunion* (1987). Todos eles contribuíram ativamente para o processo de fascistização da Alemanha Oriental (DDR), distribuindo materiais políticos, promovendo reuniões clandestinas, organizando *skinheads* e financiando a formação de células neofascistas. Observa-se uma diversificação da estrutura organizacional do neofascismo na Alemanha, bem típica da Nova Direita, com o surgimento de revistas, centros de formação e institutos de pesquisa. O *Thule-Seminar* (1980) é a primeira dessas iniciativas. Temos as revistas *Nation Europa*, *Junge Freiheit* e *Wir Selbst*. Nos anos noventa, os periódicos *Junge Freiheit*, *Criticón*, *Mut* e *Lexikon des Konservatismus* conduziram intensos debates, conseguindo atrair autores de fora do espectro neofascista.

Nos anos dois mil há uma intensificação desse movimento, mas agora com investimento em centros de formação e uma maior articulação entre os nódulos da rede da Nova Direita alemã. O *Institut für Staatspolitik - IfS* (2000) é fundado em 2000, oferecendo cursos de formação, seminários e *workshops*, seguido da *Bibliothek des Konservatismus* (2012). Surge ainda uma nova conformação de movimentos/partido – *Identitäre Bewegung* (2012), *Alternativ für Deutschland* AfD (2013) e *Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes* PEGIDA (2014) – que emerge da crise imigratória da Europa, levando massas de apoiadores à ruas. De todas essas novas iniciativas o *IfS* é o centro que mais investe na articulação entre espaços políticos da Nova Direita, fortalecendo os laços entre *AfD*, *Ein Prozent für unser Land*, *Identitäre Bewegung* e a revista *Blaue Narzisse*.

No caso dos dois países do sul da Europa que contaram com impérios coloniais, Espanha e Portugal, o nacionalismo xenófobo (denominado pela historiografia especializada como *nativismo*, segundo Ferreira, 2019, p. 18) e a ideia de expandir a *civilização ocidental cristã* para o Novo Mundo são características essenciais das extremas direitas, representadas principalmente pelo *Vox*, no caso da Espanha, e pelo *Chega*, de Portugal.

A relação dessas duas forças com um ideário rigorosamente (conceitualmente) fascista é também ambígua, sendo classificados pela maior parte da historiografia não propriamente como neofascistas, mas como uma “direita radical” (Ferreira, 2019, p. 79); em nossa visão, com importantes elementos fascistas em seu ideário e métodos.

É interessante notar que os marcos históricos reivindicados tanto do *Vox* estão localizados não no estabelecimento das democracias nos anos setenta, mas sim no *Descobrimento* das Américas e a Reconquista dos Reis espanhóis –ou seja, eras de ouro nas quais a suposta superioridade branca europeia católica seria inquestionável.

Quanto à América Latina, suas elites tradicionalmente mimetizam a cultura europeia –desde que os *criollos*, na época colonial, se viam mais identificados cultural e etnicamente com os espanhóis e portugueses do que com os povos originários. No contexto atual, a extrema-direita espanhola, que vem se demonstrando extremamente capaz em agrupar distintos grupos latino-americanos, tem na homogeneização cultural hispânica uma razão central de ser, o que implica, no referido etnonacionalismo europeu contemporâneo, sobretudo um distanciamento hostil em relação às populações nativas e uma defesa implícita de seu extermínio, conforme em tempos coloniais. Os grupos de ultradireita latino-americanos, nesse projeto, são para Vox a ponta de lança local na luta anti-indígena, vista por esses grupos como *o comunismo do século XXI*, conforme as palavras do líder espanhol José Maria Aznar.

A extrema-direita iberista e seus tentáculos neocoloniais na América Latina

O Vox foi fundado em dezembro de 2013 como uma cisão à direita do Partido Popular (o maior partido da direita espanhola), sob a liderança de alguns de seus quadros mais conservadores, próximos ao ex-presidente do partido José María Aznar (Ferreira, 2019, p. 76; Casals, 2020a, 2020b). A primeira eleição que o Vox participou foi em 2014, com o candidato Alejo Vidal-Quadras, antigo presidente do Partido Popular na Catalunha, e esteve por poucos votos de conseguir uma vaga no Parlamento Europeu. Junto com outros dirigentes, o parlamentar basco Santiago Abascal, que provinha da linha dura contra o nacionalismo basco dos anos noventa (período de maior atuação do ETA), torna-se presidente do Vox e atrai ainda mais figuras desse setor mais conservador dentro do PP (Ferreira, 2019, p. 77; Casals, 2020a, 2020b).

Segundo o pesquisador Carles Ferreira, o núcleo ideológico do Vox se baseia em duas características essenciais: o nativismo (que seria um nacionalismo xenófobo) e o autoritarismo (Ferreira, 2019). Conforme Ferreira, Vox aponta como os principais inimigos da Espanha os *nacionalismos periféricos* e que sua concepção de *espanholidade* está fortemente arraigada em mitos etnonacionais: enquanto os demais partidos mesmo da direita teriam na Constituição de 1978 (marco da transição democrática) como fonte de uma *unidade cívica* para a unidade nacional, o Vox reivindica uma concepção do *espanhol* baseada em episódios como o Descobrimento da América ou a reconquista dos Reis espanhóis frente aos muçulmanos na idade média (Ferreira, 2019, p. 87).

O Foro de Madrid ou Foro Madrid, fundado em outubro de 2020, é uma das iniciativas da *Fundación Disenso*, *think tank* do Vox, reunindo personalidades políticas espanholas, portuguesas e latino-americanas. A *Fundación Disenso* pode ser compreendida, a partir da teoria política de Antonio Gramsci, como um aparelho privado de hegemonia (Hoeveler, 2019) com atuação transnacional, ou mesmo como um partido, no sentido amplo do termo (e por impulsionar um movimento maior que sua sigla); de caráter empresarial na medida em que defende os interesses do eufemístico “setor privado”, mas que se sustenta financeiramente com as subvenções recebidas pelo próprio Ministério da Cultura do Estado da Espanha. Ou seja: um aparelho privado que recebe dinheiro público para defender os interesses privados.

O Vox desde o princípio apresenta uma vocação cosmopolita, chamada por alguns autores de *internacionalismo reacionário* (Sanahuja e Burian, 2022), buscando construir seções de seu partido em outros países, e de fato o fizeram em pelo menos dois países latino-americanos: México e Colômbia. O Foro de Madrid, por sua vez, não se confunde completamente com o Vox, e absorve as extremas direitas que se reuniram em 2018 na Cúpula Conservadora das Américas (Hoeveler, 2020).

A Carta de Madrid, publicada em outubro de 2020, que serviu como marco da fundação do próprio Foro, começava pela afirmação da existência de uma *Iberosfera*, definida por eles como uma “comunidade de nações livres e soberanas que compartilham uma arraigada herança cultural e contam com grande potencial econômico e geopolítico” (Foro de Madrid, 2020), contando com “todas as condições para ser uma região de liberdade, prosperidade e igualdade perante a lei”. “Seus povos não estão condenados por nenhum tipo de determinismo histórico”, afirmava a carta (Foro de Madrid, 2020).

Segundo a carta de Madrid, a região (latino-americana) estaria sofrendo um “sequestro” por “regimes totalitários de inspiração comunista”, “apoiados pelo narcotráfico e por terceiros países”; todos eles apoiados pelo regime cubano e pelo Foro de São Paulo e pelo Grupo de Puebla, os quais se infiltrariam nos centros de poder para “impor sua agenda ideológica” –o que faria urgir uma luta pela liberdade e democracia, incluindo os “direitos humanos, o pluralismo, a dignidade humana e a justiça”. Como se percebe, o cinismo, o vitimismo e as fake News são os principais métodos políticos desse grupo político, alinhado nesse sentido ao chamado *Método Bannon*.

Neocolonialismo político ibérico e a “Iberosfera”

A viagem de Abascal ao México, em meados de setembro de 2021, chamou atenção para as atividades do líder do Vox na América Latina.¹ O motivo principal parece ter sido o conteúdo das declarações de Abascal, as quais geraram furor nacional, levando a que inúmeros políticos mexicanos que haviam assinado a carta de

1 O evento coincidiu com a realização da CPAC (Conservative Political Action Conference) em São Paulo, organizada por Eduardo Bolsonaro, com nomes que também fazem parte do Foro Madrid como Matt Schlapp, fundador do CPAC no início dos anos oitenta, em consonância com a política de Reagan de um conservadorismo transformado e já plenamente neoliberal.

Madrid se retratassem de tê-la assinado –principalmente representantes do PAN (Partido Acción Nacional), os quais reforçaram publicamente que seus laços na Espanha são com o Partido Popular, não com o Vox.

Uma possível explicação para esse pequeno terremoto político no México é que os meios de comunicação mexicanos divulgaram um tuíte de Abascal publicado cerca de um mês antes de sua visita, coincidindo com o 500º aniversário da destruição de Tenochtitlán, em 13 de agosto, no qual se proclamava *orgulhoso* da colonização do México: “A Espanha conseguiu libertar milhões de pessoas do regime sanguinário e de terror dos astecas”, escreveu Abascal (González, Gortázar e Molina, 2021).

Além disso, semanas antes, José Maria Aznar, um dos máximos expoentes da direita espanhola e iberoamericana, sabidamente ligado a Abascal, afirmou que “o indigenismo é o novo comunismo”. Na mesma ocasião, Aznar provocou diretamente o presidente mexicano López Obrador com a seguinte *piada*, sugerindo que AMLO deveria mudar de nome: “Dice que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas. Manuel por parte de los mayas. López es una mezcla de aztecas y mayas” (Karg, 2021). Como se não bastasse, ainda em solo mexicano, Abascal *exigiu* de AMLO uma reforma da tumba de Hernán Cortéz, em um gesto simbólico que sintetiza de forma cristalina seu pensamento sobre a colonização espanhola no México (Karg, 2021).

O Movimento de Regeneração Nacional (Morena), partido de AMLO, emitiu uma declaração que ligava Aznar a Abascal, rejeitando categoricamente a ingerência espanhola em assuntos internos no México (Karg, 2021). Essa foi a única resposta contundente por parte de um líder latino-americano que encontramos até o momento acerca das atividades do Foro Madrid.

De acordo com o jornalista Javier Martínez (2020),

A refundação de *La Gaceta de la Iberosfera* [periódico da Fundación Disenso] coincidiu, provavelmente não por acaso, com o Dia Nacional de Espanha, 12 de outubro: também conhecido como Dia de Colombo, por ocasião da “descoberta” e posterior colonização da América por Cristóvão Colombo. É, aliás, o tema de um dos primeiros artigos de opinião de *La Gaceta* após a sua refundação: reivindicar, em oposição a posições tradicionalmente associadas à esquerda, a evangelização dos indígenas selvagens pelos esclarecidos espanhóis medievais - mitos, aliás, amplamente contestados pelos historiadores. Com a introdução deste elemento, a jogada fica completa: introduzem-se novos elementos para atacar o governo espanhol, tenta-se angariar apoios na América e justifica-se o passado imperial e colonizador do país, apesar dos danos que causou. Esta aliança transnacional opõe-se, por sua vez, a uma União Europeia corrupta, sempre sob o imaginário reacionário, aos desígnios do magnata George Soros, que tenta impor um “mega-Estado federal” que “se parece demasiado com a Europa sonhada por Hitler”, nas palavras de Abascal. Tudo ao mesmo tempo e sob um novo termo: *iberosfera* (Martínez, 2020, tradução nossa).

Segundo o pesquisador Juan Francisco Albert (2022), este novo meio de comunicação não nasce do zero, pois o Vox comprou o antigo *La Gaceta de los Negocios*, mais conhecido como *La Gaceta*, do grupo liderado pelo empresário Julio Ariza, amigo pessoal de Abascal. *La Gaceta de la Iberosfera* utiliza o antigo domínio e as redes de *La Gaceta*, por exemplo sua conta no Twitter, que já tinha quase 200 mil seguidores e que foi reutilizada. Há também colaboradores da América Latina, como a colombiana Vanessa Vallejo, editora do importante grupo *Panam Post*. Para Albert, a *Gazeta do Vox* se assemelha a outros meios de comunicação da nova direita, como o *Breitbart News* e o *Radix Journal*, tanto na linguagem como na propagação de notícias falsas (Albert, 2022).

Considerações finais

Ao final desse breve exercício de reflexão comparada, entendemos em parte como a Nova Direita transformou a ideia do racismo biológico em um conceito baseado na cultura e no nacionalismo xenófobo. Observa-se uma forma de racismo ancorado numa cultura etnocentrada e orgulhosamente eurocêntrica, valorizando a tradição e o orgulho de um povo e sua relação com um determinado território, bem como a própria iniciativa imperial de Europa na América, como fica patente no caso do Vox espanhol. O foco deixa gradativamente de ser a xenofobia aberta e a afirmação da superioridade, para se concentrar na valorização da etnofilia, fortalecendo o orgulho e práticas políticas voltadas para a preservação e o avanço do europeu nativo (Spektorowski, 2000, pp. 284-285). O caráter fascista está contido, ainda que não declarado, pois parte do princípio de que culturas, povos e etnias distintas não devem conviver, pois isso comprometeria a ordem social, o desenvolvimento das nações e degeneraria as culturas, levando-as à extinção. A solução apresentada é uma forma de etnocracia, que mesmo dentro de um arranjo republicano, visa a eliminação da diferença e da diversidade no seio social, um separatismo radical entre os povos.

Lutas anti-coloniais e anti-imperialistas e dos povos originários, especialmente latino-americanos; conceitos gramscianos (hegemonia, construção de consenso, intelectual orgânico) e sua estratégia de ação/luta política pela guerra de posição são deliberadamente distorcidos, esvaziados de seu conteúdo político, para caber em projetos conservadores e de direita recheados de teorias conspiratórias. O anti-colonialismo e o chamado identitarismo que mesmo em suas acepções liberais, ainda guardavam um compromisso com a representatividade de grupos subalternos, se transformam em direito à representatividade e orgulho do dominador, perdendo todo conteúdo emancipador e distorcendo a lógica do domínio para seguir dominando.

BIBLIOGRAFÍA

- Albert, Juan Francisco (24 de fevereiro de 2022). El Foro de Madrid: la unión internacional creada por Vox para combatir a la izquierda en América latina. *Al Descubierta*, <https://aldescubierto.org/2022/02/24/foro-de-madrid-vox-america-latina-2/>
- Bar-On, Tamir (2016). *Where have all fascists gone?* Nova York: Routledge.
- Bell, Daniel (1963). *The radical right: the new American right*. New York: Doubleday.
- Benoist, Alain de (1980). Le totalitarisme raciste. *Éléments*, (33). Special issue on Le droit à la différence.
- Betz, Hans-Georg y Immerfall, Stefan (1998). *The new politics of the right: neo populist parties and movements in established democracies*. Londres: Macmillan.
- Camus, Jean-Yves y Lebourge, Nicolas (2017). *Far-Rights politics in Europe*. Cambridge: Belknap Press.
- Casals, Xavier (2020a). El ultranacionalismo de Vox. Cinco claves para comprender 'la España Viva'. *Grand Place*, 27-36 13 zk. Zarautz, Mario Onaindia Fundazioa. https://marioonaindiafundazioa.org/wp-content/uploads/2021/09/GRAND-PLACE-13_interactivo.pdf
- Casals, Xavier (2020b). De Fuerza Nueva a Vox: de la vieja a la nueva ultraderecha española (1975-2019). *Ayer*, 118 (2), 365-380.
- Copsey, Nigel (2013). Fascism ... but with an Open Mind. Reflections on the contemporary Far Right in Western Europe. *Fascism* 2, 1-17.
- Copsey, Nigel (2020). Neo-Fascism: a footnote to the fascist epoch? Iordachi, Constanti, Kallis, Aristotle (eds.), *Beyond the Fascist Century*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Eichberg, Henning (1978). *Nationale Identität. Entfremdung uns die nationale Frage in der Industriegesellschaft*. Langen-Müller Verlag.
- Evans, Richard (2010). *A chegada do Terceiro Reich*. São Paulo: Planeta.
- Falter, Jürgen y Schumann, Siegfried (1988). Affinity towards Right-wing Extremism in Europe. En Beyme, Klaus von (ed.), *Right-wing Extremism in Western Europe*. London: Frank Cass.
- Fanon, Frantz (2008). *Pele negra, máscaras brancas*. Salvador: EDUFBA.

- Ferreira, Carles (2019). Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología. *Revista Española de Ciencia Política*, (51), 73-98.
- Finchelstein, Federico (2017). *From fascism to populism in history*. California: Univ. Of California Press.
- Foro de Madrid (26 de outubro de 2020). Carta de Madrid. <https://foromadrid.org/carta-de-madrid/>
- González, Migual; Gortázar, Naiara. G. y Molina, Federico R. (18 de outubro de 2021). Partido de extrema direita espanhola tece aliança anticomunista na América Latina. *El País*. <https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-18/partido-de-extrema-direita-espanhol-tece-alianca-anticomunista-na-america-latina.html%23?rel=mas>
- Griffin, Roger (1991). *The nature of fascism*. Londres: Pinter.
- Guibernau, Montserrat (2007). *The identity of nations*. Cambridge: Polity Press.
- Hoeveler, Rejane (2019). O conceito de aparelho privado de hegemonia e seus usos para a pesquisa histórica. *Práxis e Hegemonia Popular*, ano 4, (5), 145-159.
- Hoeveler, Rejane (2020). A reorganização da extrema-direita latino-americana no ascenso bolsonarista: fóruns e redes organizativas. En Fabiano Godinho Faria y Mauro Luiz Barbosa Marques (orgs.), *Giros à direita: análises e perspectivas sobre o campo líbero-conservador* (pp.71-89). <https://deposita.ibict.br/handle/deposita/145>.
- Ignazi, Piero (1992). The silent counter-revolution: hypotheses on the emergence of extreme right parties in Europe. *European Journal of Political Research*, 22, 3-34.
- Jaschke, Hans-Gerd (2013). Right-wing extremism and populism in contemporary Germany and Western Europe. En Von Mering, Sabine y McCarty, Timothy. *Right-Wing Radicalism Today: perspectives from Europe and the US*. Londres: Routledge.
- Karg, Juan Manuel (2 de novembro de 2021). El Foro de Madrid y Bolsonaro. *Télam Digital*. <https://www.telam.com.ar/notas/202111/573537-el-fo-ro-de-madrid-y-bolsonaro.html>
- Kitschelt, Herbert y McGann, A.J. (1995). *The radical right in western Europe: a comparative analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Laqueur, Walter (1996). *Fascism: past, present and future*. Oxford: Oxford Univ. Press.

- Mammone, Andrea (2008). The transnational reaction to 1968: neo-fascist national fronts and political cultures in France and Italy. *Contemporary European History*, 17 (2), 213-236.
- Mann, Michael (2008). *Fascistas*. Rio de Janeiro: Record.
- Martínez, Javier (22 de outubro de 2020). Que es la Iberosfera, la galaxia en la que vive vive Abascal. *InfoLibre*. <https://www.telam.com.ar/notas/202111/573537-el-foro-de-madrid-y-bolsonaro.html>
- Minkenberg, Michael (2000). The Renewal of the Radical Right. *Government and Opposition*, 35 (2), 170-188.
- Mudde, Cas (2000). *The ideology of the extreme right*. Manchester: Manchester Univ. Press.
- Mudde, Cas (2007). *Populist radical right parties in Europe*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Pautz, Hartwig (Winter 2020). The German New Right and Its Think Tanks. *German Politics and Society*, Issue 134, 38(4), 51-71.
- Paxton, Robert (2007). *A Anatomia do Fascismo*. São Paulo: Paz e Terra.
- Poulantzas, Nicos (1972). *Fascismo e Ditadura: a III Internacional face ao fascismo*. Portucalense: Porto.
- Rojas, Fernanda (22 de outubro de 2021). Vox: las redes de la ultraderecha española en América Latina. *La Tercera*. <https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/vox-las-redes-de-la-ultraderecha-espanola-en-america-latina/PJQAZ6PZLZE4XEIUNCHK6EIVLE/>
- Salzborn, Samuel (Summer 2016). Renaissance of the New Right in Germany. *German Politics and Society*, Issue 119, 34(2), 36-63.
- Sanahuja, José Antonio y Burian, Camili López (2022). Hispanidad e Iberosfera: antiglobalismo, internacionalismo reaccionário y ultraderecha neopatriota en Iberoamérica. *Documentos de Trabajo* n.69 (2ª época). Madrid: Fundación Carolina.
- Sedgwick, Mark (2019). *Key thinkers of the radical right: behind the new threat to liberal democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Shields, James (2007). *The extreme-right in France: from Pétain to Le Pen*. Londres: Routledge.
- Spektorowski, Alberto (Winter 2000). The French New Right: differentialism and the idea of ethnophilic exclusionism. *Polity*, 33(2), 283-303.

- Taguieff, Pierre-Andre (1985). Le neo-racismo diferencialiste. *Language et societé*, (34), 69-98.
- Traverso, Enzo (2019). *The new faces of fascism: populism and the far-right*. Londres: Verso.
- Ware, Vron (ed.) (2004). *Branquidade: identidade branca e multiculturalismo*. Rio de Janeiro: Garamond.

Sobre los autores y autoras

Ana Penido

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (2011), mestrado em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança pela Universidade Federal Fluminense (2015) e doutorado em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/Puc-Sp) através da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2019). Atualmente, é bolsista FAPESP de pós-doutorado em Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas. É coordenadora do observatório de Soberania e Forças Armadas do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, e participa do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional (GEDES - Unicamp). Coautora de *Ninguém Regula a América*, publicado pela Editora Expressão Popular em 2021. Tem interesse nas áreas de defesa, forças armadas, educação dos militares, guerra, estratégia e geopolítica.

Anahí Durand Guevara

Es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Se ha desempeñado como

investigadora en diferentes proyectos académicos publicando libros y artículos centrados en temas de movimientos sociales, representación política, pueblos indígenas, interculturalidad y género. En la función pública, se ha desempeñado como directora de Políticas Públicas pueblos indígenas del Ministerio Cultura (2014-2015). Durante el gobierno de Pedro Castillo, se desempeñó como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (julio 2021- febrero 2022) y Asesora de la Presidencia del Consejo de ministros. Entre sus últimas publicaciones destacan *“La irrupción cocalera, movilización social y representación política en los productores de hoja de coca del Perú*, Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima 2018) y *“¿Cerrando un ciclo? Crisis del estado neoliberal, pandemia y sociedad en Perú” en Estados alterados; reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia*. Bautista, Durand y Ouviaña (editores). Muchos mundos ediciones, CLACSO (Buenos Aires, 2021).

André Flores Penha Vale

É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É um dos organizadores do livro *A Burguesia Brasileira em Ação: de Lula a Bolsonaro*, pela Enunciado Publicações (2021). Pesquisa as relações de classes e as instituições estatais no capitalismo contemporâneo, em particular a ação política do capital financeiro. É bolsista da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Andrés Tzeiman

Es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos y licenciado en Ciencia Política, todos por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA). Es docente en la materia “Sociología Política” en

la Carrera de Ciencia Política (FSOC-UBA). Es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA). Integra el departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Se especializa en temas de teoría del Estado y sociología política, con énfasis en el estudio de problemáticas latinoamericanas.

Ha publicado varios libros, artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Sus libros más recientes son *La fobia al Estado en América Latina. Reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo* (Buenos Aires, IIGG/CLACSO, 2021), Álvaro García Linera. Para lxs que vendrán: crítica y revolución en el siglo XXI. Selección de conferencias, artículos y entrevistas: 2010-2021, compilado junto con Ramiro Parodi (Buenos Aires, CCC/UNGS, 2022) y *Los lentes de Víctor Hugo III. La hora de la derecha: 2015-2019*, compilado con Eduardo Rinesi (Los Polvorines, UNGS, 2023).

Claudio Aguayo-Bórquez

Es licenciado en Educación y Filosofía por la Universidad Metropolitana, magíster en Filosofía, MA y Ph.D. en Latin American Studies por la Universidad de Michigan, USA, doctorándose con una tesis sobre el pensamiento reaccionario y conservador en Chile. Es autor del libro *Los tiempos y las cosas: Ontología y política en Nicolás Maquiavelo* (2021, Doble Ciencia), así como de una serie de artículos sobre el pensamiento de Louis Althusser, Marx, Spinoza, Jacques Derrida, y el pensamiento de la derecha en Chile y el Cono Sur. Actualmente es profesor de la Universidad Estatal de Fort Hays, en Kansas.

Danilo Enrico Martuscelli

É graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tendo realizado

estágio pós-doutoral pela Universidad de Buenos Aires (UBA). Atua como docente da área de Ciência Política na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). É vice-líder do grupo de pesquisa “Neoliberalismo e relações de classe no Brasil” (CNPq/Cemarx/Unicamp), membro do projeto de pesquisa coletivo “A crise política, a nova direita, o Estado e os conflitos de classe no Brasil”, financiado pelo CNPq, editor do blog marxismo21, coordenador da Coleção Teoria marxista e análise concreta da Editora Enunciado e autor de dois livros: Crises políticas e capitalismo neoliberal no Brasil (Curitiba, CRV, 2015) e Classes dominantes, política e capitalismo contemporâneo (Florianópolis, Em Debate, UFSC, 2018). Além disso, tem organizado coletâneas de artigos sobre o tema do feminismo e do racismo no debate marxista pelo blog marxismo21 e publicado artigos e capítulos de livro sobre os seguintes temas: teoria política, teoria do Estado, teoria das classes sociais, marxismo de Louis Althusser e Nicos Poulantzas, política brasileira e latino-americana, crises políticas e golpes de Estado. É possível visualizar algumas de suas produções na página: <https://ufu.academia.edu/DaniloMartuscelli>

Frida Itzel Villalobos Guzmán

Es economista marxista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiante de la maestría en Estudios Latinoamericanos en la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son las ciencias sociales y el psicoanálisis. Ha acompañado la Cuarta Transformación desde la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y actualmente en la Tesorería de la Federación. Es integrante del Comité Editorial de la Revista *Memoria*.

Gina Paola Rodríguez

Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (2015), magíster en Filosofía (2006) y licenciada en Ciencia Política

(2003) por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. En la misma universidad es profesora adjunta de las cátedras de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica y del Taller de Metodología de la Investigación de la carrera de Abogacía. Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana de Bogotá. Sus líneas de investigación entrecruzan la ciencia política, la historia y la sociología comparada para abordar temas como la violencia política en Colombia y Perú, las derechas, y los estudios de género en la región latinoamericana. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: *El Leviatán en la sombra. Condiciones socio-históricas de la violencia parainstitucional en Colombia* (EdUNLPam, 2021) y *Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Colectivos Vulnerados. Experiencias en La Pampa*, escrito junto a Cecilia Bertolé y Lucía Colombato (EdUNLPam, 2020).

Jaime Ortega

Profesor-investigador en el área Problemas de América Latina en el Departamento de Política y Cultura de la UAM-X. Participa del Grupo de Trabajo “Historia y coyuntura: perspectivas marxistas”. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Obtuvo la beca Edmundo O’Gorman para realizar una estancia de investigación en el Centro de Estudios Mexicanos de la Columbia University en Nueva York. Integra los comités editoriales de *Memoria, Intervención y Coyuntura y Política y Cultura*. Su libro más reciente es, en coautoría con Juan de la Fuente: *El invierno social llega a su fin: las izquierdas frente al resurgir campesino, 1959-1965*, editado por la UAM-X.

Loreta Telleria Escobar

Doctora en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana-Cuba, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y licenciada en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Autora de varios artículos sobre policía, fuerzas armadas, democracia, geopolítica y relaciones Bolivia-Estados Unidos. Es miembro del Grupo de Trabajo “Estudios sobre Estados Unidos” de CLACSO.

Entre sus últimas publicaciones, figuran artículos como “La Unión Europea y su actuación en el golpe de Estado de Bolivia en 2019”, en Revista *Tramas y Redes* N° 4, CLACSO 2023; “Militarismo. El virus que Estados Unidos inculca en el mundo”, en *Estados Unidos. Miradas críticas desde Nuestra América*, Grupo de trabajo CLACSO: Estudios sobre Estados Unidos N° 9, junio de 2023; y “América Latina y la guerra en Ucrania. Mismos actores ¿diferente historia?”, en *Nuestra América XXI: Desafíos y alternativas*. Grupo de trabajo CLACSO: Crisis y economía mundial. N° 66, abril 2022.

Su último libro, en coautoría con Juan Ramón Quintana, se titula ¡A sangre y fuego! El escarmiento contra las rebeliones indígenas de Túpac Katari a Evo Morales Ayma, publicado en editorial Kipus, Bolivia en 2022.

Lucía Wegelin

Es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2009, se desempeña como docente en el área de teoría social de la Carrera de Sociología de la UBA, entre 2018 y 2023 fue docente del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y desde 2020 es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Integra el Grupo de Estudios sobre Ideología y Democracia (IIGG/UBA) y

coordina el trabajo de campo cualitativo de los proyectos allí enlazados. En 2023, ingreso a la Carrera de Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET) como investigadora asistente en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM con el proyecto “Radicalizaciones autoritarias y neoliberalismo: incertidumbre, miedo y prejuicios sociales en contextos de crisis”.

Martín Cortés

Es doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y Filosofía (Université Paris 8, Francia) en 2013. Profesor de teoría política en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Investigador adjunto del CONICET, sus trabajos abordan la teoría del Estado, la teoría política y el marxismo latinoamericano y la historia de las izquierdas. Ha publicado artículos científicos y libros sobre estas temáticas, en Argentina y en el exterior. Es coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, desde el cual se articulan trabajos de teoría política con análisis de la coyuntura nacional y regional. Ha sido profesor y conferencista invitado en universidades argentinas y del exterior (México, Brasil, Chile, Italia, Francia, España). Ha dirigido proyectos de investigación sobre teoría del Estado e historia del marxismo. Sus principales publicaciones pueden consultarse en: <https://uba.academia.edu/MartinCortes>

Natalia Romé

Doctora en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación y Cultura, ambos por la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular de Teoría y Prácticas de la Comunicación III. Investigación de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA, donde coordina junto a Pablo Rodríguez el Programa de Estudios Críticos en

Ideología, Técnica y Política. Actualmente, dirige la Maestría en Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Entre sus libros se encuentran *Semiosis y subjetividad* (Prometeo, 2009); *La posición materialista* (EDULP, 2015); *For Theory. Althusser and the politics of time* (Rowman and Littlefield, 2021); entre sus compilaciones más recientes *Notas materialistas. Para un feminismo transindividual* (Doble Ciencia, 2022); *Asedio del tiempo* (IIGG-CLACSO, 2020) y *Para una crítica de la neoliberalización* (Imago Mundi, 2021).

Rejane Hoeveler

Bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É co-organizadora do livro *A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sóbrios no Brasil* (Rio de Janeiro, Mauad, 2017). Foi professora substituta na UFRJ e na FGV- Rio de Janeiro. Atualmente, é pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), bolsista CNPq/Fapeal, e professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/UFAL).

Sofia Lanchimba Velastegui

Es docente de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas *Amawtay Wasi*. Es socióloga y abogada por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus investigaciones se han concentrado en la sociología política con énfasis en el estudio de movimientos sociopolíticos y su relación con el Estado. Ha estudiado trayectorias militantes de izquierda, movilización social, movimiento indígena ecuatoriano, conceptos y teorías sobre sociología política.

Tatiana Poggi

Professora de história contemporânea na Universidade Federal Fluminense. Doutorou-se em história pela Universidade Federal Fluminense. Integra o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo (Niep-Marx), o Laboratório de História Econômico-Social (Polis) e a Rede Direitas História e Memória. Editora da Revista Marx e o Marxismo (2019-2023). Educadora da Rede Emancipa - movimento social de educação popular. Tem experiência na área de história, com ênfase em história contemporânea, trabalhando principalmente com Fascismo e Neofascismo; movimentos conservadorismo; neoliberalismo e imperialismo. Autora de Faces do Extremo: o neofascismo nos EUA 1970-2010 (2015).

Esta obra pretende reflexionar acerca de las tres dimensiones de la crisis democrática que actualmente atraviesa América Latina: el orden internacional enfrentado a una situación de *discontinuidad hegemónica*, *la reacción conservadora* frente al despliegue de los gobiernos progresistas de los primeros quince años del siglo XXI y la creciente contradicción entre neoliberalismo y democracia.

Reconociendo la centralidad del contexto global para pensar la realidad de América Latina, este volumen busca reflexionar sobre la inscripción de la región en ese marco, pero considerando el papel fundamental que allí desempeñan la historia larga de las clases sociales y sus tradiciones políticas, las disputas del pasado reciente y la especificidad que asumen en estas latitudes los conflictos sociopolíticos. Sin perder de vista, en este último aspecto, que tanto las irrupciones plebeyas como las respuestas autoritarias de las clases dominantes frente a ellas, adquieren un lugar primordial a la hora de encontrar vías de resolución a la crisis en curso.

ISBN 978-997-813-704-9



 **CLACSO**

agendas**emergentes**